PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL

Exposición de motivos introductoria

Al igual que el Tribunal de Justicia, el Tribunal General dispone desde su origen de un Reglamento destinado a establecer sus normas esenciales de organización y funcionamiento y a precisar detalladamente el modo en que se desarrolla el procedimiento seguido ante él. El Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, adoptado inicialmente el 2 de mayo de 1991,¹ ha sido modificado en diversas ocasiones,² principalmente para dar respuesta a las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, dotar al Tribunal de normas que le permitieran tratar los nuevos tipos de litigios y adaptar esas normas a las especificidades de ciertos litigios. La estructura del Reglamento, sin embargo, no ha experimentado cambios fundamentales.

El Tribunal General se creó en 1998 (con la denominación Tribunal de Primera Instancia), a fin de mejorar la tutela judicial de los justiciables, mediante la instauración del doble grado de jurisdicción, y permitir que el Tribunal de Justicia se consagrara a la interpretación uniforme del Derecho comunitario. Desde entonces, las competencias del Tribunal General no han cesado de aumentar. La competencia del Tribunal General, inicialmente limitada a los asuntos de competencia, a los de función pública comunitaria y a los recursos de indemnización, ha sido ampliada por el Consejo en varias ocasiones³ y, a partir del 1 de febrero de 2003, fecha de entrada en vigor de la reforma establecida en el Tratado de Niza, el

¹ DO L 136, p. 1, con corrección de errores en DO L 317, p. 34.

² A 1 de julio de 2013, el Reglamento de Procedimiento ha sido modificado en dieciocho ocasiones.

³ Artículo 1 de la Decisión 93/350/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 8 de junio de 1993, por la que se modifica la Decisión 88/591 (DO L 144, p. 21), y artículo 1 de la Decisión 94/149/CECA, CE del Consejo, de 7 de marzo de 1994, que modifica la Decisión 93/350 (DO L 66, p. 29).

Tribunal General es competente para conocer de todos los recursos directos, «con excepción de los que se atribuyan a una sala jurisdiccional y de los que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia»,⁴ y de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las salas jurisdiccionales de primera instancia,⁵ que han pasado a denominarse «tribunales especializados» desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.⁶ Precisamente, mediante Decisión de 2 de noviembre de 2004, y basándose en los artículos 225 A CE y 140 B Euratom, el Consejo creó el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de la Función Pública»),⁷ tercero de los tribunales que integran la institución y primer tribunal especializado del sistema judicial europeo. Como resultado de esta evolución, el Tribunal General es un tribunal competente para conocer, como juez de primera instancia, de los recursos directos interpuestos por las personas físicas y jurídicas y por los Estados miembros⁸ y, como juez de casación, de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública.

Los litigios de que conoce el Tribunal General pueden repartirse en tres grandes categorías, cada una de ellas sometida a un régimen procesal específico.

En primer lugar, el Tribunal General se pronuncia sobre los recursos directos interpuestos por los particulares y por los Estados miembros para obtener la anulación de actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, para lograr que el Tribunal declare que estos últimos se abstuvieron ilegalmente de actuar o para obtener reparación de un perjuicio sufrido, así como sobre los recursos basados en una cláusula compromisoria. Dejando aparte los asuntos de propiedad intelectual o industrial, sometidos a normas de procedimiento específicas (véase el párrafo siguiente), el régimen procesal aplicable a los recursos directos actualmente en vigor es el que se expone a continuación. La fase escrita del procedimiento comprende un turno de escritos de alegaciones (demanda y escrito de contestación), al que sigue, a menos que se considere innecesario, un segundo turno de escritos (de réplica y de dúplica). El plazo que el Reglamento de Procedimiento establece para la presentación del escrito de contestación es de dos meses, ampliado en diez días por razón de la distancia, y el fijado para la presentación de los escritos de réplica y de dúplica es de un mes, ampliado igualmente en diez días por razón de la distancia. Tales plazos pueden eventualmente prorrogarse a instancia de parte (por lo que respecta al escrito de contestación, en caso de que concurren circunstancias extraordinarias, con arreglo al artículo 46, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento vigente). Conviene recalcar que es esencialmente en estos procedimientos donde se presentan las demandas de intervención de particulares, de Estados

⁴ Artículo 225 CE, apartado 1.

⁵ Artículo 225 CE, apartado 2.

⁶ Artículo 256 TFUE, apartado 2.

⁷ Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7).

⁸ Con excepción de los que el Estatuto reserva a la competencia al Tribunal de Justicia, según lo dispuesto en su artículo 51.

miembros y de instituciones, así como las peticiones de tratamiento confidencial de escritos procesales frente a otras partes del litigio o frente al público. El número de demandas de intervención presentadas por particulares o por Estados miembros, estrechamente relacionado a su vez con el número de peticiones de tratamiento confidencial de los datos recogidos en los autos del procedimiento, es bastante elevado. En efecto, en 2012 se presentaron 190 demandas de intervención, tras un máximo de 378 en 2011 (que puede compararse con las 107 demandas de intervención presentadas en 2006).⁹ En 2012, la categoría de los recursos directos representó un 47 % de los asuntos presentados ante el Tribunal General (51,2 % en 2011 y 51,6 % en 2010) y un 63,9 % de los asuntos pendientes (66 % en 2011 y 2010).

En segundo lugar, el Tribunal General se pronuncia sobre los recursos en los que se solicita la anulación de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV). Cuando en este tipo de recursos se enfrentan el demandante, la Oficina y la otra parte ante la Sala de Recurso, se aplican unas normas procesales que exigen que en cada asunto se determine la lengua de procedimiento aplicable antes de proseguir la tramitación de la fase escrita. El número de nuevos asuntos incluidos en esta categoría aumenta continuamente desde 1998, año en el que se registró el primer asunto de propiedad intelectual o industrial. En 2012, este tipo de recursos ha representado un 38,6 % de los asuntos presentados ante el Tribunal General (30,3 % en 2011 y 32,5 % en 2010) y un 31,4 % de los asuntos pendientes (27,6 % en 2011 y 29,4 % en 2010).¹⁰

En tercer lugar, el Tribunal General se pronuncia como juez de casación cuando conoce de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública. Este procedimiento, que implica a las partes que ya participaron en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública, consta de una fase escrita abreviada (pues sólo se decide proceder a un segundo turno de escritos procesales si existe una solicitud motivada al respecto) y de una fase oral no obligatoria. En 2012, este tipo de

⁹ El aumento del número de demandas de intervención queda perfectamente reflejado a través de la media trienal (el número de demandas de intervención de cada año se determina tomando en cuenta los datos del año «n» y los de los años «n-1» y «n-2»):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Demandas de intervención presentadas</i>	151	161	178	185	252	263

¹⁰ El aumento del número de nuevos asuntos de propiedad intelectual o industrial y de asuntos pendientes en este campo queda perfectamente reflejado a través de la media trienal (el número de asuntos presentados y pendientes de cada año se determina tomando en cuenta los datos del año «n» y los de los años «n-1» y «n-2»):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Asuntos de propiedad intelectual o industrial iniciados</i>	136	170	191	204	211	221
<i>Asuntos de propiedad intelectual o industrial pendientes</i>	245	285	320	351	366	377

recursos representó un 1,6 % de los asuntos presentados ante el Tribunal General (6,1 % en 2011 y 3,7 % en 2010) y un 2 % de los asuntos pendientes (3,6 % en 2011 y 2,4 % en 2010).

A estas tres categorías tradicionales se añaden los procedimientos especiales, que comprenden la rectificación, la omisión de pronunciamiento, la oposición a sentencias dictada en rebeldía, la oposición de tercero, la interpretación de sentencias, la revisión de sentencias, la tasación de costas y la asistencia jurídica gratuita. Estos procedimientos especiales representaron un 12,6 % del total de asuntos presentados ante el Tribunal General en 2012 (12,2 % en 2011 y 12,1 % en 2010) y un 2,6 % del total de asuntos pendientes (2,7 % en 2011 y 2,1 % en 2010).

Por último, la división en categorías expuesta no afecta a la posibilidad de que alguna de las partes del litigio solicite al Juez que se pronuncie con gran rapidez, bien con carácter provisional, presentando una demanda de medidas provisionales destinada a obtener la suspensión de la ejecución de un acto o cualquier otra medida provisional, bien con carácter definitivo sobre el fondo, mediante una solicitud de tramitación acelerada del asunto. Los asuntos de medidas provisionales competen al Presidente del Tribunal, mientras que es la Sala del Tribunal a la que se ha atribuido el asunto quien decide si procede resolver según un procedimiento acelerado. En el caso de que decida tramitar el asunto aplicando un procedimiento acelerado, la Sala seguirá un procedimiento abreviado, centrado esencialmente en la fase oral. En 2012 se presentaron 21 demandas de medidas provisionales (44 en 2011 y 41 en 2010) y 26 solicitudes de aplicación del procedimiento acelerado (43 en 2011 y 24 en 2010).

Desde el comienzo, el número de asuntos presentados ante el Tribunal General no ha cesado de aumentar. La creación del Tribunal de la Función Pública en noviembre de 2004 pretendía dar respuesta, en interés del justiciable, a las preocupaciones causadas por el incremento del número de asuntos pendientes y el aumento de la duración media del procedimiento. Ello permitió reducir el número de asuntos pendientes ante el Tribunal General, pero esta mejora fue sólo pasajera, pues rápidamente el número anual de nuevos asuntos sobrepasó de nuevo al número anual de nuevos asuntos anterior al traspaso de competencias al Tribunal de la Función Pública. A esta tendencia al incremento constante del número de nuevos asuntos ¹¹ ha venido a añadirse una diversificación cada vez mayor de los litigios.

Ante esta situación, el Tribunal General ha adoptado numerosas medidas destinadas a aumentar su eficacia y mejorar su eficiencia. El Tribunal ha perseguido continuamente el objetivo de lograr una máxima eficacia con un mínimo de medios. Entre las medidas adoptadas pueden citarse las modificaciones del Reglamento de Procedimiento que

¹¹ El aumento del número total de nuevos asuntos queda perfectamente reflejado a través de la media trienal (el número de asuntos presentados de cada año se determina tomando en cuenta los datos del año «n» y los de los años «n-1» y «n-2»):

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Asuntos presentados (en todos los campos)	474	528	573	611	642	658

permitieron que el Tribunal resolviera sin fase oral en los asuntos de propiedad intelectual o industrial (DO 2008, L 179, p. 12) y la que aclaró el estatuto procesal del coadyuvante en este mismo tipo de asuntos (DO 2009, L 184, p. 10). Cabe mencionar igualmente las principales medidas relativas a los métodos de trabajo y a la organización del Tribunal: la decisión adoptada en 2007 de organizar el Tribunal General, a efectos del conocimiento de los asuntos, en ocho formaciones jurisdiccionales distintas –a las que se añade la Sala de Casación–, cifra que pasó a ser de nueve en septiembre de 2013, con ocasión de la entrada en funciones del 28º Juez del Tribunal General; la puesta en marcha de un estricto sistema de seguimiento de los plazos de tramitación internos; la generalización a todos los tipos de asuntos de la elaboración resumida del informe para la vista; una interpretación amplia del concepto de conexidad, a fin de permitir que el Presidente del Tribunal atribuya los nuevos asuntos a formaciones jurisdiccionales que ya conozcan de asuntos que planteen problemas jurídicos de la misma naturaleza; la adopción de nuevos métodos de redacción de sentencias y autos; el desarrollo de aplicaciones informáticas eficaces que hacen posible una puesta a disposición inmediata de los documentos y permiten una rápida comunicación entre los gabinetes, entre éstos y la Secretaría y entre los gabinetes y los servicios de la institución.

Estas medidas han permitido aumentar significativamente el número de asuntos resueltos – con un salto cuantitativo en 2011, año en que se resolvieron 714 asuntos, consolidado en 2012 (688 asuntos resueltos)– e incluso reducir, aunque modestamente, el número de asuntos pendientes a 31 de diciembre de 2012, aprovechando una reducción coyuntural de alrededor de un 15 % en el número de nuevos asuntos. Habida cuenta del crecimiento del número del litigios que se observa desde hace diez años, la evolución registrada en 2012 no basta para negar que el Tribunal General se encuentra en una difícil situación, que es por lo demás la causa de la propuesta de modificar el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aumentando en 12 el número de Jueces del Tribunal General, propuesta que el Tribunal de Justicia remitió al Parlamento y al Consejo en marzo de 2011. Aunque los actores del proceso legislativo han reconocido la necesidad y la urgencia de una reforma estructural, esta reforma aún no se ha producido.

El presente proyecto persigue varios objetivos.

*El **primer objetivo** consiste en adaptar las normas procesales a la realidad de los litigios actualmente sometidos al Tribunal de Justicia, estableciendo una distinción clara entre las tres categorías de recursos de que éste conoce, a saber, los recursos directos, los recursos en materia de propiedad intelectual o industrial y los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública. Las numerosas modificaciones que se han ido introduciendo en el Reglamento de Procedimiento han permitido adaptar y mejorar los dispositivos procesales con arreglo a las necesidades y a la evolución de las circunstancias, pero este proceso de modificaciones parciales ha alcanzado ya sus límites, y hoy se impone, de manera evidente, un trabajo de consolidación y de reestructuración del texto original.*

*El **segundo objetivo** es el de consolidar y proseguir los esfuerzos emprendidos para mantener la capacidad de tramitar los asuntos en un plazo razonable y respetando las exigencias de un proceso equitativo. Esta voluntad corresponde a una exigencia formulada en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha adquirido el mismo valor jurídico que los Tratados) y pretende igualmente plasmar la exigencia de aumentar el rendimiento judicial, que ha pasado a ser imperiosa debido a un contexto de restricción presupuestaria que afecta profundamente a la institución, a sus servicios y a la Secretaría del Tribunal General. Tal*

exigencia obliga a adaptar la regulación procesal para poder tratar aún con más eficacia ciertas situaciones procesales. El presente proyecto sigue, pues, la línea que marcan estas reflexiones y pretende también, por su parte, introducir en el Reglamento de Procedimiento normas que permitan mejorar aún más la eficacia del trabajo del Tribunal General con los recursos de que éste dispone. Se inscriben en esta perspectiva, en particular, medidas tales como la extensión del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al órgano unipersonal o Juez único; la simplificación de las normas para la determinación de la lengua de procedimiento y la supresión del segundo turno de escritos de alegaciones en los asuntos de propiedad intelectual o industrial; el establecimiento de plazos legales más cortos que en la actualidad para presentar una demanda de intervención o una solicitud de celebración de vista oral; la simplificación del régimen de la intervención mediante la supresión de la posibilidad de admitir demandas de intervención una vez expirado el plazo legal de seis semanas a partir de la publicación, en el Diario Oficial de la Unión Europea, del anuncio contemplado en el artículo 24, apartado 6, del actual Reglamento de Procedimiento; la facultad del Tribunal General de resolver sin fase oral en los recursos directos, si ninguna de las partes principales ha solicitado la celebración de una vista oral y él estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, y la facultad de resolver sin fase oral en los recursos de casación; la clarificación de los derechos de que disponen los coadyuvantes; el traspaso de competencias de la Sala a los Presidentes de Sala para decidir sobre ciertos extremos, aunque precisando que la regla general es que el Presidente de Sala oiga al Juez Ponente antes de ejercer las competencias que le han sido atribuidas; el aumento del número de supuestos en que se resuelve mediante una simple decisión, en particular, para admitir las demandas de intervención presentadas por los Estados miembros y las instituciones cuando no existan peticiones de tratamiento confidencial, y la simplificación del procedimiento en rebeldía.

Consideradas por separado, seguramente ninguna de las medidas citadas puede invertir por sí sola la tendencia al incremento del número de asuntos pendientes y de la duración de los procedimientos. No obstante, el Tribunal General está convencido de que la suma de estas medidas, adoptadas a su debido tiempo, constituye un medio seguro para permitirle cumplir en condiciones satisfactorias su misión, consistente en garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

*El **tercer objetivo** consiste en garantizar la homogeneidad de los dispositivos procesales que regulan los litigios sometidos a los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Como el nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia¹² entró en vigor el 1 de noviembre de 2012, el presente proyecto recoge, en la medida de lo necesario, las disposiciones adoptadas por el Tribunal de Justicia, pero sin olvidar las especificidades de los recursos directos en los que una persona física o jurídica o un Estado miembro se enfrentan a una institución de la Unión, ni el hecho de que este tipo de recursos son los más numerosos de entre los sometidos al Tribunal General.*

*El **cuarto objetivo** es dotar al Tribunal General de normas que les permitan adoptar la fórmula organizativa que estime más apropiada en función, principalmente, del número de*

¹² DO 2012, L 265, p. 1, en su versión modificada (DO 2013, L 173, p. 65).

*Jueces que lo integren, así como reglas destinadas a dar efecto útil a la modificación estatutaria por la que se crea el puesto de Vicepresidente del Tribunal General.*¹³

*El **quinto objetivo** consiste en ofrecer soluciones a las situaciones procesales que, por el momento, no encuentran respuesta en el Reglamento de Procedimiento vigente. Así, ciertos artículos están destinados a regular, por ejemplo, los supuestos en los que puede reatribuirse un asunto, la adaptación de las pretensiones de la demanda en el curso del proceso, los trámites necesarios tras la presentación de un documento en cumplimiento de una diligencia de prueba adoptada por el Tribunal General o el tratamiento procesal de la información o de los documentos confidenciales relacionados con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales.*

*Además de optimizar la eficacia de su trabajo, el Tribunal General desea igualmente clarificar algunas de las normas que aplica. Este es el **último objetivo** de la presente reforma. Para ello, se han simplificado ciertas normas, como las relativas a los documentos formales que deben presentar los representantes de las personas jurídicas de Derecho privado, y otras se han precisado más, principalmente en lo que respecta a la presentación y notificación de los escritos procesales, a su contenido y a su plazo de presentación. Con este mismo propósito, se ha puesto un título a todos los artículos del proyecto de Reglamento y dentro de cada artículo se han numerado todos los párrafos. En ciertos casos, esta operación ha obligado a fragmentar en varios artículos diferentes los textos existentes, para que cada artículo tuviera un objeto propio. Aunque esta fragmentación ha incrementado el número de artículos, también ha permitido hacer más legible el texto del Reglamento de Procedimiento en su conjunto.*

Por último, en este proceso de reforma, el Tribunal General ha atribuido especial importancia a la terminología utilizada en su Reglamento de Procedimiento. En efecto, el análisis ha puesto de manifiesto que el Reglamento de Procedimiento vigente, al haber sufrido varias modificaciones sucesivas, emplea a veces varios términos distintos para referirse a una misma realidad, lo que puede suscitar dudas sobre el auténtico alcance de las disposiciones en cuestión. Por esta razón, en el presente proyecto de Reglamento está muy presente la voluntad de armonizar y racionalizar los términos empleados en las diferentes versiones lingüísticas del Reglamento de Procedimiento. En principio, a cada realidad jurídica concreta debería corresponder un mismo y único término.

En esta exposición introductoria, el Tribunal ha estimado preferible referirse únicamente a la concepción general del proyecto de Reglamento y a sus objetivos. Las modificaciones realizadas en las disposiciones actuales se exponen en detalle al comienzo de cada uno de los seis títulos del presente proyecto y, en la medida en que resulte necesario, al pie de cada disposición concreta. Un cuadro de concordancias entre el presente proyecto y el Reglamento de Procedimiento actualmente en vigor permite además localizar rápidamente las analogías y las diferencias entre ambos textos.

¹³ Reglamento (UE, Euratom) n° 741/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de agosto de 2012, por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I (DO L 228, p. 1).

ÍNDICE

DISPOSICIONES PRELIMINARES.....	17
Artículo 1 Definiciones	17
Artículo 2 Alcance del presente Reglamento	19
TÍTULO PRIMERO – DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL.....	20
Capítulo Primero – DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL GENERAL.....	21
Artículo 3 Funciones de Juez y de Abogado General	21
Artículo 4 Inicio del mandato de los Jueces	21
Artículo 5 Prestación de juramento	22
Artículo 6 Compromiso solemne.....	22
Artículo 7 Relevo en sus funciones de los Jueces	23
Artículo 8 Rango de antigüedad	23
Capítulo Segundo – DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL	24
Artículo 9 Elección del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General	24
Artículo 10 Atribuciones del Presidente del Tribunal General	25
Artículo 11 Atribuciones del Vicepresidente del Tribunal General	26
Artículo 12 Impedimento del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General	27
Capítulo Tercero – DE LAS SALAS Y FORMACIONES JURISDICCIONALES	28
Sección 1. De la constitución de las Salas y de la composición de las formaciones jurisdiccionales	28
Artículo 13 Constitución de las Salas.....	28
Artículo 14 Formación jurisdiccional competente	29
Artículo 15 Composición de la Gran Sala	29
Artículo 16 Abstención de un Juez y decisión de apartar a un Juez del conocimiento del asunto.....	30
Artículo 17 Impedimento de un miembro de la formación jurisdiccional	31
Sección 2. De los Presidentes de Sala	32
Artículo 18 Elección de los Presidentes de Sala.....	32
Artículo 19 Competencias del Presidente de Sala	32
Artículo 20 Impedimento del Presidente de Sala	33
Sección 3. De las deliberaciones	33
Artículo 21 Procedimiento de las deliberaciones	33
Artículo 22 Número de Jueces que participan en las deliberaciones	34
Artículo 23 Quórum de la Gran Sala	34
Artículo 24 Quórum de las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces	35
Capítulo Cuarto – DE LA ATRIBUCIÓN Y DE LA REATRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS, DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES PONENTES, DE LA REMISIÓN DE UN ASUNTO A OTRAS FORMACIONES JURISDICCIONALES Y DE SU ASIGNACIÓN A UN JUEZ ÚNICO	37
Artículo 25 Criterios de atribución	37
Artículo 26 Atribución inicial del asunto y designación del Juez Ponente	38
Artículo 27 Designación de un nuevo Juez Ponente y reatribución de un asunto.....	39
Artículo 28 Remisión de un asunto a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces	40
Artículo 29 Asignación de un asunto a un Juez único.....	41
Capítulo Quinto – DE LA DESIGNACIÓN DE LOS ABOGADOS GENERALES	44
Artículo 30 Supuestos de designación de un Abogado General.....	44
Artículo 31 Método de designación de un Abogado General	44

Capítulo Sexto – DE LA SECRETARÍA	45
Sección 1. De la Secretaría.....	45
Artículo 32 Nombramiento del Secretario.....	45
Artículo 33 Secretario adjunto.....	46
Artículo 34 Impedimento del Secretario y del Secretario adjunto	46
Artículo 35 Atribuciones del Secretario	46
Artículo 36 Llevanza del Registro.....	47
Artículo 37 Consulta del Registro	47
Artículo 38 Acceso a las actuaciones	48
Sección 2. De los Servicios.....	48
Artículo 39 Funcionarios y otros agentes.....	48
Capítulo Séptimo – DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL	50
Artículo 40 Lugar de las sesiones del Tribunal General	50
Artículo 41 Calendario de trabajo del Tribunal General	50
Artículo 42 Sesión plenaria	51
Artículo 43 Redacción de las actas.....	51
TÍTULO SEGUNDO – DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO	52
Artículo 44 Lenguas de procedimiento	52
Artículo 45 Determinación de la lengua de procedimiento.....	52
Artículo 46 Empleo de la lengua de procedimiento	56
Artículo 47 Responsabilidad del Secretario en materia lingüística.....	57
Artículo 48 Régimen lingüístico de las publicaciones del Tribunal General.....	57
Artículo 49 Versiones auténticas.....	57
TÍTULO TERCERO – DE LOS RECURSOS DIRECTOS.....	58
Artículo 50 Ámbito de aplicación	60
Capítulo Primero – DISPOSICIONES GENERALES.....	60
Sección 1. De la representación de las partes.....	60
Artículo 51 Representación obligatoria.....	60
Sección 2. De los derechos y obligaciones de los representantes de las partes	61
Artículo 52 Privilegios, inmunidades y facilidades.....	61
Artículo 53 Condición de representantes de las partes.....	62
Artículo 54 Alzamiento de la inmunidad	62
Artículo 55 Exclusión del procedimiento.....	62
Artículo 56 Profesores	63
Sección 3. De las notificaciones.....	63
Artículo 57 Modos de notificación.....	63
Sección 4. De los plazos.....	65
Artículo 58 Cómputo de los plazos	65
Artículo 59 Recurso contra un acto publicado de una institución.....	65
Artículo 60 Plazo por razón de la distancia.....	66
Artículo 61 Fijación y prórroga de los plazos	66
Artículo 62 Escritos procesales presentados fuera de plazo.....	66
Sección 5. Del desarrollo del procedimiento y de la tramitación de los asuntos	66
Artículo 63 Desarrollo del procedimiento	66
Artículo 64 Carácter contradictorio del procedimiento.....	67
Artículo 65 Notificación de los escritos procesales y de las decisiones adoptadas en el curso del proceso.....	68
Artículo 66 Anonimato y omisión de ciertos datos frente al público.....	68
Artículo 67 Orden de tramitación de los asuntos	69
Artículo 68 Acumulación de asuntos.....	70

Artículo 69	Supuestos de suspensión del procedimiento	70
Artículo 70	Decisiones de suspender y de reanudar el procedimiento.....	71
Artículo 71	Duración y efectos de la suspensión	71
Capítulo Segundo –	DE LOS ESCRITOS PROCESALES	73
Artículo 72	Normas comunes relativas a la presentación de escritos procesales.....	73
Artículo 73	Presentación en Secretaría de un escrito procesal en papel	74
Artículo 74	Presentación por vía electrónica.....	75
Artículo 75	Longitud de los escritos de alegaciones	75
Capítulo Tercero –	DE LA FASE ESCRITA DEL PROCEDIMIENTO	77
Artículo 76	Contenido de la demanda	77
Artículo 77	Información relativa a las notificaciones	77
Artículo 78	Anexos de la demanda.....	78
Artículo 79	Comunicación al <i>Diario Oficial de la Unión Europea</i>	79
Artículo 80	Notificación de la demanda.....	79
Artículo 81	Escrito de contestación.....	80
Artículo 82	Transmisión de documentos.....	81
Artículo 83	Réplica y dúplica.....	81
Capítulo Cuarto –	DE LOS MOTIVOS, DE LAS PRUEBAS Y DE LA ADAPTACIÓN DE LA DEMANDA.....	83
Artículo 84	Motivos nuevos	83
Artículo 85	Pruebas y proposición de prueba.....	84
Artículo 86	Adaptación de la demanda	85
Capítulo Quinto –	DEL INFORME PRELIMINAR	89
Artículo 87	Informe preliminar	89
Capítulo Sexto –	DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS DE PRUEBA	90
Artículo 88	Disposiciones generales	90
Sección 1. De las diligencias de ordenación del procedimiento		91
Artículo 89	Objeto	91
Artículo 90	Procedimiento.....	92
Sección 2. De las diligencias de prueba		92
Artículo 91	Objeto	92
Artículo 92	Procedimiento.....	93
Artículo 93	Citación de testigos	95
Artículo 94	Práctica del interrogatorio de testigos	95
Artículo 95	Obligaciones de los testigos	96
Artículo 96	Dictamen pericial	96
Artículo 97	Juramento de testigos y peritos	97
Artículo 98	Violación del juramento de testigos y peritos	97
Artículo 99	Recusación de un testigo o de un perito.....	98
Artículo 100	Gastos de testigos y peritos	98
Artículo 101	Comisión rogatoria.....	99
Artículo 102	Actas de las vistas de prueba.....	100
Sección 3. Tratamiento de la información, las piezas de convicción y los documentos confidenciales presentados en el marco de las diligencias de prueba		100
Artículo 103	Tratamiento de la información y de los documentos confidenciales	101
Artículo 104	Documentos a los que una institución ha denegado el acceso	103
Capítulo Séptimo –	DE LA INFORMACIÓN O LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA UNIÓN O DE SUS ESTADOS	

MIEMBROS O CON LA GESTIÓN DE SUS RELACIONES INTERNACIONALES	104
Artículo 105 Tratamiento de la información o de los documentos relacionados con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales	104
Capítulo Octavo – DE LA FASE ORAL DEL PROCEDIMIENTO	110
Artículo 106 Fase oral del procedimiento	110
Artículo 107 Fecha de la vista oral	112
Artículo 108 Ausencia de las partes en la vista oral	112
Artículo 109 Puerta cerrada	113
Artículo 110 Desarrollo de la vista oral	113
Artículo 111 Declaración de terminación de la fase oral del procedimiento	114
Artículo 112 Presentación de las conclusiones del Abogado General	114
Artículo 113 Reapertura de la fase oral del procedimiento	114
Artículo 114 Actas de la vista	115
Artículo 115 Grabación de la vista	115
Capítulo Noveno – DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS	117
Artículo 116 Fecha de pronunciamiento de la sentencia	117
Artículo 117 Contenido de la sentencia	117
Artículo 118 Pronunciamiento y notificación de la sentencia	118
Artículo 119 Contenido del auto	118
Artículo 120 Firma y notificación del auto	119
Artículo 121 Obligatoriedad de las sentencias y autos	120
Artículo 122 Publicación en el <i>Diario Oficial de la Unión Europea</i>	120
Capítulo Décimo – DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA	121
Artículo 123 Sentencias en rebeldía	121
Capítulo Undécimo – DEL ACUERDO AMISTOSO Y DE LOS DESISTIMIENTOS,	123
Artículo 124 Acuerdo amistoso	123
Artículo 125 Desistimiento	123
Capítulo Duodécimo – DE LOS RECURSOS E INCIDENTES RESUELTOS MEDIANTE AUTO	124
Artículo 126 Recurso que manifiestamente no puede prosperar	124
Artículo 127 Remisión de un asunto al Tribunal de Justicia o al Tribunal de la Función Pública	124
Artículo 128 Declinación de competencia	125
Artículo 129 Causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público	125
Artículo 130 Excepciones e incidentes procesales	126
Artículo 131 Sobreseimiento de oficio	127
Artículo 132 Recurso manifiestamente fundado	128
Capítulo Decimotercero – DE LAS COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO	129
Artículo 133 Pronunciamiento sobre las costas	129
Artículo 134 Reglas generales de imposición de costas	129
Artículo 135 Equidad y gastos abusivos o temerarios	130
Artículo 136 Costas en caso de desistimiento	130
Artículo 137 Costas en caso de sobreseimiento	131
Artículo 138 Costas de las partes coadyuvantes	131
Artículo 139 Gastos del proceso	131
Artículo 140 Costas recuperables	132
Artículo 141 Formas de pago	133
Capítulo Decimocuarto – DE LA INTERVENCIÓN	134

Artículo 180 Escrito de contestación.....	172
Artículo 181 Declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento	173
Capítulo Tercero – DE LA ADHESIÓN AL RECURSO	174
Artículo 182 Adhesión al recurso	174
Artículo 183 Contenido de la adhesión al recurso.....	174
Artículo 184 Pretensiones, motivos y alegaciones de la adhesión al recurso.....	175
Artículo 185 Contestación a la adhesión al recurso	175
Artículo 186 Declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento	175
Artículo 187 Relación entre el recurso principal y la adhesión al recurso	176
Capítulo Cuarto – OTROS ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO	177
Artículo 188 Objeto del litigio ante el Tribunal General.....	177
Artículo 189 Longitud de los escritos de alegaciones	177
Artículo 190 Decisión sobre las costas.....	177
Artículo 191 Otras disposiciones aplicables.....	178
TÍTULO QUINTO – DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	179
Artículo 192 Ámbito de aplicación	180
Capítulo Primero – DEL RECURSO DE CASACIÓN.....	181
Artículo 193 Interposición del recurso de casación.....	181
Artículo 194 Contenido del recurso de casación	181
Artículo 195 Pretensiones, motivos y alegaciones del recurso de casación	182
Artículo 196 Pretensiones en caso de estimación del recurso de casación	183
Capítulo Segundo – DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN, DE LA RÉPLICA Y DE LA DÚPLICA	184
Artículo 197 Notificación del recurso de casación.....	184
Artículo 198 Partes autorizadas a presentar un escrito de contestación	184
Artículo 199 Contenido del escrito de contestación.....	184
Artículo 200 Pretensiones del escrito de contestación	185
Artículo 201 Réplica y dúplica.....	185
Capítulo Tercero – DE LA ADHESIÓN A LA CASACIÓN	187
Artículo 202 Adhesión a la casación	187
Artículo 203 Contenido de la adhesión a la casación.....	187
Artículo 204 Pretensiones, motivos y alegaciones de la adhesión a la casación.....	188
Capítulo Cuarto – DE LOS ESCRITOS PROCESALES QUE SIGUEN A LA ADHESIÓN A LA CASACIÓN.....	189
Artículo 205 Contestación a la adhesión a la casación.....	189
Artículo 206 Réplica y dúplica en caso de adhesión a la casación.....	189
Capítulo Quinto – DE LA FASE ORAL DEL PROCEDIMIENTO	191
Artículo 207 Fase oral del procedimiento	191
Capítulo Sexto – DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN RESUELTOS MEDIANTE AUTO	192
Artículo 208 Recurso de casación o adhesión a la casación manifiestamente inadmisibles o manifiestamente infundados	192
Artículo 209 Recurso de casación o adhesión a la casación manifiestamente fundados	192
Capítulo Séptimo – DE LAS CONSECUENCIAS DEL ARCHIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN PARA LA ADHESIÓN A LA CASACIÓN.....	193
Artículo 210 Consecuencias para la adhesión a la casación del desistimiento en el recurso de casación o de la inadmisibilidad manifiesta del mismo.....	193
Capítulo Octavo – DE LAS COSTAS Y DE LOS GASTOS DEL PROCESO EN CASACIÓN	194
Artículo 211 Decisión sobre las costas en casación	194

Capítulo Noveno – OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES EN CASACIÓN	195
Artículo 212 Longitud de los escritos de alegaciones	195
Artículo 213 Otras disposiciones aplicables en casación	195
Capítulo Décimo – DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LAS DECISIONES DESESTIMATORIAS DE DEMANDAS DE INTERVENCIÓN Y CONTRA LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS PROVISIONALES	196
Artículo 214 Recurso de casación contra las decisiones desestimatorias de demandas de intervención y contra las resoluciones adoptadas en un procedimiento de medidas provisionales	196
TÍTULO SEXTO – DE LOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO	197
Capítulo Primero – DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL GENERAL DICTADAS TRAS LA CASACIÓN Y LA DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO	197
Artículo 215 Casación y devolución de un asunto por parte del Tribunal de Justicia	197
Artículo 216 Atribución del asunto	197
Artículo 217 Desarrollo del procedimiento	198
Artículo 218 Normas aplicables al procedimiento	199
Artículo 219 Costas	199
Capítulo Segundo – DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL GENERAL DICTADAS TRAS EL REEXAMEN Y LA DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO	200
Artículo 220 Reexamen y devolución de un asunto por parte del Tribunal de Justicia	200
Artículo 221 Atribución del asunto	200
Artículo 222 Desarrollo del procedimiento	200
Artículo 223 Costas	201
DISPOSICIONES FINALES	202
Artículo 224 Normas de desarrollo	202
Artículo 225 Videoconferencia	202
Artículo 226 Ejecución forzosa	203
Artículo 227 Derogación	203
Artículo 228 Publicación y entrada en vigor del presente Reglamento	203

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL

El TRIBUNAL GENERAL,

Visto el Tratado de la Unión Europea y en particular su artículo 19,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 254, párrafo quinto,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y en particular su artículo 106 *bis*, apartado 1,

Visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en particular su artículo 19, párrafo sexto, su artículo 63 y su artículo 64, párrafo segundo,

Considerando lo que sigue:

- (1) El Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 ha sido modificado en numerosas ocasiones con objeto de dotar al Tribunal General, mediante retoques sucesivos, de disposiciones que le permitan tramitar en condiciones idóneas asuntos de diferente naturaleza y pertenecientes a ámbitos cada vez más diversos.
- (2) Es necesario proceder a una revisión completa del texto con objeto de aportar una nueva coherencia a este conjunto de normas, favorecer la homogeneidad de los dispositivos procesales que regulan los litigios sometidos a los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, preservar la capacidad del Tribunal General para resolver en un plazo razonable, clarificar los derechos reconocidos a las partes y adaptar un cierto número de disposiciones para tener en cuenta ciertas evoluciones recientes, tecnológicas o de otro tipo, en lo que respecta a la presentación y a la notificación de escritos procesales, así como las dificultades encontradas al aplicarlas.
- (3) A causa de sus rasgos específicos, los recursos presentados en materia de propiedad intelectual o industrial y los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea deben someterse a normas procesales específicas recogidas en títulos especiales, aunque sigan estando sujetos, en todo lo demás, a las normas procesales aplicables a los recursos directos. Las normas relativas a los recursos directos, a los recursos en materia de propiedad intelectual o industrial y a los recursos de casación constituyen, pues, la trama de este Reglamento.
- (4) Por otra parte, a la vista de la experiencia adquirida, parece oportuno completar o clarificar, en interés de los justiciables, ciertas normas aplicables a cada uno de estos procedimientos, como, por ejemplo, las relativas a la amplitud de los derechos conferidos a las partes principales y a los coadyuvantes o, en los asuntos de propiedad intelectual o industrial, a la adquisición del estatuto de coadyuvante y a la amplitud de los derechos de éste. El respeto del principio de contradicción y la necesidad de preservar, en determinadas situaciones, la confidencialidad de una información delicada, pertinente para la resolución del litigio, son objeto de disposiciones específicas. En lo que respecta a los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública, es preciso establecer una distinción

más clara entre los recursos de casación y las adhesiones a la casación formuladas tras la notificación del recurso de casación. Esta misma distinción debe establecerse, en los asuntos de propiedad intelectual o industrial, entre el recurso inicial y la adhesión al recurso formulada por el coadyuvante tras serle notificada la demanda que inició el proceso.

- (5) La aplicación de ciertos procedimientos ha puesto de manifiesto su excesiva complejidad, por lo que conviene simplificarlos. A estos efectos, las normas de determinación de la lengua de procedimiento en los asuntos de propiedad intelectual o industrial permiten que las situaciones sean más previsibles para los interesados y facilitan al Tribunal General la tramitación del asunto. Las normas relativas al procedimiento en rebeldía pretenden favorecer una resolución más rápida del asunto en interés del demandante, que, cuando ve reconocidas sus pretensiones, se expone al riesgo de que el demandado rebelde formule oposición.
- (6) A fin de hacer más legibles las disposiciones que las regulan, conviene también agrupar en el título relativo a los recursos directos la totalidad de las demandas y solicitudes relativas a las sentencias y autos, actualmente dispersas en títulos y capítulos distintos del Reglamento de Procedimiento. Del mismo modo, para favorecer la lectura del texto se reúnen en un solo título los procedimientos posteriores a la devolución del asunto por parte del Tribunal de Justicia, tras la casación o el reexamen de una resolución.
- (7) Pese a estar obligado a hacer frente a un número de litigios cada vez mayor, el Tribunal General debe continuar dictando su resoluciones en un plazo razonable. Resulta esencial, pues, proseguir los esfuerzos emprendidos a fin de reducir la duración de los procedimientos que se desarrollan ante él, y para ello se dispone que la fase escrita del procedimiento en los asuntos de propiedad intelectual o industrial quedará limitada a un solo turno de escritos de alegaciones; se establece un marco para la adaptación de las pretensiones recogidas en la demanda; se reducen ciertos plazos legales; se simplifica el régimen de la intervención mediante la supresión de la posibilidad de admitir demandas de intervención una vez expirado el plazo legal de seis semanas a partir de la publicación del anuncio en el *Diario Oficial de la Unión Europea*; se confiere al Tribunal la facultad de resolver sin fase oral en los recursos directos cuando ninguna de las partes principales haya solicitado la celebración de una vista oral y él estime que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, así como la facultad de resolver sin fase oral en los recursos de casación; se aumentan las competencias de los Presidentes de Sala para la toma de decisiones y, por último, se incrementa el número de supuestos en que se resuelve mediante una simple decisión.
- (8) Con este mismo objetivo, el título relativo a la organización del Tribunal General se enriquece con disposiciones destinadas a especificar los supuestos en que un asunto puede ser reatribuido y a ampliar las competencias del Juez único, permitiéndole conocer de los asuntos de propiedad intelectual o industrial.
- (9) El respeto del principio de contradicción en el desarrollo del proceso queda respaldado por la afirmación de este principio en un artículo específico y por una regulación estricta de los supuestos en los que la preservación de la confidencialidad de una información facilitada por una parte principal e indispensable para resolver el litigio

justifica excepcionalmente que dicha información no sea comunicada a la otra parte principal. Varias disposiciones nuevas ofrecen igualmente al Tribunal un marco formal para los supuestos en que un Juez se abstenga o se decida apartarlo del conocimiento de un asunto. La reforma pretende también elevar a nivel de Reglamento disposiciones recogidas anteriormente en las Instrucciones prácticas a las partes, como la relativa a la longitud de los escritos de alegaciones, o en las Instrucciones al Secretario del Tribunal General, como la referente al anonimato o la que especifica las circunstancias en que un tercero puede tener acceso a los autos del asunto.

- (10) Por último, se facilita la lectura del texto suprimiendo ciertas normas inaplicadas o en desuso, numerando todos los párrafos de los artículos del presente Reglamento, poniendo un título específico a cada artículo y armonizando los términos utilizados.

Con el acuerdo del Tribunal de Justicia,

Con la aprobación del Consejo, dada el ...,

ADOPTA EL SIGUIENTE REGLAMENTO:

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

Definiciones

1. En el presente Reglamento:
 - a) las disposiciones del Tratado de la Unión Europea se designarán con el número del artículo de que se trate seguido por las siglas «TUE»;
 - b) las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se designarán con el número del artículo de que se trate seguido por las siglas «TFUE»;
 - c) las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica se designarán con el número del artículo de que se trate seguido por las siglas «TCEEA»;
 - d) el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se denominará «Estatuto»;
 - e) el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ¹ se denominará «Acuerdo EEE»;

¹ DO 1994, L 1, p. 3.

f) el Reglamento n° 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea,² se denominará «Reglamento n° 1 del Consejo».

2. A efectos de aplicación del presente Reglamento:

- a) por «Tribunal General» se entenderá, en los asuntos atribuidos a una Sala, dicha Sala y, en los asuntos atribuidos a un Juez único, dicho Juez;
- b) por «Presidente» se entenderá, cuando el término no vaya acompañado de otras indicaciones:
- en los asuntos aún no atribuidos a la formación que conocerá del asunto, el Presidente del Tribunal General;
 - en los asuntos atribuidos a las Salas, el Presidente de la Sala a la que se haya atribuido el asunto;
 - en los asuntos atribuidos a un Juez único, dicho Juez;
- c) por «parte» y «partes» se entenderá, cuando los términos no vayan acompañados de otras indicaciones, cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes;
- d) por «parte principal» y «partes principales» se entenderá, según los casos, el demandante o el demandado, o el recurrente o el recurrido, o ambos;
- e) por «representantes de las partes» se entenderá los abogados y los agentes, estos últimos asistidos, en su caso, por un asesor o por un abogado, que representen a las partes ante el Tribunal General con arreglo al artículo 19 del Estatuto;
- f) por «institución» o «instituciones» se entenderá las instituciones de la Unión mencionadas en el artículo 13 TUE, apartado 1, y los órganos u organismos creados por los Tratados o por un acto adoptado en ejecución de éstos y que tengan capacidad para ser parte ante el Tribunal General;
- g) por «Oficina» se entenderá, según los casos, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) o la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales;
- h) por «Órgano de Vigilancia de la AELC» se entenderá el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio, establecido por el Acuerdo EEE;
- i) por «recursos directos» se entenderá los recursos interpuestos con base en los artículos 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE y 272 TFUE.

² DO 1958, 17, p. 385.

En este artículo 1 del presente proyecto se aportan ciertas precisiones al texto actual.

Las primeras modificaciones consisten en añadir, en el apartado 1, la letra a) que contiene una referencia al Tratado de la Unión Europea y la letra f) en la que figura la referencia completa al Reglamento n° 1 del Consejo, citado en varias ocasiones en el Reglamento de Procedimiento vigente sin que se haya fijado una convención de escritura en lo que a él respecta.

Las modificaciones recogidas en el apartado 2 pretenden completar la definición de ciertos términos o expresiones con objeto de disipar las ambigüedades que pudiera suscitar el texto actual y de aligerar la redacción de ciertas disposiciones. Así, todos los conceptos mencionados en las letras a) y e), así como en las letras g) e i), reciben una definición. Con las definiciones que figuran en las letras c) y d) se pretende clarificar, en aras de la seguridad jurídica, términos utilizados en los artículos del presente proyecto, pues la extensión de los derechos y de las obligaciones es diferente según que la parte procesal tenga el estatuto de parte principal o de coadyuvante. En cuanto a la modificación realizada en la letra f), está destinada a aproximar el texto del mismo al del artículo 1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Así se disipan las dudas que hayan podido surgir, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en cuanto al alcance exacto de la expresión «instituciones de la Unión». A estos efectos, el presente proyecto se remite expresamente al artículo 13, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), en el que tales instituciones se designan por sus nombres.

Artículo 2

Alcance del presente Reglamento

Las disposiciones del presente Reglamento aplicarán y completarán, en la medida en que sea necesario, las disposiciones pertinentes del TUE, del TFUE y del TCEEA, así como lo dispuesto en el Estatuto.

Este nuevo artículo pretende precisar el alcance del presente Reglamento. Inspirándose en el contenido del artículo 254, párrafo quinto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y del artículo 63 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), este artículo recuerda la función esencial del Reglamento de Procedimiento, que es la de aplicar y completar, en la medida en que sea necesario, las disposiciones de dichos textos. El presente artículo es idéntico al artículo 2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

TÍTULO PRIMERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL

Como ocurre en el Reglamento de Procedimiento en vigor, el título primero del proyecto de Reglamento de Procedimiento se refiere a la organización del Tribunal General. Este título, que se inspira en el contenido de los artículos 47 a 50 y 52 del Estatuto, pretende esencialmente precisar las atribuciones de los principales actores del Tribunal y formular las normas que regulan el funcionamiento del mismo, así como los principios y métodos utilizados para determinar la formación jurisdiccional que conocerá de cada asunto.

El título primero del presente proyecto, que consta de siete capítulos, contiene un capítulo más que el título primero del Reglamento vigente, a pesar de que los capítulos relativos al régimen lingüístico y a los derechos y obligaciones de los representantes de las partes se han desplazado y han pasado a constituir, respectivamente, la totalidad del título segundo y una sección del capítulo relativo a las disposiciones generales del título tercero, que se refiere a los recursos directos. Se ha procedido, pues, a una reorganización de los capítulos del título primero, modificando su orden actual, con objeto de hacer más legible el texto.

En este título primero, se han llevado a cabo modificaciones formales a fin de acercar el texto de sus disposiciones al de los artículos correspondientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Se ha incluido una nueva disposición destinada a completar el artículo 18 del Estatuto y a dotar al Tribunal General de un marco procesal que le permita tratar los casos en que un juez se abstiene o se decide apartarlo del conocimiento de un asunto. Se ha añadido igualmente un artículo que se refiere específicamente a la designación de un nuevo Juez Ponente y a la reatribución del asunto. El presente proyecto consagra el abandono del Pleno como formación jurisdiccional, pero expone al mismo tiempo las competencias de la sesión plenaria, órgano en el que participan todos los Jueces del Tribunal General. La inclusión de una disposición relativa al acceso a los autos del asunto aclara o completa las normas relativas a la Secretaría. Por último, se mantiene y se precisa la disposición actual sobre el juramento de los funcionarios y otros agentes encargados de asistir directamente al Presidente, a los Jueces y al Secretario del Tribunal General. Las demás disposiciones pretenden afinar las disposiciones vigentes.

En lo referente a los actores del procedimiento, conviene subrayar, sin embargo, tres modificaciones importantes del régimen actualmente vigente.

En primer lugar, tras la modificación del Estatuto por la que se creó la función de Vicepresidente del Tribunal General, el Tribunal General extrae las consecuencias oportunas de dicha modificación indicando, en su Reglamento de Procedimiento, el método de designación del mismo y sus atribuciones. Este texto se inspira en gran medida en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

A continuación, como consecuencia de esta modificación y de la que aumentó de 13 a 15 el número de Jueces que integran la Gran Sala del Tribunal de Justicia, el Tribunal General aumenta igualmente de 13 a 15 el número de Jueces que componen la Gran Sala, indica que el quórum de ésta asciende a 11 Jueces, precisa el procedimiento que debe seguirse en caso de impedimento del Presidente, del Vicepresidente, de un Presidente de Sala, de un Juez de la

formación jurisdiccional o de un Juez único, y aclara las consecuencias procesales que se derivan de la pérdida del quórum en la Gran Sala o en una Sala que actúe en formaciones de tres o de cinco Jueces.

Por último, se amplía la competencia del Juez único, incluyendo en ella los asuntos de propiedad intelectual o industrial, al suprimir la imposibilidad de atribuirle asuntos de este tipo establecida en las normas vigentes. La atribución de asuntos al Juez único queda sometida, además, a un procedimiento más flexible, puesto que la decisión de atribuirle el asunto pasa a ser adoptada por la Sala por mayoría, y no por unanimidad como actualmente.

Capítulo Primero DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 3 **Funciones de Juez y de Abogado General**

1. Todos los miembros del Tribunal General desempeñarán, en principio, las funciones de Juez.
2. En lo sucesivo, se denominará «Jueces» a los miembros del Tribunal General.
3. Todos los Jueces, a excepción del Presidente, del Vicepresidente y de los Presidentes de Sala del Tribunal General, podrán desempeñar, en un asunto determinado, las funciones de Abogado General, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31.
4. Las referencias que se hacen en el presente Reglamento al Abogado General sólo serán de aplicación en los casos en que un Juez sea designado Abogado General.

Este artículo concuerda con el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento vigente, al que se ha añadido, para mayor claridad, la referencia del apartado 3 a los Jueces que no pueden desempeñar las funciones de Abogado General.

Artículo 4 **Inicio del mandato de los Jueces**

El mandato de los Jueces se iniciará en la fecha fijada al efecto en la decisión de nombramiento. Si la decisión no determina la fecha en que dará comienzo su período de mandato, éste se iniciará el día en que se publique dicha decisión en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Según la versión francesa del artículo 3 del Reglamento de Procedimiento en vigor, el período de funciones de un Juez da comienzo, en principio, en la fecha fijada a tal fin en el nombramiento.

Sin embargo, en la práctica, esta regla no corresponde plenamente a la realidad. En efecto, los Jueces del Tribunal General no entran en funciones hasta que han prestado el juramento mencionado en el artículo 2 del Estatuto. Ahora bien, la fecha de prestación del juramento no coincide necesariamente con la fecha fijada en la decisión de nombramiento del Juez de que se trate, en particular, en el caso de los nombramientos que se producen a mitad de mandato, a raíz de una dimisión o de un fallecimiento. A veces pueden transcurrir varios días o varias semanas entre la fecha fijada en la decisión de nombramiento de un Juez y la fecha en que presta juramento, que es la que marca su entrada en funciones efectiva.

Por esta razón, ha parecido necesario modificar la versión francesa del artículo 3 del Reglamento actual para referirse, en lo sucesivo, a la fecha en que comienza el período de mandato de Juez, y no su período de funciones.

Este artículo se inspira en el artículo 3 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 5

Prestación de juramento

Antes de su entrada en funciones, los Jueces prestarán, ante el Tribunal de Justicia, el siguiente juramento, previsto en el artículo 2 del Estatuto:

«Juro ejercer mis funciones en conciencia y con toda imparcialidad; juro que no violaré en modo alguno el secreto de las deliberaciones.»

El artículo concuerda con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento actual, al que se ha añadido, para mayor claridad, una referencia al artículo 2 del Estatuto, que indica el contenido del juramento de los Jueces.

Artículo 6

Compromiso solemne

Inmediatamente después de haber prestado juramento, los Jueces firmarán una declaración por la que asumirán el compromiso solemne previsto en el artículo 4, párrafo tercero, del Estatuto.

El artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento actual, que reproduce los términos del artículo 4, párrafo tercero, del Estatuto. Para aligerar el texto, el presente proyecto se limita, pues, a remitir aquí a este último artículo.

Artículo 7

Relevo en sus funciones de los Jueces

1. Cuando el Tribunal de Justicia deba decidir, con arreglo al artículo 6 del Estatuto, después de consultar al Tribunal General, si un Juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas o incumple las obligaciones que se derivan de su cargo, el Presidente del Tribunal General ofrecerá al interesado la posibilidad de presentar sus observaciones, sin asistencia del Secretario.
2. El dictamen del Tribunal General será motivado.
3. El dictamen por el que se declare que un Juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas o incumple las obligaciones que se derivan de su cargo deberá ser refrendado por el voto de, como mínimo, la mayoría de los Jueces que componen el Tribunal General según el artículo 48 del Estatuto. En tal caso, se comunicará al Tribunal de Justicia el desglose de la votación.
4. La votación será secreta, sin asistencia del Secretario, y en la deliberación no tomará parte el interesado.

Este artículo concuerda con el artículo 5 del Reglamento de Procedimiento actual, cuyos términos retoma. Para mayor claridad, el presente proyecto cita por lo demás el artículo del Estatuto que aquí se aplica y suprime la referencia al Tribunal «reunido con carácter reservado», términos cuyo alcance no parece perfectamente claro. Además, en el apartado 3 se añade una referencia al artículo 48 del Estatuto. Por último, junto a la fase de audiencia del Juez afectado por el procedimiento, que según el artículo 5 actual se desarrolla sin asistencia del Secretario, el nuevo artículo indica expresamente en su apartado 4 que la votación se desarrollará igualmente sin asistencia del Secretario.

Artículo 8

Rango de antigüedad

1. La antigüedad en el cargo de los Jueces se calculará a partir de su entrada en funciones.
2. A igual antigüedad en el cargo, la edad determinará el rango.
3. Los Jueces cuyo mandato sea renovado conservarán su rango de antigüedad anterior.

Este artículo determina el rango de los Jueces, al igual que el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento vigente. La nueva formulación, que se inspira, también en su título, en el artículo 7 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, hace hincapié en la antigüedad en el cargo.

Este artículo debe ponerse en relación con los artículos 12, 20 a 22 y 43 del presente proyecto, que contienen por lo demás una remisión al mismo.

Capítulo Segundo
DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 9

Elección del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General

1. Inmediatamente después de la renovación parcial prevista en el artículo 254 TFUE, párrafo segundo, los Jueces elegirán entre ellos al Presidente del Tribunal General por un período de tres años.
2. En el caso de que el Presidente cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se procederá a su sustitución por el período que falte para terminarlo.
3. En las elecciones previstas en el presente artículo, la votación será secreta. Resultará elegido el Juez que obtenga el voto de más de la mitad de los Jueces que componen el Tribunal General según el artículo 48 del Estatuto. Si ninguno de los Jueces alcanzara dicha mayoría, se procederá a nuevas votaciones hasta que alguno de ellos la alcance.
4. A continuación, los Jueces elegirán entre ellos al Vicepresidente del Tribunal General por un período de tres años, del modo previsto en el apartado 3. En el caso de que el Vicepresidente cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2.
5. Los nombres del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General elegidos conforme a lo dispuesto en el presente artículo se publicarán en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Los tres primeros apartados del presente artículo concuerdan, en lo esencial, con los tres apartados del artículo 7 del Reglamento de Procedimiento actual. Para mayor claridad, en el apartado 3 se añade una referencia al artículo 48 del Estatuto.

El cuarto apartado del presente artículo es consecuencia de las modificaciones del Estatuto (DO 2012, L 228, p. 1) por las que se creó la función de Vicepresidente del Tribunal General, dado que el artículo 9 bis del Estatuto es aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 47, párrafo primero, de dicho Estatuto. Se propone que este Juez, que deberá secundar al Presidente en el ejercicio de sus funciones, sea elegido del mismo modo que el Presidente y que, en el caso de que cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, sea sustituido únicamente por el período que falte para terminarlo, como ocurre con el Presidente del Tribunal General.

Con ánimo de completar el texto, el quinto apartado del presente artículo dispone que, tal y como se ha establecido ya para los Presidentes de Sala (actual artículo 15, apartado 5), los nombres del Presidente y del Vicepresidente elegidos conforme a lo dispuesto en el presente artículo se publicarán en el Diario Oficial.

Los apartados 4 y 5 que se propone añadir a este artículo se corresponden con los apartados 4 y 5 del artículo 8 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 10
Atribuciones del Presidente del Tribunal General

1. El Presidente del Tribunal General representará al Tribunal General.
2. El Presidente del Tribunal General dirigirá los trabajos y los servicios del Tribunal General.
3. El Presidente del Tribunal General presidirá la sesión plenaria, mencionada en el artículo 42.
4. La Gran Sala estará presidida por el Presidente del Tribunal General. En tal caso será aplicable el artículo 19.
5. Si el Presidente del Tribunal General fuera adscrito a una Sala, presidirá dicha Sala. En tal caso será aplicable el artículo 19.
6. Para los asuntos aún no atribuidos a una formación jurisdiccional, el Presidente del Tribunal General podrá adoptar las diligencias de ordenación del procedimiento mencionadas en el artículo 89.

Este artículo refleja el contenido del artículo 8 del Reglamento de Procedimiento actual, pero lo completa al precisar con más detalle las diversas funciones que ejerce el Presidente del Tribunal General.

El primer apartado del artículo alude así a su papel de representante del Tribunal General, tanto internamente, ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de la Función Pública, como externamente, ante los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los diversos interlocutores del Tribunal General.

El contenido de los apartados 2 y 3 de este artículo refleja lo que tradicionalmente constituye el núcleo esencial de la función de Presidente del Tribunal, a saber: dirigir los trabajos del Tribunal; velar por el buen funcionamiento del mismo, en estrecha colaboración con el Secretario del Tribunal General, con los medios puestos a su disposición y, con determinada frecuencia, presidir las reuniones de la sesión plenaria (mencionada en el artículo 42 del presente proyecto), órgano en el que participan todos los miembros del Tribunal.

Los apartados 4 y 5 del artículo 10 retoman el contenido del artículo 8 actual, que menciona la prerrogativa presidencial consistente en presidir la Gran Sala, así como cualquier otra Sala a la que fuera adscrito, pero precisando su contenido mediante una remisión a la disposición relativa a las competencias del Presidente de Sala.

El apartado 6 contiene una nueva regla. Esta disposición, motivada por la búsqueda de eficacia, pretende dotar al Presidente de la competencia de adoptar diligencias de ordenación del procedimiento en una fase muy temprana, situada entre el momento en que se presenta la demanda en la Secretaría y el momento en que se atribuye el asunto a un Juez Ponente. En efecto, en este breve período puede resultar necesario adoptar diligencias a fin

de aclarar con la máxima rapidez uno u otro aspecto del procedimiento, con objeto de permitir que la formación que conocerá posteriormente del asunto disponga de toda la información oportuna para, en su caso, resolver rápidamente. Una situación típica es aquella en la que existen indicios que hacen pensar que un abogado se encuentra unido por una relación laboral a su cliente y no actúa, pues, de manera independiente, como exige una jurisprudencia constante. Un segundo ejemplo es el de la presentación de la versión original de la demanda que inicia el proceso más de 10 días después de la recepción por fax de dicho escrito; en tal caso resulta esencial conocer lo antes posible las observaciones de la parte demandante sobre la eventual concurrencia de un supuesto de fuerza mayor o de un caso fortuito que pueda explicar la presentación extemporánea del escrito, sin necesidad de esperar a la atribución formal del asunto. Como último ejemplo puede mencionarse la necesidad de identificar a la parte contra la que se ha interpuesto el recurso ante la perspectiva de una eventual recalificación del mismo, debido simplemente a la necesidad de proceder a una notificación de la demanda en buena y debida forma.

Artículo 11

Atribuciones del Vicepresidente del Tribunal General

1. El Vicepresidente del Tribunal General asistirá al Presidente del Tribunal General en el ejercicio de sus funciones y le sustituirá en caso de impedimento.
2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, a petición de éste, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 10, apartados 1 y 2.
3. El Tribunal General determinará, mediante decisión, las condiciones en las que el Vicepresidente sustituirá al Presidente del Tribunal General en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Esta decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 5, si el Vicepresidente del Tribunal General fuera adscrito a una Sala, presidirá dicha Sala. En tal caso será aplicable el artículo 19.

Esta nueva disposición es la consecuencia lógica de la creación de la función de Vicepresidente del Tribunal General, con arreglo al artículo 9 bis del Estatuto, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 47, y constituye una medida de aplicación del artículo 39, párrafo segundo, del Estatuto, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 53, que determina las atribuciones del Vicepresidente del Tribunal General. Esencialmente, la función de este último consiste en secundar al Presidente en el ejercicio de sus funciones y sustituirlo en el caso de que éste padezca un impedimento. Los tres primeros apartados de este artículo se inspiran en el artículo 10 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

La disposición recogida en el apartado 4 pretende dejar claro el hecho de que el Vicepresidente no es sólo la persona que reemplaza al Presidente del Tribunal General, sino que es también un Juez en pleno ejercicio de sus funciones, responsable de la instrucción de asuntos. Se dispone por tanto que, si el Vicepresidente fuera adscrito a una Sala, la presidirá, tal como se ha establecido para el Presidente del Tribunal (véase el artículo 10, apartado 5,

del presente proyecto), a menos que este último forme ya parte de la Sala y sea a él a quien se atribuyan, por consiguiente, las competencias propias de los Presidentes de Sala.

Artículo 12

Impedimento del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General

En caso de impedimento simultáneo del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General, la Presidencia será ejercida por uno de los Presidentes de Sala o, en su defecto, por uno de los otros Jueces, siguiendo el orden establecido en el artículo 8.

El presente artículo retoma el contenido del actual artículo 9 del Reglamento de Procedimiento, simplificándolo y completando. Su objetivo consiste en precisar el orden que debe seguirse para determinar el nombre del Juez que ocupará las funciones de Presidente del Tribunal General, en caso de impedimento simultáneo de este último y del Vicepresidente. En tal supuesto, el Tribunal General sigue el orden de antigüedad establecido en el artículo 8 del presente proyecto de Reglamento, llamando en primer lugar al Presidente de Sala con mayor antigüedad, después, en caso de impedimento de este último, al Presidente de Sala que le siga inmediatamente en antigüedad y así sucesivamente, hasta que se acabe encontrando un reemplazante. Este artículo, inspirado en el artículo 13 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, constituye una medida de aplicación del artículo 39, párrafo tercero, del Estatuto.

Capítulo Tercero
DE LAS SALAS Y FORMACIONES JURISDICCIONALES

El objetivo de este nuevo capítulo es facilitar la lectura del texto mediante la agrupación de todas las disposiciones relativas a las formaciones jurisdiccionales, exceptuando las que se refieren a la atribución y la reatribución de asuntos, su remisión a otra Sala y su asignación a un Juez único, que se tratan en otro capítulo. Este nuevo capítulo tercero consta de tres secciones.

Sección 1. De la constitución de las Salas y de la composición de las formaciones
jurisdiccionales

Artículo 13
Constitución de las Salas

1. El Tribunal General constituirá en su seno Salas que actuarán en formaciones de tres y de cinco Jueces.
2. El Tribunal General decidirá la adscripción de los Jueces a las Salas, a propuesta del Presidente del Tribunal.
3. Las decisiones adoptadas conforme al presente artículo se publicarán en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El artículo 13 del presente proyecto retoma, en lo esencial, los términos del artículo 10 del Reglamento de Procedimiento vigente, disposición que ha permitido satisfacer plenamente las necesidades de organización del Tribunal.

El cambio realizado en el apartado 1 no entraña consecuencia alguna para el modo de funcionamiento del Tribunal General, y sólo pretende dar cuenta del hecho de que el número de Jueces que integran las formaciones jurisdiccionales no es necesariamente idéntico al número de Jueces adscritos a una Sala. Así, el número de Jueces que componen una Sala puede ser superior al número de Jueces que integran las formaciones que conocen de los asuntos y en el seno de una misma Sala pueden existir, pues, varias formaciones jurisdiccionales distintas.

Por otra parte, a diferencia del actual artículo 10, el artículo 13 del presente proyecto precisa, en su apartado 2, que el Tribunal General decidirá la adscripción de los Jueces a las Salas a partir de una propuesta del Presidente del Tribunal General. Esta precisión se limita a plasmar la práctica seguida por el Tribunal desde el principio.

Artículo 14

Formación jurisdiccional competente

1. Conocerán de los asuntos sometidos al Tribunal General las Salas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, actúen en formaciones de tres o de cinco Jueces.
2. La Gran Sala podrá conocer de los asuntos conforme a lo dispuesto en el artículo 28.
3. El Juez único podrá conocer de los asuntos que se le asignen conforme a lo dispuesto en el artículo 29.

Esta disposición retoma en gran medida los términos del artículo 11 del Reglamento de Procedimiento vigente. No obstante, el texto ha sido modificado a fin de reflejar mejor la práctica actual del Tribunal General. Se propone así, en efecto, suprimir la posibilidad de que un asunto sea juzgado por el Pleno, formación jurisdiccional caída en desuso. A este respecto cabe destacar que, desde la creación del Tribunal General, sólo se ha sometido un asunto al Pleno en tres ocasiones (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de julio de 1990, Tetra Pak/Comisión, T-51/89, Rec. p. II-309, de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión, T-24/90, Rec. p. II-2223, y Asia Motor France y otros/Comisión, T-28/90, Rec. p. II-2285) y nunca a partir de 1992. La necesidad de crear una formación jurisdiccional más eficaz que el Pleno se tradujo históricamente en la creación de la Gran Sala, como resultado de una modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia que entró en vigor en 2003, al haberse constatado en aquel momento que un Pleno compuesto por 25 Jueces, y con más razón aún si el número es superior, está más próximo a una asamblea deliberante que a una formación jurisdiccional colegial.

La supresión del Pleno como formación jurisdiccional no implica, sin embargo, que los Jueces queden privados de la posibilidad de reunirse en un órgano común, ya que la totalidad de los Jueces participa en las reuniones de la sesión plenaria para adoptar las decisiones contempladas en el artículo 42 del presente proyecto.

La supresión del apartado 2 del actual artículo 11 del Reglamento de Procedimiento se debe a la convención de escritura formulada en el artículo 1, apartado 2, letra a), del presente proyecto.

Artículo 15

Composición de la Gran Sala

1. La Gran Sala estará compuesta por quince Jueces.
2. El Tribunal General decidirá el modo de designar a los Jueces que componen la Gran Sala. Esta decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente artículo aumenta de trece a quince el número de Jueces que componen la Gran Sala. Tras el incremento del número de Jueces del Tribunal General resultante de la adhesión a la Unión Europea de Bulgaria y Rumanía en 2007 y de Croacia en 2013, parece deseable aumentar el número de Jueces que integran esta formación jurisdiccional, con objeto de

permitir una mayor participación de los Jueces en los asuntos atribuidos a la Gran Sala. Además, quince es el número de Jueces de la Gran Sala del Tribunal de Justicia desde la entrada en vigor del Reglamento (UE, Euratom) n° 741/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de agosto de 2012, por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I (DO L 228, p. 1).

Siguiendo también el ejemplo del Tribunal de Justicia, se propone incluir en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General una disposición general relativa a la composición de la Gran Sala.

Sin embargo, el Tribunal General cuenta con un Juez como mínimo por Estado miembro, y este número puede cambiar si se modifica el Estatuto. Ante la posibilidad de un aumento del número de Jueces, el Tribunal General considera que, a diferencia del artículo 27 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, resulta preferible no determinar en el Reglamento de Procedimiento el modo de designar a los Jueces que componen la Gran Sala; se ha optado pues por la fórmula menos rígida de la norma de habilitación, que permite que el Tribunal decida el sistema que mejor se ajuste a su organización. El respeto de las exigencias de transparencia y de previsibilidad justifica no obstante que, como ocurre en la actualidad, la decisión sobre el modo de designar a los Jueces que participan en la Gran Sala sea objeto de publicación oficial.

Artículo 16

Abstención de un Juez y decisión de apartar a un Juez del conocimiento del asunto

1. Cuando un Juez estime, con arreglo al artículo 18, párrafos primero y segundo, del Estatuto, que no puede participar en la resolución de un asunto, informará de ello al Presidente del Tribunal General, que le dispensará de participar en la formación jurisdiccional.
2. Cuando el Presidente del Tribunal General estime que, con arreglo al artículo 18, párrafos primero y segundo, del Estatuto, un Juez no puede participar en la resolución de un asunto, advertirá de ello al Juez de que se trate y oír sus observaciones antes de decidir.
3. En caso de dificultad sobre la aplicación del presente artículo, con arreglo al artículo 18, párrafo tercero, del Estatuto, el Presidente del Tribunal General someterá a la sesión plenaria las cuestiones mencionadas en los apartados 1 y 2. En tal caso, la votación será secreta, sin que el Secretario esté presente, y tendrá lugar una vez oídas las observaciones del Juez de que se trate, que no tomará parte en la deliberación.

Ésta es una nueva disposición, cuya inclusión se justifica por varias razones.

En primer lugar, el procedimiento relativo a la decisión de un Juez de abstenerse de participar en el conocimiento de un asunto y el procedimiento por el que se decide apartar a un Juez del conocimiento de un asunto merecen ser precisados, en aras de una mayor transparencia, dado el carácter sumario de las disposiciones que figuran en el artículo 18 del Estatuto.

En segundo lugar, las características específicas de los litigios sometidos al Tribunal General justifican que, habida cuenta de los principios de imparcialidad objetiva y de imparcialidad subjetiva, se permita a un Juez abstenerse de participar en la formación jurisdiccional o que se le retire la instrucción de un caso a iniciativa del Presidente del Tribunal. Cuando existan dudas sobre la aplicación del artículo 18 del Estatuto, el Presidente someterá la cuestión a la sesión plenaria del Tribunal General.

En tercer lugar, esta disposición tiene sus equivalentes en numerosas normas procesales de los Estados miembros. A nivel internacional, los reglamentos de procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Penal Internacional contienen disposiciones similares.

Artículo 17

Impedimento de un miembro de la formación jurisdiccional

1. Si en la Gran Sala no se alcanzara el número de Jueces previsto en el artículo 15, como consecuencia del impedimento de un Juez acaecido antes de que se haya iniciado la fase de deliberación del asunto o de que se haya celebrado la vista oral, el Presidente del Tribunal General designará a otro Juez para completar dicha Sala, a fin de restablecer el número de Jueces previsto.
2. Si en una de las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces no se alcanzara el número de Jueces previsto, como consecuencia del impedimento de un Juez acaecido antes de que se haya iniciado la fase de deliberación del asunto o de que se haya celebrado la vista oral, el Presidente de esa Sala designará a otro Juez que forme parte de la misma Sala para sustituir al Juez que padece el impedimento. Si no fuera posible sustituir al Juez que padece el impedimento por otro Juez de la misma Sala, el Presidente de dicha Sala advertirá de ello al Presidente del Tribunal General, que designará a otro Juez a fin de restablecer el número de Jueces previsto.
3. En caso impedimento del Juez al que se hubiera asignado o atribuido como Juez único el asunto, el Presidente del Tribunal General designará a otro Juez que lo sustituya.

El artículo 17 se refiere al supuesto de reemplazamiento de alguno de los miembros de la formación jurisdiccional (Gran Sala en el apartado 1, Sala que actúa en formaciones de tres o de cinco Jueces en el apartado 2, Juez único en el apartado 3), antes de que se haya iniciado la fase de deliberación o de que se haya celebrado la vista oral. Aplica a este respecto las soluciones que figuran en el artículo 32, apartados 3, párrafo tercero, y 5, del Reglamento de Procedimiento vigente, pero las formula de manera más explícita, en función del tipo de formación a la que esté adscrito el Juez que padece el impedimento.

El caso mencionado en la segunda frase del apartado 2 es el de la sustitución de un Juez por otro que no actúa ordinariamente en la misma Sala que el Juez que padece el impedimento. A este respecto se precisa que, en la práctica, para restablecer el número de Jueces previsto el Presidente del Tribunal General designará al Juez reemplazante siguiendo el orden establecido en el artículo 8 del presente proyecto, pero exceptuando al Presidente, al Vicepresidente y a los Presidentes de Sala. Sin embargo, el Presidente del Tribunal General puede establecer excepciones a este orden, con objeto de garantizar un reparto equilibrado

de la carga de trabajo. Para más transparencia, este compromiso sobre el método de designación de Jueces reemplazantes de los Jueces que padecen impedimentos quedará plasmado en la comunicación del Tribunal General relativa a la adscripción de los Jueces a las Salas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Como el Juez que padece un impedimento está necesariamente ausente, se ha decidido referirse exclusivamente al supuesto del impedimento, a fin de aligerar el texto.

Sección 2. De los Presidentes de Sala

Artículo 18

Elección de los Presidentes de Sala

1. Los Jueces elegirán entre ellos, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9, a los Presidentes de las Salas que actúan en formaciones de tres y de cinco Jueces.
2. Los Presidentes de las Salas que actúan en formaciones de cinco Jueces serán elegidos por un período de tres años. Su mandato podrá renovarse una vez.
3. Los Presidentes de las Salas que actúan en formaciones de tres Jueces serán elegidos por un período determinado.
4. La elección de los Presidentes de las Salas que actúan en formaciones de cinco Jueces tendrá lugar inmediatamente después de la elección del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General prevista en el artículo 9.
5. En caso de que un Presidente de Sala cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se procederá a su sustitución por el período que falte para terminarlo.
6. Los nombres de los Presidentes de Sala elegidos con arreglo al presente artículo se publicarán en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Este artículo retoma, en lo esencial, las disposiciones del artículo 15 del Reglamento de Procedimiento actual, aunque se completa añadiendo, en el apartado 4, una referencia a la elección del Vicepresidente del Tribunal General.

Artículo 19

Competencias del Presidente de Sala

1. El Presidente de Sala ejercerá las competencias que le atribuye el presente Reglamento tras haber oído al Juez Ponente.
2. El Presidente de Sala podrá someter a la Sala cualquiera de las decisiones que le competen.

Este artículo, sin equivalente en el Reglamento de Procedimiento en vigor, precisa en su apartado 1 que las competencias de los Presidentes de Sala son competencias de atribución y, en términos más generales, regula el modo de ejercicio de las competencias del Presidente de Sala al disponer, por una parte, que el Presidente ejercerá sus competencias tras haber oído al Juez Ponente y, por otra parte, que podrá someter a la Sala cualquiera de las decisiones que le competen.

La formulación en el presente artículo de estas normas generales permite evitar recordarlas cada vez que una disposición menciona una competencia del Presidente, como ocurre en el actual Reglamento de Procedimiento, y contribuye así a aligerar significativamente el texto de tales disposiciones.

Artículo 20

Impedimento del Presidente de Sala

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 5, y en el artículo 11, apartado 4, en caso de impedimento del Presidente de una Sala, las funciones de éste serán ejercidas por un Juez de la misma Sala, según el orden establecido en el artículo 8.

Esta nueva disposición, incluida para aumentar la transparencia, regula la cuestión de la presidencia de una Sala en caso de impedimento del Presidente de ésta, y completa el artículo 12 del presente proyecto, relativo al impedimento del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General.

Sección 3. De las deliberaciones

Artículo 21

Procedimiento de las deliberaciones

1. Las deliberaciones del Tribunal General serán y permanecerán secretas.
2. Cuando se haya celebrado una vista oral, solamente tomarán parte en las deliberaciones los Jueces que hayan participado en la vista.
3. Cada uno de los Jueces presentes en las deliberaciones expondrá su opinión, motivándola.
4. Las conclusiones adoptadas por una mayoría de Jueces tras el debate final determinarán la decisión del Tribunal General. Los votos se emitirán en orden inverso al establecido en el artículo 8, con la excepción del Juez Ponente, que será el primero en votar, y del Presidente, que será el último.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 33, apartados 1 a 3 y 5, del Reglamento de Procedimiento vigente. El texto ha sido modificado ligeramente para reflejar, en su apartado 2, la posibilidad de que el Tribunal General juzgue un asunto sin vista oral y, en su apartado 4, el orden en que efectivamente los Jueces emiten sus votos en la actualidad.

Artículo 22

Número de Jueces que participan en las deliberaciones

Si, por impedimento de un Juez, el número de Jueces fuera par, el Juez de menor antigüedad según el artículo 8 se abstendrá de participar en las deliberaciones, salvo que se trate del Presidente o del Juez Ponente. En este último caso, será el Juez que le preceda inmediatamente en rango de antigüedad quien se abstendrá de participar en las deliberaciones.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 32, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento vigente. Como el artículo 8, al que remite el presente artículo, no contiene referencias al Presidente de Sala, se ha establecido expresamente que este último continuará formando parte de la formación que conoce del asunto, a menos que sea él quien padece el impedimento.

De modo más general, y con ánimo de aligerar el texto, se ha suprimido la referencia a los casos de ausencia de un Juez, pues la referencia al impedimento de un Juez se ha considerado suficiente para cubrir las situaciones de ausencia, dado que un Juez ausente padece necesariamente un impedimento.

Conviene precisar que, a diferencia del actual artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 22 del presente proyecto no regula el caso de un número par de Jueces en el Pleno del Tribunal General, dado que el Pleno ha dejado de formar parte de las formaciones jurisdiccionales.

Artículo 23

Quórum de la Gran Sala

1. Las deliberaciones de la Gran Sala sólo serán válidas si están presentes once Jueces.
2. Si, por impedimento de un Juez, no se alcanzara ese quórum, el Presidente del Tribunal General designará a otro Juez para que la Gran Sala alcance el quórum.
3. Si la falta de quórum se produjera tras la celebración de la vista oral, se procederá a la sustitución del modo establecido en el apartado 2 y se organizará una nueva vista cuando alguna de las partes principales lo solicite. El Tribunal General podrá igualmente organizar de oficio una nueva vista. Cuando no se organice una nueva vista, el artículo 21, apartado 2 no será aplicable.

El presente artículo persigue un doble objetivo.

En primer lugar, precisar el quórum de la Gran Sala, que aumenta de nueve a once Jueces. En la reforma del Estatuto (DO 2012, L 228, p. 1), el número de Jueces que componen la Gran Sala del Tribunal de Justicia ha pasado a ser de quince (artículo 16 del Estatuto) y el quórum ha pasado a ser de once Jueces (artículo 17 del Estatuto). Como el artículo 50 del Estatuto remite al Reglamento de Procedimiento del Tribunal General para la regulación de los casos y las condiciones en que este último puede constituirse en Gran Sala, el Tribunal

General ha considerado oportuno establecer reglas idénticas a las que el Estatuto ha fijado para el Tribunal de Justicia.

En segundo lugar, el presente artículo pretende clarificar las consecuencias de un impedimento simultáneo de varios Jueces, producido después de celebrada la vista oral del asunto y que impida alcanzar el quórum necesario para la validez de las deliberaciones de la Gran Sala. Si se procede a designar uno o varios nuevos Jueces tras la celebración de la vista oral, se organizará una nueva vista, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes principales. Si no se presenta solicitud alguna al respecto y el Tribunal General estima innecesario organizar una nueva vista, se resolverá sin oír de nuevo a las partes. Este procedimiento ha sido aplicado, a satisfacción de las partes y del Tribunal General, en varios asuntos en 2010 y en 2012, tras la marcha efectiva de dos Jueces del Tribunal General.

El supuesto de un impedimento simultáneo de varios Jueces de la Gran Sala posterior a la vista oral debe distinguirse claramente del supuesto de impedimento de un Juez antes de la vista, que se regula en el artículo 17, apartado 1, del presente proyecto.

Artículo 24

Quórum de las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces

1. Las deliberaciones de las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces sólo serán válidas si están presentes tres Jueces.
2. Si, por impedimento de un Juez, no se alcanzara ese quórum en una de las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces, el Presidente de esa Sala designará a otro Juez que forme parte de la misma Sala para sustituir al Juez que padece el impedimento. Si no fuera posible sustituir al Juez que padece el impedimento por otro Juez de la misma Sala, el Presidente de dicha Sala advertirá de ello al Presidente del Tribunal General, que designará a otro Juez para que la Sala alcance el quórum.
3. Si la falta de quórum se produjera tras la celebración de la vista oral, se procederá a las sustituciones necesarias del modo establecido en el apartado 2 y se organizará una nueva vista cuando alguna de las partes principales lo solicite. El Tribunal General podrá igualmente organizar de oficio una nueva vista. La organización de una nueva vista será obligatoria cuando se deba sustituir a más de uno de los Jueces que participaron en la vista inicial. Cuando no se organice una nueva vista, el artículo 21, apartado 2, no será aplicable.

Este artículo del proyecto persigue los mismos objetivos que el artículo anterior, pero esta vez se refiere al supuesto en el que la falta de quórum afecta a una Sala que actúa en formaciones de tres o de cinco Jueces.

El caso mencionado en la segunda frase del apartado 2 es el de la sustitución de un Juez por otro que no actúa ordinariamente en la misma Sala que el Juez que padece el impedimento. A este respecto se precisa que, en la práctica, para restablecer el quórum el Presidente del Tribunal General designará al Juez reemplazante siguiendo el orden establecido en el artículo 8 del presente proyecto, pero exceptuando al Presidente, al Vicepresidente y a los Presidentes de Sala. Sin embargo, el Presidente del Tribunal General puede establecer

excepciones a este orden, con objeto de garantizar un reparto equilibrado de la carga de trabajo. Para más transparencia, este compromiso sobre el método de designación de Jueces reemplazantes de los Jueces que padecen impedimentos quedará plasmado en la comunicación del Tribunal General relativa a la adscripción de los Jueces a las Salas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El apartado 3 regula el caso de la designación de un Juez para restablecer el quórum después de celebrada la vista oral. En tal situación, se organizará una nueva vista, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes principales. Si no se presenta solicitud alguna al respecto y el Tribunal General estima innecesario organizar una nueva vista, se resolverá sin oír de nuevo a las partes. En cambio, se organizará obligatoriamente una nueva vista cuando deba reemplazarse a más de uno de los Jueces que participaron en la vista inicial.

El supuesto de un impedimento simultáneo de varios Jueces con posterioridad a la vista oral en las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces debe distinguirse claramente del supuesto de impedimento de un Juez antes de la vista, que se regula en el artículo 17, apartado 2, del presente proyecto.

Capítulo Cuarto
DE LA ATRIBUCIÓN Y DE LA REATRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS, DE LA
DESIGNACIÓN DE LOS JUECES PONENTES, DE LA REMISIÓN DE UN ASUNTO A
OTRAS FORMACIONES JURISDICCIONALES Y DE SU ASIGNACIÓN A UN JUEZ
ÚNICO

Artículo 25
Criterios de atribución

1. El Tribunal General fijará los criterios con arreglo a los cuales se repartirán los asuntos entre las Salas. El Tribunal General podrá encargar a una o varias Salas el conocimiento de los asuntos en materias específicas.
2. Esta decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Este artículo, que retoma el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento actual y lo completa añadiendo una segunda frase en el apartado 1, constituye la base jurídica del sistema de reparto de asuntos entre las Salas del Tribunal General.

Con arreglo al artículo ahora en vigor, el Tribunal General adopta, en principio por un período de tres años que coincide con el de las Presidencias de Sala, una decisión que precisa los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas. En virtud de la última decisión al efecto adoptada por el Tribunal General el 23 de septiembre de 2013 (DO C 313, p. 4), los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública se atribuyen a la Sala de Casación, integrada por el Presidente del Tribunal General y los Presidentes de Sala. Los demás asuntos se reparten entre las nueve Salas actuales con arreglo a tres turnos distintos, según se trate de: i) asuntos relativos a la ejecución de las normas sobre competencia aplicables a las empresas, las normas sobre ayudas concedidas por los Estados y las normas referentes a las medidas de defensa comercial; ii) asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial y iii) todos los demás asuntos.

Según dicha decisión, el Presidente del Tribunal General, competente para proceder a la atribución de los asuntos, puede establecer excepciones a dichos turnos en atención a la conexidad existente entre determinados asuntos o para repartir de forma equilibrada el volumen de trabajo.

Este sistema de atribución de los asuntos sigue, pues, criterios objetivos establecidos de antemano que permiten distribuir de forma equilibrada los asuntos entre las Salas. Se ajusta así a las exigencias de un proceso equitativo que se derivan de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, gracias a las excepciones autorizadas, otorga al Presidente del Tribunal General una cierta flexibilidad en la aplicación efectiva del dispositivo. En efecto, la aplicación de estas reglas no es en absoluto mecánica. Las excepciones basadas en la conexidad de los asuntos, entendida en sentido amplio, es decir, referida no sólo a los asuntos que tiene el mismo objeto sino también a los asuntos que presentan estrechos lazos entre sí o similitudes en sus problemáticas jurídicas, y en la carga de trabajo confieren un margen de apreciación al Presidente del Tribunal

General a la hora de atribuir los asuntos, a fin de garantizar un reparto de los asuntos entre las Salas a la vez coherente y eficiente.

Tal como se aplica, este dispositivo no es comparable al que resultaría de una organización del Tribunal General en Salas especializadas. Existe, en efecto, una diferencia esencial entre un sistema de atribución de los asuntos que permite tener en cuenta su identidad de objeto o la similitud de problemáticas jurídicas y un sistema en el que los asuntos se atribuyan mecánicamente a una o a varias Salas, teniendo en cuenta sólo la materia del recurso. A este respecto, el Tribunal General considera que el sistema de atribución en vigor, por una parte, se ajusta perfectamente al carácter generalista de un Tribunal actualmente integrado por 28 miembros y, por otra parte, ofrece la flexibilidad indispensable para permitir que la distribución de los asuntos se ajuste a la evolución de los litigios sometidos al Tribunal, algo que resultaría mucho más difícil con un sistema rígido de atribución de ciertos tipos de recursos a las Salas especializadas constituidas en su seno.

El Tribunal General estima que no debe modificarse el vigente sistema de atribución de los asuntos, que le parece preferible por razones de transparencia, objetividad y previsibilidad.

Existen acontecimientos importantes, tales como un aumento del número de Jueces o la llegada masiva de litigios en un ámbito específico, que podrían justificar que se decidiera adaptar en consecuencia los criterios de atribución de los asuntos. Ésta es la razón por la que el Tribunal General propone completar el artículo 12 estableciendo expresamente que, llegado el caso, podrá encargar a una o varias Salas el conocimiento de los asuntos en materias específicas. Se trata, pues, de dejar perfectamente claro que es posible adaptar el sistema en vigor cuando las circunstancias lo justifiquen.

Artículo 26

Atribución inicial del asunto y designación del Juez Ponente

1. Tras la presentación del escrito que inicie el proceso, el Presidente del Tribunal General atribuirá el asunto a una Sala con la mayor rapidez posible, según los criterios establecidos por el Tribunal con arreglo al artículo 25.
2. El Presidente de Sala propondrá al Presidente del Tribunal General, el cual resolverá al respecto, la designación de un Juez Ponente para cada asunto que se atribuya a la Sala.
3. Cuando en una de las Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces el número de Jueces adscritos a la misma sea superior respectivamente a tres o cinco, el Presidente de Sala designará a los Jueces que habrán de participar en la resolución del asunto.

Los dos primeros apartados de este artículo reproducen, en lo esencial, el artículo 13 del Reglamento vigente. El modo de atribuir los asuntos continúa siendo, pues, el siguiente: el Presidente atribuye los asuntos a una Sala según los criterios establecidos por el Tribunal General, a continuación el Presidente de la Sala a la que se ha atribuido el asunto propone al Presidente del Tribunal la designación de un Juez Ponente y el Presidente del Tribunal resuelve. La participación activa de los Presidentes de Sala en una fase muy temprana del proceso de distribución de los asuntos les permite, por una parte, conocer de inmediato los asuntos atribuidos a su Sala y, por otra, proponer una aplicación razonada en el seno de la

Sala del criterio de reparto por turno y de las excepciones basadas en la conexidad y en la carga de trabajo, facilitando así la aplicación descentralizada del dispositivo en su conjunto.

En cuanto al apartado 3, coincide en lo esencial con el apartado 4 del artículo 32 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 27

Designación de un nuevo Juez Ponente y reatribución de un asunto

1. En caso de impedimento del Juez Ponente, el Presidente de la Sala competente advertirá de ello al Presidente del Tribunal General, que designará un nuevo Juez Ponente. Si este último no está adscrito a la Sala a la que el asunto se atribuyó inicialmente, dicho asunto será juzgado por la Sala a la que pertenezca el nuevo Juez Ponente.
2. Para tener en cuenta la conexidad de objeto de ciertos asuntos, el Presidente del Tribunal General podrá reatribuir los asuntos, mediante decisión motivada y tras consultar a los Jueces Ponentes afectados, a fin de permitir que sea un mismo Juez Ponente quien instruya todos los asuntos de que se trate. Si el Juez Ponente al que se han reatribuido los asuntos no forma parte de la Sala a la que éstos se atribuyeron inicialmente, los asuntos serán juzgados por la Sala a la que pertenezca el nuevo Juez Ponente.
3. En interés de una buena administración de la justicia y con carácter excepcional, el Presidente del Tribunal General podrá designar otro Juez Ponente, mediante decisión motivada y tras consultar a los Jueces afectados, antes de la presentación del informe preliminar contemplado en el artículo 87. Si el nuevo Juez Ponente no está adscrito a la Sala a la que el asunto se atribuyó inicialmente, dicho asunto será juzgado por la Sala a la que pertenezca el nuevo Juez Ponente.
4. Antes de proceder a las designaciones contempladas en los apartados 1 a 3, el Presidente del Tribunal General recabará las observaciones de los Presidentes de las Salas afectadas.
5. En caso de nueva composición de las Salas, a raíz de una decisión del Tribunal General sobre la adscripción de los Jueces a las Salas, el asunto será juzgado por la Sala a la que pertenezca el Juez Ponente tras esta decisión, si aún no se ha iniciado la fase de deliberación del asunto o no se ha abierto la fase oral del procedimiento.

Esta disposición es una novedad, destinada a completar un dispositivo procesal que, en su estado actual, no contempla la posibilidad de reatribuir asuntos.

Los apartados 1 a 3 de esta nueva disposición constituyen, pues, una respuesta a la inexistencia de un fundamento jurídico expreso que permita al Presidente del Tribunal General designar, en ciertos casos, un nuevo Juez Ponente y reatribuir, por tanto, un asunto.

Se contemplan así tres supuestos diferentes. El primero es el caso de impedimento del Juez Ponente, situación que obliga a designar un nuevo Juez Ponente, bien en la misma Sala a la que pertenecía aquél, bien en otra Sala. El segundo se deriva de la identificación tardía de la conexidad entre ciertos asuntos por razón de su objeto. Aunque este supuesto es raro, es necesaria una regulación procesal que permita proceder a la reatribución. El último

supuesto de reatribución se basa en consideraciones relacionadas con una buena administración de la justicia, pues pueden darse circunstancias que justifiquen, excepcionalmente, la designación de un nuevo Juez Ponente. Así, el hecho de que un Juez Ponente esté instruyendo una serie de asuntos voluminosos puede causar un alargamiento excesivo del plazo de tramitación de otros asuntos atribuidos al mismo Juez, lo que podría justificar la designación de un nuevo Juez Ponente que examine estos últimos.

Las reatribuciones previstas en los apartados 2 y 3 quedan supeditadas a la concurrencia de ciertos requisitos que garanticen que el Tribunal General respeta en todo momento las exigencias de un proceso equitativo. Así, el apartado 2 permite designar un nuevo Juez Ponente en la medida en que los asuntos tengan conexidad de objeto, criterio objetivo por naturaleza. La reatribución de un asunto en virtud del apartado 3 sólo es posible en interés de una buena administración de la justicia, con carácter excepcional y antes de la presentación del informe preliminar. Tanto en un caso como en otro, el Presidente del Tribunal General resuelve mediante decisión motivada, tras haber oído a los Jueces y a los Presidentes de Salas afectados.

El apartado 5 pretende únicamente codificar, por razones de transparencia, la práctica actual del Tribunal General.

Artículo 28

Remisión de un asunto a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces

1. Cuando la dificultad de las cuestiones de Derecho o la importancia del asunto o circunstancias particulares lo justifiquen, podrá remitirse el asunto a la Gran Sala o a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces.
2. La Sala a la que se haya atribuido el asunto o el Presidente del Tribunal General podrá proponer a la sesión plenaria del Tribunal General, en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a instancia de una parte principal, la remisión contemplada en el apartado 1.
3. La decisión de remitir el asunto a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número superior de Jueces será adoptada por la sesión plenaria.
4. La decisión de remitir el asunto a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número inferior de Jueces será adoptada por la sesión plenaria, tras oír a las partes principales.
5. Cuando un Estado miembro o una institución de la Unión que sea parte en el procedimiento así lo solicite, deberá juzgar el asunto una Sala que actúe en formaciones compuestas al menos por cinco Jueces.

Con ánimo de mejorar la claridad y la legibilidad del Reglamento, el presente artículo agrupa todas las disposiciones relativas a la remisión de un asunto a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces (a una Sala que actúe en formaciones de cinco Jueces, a una Sala que actúe en formaciones de tres Jueces o a la Gran Sala), actualmente repartidas en los artículos 4, apartado 1, y 51, apartado 1, del

Reglamento de Procedimiento, que se reproducen en lo esencial. Contempla, pues, los casos de remisión de un asunto –a iniciativa, bien de la Sala a la que había sido atribuido, bien del Presidente del Tribunal General– a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número superior de Jueces o a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número inferior de Jueces. Es siempre la sesión plenaria la que adopta la decisión de remitir el asunto a otra Sala, pero sólo es preciso oír previamente a las partes principales en caso de remisión a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número inferior de Jueces.

Artículo 29

Asignación de un asunto a un Juez único

1. Los asuntos que se indican a continuación, atribuidos a una Sala que actúe en formaciones de tres Jueces, podrán ser juzgados por el Juez Ponente, actuando como Juez único, cuando tales asuntos se presten a ello, teniendo en cuenta la ausencia de dificultad de las cuestiones de Derecho o de hecho suscitadas, la escasa importancia del asunto y la ausencia de otras circunstancias particulares, y le hayan sido asignados conforme a lo dispuesto en el presente artículo:
 - a) los asuntos contemplados en el artículo 171 *infra*;
 - b) los asuntos presentados en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, artículo 265 TFUE, párrafo tercero, y del artículo 268 TFUE y que únicamente susciten cuestiones ya clarificadas por una jurisprudencia reiterada o formen parte de una serie de asuntos con el mismo objeto, en uno de los cuales haya recaído ya una resolución definitiva;
 - c) los asuntos presentados en virtud del artículo 272 TFUE.
2. La asignación a un Juez único estará excluida:
 - a) en los asuntos que susciten cuestiones relativas a la legalidad de un acto de alcance general;
 - b) en los asuntos que se refieran a la aplicación:
 - de las normas sobre la competencia y de control de las concentraciones,
 - de las normas en materia de ayudas concedidas por los Estados,
 - de las normas relativas a las medidas de defensa comercial,
 - de las normas referentes a la organización común de los mercados agrícolas, exceptuando los asuntos que formen parte de una serie de asuntos con el mismo objeto, en uno de los cuales haya recaído ya una resolución definitiva.
3. La decisión de asignar un asunto a un Juez único será adoptada por la Sala que actúe en formaciones de tres Jueces ante la que se halle pendiente el asunto, tras oír a las partes principales. Cuando un Estado miembro o una institución de la Unión que sea parte en el

procedimiento se oponga a que conozca del asunto un Juez único, deberá seguir conociendo del asunto la Sala a la que pertenezca el Juez Ponente.

4. El Juez único devolverá el asunto a la Sala si comprobara que han dejado de cumplirse los requisitos para tal asignación.

Con ánimo de mejorar la legibilidad del texto, el presente artículo agrupa las disposiciones del artículo 14, apartado 2, y del artículo 51, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento vigente, recogiénolas, respectivamente, en sus apartados 1, 2 y 4 y en su apartado 3.

Conviene recordar que fue en febrero de 1997 cuando el Tribunal de Justicia sometió al Consejo de las Comunidades Europeas una propuesta de modificación de la Decisión de 1998 por la que se había creado el Tribunal de Primera Instancia, a fin de que el Tribunal de Primera Instancia dispusiera de la posibilidad de dictar resoluciones actuando como órgano unipersonal. En abril de 1999, el Consejo modificó por unanimidad su Decisión de octubre de 1988 añadiendo esa posibilidad (Decisión 1999/291/CE, CECA, Euratom del Consejo, de 26 de abril de 1999, que modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, al objeto de permitir a dicho Tribunal dictar resoluciones actuando como órgano unipersonal; DO L 114, p. 52). El Consejo estimó necesaria esa modificación a la vista de la carga de trabajo del Tribunal de Primera Instancia, que había aumentado considerablemente desde su creación y de la que se preveía que aumentaría aún más por la llegada de nuevos litigios relativos a los derechos de la propiedad intelectual o industrial, y, en particular, de la aplicación del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Las modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia en las que se establecían los supuestos de remisión de un asunto a una formación compuesta por un Juez único y el modo de asignar asuntos a esta formación jurisdiccional fueron aprobados por unanimidad por el Consejo y adoptados a continuación por el Tribunal de Primera Instancia el 17 de mayo de 1999.

El número de asuntos asignados a un Juez único desde 1999 es escaso, ya que los requisitos que el Reglamento de Procedimiento establece para esa asignación, tal como fueron interpretados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de enero de 2002, Libéros/Comisión (C-171/00 P, Rec. p. I-451), son particularmente estrictos. Desde hace diez años, fuera del ámbito de la función pública (en el que el Tribunal General ya no es competente en primera instancia), el Tribunal General sólo ha adoptado cuatro resoluciones actuando en formación de Juez único [asuntos T-138/05, Comisión/Impetus (cláusula compromisoria), T-190/07, KEK Diavlos/Comisión (subvenciones comunitarias), T-388/07, Commune di Napoli/Comisión (FEDER) y T-259/09, Comisión/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari y Gessa (cláusula compromisoria)]. Cabe considerar, pues, que el recurso a esta formación jurisdiccional es insignificante.

A la vista de estos datos, el Tribunal General propone modificar las normas procesales para permitir que se asignen al Juez único los asuntos de propiedad intelectual o industrial más sencillos, mediante la supresión de la exclusión ratióne materiae de los asuntos de propiedad intelectual o industrial. La modificación más significativa consiste, pues, en la posibilidad de atribuir a un Juez único los asuntos de propiedad intelectual o industrial contemplados en el artículo 171 del presente proyecto. Se propone además agilizar el dispositivo procesal, dado

que, según el apartado 3, no se exigirá ya la unanimidad de la Sala para atribuir un asunto a un Juez único, sino que bastará con una mayoría simple de los Jueces que la componen.

Capítulo Quinto
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS ABOGADOS GENERALES

Artículo 30

Supuestos de designación de un Abogado General

El Tribunal General podrá ser asistido por un Abogado General, en la medida en que considere que la dificultad de las cuestiones de Derecho o la complejidad de los antecedentes de hecho del asunto así lo exigen.

Este artículo retoma en lo esencial el artículo 18 del Reglamento vigente.

Artículo 31

Método de designación de un Abogado General

1. La decisión de proceder a la designación de un Abogado General para un asunto determinado será tomada por la sesión plenaria, a petición de la Sala a la que se haya atribuido el asunto o a la que éste haya sido remitido.
2. El Presidente del Tribunal General designará al Juez que haya de desempeñar las funciones de Abogado General en dicho asunto.
3. Tras esa designación, se oirán las observaciones del Abogado General antes de que se adopten las decisiones contempladas en los artículos 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, 126 a 132, 144, 151, 165, 168, 169 y 207 a 209.

En este artículo, que corresponde en lo esencial al artículo 19 del Reglamento de Procedimiento vigente, se ha añadido un apartado 3. Este apartado agrupa todos los artículos relativos a decisiones cuya adopción requiere que se oiga previamente al Abogado General designado y permite así suprimir las referencias al Abogado General actualmente diseminadas en numerosos artículos, mejorando la legibilidad del texto.

Capítulo Sexto
DE LA SECRETARÍA

Sección 1. De la Secretaría

Artículo 32

Nombramiento del Secretario

1. El Tribunal General nombrará al Secretario.
2. Cuando quede vacante el puesto de Secretario, se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* un anuncio solicitando la presentación de candidaturas, cuyo plazo de presentación no podrá ser inferior a tres semanas. Las candidaturas irán acompañadas de información completa sobre la nacionalidad, los títulos universitarios, los conocimientos lingüísticos y las actividades profesionales actuales y anteriores de los candidatos, así como sobre su eventual experiencia en materia judicial e internacional.
3. El voto tendrá lugar conforme al procedimiento previsto en el artículo 9, apartado 3.
4. El Secretario será nombrado por un período de seis años y su mandato será renovable. El Tribunal General podrá decidir renovar el mandato del Secretario en funciones sin recurrir al procedimiento contemplado en el apartado 2. En tal caso, será aplicable el apartado 3.
5. El Secretario prestará el juramento previsto en el artículo 5 y firmará la declaración prevista en el artículo 6.
6. El Secretario sólo podrá ser separado de sus funciones cuando deje de reunir las condiciones requeridas o incumpla las obligaciones que se derivan de su cargo. El Tribunal General decidirá al respecto, sin que el Secretario esté presente, después de haber ofrecido a este último la posibilidad de presentar sus observaciones.
7. Si el Secretario cesara en sus funciones antes de la expiración de su mandato, el Tribunal General nombrará un nuevo Secretario por un período de seis años.
8. El nombre del Secretario elegido conforme a lo dispuesto en el presente artículo se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 20 del Reglamento de Procedimiento actual, completándolo, sin embargo, en dos puntos. En gran parte es idéntico al artículo 18 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de una precisión formulada en la última frase del apartado 4.

En primer lugar, el presente proyecto ofrece más publicidad al procedimiento del nombramiento del Secretario, disponiendo que, cuando quede vacante este puesto, se publicará un anuncio solicitando la presentación de candidaturas en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde se publicará igualmente, al término del procedimiento, el nombre del Secretario elegido (véanse, respectivamente, los apartados 2 y 8 del presente artículo).

En segundo lugar, este proyecto aligera el procedimiento aplicable en caso de renovación del mandato del Secretario en funciones, precisando al respecto, en su apartado 4, que el Tribunal General podrá renunciar a iniciar el procedimiento aplicable a la elección del Secretario si este último es candidato a su propia sucesión y el Tribunal General desea renovar su mandato. Esta modificación responde tanto al interés en evitar la puesta en marcha de un procedimiento relativamente pesado para el Tribunal como al deseo de no generar fuera del Tribunal expectativas que desembocarán forzosamente en una decepción, si el Tribunal ha decidido renovar el mandato de su Secretario.

Artículo 33 **Secretario adjunto**

El Tribunal General podrá nombrar, por el mismo procedimiento establecido para el Secretario, uno o varios Secretarios adjuntos encargados de asistirle y sustituirle en caso de impedimento.

Este artículo concuerda con el artículo 21 del Reglamento de Procedimiento actual, que sólo modifica en aspectos meramente formales. El artículo recuerda, pues, la función principal del Secretario adjunto, que es la de asistir al Secretario y sustituirle en caso de impedimento.

Artículo 34 **Impedimento del Secretario y del Secretario adjunto**

El Presidente del Tribunal General designará a los funcionarios o agentes que se encargarán de asumir las competencias del Secretario en caso de impedimento de éste y, en su caso, del Secretario adjunto.

Esta disposición, que figura en el artículo 22 del Reglamento de Procedimiento vigente, cuyos términos se reproducen en lo esencial, constituye el fundamento jurídico que permite facultar a los administradores de la Secretaría para que ejerzan las funciones de administración judicial encomendadas al Secretario.

Artículo 35 **Atribuciones del Secretario**

1. Corresponderán al Secretario, bajo la autoridad del Presidente del Tribunal General, la recepción, transmisión y conservación de todos los documentos, así como las notificaciones que entrañe la aplicación del presente Reglamento.
2. El Secretario asistirá a los miembros del Tribunal General en el ejercicio de todas sus funciones.
3. El Secretario tendrá la custodia de los sellos y será el responsable de los archivos. Se encargará de las publicaciones del Tribunal General, en particular, de la Recopilación de

la Jurisprudencia, y de la difusión en Internet de documentos relativos al Tribunal General.

4. El Secretario, asistido por los Servicios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bajo la autoridad del Presidente del Tribunal General, tendrá a su cargo la administración, la gestión financiera y la contabilidad del Tribunal General.
5. Sin perjuicio de las disposiciones en sentido contrario del presente Reglamento, el Secretario asistirá a las sesiones del Tribunal General.

Al igual que los artículos 10 y 11, relativos a las atribuciones del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal General, el presente artículo determina las atribuciones esenciales del Secretario, agrupando en un solo artículo el contenido de los artículos 25, 26, 27 y 30 del Reglamento de Procedimiento actual, tras reformularlos ligeramente.

Artículo 36

Llevanza del Registro

1. En la Secretaría se llevará, bajo la responsabilidad del Secretario, un Registro en el que se inscribirán cronológicamente y por orden de presentación todos los escritos procesales.
2. El Secretario hará mención de la inscripción efectuada en el Registro en los originales de los escritos procesales o en las versiones que se consideren originales de dichos escritos con arreglo a la decisión adoptada en virtud del artículo 74, así como, a petición de las partes, en las copias que presenten con este fin.
3. Las inscripciones en el Registro y las menciones previstas en el apartado 2 tendrán el carácter de documento público.

Los tres apartados que integran este artículo concuerdan en lo esencial, respectivamente, con los apartados 1 a 3 del artículo 24 del Reglamento de Procedimiento actual. El apartado 2 ha sido, sin embargo, ligeramente modificado para reflejar la realidad de la situación desde que los escritos procesales pueden presentarse exclusivamente en formato electrónico a través de la aplicación e-Curia.

Artículo 37

Consulta del Registro

Cualquier persona podrá consultar el Registro en la Secretaría y obtener copias o extractos del mismo con sujeción a la tarifa de la Secretaría, aprobada por el Tribunal General a propuesta del Secretario.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento vigente. Inspirándose en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, extiende a cualquier persona la posibilidad de

consultar el Registro de la Secretaría y de obtener copias o extractos del mismo con sujeción a la tarifa de la Secretaría. La necesidad de organizar la consulta del Registro en las mejores condiciones posibles y de conocer por adelantado la tarifa que se aplicará obliga a establecer ciertas normas, que no tienen sin embargo su sitio en el Reglamento de Procedimiento.

Artículo 38

Acceso a las actuaciones

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 68, apartado 4, de los artículos 103 a 105 y del artículo 144, apartado 7, cualquier parte podrá acceder a las actuaciones y obtener, con sujeción a la tarifa de la Secretaría contemplada en el artículo 37, copias de los escritos procesales y testimonios de autos y sentencias.
2. Ningún tercero, sea público o privado, podrá acceder a las actuaciones sin autorización expresa del Presidente del Tribunal General, previa audiencia de las partes. Dicha autorización, total o parcial, sólo podrá concederse previa solicitud por escrito del interesado, que deberá ir acompañada de una justificación detallada de su interés legítimo en acceder a las actuaciones.

Este artículo procede por una parte, en lo que respecta a su apartado 1, del artículo 24, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General vigente y por otra, en lo que respecta a su apartado 2, del artículo 5, apartado 8, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal General.

El ámbito de aplicación racione personae del artículo varía según el apartado de que se trate. El apartado 1 se refiere al acceso de las propias partes a los autos. El apartado 2 regula las solicitudes de acceso a los autos de un asunto presentadas por un tercero. A este respecto, el Tribunal General estima necesario incluir en el Reglamento de Procedimiento el régimen aplicable a las solicitudes de acceso de terceros a documentos recogidos en los autos de un asunto, régimen que figura actualmente en las Instrucciones al Secretario del Tribunal General, con objeto de dar más visibilidad a esta disposición.

Sección 2. De los Servicios

Artículo 39

Funcionarios y otros agentes

1. Los funcionarios y otros agentes encargados de asistir directamente al Presidente, a los Jueces y al Secretario serán nombrados conforme a lo dispuesto en el Reglamento por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes. Dependerán del Secretario bajo la autoridad del Presidente del Tribunal General.
2. Tales personas prestarán ante el Presidente del Tribunal General, en presencia del Secretario, uno de los dos juramentos siguientes:

«Juro ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que me confíe el Tribunal General.»

o

«Prometo solemnemente ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que me confíe el Tribunal General.»

Esta disposición retoma en lo esencial los artículos 28 y 29 del Reglamento vigente. El texto de la fórmula de prestación de juramento se incluye en el Reglamento de Procedimiento por una razón técnica y por una razón de principio. La razón técnica es que el actual artículo 29 se remite a la prestación de juramento contemplada en un artículo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que ya no existe. La razón de principio es que la prestación de juramento ante el Presidente del Tribunal General por parte de los funcionarios y agentes que dependen del Secretario del Tribunal General, bajo la autoridad del Presidente de este Tribunal, contribuye a la independencia funcional del Tribunal General en el seno de la institución «Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Capítulo Séptimo
DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL GENERAL

Artículo 40

Lugar de las sesiones del Tribunal General

El Tribunal General podrá elegir, para una o varias sesiones determinadas, un lugar distinto de aquel donde tiene su sede.

Este artículo concuerda con el actual artículo 31, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 41

Calendario de trabajo del Tribunal General

1. El año judicial comienza el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 31 de agosto del año siguiente.
2. El Tribunal General fijará las fechas de las vacaciones judiciales.
3. Durante las vacaciones judiciales, el Presidente del Tribunal General y los Presidentes de Sala podrán convocar a los Jueces en casos de urgencia y, en su caso, al Abogado General.
4. El Tribunal General observará los días feriados legales del lugar donde tiene su sede.
5. Cuando existan razones que lo justifiquen, el Tribunal General podrá conceder permisos a los Jueces.
6. Las fechas de las vacaciones judiciales se publicarán anualmente en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 34 del Reglamento de Procedimiento vigente, pero lo completa precisando, en su apartado 1, las fechas en que comienza y termina el año judicial. A diferencia del actual artículo 34, el artículo 41 del presente proyecto no menciona ya, sin embargo, las fechas precisas de las vacaciones judiciales, que por lo demás han dejado de corresponder a la realidad. Está previsto que estas fechas sean decididas anualmente por el Tribunal General y publicadas después en el Diario Oficial de la Unión Europea, al igual que la lista de días feriados legales establecida por el Tribunal de Justicia y a la que se remite el artículo 58, apartado 3, del presente proyecto.

Las modificaciones que aquí se proponen se inspiran en el artículo 24 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 42
Sesión plenaria

1. El Tribunal General adoptará en sesión plenaria, en la que participarán con voz y voto todos los Jueces, las decisiones relativas a cuestiones administrativas y las decisiones contempladas en los artículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 28, 31 a 33, 41, 74, 224 y 225. También asistirá a esta reunión el Secretario, salvo decisión contraria del Tribunal General.
2. Si, una vez convocada la sesión plenaria, se constatará que no se ha alcanzado el quórum contemplado en el artículo 17, párrafo cuarto, del Estatuto, el Presidente de dicho Tribunal General aplazará la reunión hasta que se alcance dicho quórum.

Este artículo representa una novedad, puesto que por primera vez se identifican en una sola y misma disposición las decisiones que competen a la sesión plenaria, órgano que tiene competencia para decidir sobre las cuestiones administrativas, como dispone ya el artículo 33, apartado 7, del Reglamento de Procedimiento vigente, y para adoptar las decisiones que se indican en el presente proyecto. Por razones de coherencia, el apartado 1 se presenta de modo similar al artículo 25 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, relativo a la «Reunión general», en el que se inspira.

El apartado 2 retoma, en lo esencial, el texto del actual artículo 32, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, pero lo precisa indicando la disposición del Estatuto relativa al quórum aplicable al Tribunal General, en virtud del artículo 47, párrafo primero, de dicho Estatuto.

Artículo 43
Redacción de las actas

1. Cuando el Tribunal General se reúna con asistencia del Secretario, este último redactará, si ha lugar, un acta que será firmada, según los casos, por el Presidente del Tribunal o por el Presidente de Sala y por el Secretario.
2. Cuando el Tribunal General se reúna sin asistencia del Secretario, encargará al Juez de menor antigüedad con arreglo al artículo 8 que redacte, si ha lugar, un acta que será firmada, según los casos, por el Presidente del Tribunal o por el Presidente de Sala y por dicho Juez.

El apartado 1 de este artículo no tiene equivalente en el Reglamento en vigor. En él se precisa que es el Secretario quien redacta en principio el acta, cuando el Tribunal General se reúne con asistencia de éste, mientras que el apartado 2, que retoma en lo esencial el artículo 33, apartado 8, del Reglamento de Procedimiento vigente, especifica a quién corresponde redactar el acta cuando el Tribunal General se reúne sin asistencia del Secretario.

El apartado 1, que codifica la regla general seguida para la redacción de las actas, se ha incluido por afán de claridad y como un complemento útil del apartado 2.

TÍTULO SEGUNDO DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

Con objeto de identificarlas mejor y de facilitar su lectura, se ha decidido reunir en un título específico las disposiciones relativas al régimen lingüístico, actualmente dispersas en diferentes partes del Reglamento de Procedimiento (capítulo quinto del título primero; artículo 131 del título cuarto; artículo 136 bis del título quinto). Por lo tanto, este título segundo contiene todas las disposiciones relativas al régimen lingüístico aplicables a la totalidad de los procedimientos que son competencia del Tribunal General.

En lo que respecta a su forma, este título coincide con el capítulo quinto del título primero del Reglamento de Procedimiento vigente, exceptuando lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 45 del presente proyecto, que constituyen una novedad y contienen, por las razones que ya se indicaron, disposiciones relativas a la lengua de procedimiento en los recursos de casación y en los asuntos de propiedad intelectual o industrial.

En lo que respecta a su contenido, el presente título mantiene sin cambios el régimen lingüístico vigente para los asuntos que no son de propiedad intelectual o industrial. Además, por razones relacionadas tanto con la propia naturaleza de los procedimientos accesorios con respecto a un procedimiento principal (peticiones de rectificación de una resolución, demandas destinadas a subsanar una omisión de pronunciamiento, oposición a la sentencia en rebeldía, oposición de tercero, demandas de interpretación y de revisión de resoluciones y solicitudes de tasación de costas) como con la necesidad de proteger los derechos de las partes del litigio, el presente proyecto precisa que en dichos procedimientos debe utilizarse la lengua de la resolución a la que se refieran, sin perjuicio de las excepciones ya establecidas en la actualidad.

Artículo 44

Lenguas de procedimiento

Las lenguas de procedimiento serán el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.

Este artículo concuerda con el actual artículo 35, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 45

Determinación de la lengua de procedimiento

1. En los recursos directos en el sentido del artículo 1, la lengua de procedimiento será elegida por el demandante, sin perjuicio de las siguientes disposiciones:
 - a) si el demandado es un Estado miembro o una persona física o jurídica nacional de un Estado miembro, la lengua de procedimiento será la lengua oficial de ese Estado; en

caso de que existan varias lenguas oficiales, el demandante tendrá la facultad de elegir la que le convenga;

- b) a petición conjunta de las partes, podrá autorizarse el empleo total o parcial de otra de las lenguas mencionadas en el artículo 44;
 - c) no obstante lo dispuesto en la letra b), a petición de una parte podrá autorizarse, tras oír a las demás partes, el empleo total o parcial como lengua de procedimiento de otra de las lenguas mencionadas en el artículo 44; esta petición no podrá ser presentada por una de las instituciones.
2. La decisión sobre las peticiones mencionadas más arriba será adoptada por el Presidente, que deberá someter la petición al Tribunal General siempre que quiera satisfacer la petición y no cuente con el acuerdo de todas las partes.
3. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en las letras b) y c) del apartado 1,
- a) en el recurso de casación interpuesto contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública al que se refieren los artículos 9 y 10 del anexo I del Estatuto, será lengua de procedimiento aquella en que esté redactada la resolución del Tribunal de la Función Pública que sea objeto de recurso de casación;
 - b) en caso de peticiones de rectificación de una resolución, de demandas destinadas a subsanar una omisión de pronunciamiento, de oposición a la sentencia dictada en rebeldía y de oposición de tercero, así como en las demandas de interpretación y de revisión de resoluciones o en caso de discrepancias sobre las costas recuperables, será lengua de procedimiento aquella en que esté redactada la resolución a la que tales peticiones, demandas o discrepancias se refieran.
4. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en las letras b) y c) del apartado 1, en los recursos interpuestos contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina contemplada en el artículo 1, y que se refieran a la aplicación de las normas relativas a un régimen de propiedad intelectual o industrial:
- a) la lengua de procedimiento será elegida por el recurrente si éste era la única parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina;
 - b) la lengua del recurso, elegida por el recurrente entre las lenguas mencionadas en el artículo 44, se convertirá en lengua de procedimiento si ninguna otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina se opone a ello en el plazo fijado al efecto por el Secretario tras la interposición del recurso;
 - c) en caso de que una parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina distinta del recurrente se oponga a la lengua del recurso, la lengua de la resolución impugnada ante el Tribunal General se convertirá en lengua de procedimiento; en tal caso, el Secretario se encargará de que se realice la traducción del recurso a la lengua de procedimiento.

Como se ha expuesto en la introducción al presente título, el Tribunal General ha estimado preferible agrupar en un solo título todas las disposiciones relativas al régimen lingüístico, y aclarar las normas aplicables a la cuestión de la lengua en la que deben presentarse los recursos de casación y las demandas del tipo de las demandas de interpretación o de revisión de una resolución, que vienen a sumarse a asuntos existentes. Este enfoque explica por qué se ha añadido un apartado 3 al presente artículo.

La modificación más significativa que se propone introducir se refiere al régimen lingüístico de los asuntos de propiedad intelectual o industrial, expuesto en el apartado 4. Esta modificación requiere explicaciones más detalladas.

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que las normas propuestas están destinadas a aplicarse a unos litigios muy numerosos a la escala del Tribunal General. El número muy elevado de nuevos asuntos de propiedad intelectual o industrial está directamente relacionado con el número de resoluciones dictadas por las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI (o, en su caso, de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales – OCVV). Pues bien, el incremento del número de resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI es muy significativo, de un 41,5 % aproximadamente en el período 2007-2012 (las Salas de Recurso dictaron 1.776 resoluciones en 2007 y 2.513 en 2012), mientras que el porcentaje de impugnación ante el Tribunal General de las resoluciones de las Salas de Recurso oscila invariablemente alrededor del 10 %, desde que el Tribunal General conoce de este tipo de asuntos.

En segundo lugar, las características de estos litigios han llevado a una profunda reflexión sobre la manera más eficaz posible de dirigir el proceso, tomando en consideración, en particular, la especial naturaleza de los asuntos «inter partes» en los que se enfrentan el recurrente, la Oficina (bien la OAMI, bien la OCVV) y la otra parte ante la Sala de Recurso. En efecto, en la actualidad, a estos asuntos «inter partes» se les aplican unas disposiciones del Reglamento de Procedimiento que obligan a determinar, para cada asunto, cuál es la lengua de procedimiento aplicable antes de seguir tramitando la fase escrita del procedimiento. Ahora bien, los asuntos «inter partes» han representado un 82 % del total de asuntos de propiedad intelectual o industrial en 2012 (196 asuntos), porcentaje que no cesa de aumentar.

Fue la toma en consideración del carácter más civil que administrativo de los litigios «inter partes» lo que hizo que el sistema lingüístico elegido en 1994 y todavía vigente consagrara el principio de libre elección por el recurrente y el coadyuvante de la lengua utilizada. Sin embargo, el cambio radical del contexto, el considerable aumento de la carga de trabajo del Tribunal General y la falta, hasta el momento, de reformas estructurales que le permitan reducir de modo duradero el gran número de asuntos pendientes, las restricciones presupuestarias, los escasos medios humanos a disposición del Tribunal y de su Secretaría y las enseñanzas que se derivan de la experiencia de los 15 últimos años son, todos ellos, factores que justifican una profunda revisión del sistema actual.

El método de determinación de la lengua de procedimiento que se establece en el artículo 131 del Reglamento de Procedimiento vigente es muy complicado. Su comprensión plantea tantos problemas que el Tribunal General ha considerado indispensable ofrecer explicaciones en línea en el sitio Internet del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con arreglo a las normas vigentes, la primera fase del procedimiento, inmediatamente después de la presentación del recurso, es la de determinación de la lengua de procedimiento. Esta fase se inicia antes incluso de notificar el recurso a la Oficina y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. Esta fase previa, destinada a conocer la posición del recurrente y la de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso sobre la elección de la lengua que se utilizará en el proceso, dura por término medio entre 4 y 8 semanas y, habida cuenta del gran número de nuevos asuntos «inter partes» que se presentan cada año, supone una carga considerable para el Tribunal.

En esta fase previa del procedimiento, la parte que se considere desfavorecida por la lengua del recurso y por la lengua de la solicitud de registro ante la Oficina (que pasa a ser la lengua aplicable en caso de oposición a la lengua en que se presentó el recurso) puede presentar una petición motivada para que se elija otra lengua como lengua de procedimiento. Sin embargo, la práctica judicial muestra que, si las dos partes privadas no llegan a un acuerdo para elegir la lengua que será lengua de procedimiento, la petición de que se designe como lengua de procedimiento una lengua distinta de la lengua en que se formuló la solicitud de registro sólo es aceptada excepcionalmente. En efecto, en el período 2008-2012, el Tribunal General rechazó 78 de las 79 peticiones motivadas presentadas. Ello se explica por el hecho de que el demandado debe demostrar que la utilización de la lengua en que se registró la solicitud ante la Oficina no le permite seguir el procedimiento ni garantizar su defensa, y que sólo la utilización de la lengua elegida por él permitiría remediar esta situación. Ahora bien, los derechos de este demandado quedan protegidos efectivamente en la medida en que, por una parte, siempre puede hacer traducir, a su costa, los escritos de alegaciones en la lengua que desee y, por otra parte, sigue existiendo la posibilidad de utilizar en la vista oral una lengua distinta de la lengua de procedimiento.

Las modificaciones propuestas pretenden, pues, simplificar las reglas de determinación de la lengua de procedimiento a la luz de la experiencia adquirida, estableciendo que será lengua de procedimiento la elegida por el recurrente o, en caso de oposición, la de la resolución impugnada.

Este nuevo régimen presenta cinco ventajas de gran importancia: i) todas las lenguas oficiales pueden ser lengua de procedimiento ante el Tribunal General; ii) cuando la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso opta finalmente por no ser parte ante el Tribunal General (véanse las disposiciones del título cuarto relativas a la adquisición del estatuto de coadyuvante) o no se opone a la elección del recurrente, esta opción permite que el recurrente conserve la lengua en la que se expresa con más facilidad; iii) el nuevo régimen ofrece seguridad jurídica, puesto que la presentación de una oposición determina igualmente la lengua de procedimiento, que será entonces la de la resolución impugnada; iv) en caso de oposición, la lengua de procedimiento será la que las dos partes utilizaron ya en el procedimiento ante la Oficina, lo que constituye objetivamente una solución satisfactoria para esas partes privadas; v) la simplificación del procedimiento resultante de la supresión de la posibilidad de presentar una petición motivada contribuye a reducir la duración del proceso, disminuyendo la duración de la fase previa de determinación de la lengua de procedimiento.

A juicio del Tribunal General, estas ventajas pesan mucho más que los inconvenientes resultantes de mantener la obligación de los servicios de traducción de la institución de traducir el recurso a la lengua de procedimiento designada en caso de oposición (es decir, según el presente proyecto, a la lengua de la resolución impugnada). Además, tales ventajas

son más importantes que los efectos inherentes al régimen de la oposición, del que se desprende que sólo las cinco lenguas de la Oficina podrán ser lengua de procedimiento ante el Tribunal General en caso de oposición. El alcance de tales efectos debe relativizarse, ya que, en la práctica, desde 2008, los asuntos de propiedad intelectual o industrial se han presentado en una de las cinco lenguas de la Oficina en más de un 95 % de los casos.

Por último, las partes privadas pueden siempre solicitar, con carácter excepcional, que no se les aplique el régimen lingüístico con base en el apartado 1 del presente artículo 45, al que el apartado 4 remite expresamente.

Por lo demás, el presente artículo reproduce, en lo esencial, el contenido del actual artículo 35, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 46

Empleo de la lengua de procedimiento

1. La lengua de procedimiento se empleará en especial en los escritos de alegaciones y en los informes orales de las partes, incluidos los documentos que adjunten, y en las actas y resoluciones del Tribunal General.
2. Todo documento que se presente redactado en una lengua distinta deberá acompañarse de una traducción en la lengua de procedimiento.
3. Sin embargo, en el caso de documentos voluminosos, la traducción podrá limitarse a extractos. En cualquier momento el Presidente podrá exigir una traducción más completa o íntegra, de oficio o a instancia de parte.
4. No obstante las disposiciones precedentes, los Estados miembros estarán autorizados a utilizar su propia lengua oficial cuando intervengan en un litigio ante el Tribunal General. Esta disposición se aplicará tanto a los documentos escritos como a las manifestaciones orales. El Secretario se encargará en todos los casos de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.
5. Los Estados partes en el Acuerdo EEE que no son Estados miembros y el Órgano de Vigilancia de la AELC podrán ser autorizados a utilizar una de las lenguas mencionadas en el artículo 44 distinta de la lengua de procedimiento, cuando intervengan en un litigio ante el Tribunal General. Esta disposición se aplicará tanto a los documentos escritos como a las manifestaciones orales. El Secretario se encargará en todos los casos de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.
6. Cuando los testigos o los peritos declaren que no pueden expresarse convenientemente en una de las lenguas mencionadas en el artículo 44, el Presidente les autorizará para que presten sus declaraciones en otra lengua. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.
7. El Presidente al dirigir los debates, los Jueces y, en su caso, el Abogado General al formular preguntas, y este último para sus conclusiones, podrán emplear una de las lenguas mencionadas en el artículo 44 distinta de la lengua de procedimiento. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción a la lengua de procedimiento.

El artículo 46 del presente proyecto reproduce el contenido del artículo 35, apartados 3 a 5, del actual Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de una simplificación de la redacción en los apartados 1 y 3 del presente artículo [Explicación de carácter terminológico no pertinente para la versión ES] y de un traspaso, del Tribunal General al Presidente de la formación jurisdiccional, de las competencias contempladas en los apartados 3 y 6. Por último, en el apartado 7 del presente artículo se ha suprimido la referencia al informe preliminar y al informe para la vista, al igual que en el artículo 38, apartado 8, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 47

Responsabilidad del Secretario en materia lingüística

A instancia de un Juez, del Abogado General o de una de las partes, el Secretario se encargará de que cuanto haya sido dicho o escrito durante el procedimiento ante el Tribunal General sea traducido a las lenguas que éstos elijan de entre las mencionadas en el artículo 44.

El artículo 47 concuerda en lo esencial con el actual artículo 36, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 48

Régimen lingüístico de las publicaciones del Tribunal General

Las publicaciones del Tribunal General se harán en las lenguas indicadas en el artículo 1 del Reglamento n° 1 del Consejo.

Este artículo concuerda con el actual artículo 36, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 49

Versiones auténticas

Serán versiones auténticas los textos redactados en la lengua de procedimiento o, en su caso, en otra lengua autorizada en virtud de los artículos 45 y 46.

Este artículo concuerda en lo esencial con el actual artículo 37 del Reglamento de Procedimiento.

TÍTULO TERCERO DE LOS RECURSOS DIRECTOS

La mayoría de los asuntos sometidos al Tribunal General son recursos directos. Por lo tanto, es lógico ocuparse de estos recursos (que son esencialmente recursos de anulación, pero también recursos por omisión, recursos de indemnización y recursos basados en una cláusula compromisoria) antes que de los recursos en materia de propiedad intelectual o industrial y de los recursos de casación.

Este título tercero contiene todas las disposiciones aplicables a los recursos directos y además, como consecuencia de las remisiones que a él se efectúan en los títulos relativos a los asuntos de propiedad intelectual o industrial (título cuarto) y a los recursos de casación (título quinto), lo esencial de las disposiciones del presente Reglamento. Reagrupa las disposiciones de los títulos segundo, «Del procedimiento», y tercero, «De los procedimientos especiales», del Reglamento en vigor, pero no se refiere a los procedimientos que siguen a la devolución de un asunto al Tribunal General tras la casación o el reexamen, que se tratan en un nuevo título sexto, «De los procedimientos posteriores a la devolución de un asunto».

La profunda reforma de las normas procesales recogidas en este título es buena muestra de la firme voluntad del Tribunal General de proseguir los esfuerzos emprendidos para, frente a un número de litigios en constante aumento, preservar su capacidad de rendir una justicia de calidad que respete las exigencias del proceso equitativo, dotándose de un nuevo dispositivo procesal. Entre los objetivos que persigue el Tribunal General pueden citarse el de hacer más legible el conjunto del texto, aclarar las disposiciones y los derechos conferidos a las partes, simplificar las normas en busca de una mayor racionalización, aumentar la coherencia entre las disposiciones y la uniformidad en la aplicación de las mismas por parte del Tribunal, adaptar las normas a la realidad de las situaciones procesales encontradas y dirigir diligentemente el proceso, mediante dispositivos que permitan ganar eficacia.

Las disposiciones del presente título son, esencialmente, las del Reglamento en vigor, pero tras un proceso de refinado o de reescritura, y el modo de ordenarlas en el texto ha experimentado profundos cambios.

La reforma plasmada en el presente título contiene novedades destinadas a aligerar los requisitos de forma en la presentación de una demanda por parte de un abogado que ostente un poder otorgado por una persona jurídica privada (artículos 51 y 78), a racionalizar los métodos de presentación y de notificación de escritos procesales mediante la supresión del correo electrónico y de la elección de domicilio en Luxemburgo (véanse los artículos 57, 72, 77 y 80) y a eliminar formalismos, reemplazando autos por decisiones (artículo 70, relativo a la decisión de suspender y de reanudar el procedimiento; artículo 144, relativo a la decisión de admitir la demanda de intervención cuando no exista petición de confidencialidad).

También se pretende aclarar el alcance de ciertas disposiciones, en interés tanto de las partes como del propio Tribunal. A este respecto cabe mencionar el artículo 73, apartados 1 y 3, relativo a la presentación en la Secretaría de un escrito procesal en papel; los artículos 84 a 86 del capítulo cuarto, «De los motivos, de las pruebas y de la adaptación de la demanda»; el artículo 113, sobre la reapertura de la fase oral del procedimiento; los artículos 117 y 119, que describen, respectivamente, el contenido de las sentencias y de los autos, y el artículo 123, relativo al procedimiento en rebeldía.

El esfuerzo por alcanzar mayor claridad se refleja en la reorganización de las disposiciones y en la reagrupación en capítulos de toda una serie de disposiciones actualmente dispersas. Así, el capítulo primero reagrupa las disposiciones de carácter general (relativas a la representación de las partes, a los derechos y obligaciones de los representantes de las partes, a las notificaciones, a los plazos, al desarrollo del procedimiento y a la tramitación de los asuntos, a la acumulación de asuntos y a la suspensión del procedimiento), actualmente repartidas en seis capítulos diferentes. Del mismo modo, el capítulo decimoséptimo reagrupa disposiciones hoy repartidas en cuatro capítulos distintos, sobre las peticiones y demandas relativas a las sentencias y autos del Tribunal General (peticiones de rectificación de una resolución, demandas destinadas a subsanar una omisión de pronunciamiento, oposición a la sentencia en rebeldía, oposición de tercero, demandas de interpretación y de revisión de resoluciones y discrepancias sobre las costas recuperables). Reflejando el deseo de tramitar rápidamente tales peticiones y demandas, el presente proyecto dispone, por otra parte, que serán atribuidas automáticamente a la formación jurisdiccional que haya dictado la resolución a la que se refiere la petición o la demanda.

Esta reforma permite igualmente elevar al rango de disposición reglamentaria disposiciones ya recogidas en las Instrucciones prácticas a las partes, como la relativa a la longitud de los escritos de alegaciones (artículo 75), o en las Instrucciones al Secretario del Tribunal General, como la relativa al anonimato y a la omisión de ciertos datos frente al público (artículo 66) o a la publicación en el Diario Oficial de los anuncios sobre las resoluciones que ponen fin al proceso (artículo 122).

En numerosos artículos se introducen precisiones, en particular, en lo que respecta al momento de presentación de ciertos escritos (los motivos nuevos; las pruebas y las proposición de prueba; el escrito por el que se adaptan las pretensiones de la demanda), a las justificaciones que procede aportar en función del momento de presentación (de un motivo nuevo, de una prueba o de una proposición de prueba, de una solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento o de diligencias de prueba), y a las situaciones en que debe ofrecerse a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones (véanse, en particular, los artículos 84, apartado 3; 85, apartado 4, y 88, apartado 3), así como en lo relativo a la autoridad competente para decidir (véanse, por ejemplo, las competencias del Presidente establecidas en el artículo 62, para decidir sobre la incorporación a los autos de un escrito procesal presentado fuera de plazo, en el artículo 71, para fijar los plazos tras la reanudación de un procedimiento, en el artículo 75, para autorizar la presentación de escritos que sobrepasan el número máximo de páginas, en el artículo 83, para precisar los puntos que deberían abordarse en un escrito de réplica o de dúplica, y en el artículo 148, para fijar un plazo de observaciones a la otra parte principal antes de pronunciarse sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita; o la competencia del Presidente del Tribunal General, establecida en el artículo 115, para pronunciarse sobre la solicitud de escuchar una grabación sonora).

Además, el presente título contiene importantes innovaciones. Pueden seguramente incluirse en esta categoría la posibilidad de resolver sin vista oral, si ninguna parte principal la solicita y siempre que el Tribunal General la estime innecesaria, o la supresión de los coadyuvantes que sólo pueden presentar su argumentación en la vista, supresión íntimamente relacionada con el nuevo carácter facultativo de la vista. También pertenece a esta categoría la disposición que determina el modo de tratar la información o los documentos presentados a raíz de una diligencia de prueba decidida por el Tribunal General que sean a la vez pertinentes para resolver el litigio y confidenciales, debiendo el Tribunal ponderar su

carácter confidencial y las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y, en particular, del respeto del principio de contradicción. Del mismo modo, puede calificarse de importante, al mismo tiempo que de innovador, el dispositivo procesal en el que se plasma la voluntad del Tribunal de aplicar un trato muy especial a la información o a los documentos relacionados con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales. Aunque figura en un solo artículo, el Tribunal General ha querido aislar este régimen procesal especial en un capítulo independiente. Pese a que no puede calificarse de muy importante, otra innovación es la posibilidad de someter de oficio la tramitación de un asunto a un procedimiento acelerado.

Por último, no se propone modificar las normas actuales que se estiman satisfactorias. Éste es el caso, por ejemplo, de las normas del capítulo decimosexto relativas a la suspensión de la ejecución y a las demás medidas provisionales, que no experimentan ninguna modificación importante.

Artículo 50 **Ámbito de aplicación**

Las disposiciones del presente título se aplicarán a los recursos directos en el sentido del artículo 1.

Capítulo Primero DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1. De la representación de las partes

Artículo 51 **Representación obligatoria**

1. Las partes deberán estar representadas por un agente o un abogado en las condiciones que establece el artículo 19 del Estatuto.
2. El abogado que represente o asista a una parte deberá presentar en la Secretaría un documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.
3. Cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de Derecho privado, los abogados estarán obligados a presentar en la Secretaría un poder otorgado por esta última.
4. Si no se presentaran los documentos mencionados en los apartados 2 y 3, el Secretario fijará a la parte interesada un plazo razonable para su presentación. En el caso de que no se presentaran los documentos en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si el incumplimiento de este requisito de forma comporta la inadmisibilidad de la demanda o del escrito de alegaciones por defecto de forma.

La representación de las partes por un agente o abogado es obligatoria en los procedimientos ante el Tribunal General. El presente proyecto recuerda, pues, este requisito, formulado tanto en el artículo 19 del Estatuto como en el artículo 43 del actual Reglamento de Procedimiento, al comienzo del título consagrado a este tipo de recursos. A continuación se mencionan los documentos exigidos para poder participar en un procedimiento ante el Tribunal General y las eventuales consecuencias de la falta de presentación de esos documentos. En la actualidad, tales documentos y consecuencias se mencionan en el artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, y más concretamente en sus apartados 3, 5 y 6.

En el apartado 3 se propone mantener la norma en vigor, según la cual las personas jurídicas de Derecho privado tienen la obligación de presentar el poder otorgado a su abogado. Como las normas actuales no establecen obligación alguna de presentar un poder para los agentes de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea, se propone no añadir tal obligación, que nunca ha existido en el Tribunal General. Esta propuesta no afecta a lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, del presente proyecto, disposición en la que se indican los documentos que los representantes deben presentar para poder disfrutar de ciertos privilegios, inmunidades y facilidades.

Sección 2. De los derechos y obligaciones de los representantes de las partes

Artículo 52

Privilegios, inmunidades y facilidades

1. Los agentes, asesores y abogados que se personen ante el Tribunal General o ante una autoridad judicial por él exhortada en virtud de una comisión rogatoria gozarán de inmunidad por las palabras pronunciadas y por los escritos presentados en relación con el litigio o con las partes.
2. Los agentes, asesores y abogados gozarán además de los privilegios y facilidades siguientes:
 - a) los escritos y documentos relativos al procedimiento no podrán ser objeto de registro ni de incautación. En caso de controversia, los funcionarios de aduanas o de policía podrán precintar dichos escritos y documentos, que serán transmitidos sin demora al Tribunal General para su verificación en presencia del Secretario y del interesado;
 - b) los agentes, asesores y abogados gozarán de libertad de desplazamiento en la medida necesaria para el cumplimiento de su misión.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el artículo 38 del Reglamento de Procedimiento actual, salvo en la supresión de la referencia a la asignación de divisas, que resulta hoy anacrónica y que, por lo demás, tampoco figura ya en el artículo correspondiente del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (artículo 43).

Artículo 53

Condición de representantes de las partes

1. Para disfrutar de los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el artículo 52, deberán justificar previamente su condición:
 - a) los agentes, mediante un documento oficial expedido por su mandante, que presentará de inmediato al Secretario una copia de dicho documento;
 - b) los abogados, mediante un documento que acredite que están facultados para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE y, cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de Derecho privado, mediante un poder otorgado por esta última;
 - c) los asesores, mediante un poder otorgado por la parte a la que asesoren.
2. De ser necesario, el Secretario expedirá un documento de acreditación para los representantes de las partes. Su plazo de validez estará limitado a un período determinado, que podrá ampliarse o reducirse según la duración del procedimiento.

Como el artículo anterior, el artículo 53 del presente proyecto retoma en lo esencial, sobre este punto, el contenido del artículo 39 del Reglamento de Procedimiento actual, aunque lo completa poniendo de relieve la necesidad de que los abogados y asesores presenten un poder otorgado por la persona jurídica de Derecho privado a la que representan o asesoran y, en cualquier caso, un documento que acredite que están facultados para ejercer. Este artículo se inspira en el artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 54

Alzamiento de la inmunidad

1. Los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el artículo 52 se concederán exclusivamente en interés del procedimiento.
2. El Tribunal General podrá alzar la inmunidad cuando estime que ello no es contrario al interés del procedimiento.

Este artículo concuerda con el artículo 40 del Reglamento de Procedimiento actual.

Artículo 55

Exclusión del procedimiento

1. Si el Tribunal General estimara que el comportamiento de un agente, un asesor o un abogado ante dicho Tribunal, el Presidente, un Juez o el Secretario es incompatible con la dignidad del Tribunal o con las exigencias de una buena administración de la justicia, o que ese agente, ese asesor o ese abogado hace uso de los derechos que le corresponden por

razón de sus funciones con fines distintos de aquellos para los que se le reconocen esos derechos, informará de ello al interesado. El Tribunal podrá también informar de ello a las autoridades competentes a las que esté sujeto el interesado, en cuyo caso se transmitirá a éste copia del escrito remitido a dichas autoridades.

2. Por los mismos motivos, el Tribunal General podrá en cualquier momento decidir excluir del procedimiento a un agente, asesor o abogado mediante auto motivado, tras oír al interesado. Dicho auto será inmediatamente ejecutivo.
3. Cuando un agente, asesor o abogado sea excluido del procedimiento, éste se suspenderá hasta la expiración del plazo fijado por el Presidente para permitir que la parte interesada designe a otro agente, asesor o abogado.
4. Las decisiones adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo podrán ser revocadas.

El artículo 55 del presente proyecto concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 41 del Reglamento de Procedimiento, aunque lo completa con una referencia a los agentes, dado que éstos disfrutaban de los mismos derechos y están sometidos a las mismas obligaciones que los asesores y abogados. Los cambios efectuados en este artículo se inspiran en los que el Tribunal de Justicia realizó en el artículo 46 de su nuevo Reglamento de Procedimiento.

Artículo 56

Profesores

Las disposiciones de la presente sección serán aplicables a los profesores a los que se refiere el artículo 19, párrafo séptimo, del Estatuto.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 42 del Reglamento de Procedimiento.

Sección 3. De las notificaciones

Artículo 57

Modos de notificación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, apartado 2, y en el artículo 80, apartado 1, las notificaciones previstas en el Estatuto y en el presente Reglamento serán cursadas por el Secretario del modo descrito en el apartado 4 o por fax.
2. Si, por razones técnicas o debido a la naturaleza del escrito, la notificación no pudiera realizarse del modo previsto en el apartado 1, será cursada a la dirección del representante de la parte que se trate por envío postal certificado, con acuse de recibo, de una copia del documento que deba notificarse o por entrega de esta copia contra recibo. El destinatario recibirá aviso de ello del modo descrito en el apartado 4 o por fax. En ese caso, se

considerará que un envío postal certificado ha sido entregado a su destinatario el décimo día siguiente al del depósito del envío en el servicio de Correos del lugar en el que el Tribunal General tiene su sede, salvo que el acuse de recibo pruebe que el envío se recibió en otra fecha o salvo que el destinatario comunique al Secretario, en un plazo de tres semanas a partir del aviso, que no ha recibido la notificación.

3. Las copias del original que deba notificarse con arreglo al apartado 2 serán extendidas y certificadas por el Secretario, salvo en caso de que hayan sido presentadas por las propias partes conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 73.
4. El Tribunal General podrá establecer, mediante decisión, las condiciones en las que un escrito procesal puede ser notificado por vía electrónica. Esta decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El artículo 57 del presente proyecto modifica significativamente el artículo 100 del Reglamento de Procedimiento actual. Como los métodos de notificación utilizados por el Tribunal deben tener en cuenta la evolución tecnológica y, además, condicionan en buena medida la eficacia del trabajo de la Secretaría, se ha reorganizado el texto con objeto de distinguir mejor las notificaciones efectuadas a través de un medio técnico de comunicación y las efectuadas del modo tradicional, aunque a estas últimas sólo se recurrirá cuando no sea posible utilizar un medio técnico de comunicación.

En la actualidad, los medios técnicos de comunicación que puede utilizar el Tribunal para cursar notificaciones son el fax, el correo electrónico y la aplicación e-Curia. Sin embargo, entre estos métodos, el correo electrónico no es fiable, pues no permite obtener una fecha cierta de recepción. Así pues, se propone no recurrir a este método de notificación, y ésta es la razón por la que sólo se mencionan «el modo descrito en el apartado 4», es decir, e-Curia, y el fax.

Cuando, por razones técnicas o debido a la naturaleza del escrito, no sea posible efectuar la notificación a través de e-Curia o por fax, se propone enviarla a la dirección del representante de la parte de que se trate. Considerando que el Tribunal de Justicia ha decidido suprimir la obligación de las partes de designar domicilio en Luxemburgo (véase a este respecto el artículo 121 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia) y que las partes deben estar representadas, resulta apropiado enviar la copia del escrito a la dirección del representante de la parte que se trate. Esta propuesta debe interpretarse poniéndola en relación con las disposiciones del artículo 76, letra b), del artículo 77 y del artículo 81, apartado 1, letra b), del presente proyecto.

Teniendo en cuenta que la notificación a través de un medio técnico de comunicación presupone la aceptación previa de ese modo de notificación, el modo de notificar la demanda al demandado se regula en el artículo 80 del proyecto.

Sección 4. De los plazos

Artículo 58

Cómputo de los plazos

1. Los plazos procesales previstos en los Tratados, en el Estatuto y en el presente Reglamento se computarán de la siguiente forma:
 - a) Si un plazo expresado en días, semanas, meses o años hubiera de contarse a partir del momento en que acontezca un suceso o se efectúe un acto, el día en que acontezca dicho suceso o se efectúe dicho acto no se incluirá dentro del plazo.
 - b) Un plazo expresado en semanas, meses o años finalizará al expirar el día que, en la última semana, en el último mes o en el último año, tenga la misma denominación o la misma cifra que el día en que aconteció el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de computarse el plazo. Si en un plazo expresado en meses o en años el día fijado para su expiración no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día de dicho mes.
 - c) Cuando un plazo esté expresado en meses y días, se tendrán en cuenta en primer lugar los meses enteros y después los días.
 - d) Los plazos comprenderán los sábados, los domingos y los días feriados legales.
 - e) El cómputo de los plazos no se suspenderá durante las vacaciones judiciales.
2. Si el plazo concluye en sábado, domingo u otro día feriado legal, quedará prorrogado hasta el final del siguiente día hábil.
3. La lista de los días feriados legales establecida por el Tribunal de Justicia y publicada en el *Diario Oficial de la Unión Europea* será aplicable al Tribunal General.

Este artículo reproduce el contenido del actual artículo 101 del Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de ciertos ajustes destinados a armonizar su texto con el del artículo correspondiente del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (artículo 49).

Artículo 59

Recurso contra un acto publicado de una institución

Cuando el plazo de interposición de un recurso contra un acto de una institución empiece a correr a partir de la publicación del acto, dicho plazo deberá contarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, letra a), a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación del acto en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El artículo 59 concuerda con el actual artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 60

Plazo por razón de la distancia

Los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

Este artículo reproduce sin modificaciones el texto del apartado 2 del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 61

Fijación y prórroga de los plazos

1. Los plazos fijados en virtud del presente Reglamento podrán ser prorrogados por la autoridad que los haya establecido.
2. El Presidente podrá delegar su firma en el Secretario para fijar determinados plazos que le corresponda establecer con arreglo al presente Reglamento o para conceder su prórroga.

Este artículo retoma el texto del artículo 103 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 62

Escritos procesales presentados fuera de plazo

Un escrito procesal presentado en la Secretaría tras la expiración de un plazo fijado por el Presidente o por el Secretario en virtud del presente Reglamento sólo podrá aceptarse en virtud de una decisión del Presidente en ese sentido.

Esta nueva disposición se añade para recalcar especialmente el hecho de que un escrito procesal presentado tras la expiración del plazo fijado por el Presidente o por el Secretario sólo podrá aceptarse en virtud de una decisión del Presidente. En otros términos esta disposición pretende dejar claro que un escrito presentado fuera de plazo no podrá incorporarse a los autos del asunto, a menos que el Presidente del Tribunal General o de la Sala, según los casos, decida lo contrario. Este artículo tiene su equivalente en el artículo 38, apartado 1, del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sección 5. Del desarrollo del procedimiento y de la tramitación de los asuntos

Artículo 63

Desarrollo del procedimiento

Sin perjuicio de las disposiciones especiales del Estatuto o del presente Reglamento, el procedimiento ante el Tribunal General constará de una fase escrita y de una fase oral.

Este artículo extrae las consecuencias oportunas de las sucesivas modificaciones del Estatuto y del Reglamento de Procedimiento, recordando que, aunque la tramitación ordinaria de un asunto consta de una fase escrita y de una fase oral (artículo 20, párrafo primero, del Estatuto), existen determinadas circunstancias en las que la segunda fase puede, sin embargo, omitirse.

Esta disposición concuerda con el artículo 53, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 64

Carácter contradictorio del procedimiento

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 68, apartado 4, del artículo 104, del artículo 105, apartado 7, y del artículo 144, apartado 7, el Tribunal General sólo tendrá en cuenta los escritos procesales y documentos que los representantes de las partes hayan podido examinar y sobre los que hayan podido pronunciarse.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho de defensa ocupa un lugar preeminente en la organización y en el desarrollo de un proceso equitativo (véanse en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2008, Weiss und Partner, C-14/07, Rec. p. I-3367, apartado 47, y de 2 de abril de 2009, Gambazzi, C-394/07, Rec. p. I-2563, apartado 28) y el principio de contradicción forma parte del derecho de defensa (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, apartado 61, y de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C-89/08 P, Rec. p. I-11245, apartado 50).

Este principio implica que, por regla general, las partes procesales tienen derecho a pronunciarse sobre los hechos y los documentos en los que se basará la resolución judicial y a discutir las pruebas y las observaciones presentadas ante el Juez (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2008, Varec, C-450/06, Rec. p. I-581, apartado 47), así como los motivos de Derecho examinados de oficio por el Juez, en los que éste pretende basar su decisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, antes citada, apartado 55). En efecto, para satisfacer las exigencias derivadas del derecho a un proceso equitativo, es preciso que las partes puedan debatir de forma contradictoria tanto las razones de hecho como las razones de Derecho que son decisivas para el resultado del procedimiento (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 2009, M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec. p. I-12033, apartado 41).

El artículo 64 del presente proyecto pretende consagrar el principio de contradicción elevándolo al rango de disposición general del procedimiento, de modo que destaque más de lo que lo hace actualmente. En efecto, aunque este principio fundamental se recoge en el texto vigente, figura en un artículo relativo a las diligencias de prueba (artículo 67, apartado 3, párrafo primero).

Artículo 65

Notificación de los escritos procesales y de las decisiones adoptadas en el curso del proceso

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 68, apartado 4, de los artículos 103 a 105 y del artículo 144, apartado 7, los escritos procesales y los documentos unidos a los autos del asunto serán notificados a las partes.
2. El Secretario se encargará de que se comuniquen a las partes las decisiones adoptadas en el curso del proceso e incorporadas a los autos del asunto.

Habida cuenta del texto del artículo 57, apartado 1, del presente proyecto, que hace referencia a «las notificaciones previstas en el Estatuto y en el presente Reglamento», se propone incluir aquí una disposición general relativa a la notificación de los escritos procesales y de las decisiones incorporadas a los autos del asunto, pues la inexistencia de notificación constituye una excepción, reservada a los supuestos de acumulación de asuntos (artículo 68) y de confidencialidad de ciertos datos con respecto a una parte principal (artículos 103 a 105) o con respecto a un coadyuvante (artículo 144).

Esta norma aplica el principio de contradicción del procedimiento judicial, pues confirma las disposiciones del Reglamento de Procedimiento que establecen expresamente la obligación de notificar los documentos que obren en autos (véanse, en particular, los artículos 80, 83, 96, 102, 114, 118, 120, 144, 157 y 158) y completa el dispositivo procesal en su conjunto al disponer que los escritos procesales y las decisiones adoptadas en el curso del proceso (sobre solicitudes de acumulación de asuntos, de suspensión del procedimiento o de adopción de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba) que se unan a los autos del asunto serán notificados o comunicadas a las partes, según se trate de escritos o de decisiones.

Artículo 66

Anonimato y omisión de ciertos datos frente al público

En los documentos concernientes a un asunto a los que el público tenga acceso, el Tribunal General podrá omitir, de oficio o a instancia motivada de parte, presentada mediante escrito separado, el nombre de una de las partes del litigio o el de otras personas mencionadas en el procedimiento, o incluso ciertos datos, si existen razones legítimas que justifiquen mantener la confidencialidad en cuanto a la identidad de esas personas o al contenido de esos datos.

En aras de una mayor transparencia, se propone incluir en el Reglamento de Procedimiento una disposición que concuerda en lo esencial con el artículo 18, apartado 4, párrafo segundo, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal General.

Esta disposición permite mantener en el anonimato la identidad de una parte del litigio o de otra persona, si el Tribunal General lo estima necesario. En efecto, pueden surgir problemas cuando el examen del recurso interpuesto ponga de manifiesto que éste contiene datos delicados, y que ello justifica ocultar el nombre de una o varias personas o entidades. Ésta es la razón por la que conviene establecer la posibilidad de que el Tribunal General actúe en

este sentido, bien a instancia de alguna de las partes del litigio, bien de oficio, para proteger la vida privada de las personas de que se trate o evitar un daño irremediable a sus derechos.

Esta disposición permite, además, restringir el acceso a ciertos datos en los documentos a disposición del público (informe para la vista, comunicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, jurisprudencia del Tribunal General publicada en la Recopilación o difundida en Internet). Por lo demás, conviene señalar que el ejercicio de esta facultad resulta cada vez más frecuente en relación con las resoluciones judiciales dictadas al término de un procedimiento contencioso entre una empresa sancionada por infracción del Derecho de la competencia y la Comisión Europea.

Por último, cabe recordar que el Tribunal de la Función Pública incluyó desde el principio esta regla en su Reglamento de Procedimiento (artículo 44, apartado 4).³

Artículo 67

Orden de tramitación de los asuntos

1. El Tribunal General conocerá de los asuntos que le hayan sido sometidos según el orden en el que se encuentren listos para ser juzgados.
2. En circunstancias especiales, el Presidente podrá decidir que se dé prioridad a un asunto.

El Reglamento vigente contiene un artículo 55 que regula el orden en que el Tribunal General conoce de los asuntos y establece la posibilidad de que se dé prioridad a un asunto. Sin embargo, esta disposición forma parte del capítulo relativo a la fase oral del procedimiento y sólo tiene, pues, un ámbito de aplicación limitado. Por consiguiente, se propone desplazar lo esencial del contenido de la disposición al nuevo capítulo que recoge las disposiciones generales aplicables a los recursos directos, con objeto de conferirle carácter general y de permitir que el Presidente de la formación jurisdiccional dé prioridad a un asunto si considera que existen circunstancias especiales que lo justifican.

Este modo de tramitación, que constituye una excepción a la norma que establece el orden en que se tramitan los asuntos, permite otorgar prioridad a un asunto en las diversas fases del procedimiento que lleva a la resolución del litigio (calendario de actividades de la Sala, fijación de la fecha para la vista, lectura del proyecto de sentencia por la célula de lectores de sentencias y traducción del proyecto de sentencia). Evidentemente, esta tramitación prioritaria se concibe sin perjuicio de la posibilidad de que los representantes de las partes favorezcan la rápida resolución del litigio renunciando a un segundo turno de escritos de alegaciones o a la vista oral y, más en general, sin perjuicio de la cooperación en la buena marcha de la justicia que se espera de los auxiliares de la justicia.

³ DO 2007, L 225, p. 1, en su última versión modificada (DO 2011, L 162, p. 19).

Artículo 68
Acumulación de asuntos

1. Podrá ordenarse en todo momento, de oficio o a instancia de una parte principal, la acumulación de varios asuntos conexos por su objeto, a efectos de una o varias de las siguientes etapas: fase escrita del procedimiento, fase oral del procedimiento y resolución que ponga fin al proceso.
2. La acumulación será decidida por el Presidente. Antes de esta decisión, el Presidente fijará un plazo a las partes principales para que presenten sus observaciones sobre la eventual acumulación, en el caso de que no se hayan pronunciado aún al respecto.
3. Los asuntos acumulados podrán separarse, del modo establecido en el apartado 2.
4. Todas las partes de los asuntos acumulados podrán consultar en la Secretaría los autos de los asuntos que se ha decidido acumular. No obstante, a petición de una parte, el Presidente podrá excluir de esa consulta, mediante auto, ciertos datos de los autos de carácter secreto o confidencial.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, pero lo aclara separando, en tres apartados diferentes, la causa y el objeto de la acumulación de asuntos (apartado 1), el procedimiento que debe seguirse al efecto (apartado 2) y el procedimiento en caso de separación de asuntos (apartado 3).

El apartado 4, relativo a los efectos jurídicos de la acumulación sobre las partes de los asuntos que se han acumulado, se inspira en el artículo 50, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento vigente, pero lo modifica para hacerlo más legible, precisando que la limitación del acceso a los autos de un asunto, justificada por la protección de los datos secretos o confidenciales, debe decidirse mediante auto.

Artículo 69
Supuestos de suspensión del procedimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 163, podrá suspenderse un procedimiento pendiente:

- a) en los casos previstos en el párrafo tercero del artículo 54 del Estatuto;
- b) cuando se interponga un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra una resolución del Tribunal General que resuelva parcialmente la cuestión de fondo, que ponga fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, o que desestime una demanda de intervención;
- c) a instancia de una parte principal con la conformidad de la otra parte principal;
- d) en otros casos especiales, si así lo exige una buena administración de la justicia.

Este artículo retoma en lo esencial el contenido del artículo 77 del Reglamento de Procedimiento vigente, pero con una pequeña modificación en su letra c), destinada a reflejar el auténtico carácter conjunto, en la práctica, de la petición de suspensión. En efecto, si bien a veces la petición de suspensión adopta la forma de una petición conjunta, en la mayoría de los casos reviste la forma de una petición presentada por una parte principal, a la que la otra parte principal da su conformidad.

Artículo 70

Decisiones de suspender y de reanudar el procedimiento

1. La decisión de suspender el procedimiento será adoptada por el Presidente. Antes de adoptarla, el Presidente fijará un plazo a las partes principales para que presenten sus observaciones sobre una eventual suspensión del procedimiento, en el caso de que no se hayan pronunciado aún al respecto.
2. La decisión de reanudar el procedimiento antes de que suspensión llegue a su término o la que se menciona en el artículo 71, apartado 3, serán adoptadas del modo previsto en el apartado 1.

Este artículo retoma, en lo esencial, el texto del artículo 78 del Reglamento de Procedimiento vigente, pero lo simplifica disponiendo que la suspensión del procedimiento no requerirá un auto, sino una mera decisión del Presidente que se incorporará a los autos del asunto. Se propone la misma forma para la decisión de reanudar el procedimiento adoptada antes que la suspensión haya llegado a su término o cuando la decisión de suspensión no haya precisado ese término.

Artículo 71

Duración y efectos de la suspensión

1. La suspensión del procedimiento surtirá efecto en la fecha señalada en la decisión de suspensión o, si no se indicase fecha, en la de dicha decisión.
2. Durante la suspensión quedarán interrumpidos todos los plazos procesales, a excepción del plazo de intervención fijado en el apartado 1 del artículo 143.
3. Cuando la decisión de suspensión no haya fijado su duración, la suspensión finalizará en la fecha señalada en la decisión de reanudación del procedimiento, o si no se indicase fecha, en la de dicha decisión.
4. A partir de la fecha en que se reanude el procedimiento, los plazos procesales interrumpidos serán sustituidos por los nuevos plazos que fije el Presidente.

Este artículo, que debe interpretarse poniéndolo en relación con el artículo 70, retoma, en lo esencial, el texto del artículo 79 del Reglamento de Procedimiento vigente, salvo en una precisión relativa a los plazos de que disponen las partes tras el período de suspensión. Para una mayor claridad y una mayor seguridad jurídica, se precisa en efecto, en el apartado 4, que las partes dispondrán de nuevos plazos a partir de la fecha de reanudación y que esos

nuevos plazos de procedimiento, incluido el plazo para la presentación del escrito de contestación, serán fijados por el Presidente.

Capítulo Segundo DE LOS ESCRITOS PROCESALES

Para más claridad, el actual artículo 43 del Reglamento de Procedimiento se ha dividido en tres disposiciones distintas, relativas, respectivamente, a las normas aplicables a todos los modos de presentación de escritos procesales, a las normas específicas relativas a la presentación en papel y a las normas que regulan la presentación a través de la aplicación e-Curia. Éste es el objeto de los artículos 72 a 74.

El presente capítulo incluye, además, la disposición relativa a la longitud de los escritos de alegaciones.

Artículo 72

Normas comunes relativas a la presentación de escritos procesales

1. Todo escrito procesal se presentará en Secretaría, bien en papel, en su caso tras la transmisión por fax de una copia del original de dicho escrito con arreglo al artículo 73, apartado 3, bien del modo mencionado en la decisión del Tribunal General adoptada en virtud del artículo 74.
2. Todo escrito procesal irá fechado. Para el cómputo de los plazos procesales sólo se tendrán en cuenta la fecha y la hora del Gran Ducado de Luxemburgo en que se presente el original en Secretaría.
3. Se adjuntarán a todo escrito procesal los documentos justificativos invocados y una relación de los mismos.
4. Si en razón del volumen de un documento sólo se adjuntara al escrito procesal un extracto de ese documento, se depositará en Secretaría el documento íntegro o una copia completa del mismo.
5. Las instituciones presentarán, en los plazos fijados por el Presidente, traducciones de todos los escritos procesales a las demás lenguas indicadas en el artículo 1 del Reglamento nº 1 del Consejo.

Como indica su título, el artículo 72 contiene las normas comunes relativas a la presentación de escritos procesales.

El apartado 1 indica los modos de presentación autorizados. Queda claro, así, que un escrito procesal puede presentarse en la Secretaría del Tribunal en papel, en su caso tras haberlo enviado por fax, o bien exclusivamente en formato electrónico, del modo mencionado en la decisión del Tribunal General adoptada en virtud de una norma de habilitación, es decir, en concreto, a través de e-Curia. No se recoge ya la posibilidad de presentar un escrito procesal por correo electrónico –posibilidad autorizada por la referencia a «cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal General» formulada en el actual artículo 43 del Reglamento de Procedimiento–, dado que el Tribunal General considera

indispensable, en interés de una buena administración de la justicia, fomentar el uso del sistema e-Curia, gratuito, fiable y dotado de medidas de seguridad.

Los apartados 2 a 5 retoman, en lo esencial, el contenido de los apartados 2 a 5 del actual artículo 43 del Reglamento de Procedimiento, que modifican en tres puntos.

En primer lugar, se ha simplificado el texto de los apartados 3 y 4 con respecto al de los apartados 4 y 5 del actual artículo 43.

En segundo lugar, para más claridad y de conformidad con la jurisprudencia (auto del Tribunal General de 1 de abril de 2011, Doherty/Comisión, T-468/10, Rec. p. II-1497, apartado 16), este artículo precisa, en su apartado 2, que el momento que se toma en consideración para verificar la observancia de los plazos de procedimiento no es el día y la hora en que se envió el escrito procesal, sino el día y la hora en que dicho escrito se presentó en la Secretaría del Tribunal, en Luxemburgo.

En tercer lugar, en lo que respecta al apartado 5, que se inspira en el apartado 2 del actual artículo 43, la sustitución de los términos «Tribunal General» por el término «Presidente» forma parte del traspaso de competencias del Tribunal General a los Presidentes de Sala. Por otra parte, no se exige ya que las copias de las traducciones sean certificadas, dado que este trámite formal no parece en absoluto necesario.

Artículo 73

Presentación en Secretaría de un escrito procesal en papel

1. El original en papel de un escrito procesal deberá llevar la firma manuscrita del agente o del abogado de la parte.
2. El escrito procesal y todos los anexos que en él se mencionen se presentarán con cinco copias para el Tribunal General y con tantas copias como partes litigantes. Estas copias deberán ser certificadas por la parte que las presente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, apartado 2, segunda frase, a efectos del cumplimiento de los plazos procesales serán tomadas en consideración la fecha y la hora en la que se reciba en la Secretaría por fax la copia íntegra del original firmado de un escrito procesal, incluida la relación de documentos mencionada en el artículo 72, apartado 3, siempre y cuando el original firmado del escrito, acompañado de los anexos y copias mencionados en el apartado 2, sea presentado en la Secretaría dentro de los diez días siguientes. No se aplicará a este plazo de diez días lo dispuesto en el artículo 60.

Este artículo retoma en lo esencial el contenido de los apartados 1 y 6 del artículo 43 del Reglamento de Procedimiento vigente, que modifica sin embargo en tres aspectos.

En primer lugar se precisa, en el apartado 1, que el original en papel debe llevar la firma manuscrita del representante de la parte. Este requisito ha sido confirmado por la jurisprudencia desde hace varios años (véase la sentencia del Tribunal General de 23 de mayo de 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Rec. p. II-1581, apartado 40).

En segundo lugar, conviene destacar que ya no se contempla la transmisión previa de un escrito procesal por correo electrónico. Esta modificación, recogida en el apartado 3, no hace sino confirmar la que figura en el artículo 57 del presente proyecto.

En tercer lugar, en aras de la seguridad jurídica, se ha añadido una aclaración importante en el apartado 3, donde se dispone expresamente que, a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, la fecha y la hora que se tomarán en consideración serán la fecha y hora en que llegue a la Secretaría por fax la copia íntegra del original firmado de un escrito procesal, incluida la relación de anexos.

Artículo 74

Presentación por vía electrónica

El Tribunal General podrá establecer, mediante decisión, las condiciones en las que se considerará que un escrito procesal remitido a la Secretaría por vía electrónica es un escrito original. Esta decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Este artículo concuerda con el artículo 43, apartado 7, del Reglamento de Procedimiento vigente. Sin embargo, a la vista de lo dispuesto en el artículo 72 del presente proyecto, la primera parte del actual artículo 43, apartado 7, queda sin objeto y, por tanto, puede suprimirse.

Artículo 75

Longitud de los escritos de alegaciones

1. El Tribunal General determinará, con arreglo al artículo 224, la longitud máxima para los escritos de alegaciones que se presenten en el marco del presente título.
2. Únicamente en los asuntos particularmente complejos desde un punto de vista jurídico o fáctico podrá autorizar el Presidente que se sobrepase ese número máximo de páginas.

El artículo 75 es un nuevo artículo, que se explica por el interés del Tribunal General en preservar, sean cuales sean las circunstancias, su capacidad para pronunciarse en un plazo razonable sobre los asuntos que se le sometan.

La limitación del número de páginas de los escritos de alegaciones no constituye una novedad. En efecto, la regla que establece una limitación fue incluida por primera vez en las Instrucciones prácticas a las partes que el Tribunal General adoptó en 2002 (DO 2002, L 87, p. 48), tomando como base el artículo 136 bis del Reglamento de Procedimiento, actualmente artículo 150. No se debe olvidar que fue la longitud excesiva de los escritos presentados en ciertos asuntos y el consecuente incremento de la duración del procedimiento lo que llevó al Tribunal General, ya preocupado por evitar la congestión, a modificar la regulación. La limitación del número de páginas de los escritos de alegaciones se ha ido reproduciendo en las sucesivas versiones de las Instrucciones prácticas a las partes y figura en la versión vigente (DO 2012, L 68, p. 23; véanse el punto 15, relativo a la longitud de los escritos de alegaciones, el punto 16, sobre los casos en que cabe permitir sobrepasar el límite, y los

puntos 65 a 67, sobre los supuestos de subsanación). La inscripción de esta regla en el Reglamento de Procedimiento, por lo demás inspirada en la incorporación de una disposición similar al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (artículo 58), pretende poner de relieve su importancia para la organización general del proceso.

El sistema en vigor produce efectos benéficos que justifican mantenerlo, principalmente por determinar el número máximo de páginas según el tipo de escrito de alegaciones y ofrecer así un marco de referencia a los representantes de las partes. Así pues, las modificaciones introducidas consisten únicamente en precisar, en el apartado 1, el contenido de las disposiciones prácticas que el Tribunal General adoptará tomando como base la norma de habilitación establecida al efecto (artículo 224 del presente proyecto) y en confirmar, en el apartado 2, la competencia del Presidente para aceptar un escrito de alegaciones cuyo número de páginas sobrepase el límite máximo establecido en las disposiciones prácticas, teniendo en cuenta la complejidad jurídica o fáctica del asunto.

Aunque la situación en la que se encuentra actualmente el Tribunal General es difícil, se ha optado por no modificar el dispositivo existente en favor de un sistema más rígido, en la medida en que aquél sienta una norma de principio, pero no excluye la posibilidad de establecer excepciones al límite máximo de páginas en consideración a las circunstancias del caso, a través de la excepción basada en la complejidad jurídica o fáctica del asunto.

La negativa reiterada a atender a una petición de subsanación de un escrito de alegaciones que sobrepase el número máximo de páginas puede, sin embargo, acarrear consecuencias, pues la parte responsable se expone a ser condenada al pago de gastos de procedimiento, con arreglo al artículo 139 del presente proyecto.

Capítulo Tercero
DE LA FASE ESCRITA DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 76
Contenido de la demanda

La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto contendrá:

- a) el nombre y domicilio del demandante;
- b) la indicación de la condición y de la dirección del representante del demandante;
- c) el nombre de la parte principal contra la que se interpone el recurso;
- d) la cuestión objeto del litigio, los motivos y alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos;
- e) las pretensiones del demandante;
- f) las pruebas y la proposición de prueba, si ha lugar.

El presente artículo coincide, en lo esencial, con el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento actual.

El contenido de la letra b) se ha añadido teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 57, apartado 2, y 77, apartado 2, del presente proyecto.

En cuanto a las modificaciones de las disposiciones de las letras d) y f), se han introducido por razones de coherencia con el artículo 120 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 77
Información relativa a las notificaciones

1. A efectos del procedimiento, la demanda indicará si el modo de notificación aceptado por el representante del demandante es el que se contempla en el artículo 57, apartado 4, o bien el fax.
2. Si la demanda no reuniera los requisitos mencionados en el apartado 1, todas las notificaciones a efectos procesales a la parte interesada se efectuarán, mientras no se haya subsanado este defecto, por envío postal certificado dirigido al representante de la parte. En tal caso, se considerará practicada en debida forma la notificación mediante la entrega del envío certificado en la oficina de correos del lugar donde el Tribunal General tiene su sede.

Este artículo, que contiene información relativa a las notificaciones, simplifica significativamente el régimen del actual artículo 44, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

En efecto, el presente artículo, que debe interpretarse poniéndolo en relación con el artículo 57 del presente proyecto, dispone que la demanda deberá indicar si se elige como modo de notificación e-Curia o bien el fax y que, si no lo hace, las notificaciones se efectuarán por envío postal certificado dirigido al representante de la parte. En plena coherencia con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, esta disposición consagra la desaparición de la elección de domicilio en Luxemburgo.

Artículo 78 **Anexos de la demanda**

1. La demanda irá acompañada, si ha lugar, de los documentos indicados en el artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto.
2. La demanda presentada en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta, con arreglo al artículo 272 TFUE, deberá ir acompañada de un ejemplar del contrato que contenga dicha cláusula.
3. Si el demandante fuera una persona jurídica de Derecho privado, adjuntará a su demanda un medio de prueba reciente de su existencia jurídica (extracto del Registro Mercantil, extracto del Registro de Asociaciones o cualquier otro documento oficial).
4. La demanda irá acompañada de los documentos contemplados en el artículo 51, apartados 2 y 3.
5. Si la demanda no reuniera los requisitos enumerados en los apartados 1 a 4 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para presentar los documentos antes mencionados. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad formal de la demanda.

El presente artículo reproduce, en lo esencial, el contenido de los apartados 4, 5, 5 bis y 6 del actual artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, aunque inspirándose en el orden que sigue el artículo 122 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

La modificación más importante figura en el apartado 3. Esta disposición establece, como el artículo 44 actual, la obligación de las personas jurídicas de Derecho privado de probar su existencia jurídica y, por tanto, su capacidad procesal. Sin embargo, a diferencia del actual artículo 44, se suprime la obligación de las personas jurídicas de Derecho privado de aportar la prueba de que el poder de su abogado fue debidamente otorgado por persona capacitada al efecto. El Tribunal General considera, efectivamente, que la presentación del poder exigida en el artículo 51, apartado 3, del presente proyecto es suficiente y que, por tanto, no es preciso exigir además la prueba de que este poder fue otorgado por una persona

capacitada al efecto, cuestión que, por lo demás, es responsabilidad del abogado que represente a la persona jurídica de Derecho privado, y no del Tribunal.

El alto porcentaje de subsanación de las demandas en lo que respecta a la obligación de aportar la prueba mencionada en el artículo 44, apartado 5, letra b), del Reglamento de Procedimiento vigente y la dificultad de verificar el valor probatorio de la información presentada son dos factores adicionales que contribuyen a la convicción de que la supresión de este requisito simplificará significativamente la tramitación en la Secretaría de los escritos de interposición de recurso y permitirá optimizar su capacidad de tramitación de los escritos procesales. A este respecto conviene poner de relieve que, pese a las aclaraciones introducidas en las Instrucciones prácticas a las partes a fin de permitir que los representantes detecten los casos en los que se pedirá una subsanación de la demanda y a pesar de la información útil disponible en el sitio Internet de la institución en la forma de un recordatorio «Demanda», en 2012 ha sido necesario solicitar una subsanación en un 38,4 % de las demandas, es decir, en 237 demandas de las 617 presentadas. En un 55 % de esos casos se pudo constatar igualmente un incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 44, apartados 3 a 5, del Reglamento de Procedimiento vigente.

El apartado 5 regula los supuestos de incumplimiento de las normas establecidas en los apartados 1 a 4.

Artículo 79

Comunicación al Diario Oficial de la Unión Europea

En el *Diario Oficial de la Unión Europea* se publicará un anuncio que contendrá la fecha de presentación de la demanda que inicie el proceso, el nombre de las partes principales, las pretensiones de la demanda y una indicación de los motivos y de las principales alegaciones invocadas.

Este artículo retoma el texto del apartado 6 del artículo 24 del Reglamento de Procedimiento actual, que modifica ligeramente para reflejar mejor el contenido exacto de las comunicaciones publicadas en el Diario Oficial sobre los nuevos asuntos sometidos al Tribunal General. Los cambios se inspiran en el artículo 21, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 80

Notificación de la demanda

1. La demanda será notificada al demandado por envío postal certificado, con acuse de recibo, de una copia certificada de la demanda o por entrega de esta copia contra recibo. Cuando el demandado haya aceptado, previamente, que las demandas le sean notificadas del modo que se contempla en el artículo 57, apartado 4, o por fax, la notificación de la demanda podrá efectuarse de ese modo.
2. En los casos previstos en el artículo 78, apartado 5, la notificación se hará una vez subsanada la demanda o en cuanto el Tribunal General haya declarado su admisibilidad, teniendo en cuenta los requisitos enumerados en ese artículo.

Este artículo concuerda con el artículo 45 del Reglamento de Procedimiento actual.

El apartado 1 se completa indicando el modo de notificación de la demanda. Cuando el demandado haya aceptado previamente recibir los escritos procesales a través de e-Curia o por fax, según la práctica seguida por las instituciones y determinados órganos u organismos de la Unión, el modo de transmisión que se eligió será utilizado por el Tribunal. Esta disposición debe interpretarse poniéndola en relación con el artículo 57, apartado 1, del presente proyecto.

Además de la adaptación del número de artículo al que se remite, el apartado 2 experimenta ciertas modificaciones formales que coinciden con las efectuadas por el Tribunal de Justicia en el texto del artículo 123 de su Reglamento de Procedimiento.

Artículo 81

Escrito de contestación

1. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda, el demandado presentará el escrito de contestación. Este escrito contendrá:
 - a) el nombre y domicilio del demandado;
 - b) la indicación de la condición y de la dirección del representante del demandado;
 - c) los motivos y alegaciones invocados;
 - d) las pretensiones del demandado;
 - e) las pruebas y la proposición de prueba, si ha lugar.
2. Será aplicable al escrito de contestación lo dispuesto en el artículo 77 y en el artículo 78, apartados 3 a 5.
3. En caso de que concurran circunstancias excepcionales, el plazo previsto en el apartado 1 podrá ser prorrogado por el Presidente a instancia motivada del demandado.

El presente artículo reproduce, en lo esencial, los términos del artículo 46 del Reglamento de Procedimiento actual.

Los cambios introducidos en el apartado 1 con respecto al régimen actual son los siguientes: se añade una disposición en la letra b), que tiene en cuenta el texto de los artículos 57, apartado 2, y 77, apartado 2, del presente proyecto, y se adaptan las disposiciones de las letras c) y e), por razones de coherencia con el artículo 124 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

El actual apartado 2 del artículo 46 del Reglamento de Procedimiento, que obliga a presentar al juez de primera instancia la reclamación administrativa previa en los asuntos de función pública, ha dejado de ser de actualidad y, por tanto, se ha suprimido.

En cuanto a la disposición del apartado 2, se ha ampliado su ámbito de aplicación con respecto al del artículo 46, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento vigente. En efecto, mientras que este último texto no contempla la subsanación de la demanda ni su eventual inadmisibilidad por defecto de forma establecida en el apartado 6 del artículo 44 de ese Reglamento, el artículo 81 del presente proyecto se remite al apartado 5 del artículo 78.

Por último, el texto del apartado 3 concuerda en lo esencial con el del artículo 46, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 82

Transmisión de documentos

Cuando el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión Europea no sean partes en un asunto, el Tribunal General les transmitirá una copia de la demanda y del escrito de contestación, sin anexos, para que puedan comprobar si se alega la inaplicabilidad de uno de sus actos normativos con arreglo al artículo 277 TFUE.

El artículo 82 concuerda, en lo esencial, con el artículo 24, apartado 7, del Reglamento de Procedimiento actual.

El texto del artículo, incluido el título, es el del artículo 125 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, salvo en la identidad del Tribunal de que se trata.

Artículo 83

Réplica y dúplica

1. La demanda y el escrito de contestación podrán completarse con una réplica del demandante y una dúplica del demandado, salvo que el Tribunal General decida que un segundo turno de escritos de alegaciones no es necesario porque el contenido de los autos del asunto es suficientemente completo.
2. Cuando el Tribunal General decida que el segundo turno no es necesario, podrá aún autorizar a las partes principales a completar los autos del asunto, previa solicitud motivada presentada por el demandante en un plazo de dos semanas a partir de la notificación de esta decisión.
3. El Presidente fijará los plazos en que se presentarán estos escritos procesales, precisando, en su caso, las cuestiones sobre las que debería versar la réplica o la dúplica.

El artículo 83 reproduce el texto del actual artículo 47 del Reglamento de Procedimiento, pero estructurándolo en tres apartados.

Conviene recordar que el procedimiento escrito «simplificado», que permite que el Tribunal General resuelva sin un segundo turno de escritos de alegaciones, existe desde el 1 de febrero de 2001, fecha de entrada en vigor de la versión actual del artículo 47 del Reglamento de Procedimiento.

El apartado 3 se ha completado, sin embargo, con una frase que dispone que el Presidente podrá precisar las cuestiones sobre las que deberían versar la réplica o la dúplica. Esta adición se debe al interés en conseguir que la fase escrita del procedimiento sea lo más útil posible. Así, si al término de un primer turno de escritos de alegaciones, los puntos críticos del asunto ya están claramente identificados, el Presidente puede instar a las partes a que se concentren en ellos, lo que, por un lado, permite evitar que las partes desarrollen en la réplica y en la dúplica puntos sobre los que el Tribunal General se estima suficientemente informado y, por otro lado, contribuye a que el asunto se tramite con más rapidez, puesto que en el segundo turno de escritos de alegaciones sólo se tratarán las cuestiones aún abiertas. Esta modificación confiere, además, una competencia adicional al Presidente de Sala, como parte de la propuesta general de traspasar ciertas competencias del Tribunal General a los Presidentes de Sala. Esta adición se inspira en el artículo 126, apartado 2, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Merece la pena subrayar que, con arreglo a la estructura general de esta disposición, el segundo turno de escritos de alegaciones sigue siendo la norma de principio en los recursos directos. Esto no es sino el estricto reflejo de la realidad judicial, puesto que, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, se ha decidido permitir un segundo turno de escritos de alegaciones en más de un 95 % de los recursos directos. Esta situación se debe principalmente a la naturaleza de los recursos y a la complejidad de los autos, pues el segundo turno de escritos de alegaciones facilita que el asunto quede listo para ser juzgado y evita, en buena medida, que el Tribunal General se vea obligado a recurrir, en una fase posterior del procedimiento, a las diligencias de ordenación del procedimiento para obtener aclaraciones de las partes. Pero tal situación se debe igualmente, en numerosos casos, al hecho de que la traducción a la lengua de las deliberaciones de la demanda o del escrito de contestación no está disponible en el momento de adoptar la decisión sobre el segundo turno de escritos de alegaciones (la longitud de los escritos resulta decisiva a este respecto, pues, por lo general, la traducción de una demanda de más de 50 páginas por parte del servicio de traducción de la institución no estará disponible hasta que hayan pasado más de dos meses) y a la actual carga de trabajo del Tribunal, que hace que al Juez Ponente le resulte con frecuencia imposible proceder a un primer análisis jurídico de los autos lo bastante profundo como para permitirle pronunciarse rápidamente sobre la dispensa del segundo turno de escritos de alegaciones, dado que los recursos existentes se destinan prioritariamente a la tramitación de los asuntos en los que ya se ha cerrado la fase escrita del procedimiento.

Capítulo Cuarto
DE LOS MOTIVOS, DE LAS PRUEBAS Y DE LA ADAPTACIÓN DE LA DEMANDA

El texto vigente contiene disposiciones relativas a los motivos nuevos (véase el artículo 48, apartado 2) y a la proposición de prueba (véase el artículo 48, apartado 1), pero ninguna norma procesal regula la adaptación de la demanda en el curso del proceso.

En este nuevo capítulo existen, pues, tres disposiciones que tratan, respectivamente, de los motivos nuevos, de las pruebas y de la proposición de prueba y, por último, de la adaptación de la demanda en el curso del proceso.

Por razones de coherencia con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (artículos 127 y 128), los artículos relativos a los motivos nuevos (artículo 84), por una parte, y a las pruebas y a la proposición de prueba (artículo 85), por otra, aparecen en el orden elegido por el Tribunal de Justicia. El artículo sobre la adaptación de las pretensiones, específico del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, viene en último lugar (artículo 86).

Artículo 84
Motivos nuevos

1. En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
2. Si ha lugar, los motivos nuevos se presentarán en el segundo turno de escritos de alegaciones y se identificarán como tales. Cuando las razones de hecho y de Derecho que justifiquen la presentación de motivos nuevos se conozcan tras el segundo turno de escritos de alegaciones o después de que se haya decidido no autorizar ese segundo turno, la parte principal afectada presentará los motivos nuevos tan pronto como tenga conocimiento de esas razones.
3. Sin perjuicio de la futura decisión del Tribunal General sobre la admisibilidad de los motivos nuevos, el Presidente ofrecerá a las demás partes la posibilidad de contestar a esos motivos.

Este artículo retoma en su apartado 1 el texto del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento vigente.

Los apartados 2 y 3 contienen en cambio novedades destinadas a aclarar las normas aplicables.

En lo que respecta al apartado 2, el afán de clarificación del Tribunal General, en interés tanto de las partes como de una buena administración de la justicia, se traduce, en el aspecto formal, en la identificación del motivo nuevo que se haya presentado en el segundo turno de escritos de alegaciones, identificación destinada a facilitar la toma de posición de cualquier otra parte del litigio, y, en el aspecto temporal, en la necesidad de presentar el motivo nuevo, bien en el segundo turno de escritos de alegaciones, bien tan pronto como se conozcan las

razones que justifican presentarlo. La presentación de un motivo en el segundo turno de escritos de alegaciones o en una etapa posterior constituye una prerrogativa de las partes principales, sin que se reconozca al coadyuvante el derecho a presentar motivos nuevos.

El apartado 3 modifica la norma actual, según la cual la decisión sobre la admisibilidad del motivo se adoptará en la sentencia que ponga fin al proceso (artículo 48, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento vigente). En efecto, la redacción propuesta, que coincide en este punto con la del artículo 127, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se limita a mencionar «la futura decisión del Tribunal General» y permite así, con flexibilidad y eficacia, declarar la inadmisibilidad de un motivo nuevo, bien cuando el procedimiento se encuentre todavía en su fase escrita u oral, bien en la resolución que ponga fin al proceso. La competencia para decidir, tanto sobre la admisibilidad del motivo nuevo como sobre su fundamentación, sigue correspondiendo al Tribunal General.

Por último, el apartado 3 dispone que el Presidente ofrecerá a las demás partes la posibilidad de contestar a estos motivos, a diferencia del texto vigente, que se limita a permitir que el Presidente lo haga; esta modificación persigue el objetivo de respetar el principio de contradicción y de garantizar la igualdad de trato entre los justiciables. No es preciso que las observaciones relativas a estos motivos se presenten por escrito, sino que pueden formularse en la vista oral.

Artículo 85

Pruebas y proposición de prueba

1. Las pruebas y la proposición de prueba se presentarán en el primer turno de escritos de alegaciones.
2. En la réplica y en la dúplica las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
3. Excepcionalmente, las partes principales podrán aún aportar o proponer pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
4. Sin perjuicio de la futura decisión del Tribunal General sobre la admisibilidad de las pruebas aportadas o de las proposiciones de prueba formuladas en virtud de los apartados 2 y 3, el Presidente ofrecerá a las demás partes la posibilidad de pronunciarse sobre ellas.

Este artículo regula la presentación de pruebas y la proposición de prueba efectuadas por las partes principales durante el proceso. Colma, pues, las carencias del artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento vigente y precisa así las normas aplicables, estableciendo una norma de principio para la presentación de pruebas y la proposición de prueba, indicando expresamente que la presentación de pruebas o la proposición de prueba tras el primer turno de escritos de alegaciones están sometidas al requisito de justificar el retraso con que se realizan y disponiendo que debe ofrecerse a las demás partes la posibilidad de pronunciarse sobre estas nuevas pruebas.

A estos efectos, el artículo 85 establece las fases en que es posible presentar y proponer pruebas, distinguiendo el primer turno de escritos de alegaciones (apartado 1), el segundo turno de escritos de alegaciones (apartado 2) y la fase final en la que una parte principal puede todavía presentar o proponer pruebas, algo que no estará ya autorizada a hacer tras la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento (apartado 3), sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la reapertura de la fase oral conforme a lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, letra c), del presente proyecto.

Al tiempo que pone de relieve que las situaciones en que se presentan o proponen pruebas tras el primer turno de escritos de alegaciones constituyen una excepción a la regla general (apartado 2) y que sólo pueden admitirse en circunstancias excepcionales (apartado 3), el presente proyecto no excluye la posibilidad de que influyan en el desarrollo del procedimiento. El artículo 85 autoriza, pues, estas proposiciones de prueba o la presentación de tales pruebas, pero las supedita a una motivación expresa del retraso con que se han efectuado, como exige una reiterada jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, y de 14 de abril de 2005, Gaki-Kakouri/Tribunal de Justicia, C-243/04 P, no publicada en la Recopilación); dispone además, por respeto del principio de contradicción, que el Presidente fijará un plazo a las demás partes para que se pronuncien sobre tales pruebas (apartado 4). Aunque el Presidente debe siempre ofrecer a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones sobre las pruebas presentadas, a fin de respetar el principio de contradicción y de garantizar la igualdad de trato entre los justiciables mediante una aplicación coherente del texto por parte de los Presidentes de las diferentes formaciones jurisdiccionales, no se exige en cambio que tales observaciones se presenten por escrito, sino que pueden formularse en la vista oral.

Este artículo ofrece una síntesis de las actuales disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (artículo 128) y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública (artículo 42), transcribe la jurisprudencia relativa al control del Tribunal General sobre la justificación ofrecida para la presentación tardía (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2005, Gaki-Kakouri/Tribunal de Justicia, C-243/04 P, no publicada en la Recopilación, apartado 33), y constituye la respuesta del Tribunal General a una necesidad de clarificación cada día más evidente, a la vista de las dificultades recurrentes en el tratamiento de las pruebas y de las proposiciones de prueba provocadas por las lagunas normativas actuales.

Artículo 86

Adaptación de la demanda

1. Cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad.
2. La adaptación de la demanda deberá efectuarse mediante escrito separado y dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para la interposición de un recurso de anulación contra el acto que justifica la adaptación de la demanda.

3. El escrito de adaptación de la demanda contendrá:
 - a) las pretensiones adaptadas;
 - b) si ha lugar, los motivos y alegaciones adaptados;
 - c) si ha lugar, las pruebas y la proposición de prueba relacionadas con la adaptación de las pretensiones.
4. El escrito de adaptación de la demanda irá acompañado de una copia del acto que justifique la adaptación de la demanda. Si no se presentara dicha copia, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para presentarla. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de este requisito comporta la inadmisibilidad del escrito de adaptación de la demanda.
5. Sin perjuicio de la futura decisión del Tribunal General sobre la admisibilidad del escrito de adaptación de la demanda, el Presidente fijará un plazo al demandado para que conteste al escrito de adaptación de la demanda.
6. En su caso, el Presidente fijará un plazo a los coadyuvantes para que completen sus escritos de formalización de la intervención a la vista del escrito de adaptación de la demanda y del escrito de contestación al mismo. A estos efectos, tales escritos serán notificados simultáneamente a los coadyuvantes.

Con la inclusión de este nuevo artículo, el Tribunal General persigue unos objetivos de claridad, de rapidez y de seguridad jurídica. Además, al consagrar el derecho a adaptar la demanda cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el Tribunal General ofrece una elección en materia de estrategia judicial al demandante, que conservará el control de los límites de su litigio al poder optar, bien por la adaptación de su demanda, bien por la interposición de un recurso de anulación contra el nuevo acto.

La necesidad de esta norma se reveló imperiosa en 2011, en el contexto de la tramitación de un gran número de recursos contra los actos de las instituciones de la Unión que imponían medidas restrictivas a ciertas personas o entidades. En efecto, las instituciones autoras de los actos de imposición de las medidas restrictivas adoptan con regularidad nuevos actos destinados a actualizar las listas que recogen los nombres de las personas o entidades afectadas. Ahora bien, la adopción de estos nuevos actos en el curso del proceso produjo el efecto de multiplicar la presentación de solicitudes de adaptación de las pretensiones. Así, de entre los 90 asuntos de «medidas restrictivas» pendientes a 31 de diciembre de 2011, en 26 de ellos se presentaron un total de 41 solicitudes de adaptación de las pretensiones.

Por un lado, la frecuencia y el alto número de adaptaciones de las pretensiones en este tipo de asuntos y la repercusión, muy negativa, de estas repetidas adaptaciones en la duración de la fase escrita del procedimiento y, por otro lado, la inseguridad jurídica creada por la inexistencia de dispositivo procesal alguno –tan perjudicial para las partes como para el Tribunal–, en particular, en lo que respecta al plazo en que debe realizarse la adaptación de la demanda tras la adopción del nuevo acto y a la necesidad de solicitar al Tribunal General autorización para adaptar la demanda antes de adaptarla efectivamente, son factores que

llevaron al Tribunal General a iniciar una reflexión sobre la mejor manera de tratar estas adaptaciones en el curso del proceso.

En una primera fase, el Tribunal General reaccionó decidiendo, en 2012, adoptar un enfoque que consiste en unir sistemáticamente a los autos la solicitud de adaptación de las pretensiones y el escrito que contiene la adaptación de éstas, precisando expresamente, como indican los escritos de la Secretaría a las partes, que la decisión sobre la admisibilidad del escrito de adaptación se adoptará con posterioridad. Gracias a este enfoque, son menos frecuentes las situaciones en que las adaptaciones de la demanda en el curso del proceso se apilan unas sobre otras, se ha contenido el alargamiento de la duración de la fase escrita del procedimiento y los representantes de las partes no se llaman a engaño sobre las consecuencias jurídicas de la decisión del Tribunal General de unir a los autos el escrito de adaptación de las pretensiones.

Pero ha llegado el momento de pasar a una segunda fase, en la que se recoja, en el Reglamento de Procedimiento, una disposición general que codifique, para todos los recursos directos, una práctica judicial que es conforme al principio de buena administración de la justicia, respeta el requisito de economía procesal y garantiza la seguridad jurídica.

El artículo 86 del presente proyecto consta de seis apartados.

El apartado 1 otorga al demandante el derecho de adaptar su demanda en el curso del proceso, siempre que concurren dos requisitos. El primero es sustancial: el acto cuya anulación se ha solicitado debe haber sido sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto. El segundo requisito es temporal: la adaptación de la demanda ha de producirse antes de la declaración de terminación de la fase oral o antes de que se adopte la decisión de resolver sin fase oral.

Conviene subrayar que este apartado 1 se refiere únicamente a la adaptación de la demanda y no establece, pues, un procedimiento previo de tramitación de una eventual solicitud de adaptación.

El apartado 2 precisa el plazo en el que debe efectuarse la adaptación de la demanda. Como el demandante tiene la opción de adaptar su demanda o de interponer un recurso contra el nuevo acto, el paralelismo de las situaciones justifica aplicar un mismo plazo. Este plazo sólo puede ser, pues, el establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para la interposición de un recurso de anulación. Por lo demás, el hecho de que el plazo de adaptación de la demanda tenga naturaleza legal permite garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas y evitar toda discriminación o tratamiento arbitrario a la hora de impartir justicia.

El apartado 3 indica el contenido del escrito de adaptación de la demanda, precisando que, aunque las pretensiones de la demanda deben ser adaptadas siempre, los motivos y alegaciones sólo lo serán «si ha lugar». Del mismo modo, las pruebas y la proposición de prueba relacionadas con la adaptación de las pretensiones sólo se presentarán «si ha lugar».

El apartado 4 contempla un supuesto de inadmisibilidad del escrito de adaptación de las pretensiones. Sin establecer un requisito formal cuyo incumplimiento se sancionaría con la inadmisibilidad del escrito de adaptación de la demanda, esta disposición obliga a respetar una regla cuya infracción dará lugar, en un primer momento, a la subsanación del escrito.

Únicamente en el caso de que no se produzca la subsanación decidirá el Tribunal General, en un segundo momento, si la inobservancia del requisito de aportar copia del acto que justifica la adaptación de la demanda comporta la inadmisibilidad del escrito de adaptación.

Los apartados 5 y 6 disponen que, tras la presentación del escrito de adaptación de la demanda, el demandado tendrá la posibilidad de contestar a dicho escrito y a continuación, en su caso, los coadyuvantes tendrán la posibilidad de completar sus escritos de formalización de la intervención.

Merece la pena subrayar una aclaración muy importante recogida en el apartado 5, en el que se dispone expresamente que la tramitación del escrito de adaptación de la demanda (su incorporación a los autos y su notificación al demandado y, en su caso, a los coadyuvantes) no afecta en absoluto a la futura decisión del Tribunal General sobre la admisibilidad de dicho escrito.

Capítulo Quinto
DEL INFORME PRELIMINAR

Artículo 87
Informe preliminar

1. Cuando la fase escrita del procedimiento se declare terminada, el Presidente fijará la fecha en la que el Juez Ponente deberá presentar al Tribunal General un informe preliminar.
2. El informe preliminar contendrá un análisis de las cuestiones pertinentes de hecho y de Derecho que suscita del recurso, así como propuestas sobre la procedencia de practicar diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba, sobre la celebración de la fase oral del procedimiento, sobre la eventual remisión del asunto a la Gran Sala o a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces y sobre la eventual asignación del asunto a un Juez único.
3. El Tribunal General adoptará las decisiones que procedan respecto al curso que deba darse a las propuestas del Juez Ponente y, en su caso, decidirá la apertura de la fase oral del procedimiento.

El artículo 87 concuerda, en lo esencial, con el artículo 52 del Reglamento de Procedimiento actual.

El apartado 1 del artículo 87 es más breve que el apartado correspondiente del actual artículo 52, ya que agrupa en una sola frase todos los supuestos de declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento. Este cambio se inspira en el artículo 59, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

El apartado 2 del artículo 87 es, en cambio, más largo que el artículo 52, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento actual. En efecto, aquí se expone más claramente el contenido del informe preliminar y se añade una referencia expresa a la necesidad de que el Juez Ponente precise en él si desea que se celebre una vista o que el asunto sea asignado a un Juez único.

El apartado 3 completa el texto del artículo 52, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento vigente con una referencia a la competencia del Tribunal General para decidir la apertura de la fase oral del procedimiento.

Capítulo Sexto
DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS DE PRUEBA

Este capítulo sexto corresponde al capítulo tercero del título segundo del Reglamento de Procedimiento vigente, pues se refiere, como este último, a las diligencias de ordenación del procedimiento y a las diligencias de prueba. Sin embargo, se han reorganizado sus disposiciones, la mayoría de las cuales han sido reescritas, y se ha enriquecido el capítulo con nuevos artículos incluidos en una sección autónoma, consagrada al tratamiento confidencial de la información, las piezas de convicción y los documentos en el marco de las diligencias de prueba.

Con estos nuevos artículos se pretende dotar al Tribunal General de un dispositivo procesal adaptado a la realidad de los litigios relativos a recursos directos, en cuyo contexto han aparecido situaciones nuevas que llevan regularmente al Tribunal a practicar diligencias de prueba y le obligan a ponderar el respeto del principio de contradicción y la protección de datos confidenciales o secretos.

Integran este capítulo unas disposiciones generales y tres secciones.

Artículo 88
Disposiciones generales

1. Las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba podrán practicarse o modificarse en cualquier etapa del procedimiento, bien de oficio, bien a instancia de una parte principal.
2. La solicitud a la que se hace referencia en el apartado 1 deberá indicar con precisión el objeto de las diligencias solicitadas y las razones que las justifiquen. Cuando esta solicitud se formule tras el primer turno de escritos de alegaciones, la parte que presente la solicitud deberá indicar las razones por las que no pudo presentarla anteriormente.
3. En caso de solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento o de diligencias de prueba, el Presidente ofrecerá a las demás partes la posibilidad de pronunciarse al respecto.

Este artículo constituye una novedad.

Con objeto de favorecer la legibilidad del capítulo, este artículo agrupa, con ciertas modificaciones, las disposiciones generales recogidas en los artículos 49 y 64, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento vigente.

El apartado 1 dispone que las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba pueden practicarse o modificarse en cualquier etapa del procedimiento, a iniciativa del Tribunal General o de una parte principal. El nuevo texto no contempla la posibilidad de que una parte coadyuvante proponga alguna de estas diligencias, pues el

Tribunal considera que las partes principales deben conservar el control del litigio que las enfrenta.

El apartado 2 precisa el contenido de la solicitud que debe presentar la parte principal, a fin de permitir que el Tribunal General valore mejor la necesidad de la diligencia para la continuación del procedimiento. Además, aunque tal solicitud puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, se exige a la parte principal que ofrezca explicaciones si la presenta después del primer turno de escritos de alegaciones.

Por último, el apartado 3 establece una norma de principio, que por lo demás se ajusta a la interpretación constante del artículo 64, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento vigente, según la cual debe ofrecerse siempre a las demás partes la posibilidad de pronunciarse sobre la solicitud presentada por la parte principal.

Sección 1. De las diligencias de ordenación del procedimiento

Artículo 89

Objeto

1. Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada.
2. Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto, en particular:
 - a) dar el curso correcto a la fase escrita u oral del procedimiento y facilitar la práctica de las pruebas;
 - b) determinar los extremos sobre los que las partes deberán completar sus alegaciones o acerca de los cuales deba practicarse prueba;
 - c) precisar el alcance de las pretensiones así como de los motivos y alegaciones de las partes y aclarar las cuestiones controvertidas entre éstas;
 - d) facilitar la solución amistosa de los litigios.
3. Las diligencias de ordenación del procedimiento podrán consistir, en particular, en:
 - a) formular preguntas a las partes;
 - b) instar a las partes a que se pronuncien por escrito sobre determinados aspectos del litigio;
 - c) pedir información a las partes o a los terceros mencionados en el artículo 24, párrafo, segundo, del Estatuto;
 - d) requerir a las partes la presentación de cualquier documento relacionado con el asunto;

- e) instar a las partes a que concentren sus informes orales en una o varias cuestiones específicas;
- f) convocar a reuniones a las partes.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del artículo 64, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento actual. Como sólo trata del objeto de las diligencias de ordenación del procedimiento, la norma relativa a la competencia para acordarlas, que figura en el apartado 1 del artículo actual, ha sido transferida a otro artículo (artículo 90).

En lo que respecta al apartado 3, se ha precisado su contenido. En primer lugar establece, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto, que el Tribunal General puede pedir información a los terceros mencionados en el artículo 24 del Estatuto [véase la letra c)]. En segundo lugar, siguiendo el modelo del artículo 61, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, hace especial hincapié en la posibilidad de instar a las partes a que concentren sus informes orales en determinados aspectos del litigio, dedicando una letra específica, la e), a esta posibilidad, que figura de modo menos explícito en el artículo 64, apartado 3, letra b), del Reglamento de Procedimiento vigente. En tercer lugar, se ha simplificado la redacción de la letra f) para referirse a la convocatoria de las partes, debidamente representadas, a reuniones informales con el Tribunal General.

Artículo 90 **Procedimiento**

1. Las diligencias de ordenación del procedimiento serán acordadas por el Tribunal General.
2. Si el Tribunal acuerda unas diligencias de ordenación del procedimiento y no las practica él mismo, encargará de ello al Juez Ponente.

Esta disposición retoma en lo esencial el contenido de los apartados 1 y 5 del artículo 64 del Reglamento de Procedimiento vigente, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la inclusión de una disposición relativa al objeto de las diligencias de ordenación (artículo 89 del presente proyecto) y la supresión del Pleno como formación jurisdiccional.

Al igual que en la actualidad, la competencia para acordar diligencias de ordenación del procedimiento recae en el Tribunal General y su forma sigue siendo la de una simple decisión.

Sección 2. De las diligencias de prueba

Artículo 91 **Objeto**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto, serán admisibles como diligencias de prueba:

- a) la comparecencia personal de las partes.
- b) la solicitud de información o de presentación de documentos relativos al asunto dirigida a una parte;
- c) la solicitud de presentación de los documentos a los que una institución ha denegado el acceso, en el contexto de un recurso sobre la legalidad de tal denegación de acceso;
- d) el interrogatorio de testigos;
- e) el dictamen pericial;
- f) el reconocimiento judicial.

Este artículo retoma el texto del actual artículo 65 del Reglamento de Procedimiento, pero lo precisa indicando, en la letra b), que es a una parte a quien se solicitará la información o la presentación de documentos, y lo completa añadiendo el supuesto contemplado en la letra c). Sobre este último punto, el artículo 91 del presente proyecto se limita a extraer la consecuencia lógica de la referencia a esta medida en el artículo 67, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento vigente, que se mantiene en el artículo 104 del presente proyecto.

Artículo 92 **Procedimiento**

1. El Tribunal General determinará mediante auto las diligencias de prueba que considere convenientes y los hechos que deben probarse.
2. El Tribunal General oirá a las partes antes de acordar la práctica de las diligencias de prueba a que se refieren las letras d) a f) del artículo 91.
3. Sólo podrá ordenarse la diligencia de prueba contemplada en el artículo 91, letra b), cuando la parte a la que concierna esa diligencia no haya ejecutado lo solicitado en una diligencia de ordenación del procedimiento previamente adoptada al efecto, o cuando dicha parte lo solicite expresamente, justificando la necesidad de que la diligencia adopte la forma de un auto de instrucción. El auto de instrucción podrá disponer que la información y los documentos que el Tribunal General obtenga a raíz del auto sólo podrán ser consultados por los representantes de las partes en Secretaría, sin poder hacer copias.
4. Si el Tribunal acuerda unas diligencias de prueba y no las practica él mismo, encargará de ello al Juez Ponente.
5. El Abogado General participará en las diligencias de prueba.
6. Las partes podrán asistir a las diligencias de prueba.
7. Podrán presentarse pruebas en contrario y ampliarse la proposición de prueba.

Los apartados 1, 2 y 7 concuerdan con el artículo 66, apartados 1, párrafo primero, y 2, del Reglamento de Procedimiento vigente. Los apartados 4, 5 y 6 concuerdan con el actual artículo 67, apartados 1, párrafos segundo y tercero, y 2. Al igual que en el artículo 90 del presente proyecto, se ha eliminado la referencia al Pleno como formación jurisdiccional.

Lo que constituye una novedad es, pues, el apartado 3, que, al tiempo que expone la práctica judicial, amplía a un nuevo supuesto la utilización de las diligencias de prueba. Por una parte, es evidente que el Tribunal General sólo ordena la presentación de un documento cuando éste no ha sido comunicado a raíz de una diligencia de ordenación del procedimiento: como la solicitud de comunicación del documento no dio resultado, el Tribunal ordena que sea presentado. Esta secuencia permite que, en una primera fase, la parte de que se trata explique las razones por las que no puede comunicar el documento, generalmente relacionadas con el carácter confidencial o secreto de los datos que éste contiene. Ahora bien, la transmisión al Tribunal General de un documento en ejecución de una diligencia de ordenación de procedimiento lleva aparejada la notificación del mismo a la otra parte principal. En el caso de que la parte no comunique el documento que se le ha solicitado, corresponde al Tribunal decidir si procede ordenar su presentación. El cambio de naturaleza de la diligencia utilizada ofrece garantías a esa parte, puesto que el documento presentado en ejecución de la diligencia de prueba no será comunicado automáticamente a la otra parte.

Por lo demás, si una parte informa al Tribunal General de que no podrá comunicar un documento en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento y ofrece explicaciones al respecto, resulta justificado recurrir directamente a la diligencia de prueba, sin solicitar previamente el documento mediante una diligencia de ordenación del procedimiento. De hecho, en los litigios en materia de competencia, la Comisión ya alega con regularidad que ciertos documentos del expediente administrativo obtenidos gracias al programa de clemencia no pueden ser comunicados al Tribunal, si no es en ejecución de una diligencia de prueba.

Por otra parte, la segunda frase del apartado 3 se ha añadido en respuesta a la situación en la que los documentos han sido presentados a raíz de unas diligencias de prueba. El auto que ordene la diligencia de prueba puede disponer, en efecto, que los documentos presentados podrán ser consultados en los locales de la Secretaría del Tribunal por los representantes de las demás partes, pero que estos últimos no podrán hacer copias de los documentos. Estas reglas de procedimiento más estrictas pretenden sobre todo preservar la eficacia del programa de clemencia de la Comisión. Con esta frase se codifica una práctica judicial bien asentada, que, sólo en 2012, ha sido aplicada en seis ocasiones (autos de 27 de marzo de 2012, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Comisión, T-550/08, de 12 de junio de 2012, H&R ChemPharm/Comisión, T-551/08, de 6 de septiembre de 2012, Faci/Comisión, T-46/10, de 11 de septiembre de 2012, Soliver/Comisión, T-68/09, de 12 de octubre de 2012, Hansen & Rosenthal y H&R Wax Company Vertrieb/Comisión, T-544/08 y de 5 de noviembre de 2012, Repsol Lubricantes y Especialidades y otros/Comisión, T-562/08).

Artículo 93
Citación de testigos

1. Los testigos cuyo interrogatorio se considere necesario serán citados en virtud de un auto, contemplado en el artículo 92, apartado 1, que contendrá:
 - a) los nombres, condición y domicilio de los testigos;
 - b) la fecha y el lugar en que se practicará el interrogatorio;
 - c) la indicación de los hechos que deben probarse y de los testigos que deben ser interrogados sobre cada hecho.
2. Los testigos serán citados por el Tribunal General, en su caso tras el depósito de la provisión de fondos contemplada en el artículo 100, apartado 1.

En su apartado 1, el presente artículo retoma, en lo esencial, el texto del apartado 2 del actual artículo 68, y en su apartado 2 el texto del apartado 4 del artículo 66 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Las nuevas «Disposiciones generales» (véase el artículo 88) y el artículo 92, apartado 1, del presente proyecto permiten simplificar el texto del presente artículo, en comparación con el del actual artículo 68 del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 94
Práctica del interrogatorio de testigos

1. Después de verificar la identidad de los testigos, el Presidente les indicará que deben refrendar sus declaraciones en la forma establecida en el apartado 5 y en el artículo 97.
2. Los testigos serán oídos por el Tribunal General, previa citación de las partes. Tras la declaración de los testigos, el Presidente podrá formularles preguntas, a instancia de parte o de oficio.
3. La misma facultad tendrán los demás Jueces y el Abogado General.
4. Los representantes de las partes, bajo la autoridad del Presidente, podrán formular preguntas a los testigos.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97, tras su declaración, el testigo prestará el siguiente juramento:

«Juro haber dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.»
6. El Tribunal General, tras oír a las partes principales, podrá dispensar al testigo de prestar juramento.

Este artículo reproduce, sin grandes cambios, el texto de los apartados 4 y 5 del artículo 68 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Habida cuenta del texto del artículo 102 del presente proyecto, no se ha retomado el contenido del apartado 6 del actual artículo 68, relativo al acta del interrogatorio del testigo.

Artículo 95 **Obligaciones de los testigos**

1. Los testigos regularmente citados estarán obligados a cumplir con la citación y comparecer al acto del interrogatorio.
2. Cuando un testigo regularmente citado no comparezca, sin justa causa, ante el Tribunal General, éste podrá imponerle una sanción pecuniaria cuyo importe máximo será de 5.000 euros y ordenar una segunda citación del testigo a expensas de éste.
3. Igual sanción podrá imponerse al testigo que, sin justa causa, se niegue a declarar o a prestar juramento.

El artículo 95 del presente proyecto reproduce, en lo esencial, los términos del artículo 69 del actual Reglamento de Procedimiento. Sin embargo, a diferencia de este último artículo, en el presente proyecto no se hace ya referencia a la declaración solemne que sustituye al juramento, que parece algo anacrónica y desfasada con respecto al Estatuto, mientras que la posibilidad de que un testigo acredite causa justa para que se anule la sanción pecuniaria que se le impuso queda comprendida en el apartado 2, gracias a la inclusión de los términos «sin justa causa».

[Explicación de carácter terminológico no pertinente para la versión ES]

Las modificaciones efectuadas en este artículo se inspiran en el texto del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 96 **Dictamen pericial**

1. El auto que nombre al perito precisará su misión y el plazo para la presentación de su dictamen.
2. Tras la presentación del dictamen y su notificación a las partes, el Tribunal General podrá ordenar que sea oído el perito, previa citación de las partes. El Presidente podrá formular preguntas al perito, a instancia de parte o de oficio.
3. La misma facultad tendrán los demás Jueces y el Abogado General.
4. Los representantes de las partes, bajo la autoridad del Presidente, podrán formular preguntas al perito.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97, tras la presentación de su dictamen, el perito prestará el siguiente juramento:

«Juro haber cumplido mi función en conciencia y con toda imparcialidad.»

6. El Tribunal General, tras oír a las partes principales, podrá dispensar al perito de prestar juramento.

El artículo 96 del presente proyecto, relativo al dictamen pericial, retoma el contenido del artículo correspondiente del actual Reglamento de Procedimiento, a saber, el artículo 70, apartados 1, 5 y 6, pero simplificándolo. Habida cuenta de lo dispuesto en los artículos 88, 91, letra e), y 92, apartado 1, del presente proyecto, la supresión de la primera frase del apartado 1 del actual artículo 70 resulta justificada.

La simplificación propuesta y las adaptaciones del texto se inspiran, en gran medida, en los artículos 70 y 71 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 97

Juramento de testigos y peritos

1. El Presidente exhortará a las personas que deban prestar juramento ante el Tribunal General en calidad de testigos o de peritos a que digan la verdad o a que cumplan su función en conciencia y con toda imparcialidad y les apercibirá sobre las consecuencias penales previstas en su legislación nacional en caso de violación de este deber.
2. Los testigos y peritos prestarán el juramento previsto, respectivamente, en el artículo 94, apartado 5, y en el artículo 96, apartado 5, o en la forma prevista en su legislación nacional.

Buscando la máxima claridad y haciendo eco a lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 53, se propone aquí mantener sin cambios el contenido de los apartados 1 y 2 del actual artículo 71 del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 98

Violación del juramento de testigos y peritos

1. En caso de falso testimonio o de falsa declaración de un perito cometida bajo juramento ante él, el Tribunal General podrá denunciarlo ante la autoridad competente, mencionada en el reglamento adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales tengan competencia penal a estos efectos.
2. El Secretario se encargará de transmitir la decisión del Tribunal General. En ella se expondrán los hechos y las circunstancias en que se base la denuncia.

Esta disposición retoma los términos del artículo 72 del Reglamento de Procedimiento vigente, introduciendo sin embargo en ellos una modificación impuesta por las circunstancias. En efecto, como el artículo 207 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que las normas relativas a las denuncias de violación del juramento de testigos y peritos figurarán en un reglamento adicional, es a este último Reglamento al que procede remitirse.

Artículo 99

Recusación de un testigo o de un perito

1. Si una de las partes recusara a un testigo o a un perito por incapacidad, indignidad o cualquier otra causa o si un testigo o un perito se negara a declarar o a prestar juramento, el Tribunal General resolverá lo procedente.
2. La recusación de un testigo o de un perito habrá de proponerse dentro de las dos semanas siguientes a la notificación del auto que cite al testigo o nombre al perito, mediante escrito que contenga las causas de recusación y la proposición de prueba.

Dejando aparte la supresión de la referencia a la declaración solemne que sustituye al juramento, el artículo 99 reproduce el texto del actual artículo 73 del Reglamento de Procedimiento.

La modificación efectuada se inspira en el artículo 72 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 100

Gastos de testigos y peritos

1. Cuando el Tribunal General ordene un interrogatorio de testigos o un dictamen pericial, podrá requerir de las partes principales, o de una de ellas, una provisión de fondos para garantizar la cobertura de los gastos de los testigos o peritos.
2. Los testigos y peritos tendrán derecho al reembolso de sus gastos de desplazamiento y estancia. La caja del Tribunal General les podrá conceder un anticipo sobre los mismos.
3. Los testigos tendrán derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y los peritos a honorarios por su trabajo. Los importes que les correspondan por estos conceptos les serán abonados por la caja del Tribunal General tras el cumplimiento de sus deberes o de su función.

Al igual que el Tribunal de Justicia en el artículo 73 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General ha estimado oportuno, para más claridad y transparencia, regular en una sola disposición la cuestión de los gastos relacionados con los interrogatorios de testigos o los dictámenes periciales. El artículo 100 del presente proyecto agrupa así unas disposiciones actualmente dispersas en tres artículos distintos, a saber, el artículo 68,

apartado 3, el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, y el artículo 74 del Reglamento de Procedimiento, modificando apenas su contenido.

Artículo 101
Comisión rogatoria

1. El Tribunal General, a instancia de las partes principales o de oficio, podrá librar comisiones rogatorias para interrogar a testigos o peritos.
2. La comisión rogatoria se acordará mediante auto. El auto contendrá el nombre, condición y domicilio de los testigos o peritos, precisará los hechos sobre los que deben ser oídos, indicará las partes, sus representantes y su dirección y expondrá brevemente el objeto del litigio.
3. El Secretario enviará el auto a la autoridad competente, mencionada en el reglamento adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del Estado miembro en cuyo territorio deban ser oídos los testigos o peritos. En su caso, lo acompañará de una traducción a la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario.
4. La autoridad designada conforme a lo dispuesto en el apartado 3 transmitirá el auto a la autoridad judicial competente según su Derecho interno.
5. La autoridad judicial competente cumplimentará la comisión rogatoria conforme a lo dispuesto en su Derecho interno. Cumplimentada la comisión, la autoridad judicial competente devolverá a la autoridad designada conforme a lo dispuesto en el apartado 3 el auto que contenga la comisión rogatoria, con los documentos que resulten de su cumplimiento y una relación de las costas. Estos documentos se enviarán al Secretario.
6. El Secretario se encargará de que se traduzcan los documentos a la lengua de procedimiento.
7. El Tribunal General asumirá los gastos de la comisión rogatoria, sin perjuicio de cargarlos, en su caso, a las partes principales.

Esta disposición retoma los términos del artículo 75 del Reglamento de Procedimiento vigente, introduciendo sin embargo en ellos una modificación impuesta por las circunstancias. En efecto, como el artículo 207 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que las normas relativas a las comisiones rogatorias figurarán en un reglamento adicional, es a este último Reglamento al que se remite el apartado 3.

La posibilidad de solicitar al Tribunal General el libramiento de una comisión rogatoria queda reservada a las partes principales (apartado 1), que son las que se exponen, en su caso, a cargar con los gastos (apartado 7).

Artículo 102
Actas de las vistas de prueba

1. El Secretario extenderá acta de cada vista de prueba, que será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.
2. Cuando se trate de una vista de interrogatorio de testigos o de peritos, el acta será firmada por el Presidente o el Juez Ponente encargado de practicar el interrogatorio, así como por el Secretario. Antes de dichas firmas, deberá ofrecerse al testigo o al perito la posibilidad de verificar el contenido del acta y de firmarla.
3. El acta será notificada a las partes.

El artículo 102 reproduce, en lo esencial, el contenido de los artículos 68, apartado 6, y 76 del Reglamento de Procedimiento actual. A diferencia de este último artículo, que se limita a establecer, en su apartado 2, que las partes podrán examinar en la Secretaría el acta de la vista de prueba y obtener copias a su cargo, el presente proyecto refuerza los derechos de las partes al disponer que el acta les será notificada por la Secretaría.

Estas modificaciones se inspiran en el artículo 74 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

**Sección 3. Tratamiento de la información, las piezas de convicción y los documentos
confidenciales presentados en el marco de las diligencias de prueba**

Ésta es una nueva sección, nacida de la decisión del Tribunal General de poner de relieve, por afán de claridad, el tratamiento que aplica a la información, a las piezas de convicción y a los documentos confidenciales presentados a raíz de una diligencia de prueba.

El artículo 103 establece el régimen general de tratamiento de la información y de los documentos confidenciales presentados a raíz de una diligencia de prueba.

Con arreglo a este régimen, el Tribunal General comienza por examinar la pertinencia para la resolución del litigio de la información comunicada por la parte principal, así como su carácter confidencial.

Una vez verificada la pertinencia y la confidencialidad de la información o de los documentos, el Tribunal General procede a continuación a ponderar su carácter confidencial y las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y, en particular, del respeto del principio de contradicción. Tras proceder a esa ponderación, el Tribunal General tiene la opción entre transmitir la información a la otra parte principal, en su caso exigiendo a los representantes de esa parte que respeten ciertos compromisos, o bien adoptar un auto motivado que establezca un método que permita que la otra parte principal exponga sus observaciones del mejor modo posible.

Es preciso poner de relieve que esta disposición no se aplica a los supuestos de información o de documentos cuyo carácter confidencial se base en consideraciones imperiosas

relacionadas con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales, tanto en el caso de que dicha información o documentos sean presentados espontáneamente por una parte principal como en el caso de que se presenten en respuesta a una diligencia de prueba decidida por el Tribunal, pues en tales supuestos se aplicará el dispositivo procesal específico establecido en el artículo 105.

El artículo 104 tiene un alcance muy concreto. Esta disposición, que sólo se aplica a los litigios en que se impugne la legalidad de la denegación de acceso a un documento, permite que el Tribunal General no comunique el documento de que se trata a las demás partes. En efecto, la divulgación de dicho documento privaría de objeto al litigio.

Artículo 103

Tratamiento de la información y de los documentos confidenciales

1. Cuando el Tribunal General deba examinar, basándose en razones de hecho y de Derecho invocadas por una parte principal, el carácter confidencial respecto de la otra parte principal de determinada información o de determinados documentos presentados ante él a raíz de una diligencia de prueba, contemplada en el artículo 91, letra b), y que podrían ser pertinentes para resolver el litigio, esa información o esos documentos no se comunicarán a la otra parte mientras se lleve a cabo este examen.
2. Cuando el Tribunal General llegue a la conclusión, tras el examen mencionado en el apartado 1, de que determinada información o determinados documentos presentados ante él son pertinentes para resolver el litigio y presentan carácter confidencial respecto de la otra parte principal, procederá a ponderar su carácter confidencial y las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, y en particular del respeto del principio de contradicción.
3. Tras la ponderación mencionada en el apartado 2, el Tribunal General podrá decidir poner en conocimiento de la otra parte principal la información o los documentos confidenciales, supeditando su divulgación, en su caso, al respeto de compromisos específicos destinados a reservarla exclusivamente a los representantes de la parte principal de que se trate, o bien no comunicarlos, estableciendo, mediante auto motivado, un método que permita que esta otra parte principal exponga sus observaciones del mejor modo posible, por ejemplo, ordenando la presentación de una versión no confidencial o de un resumen no confidencial de esa información o de esos documentos, donde se recoja lo esencial de su contenido.
4. El régimen procesal establecido en el presente artículo no será aplicable a los supuestos contemplados en el artículo 105.

El presente artículo retoma en lo esencial, en su apartado 1, el párrafo segundo del apartado 3 del actual artículo 67 del Reglamento de Procedimiento. El apartado 1 precisa no obstante, en comparación con el texto en vigor, que la cuestión de la confidencialidad de la información, que ha justificado recurrir a la diligencia de prueba, se plantea con respecto a las partes principales, y que es la parte principal que invoca la confidencialidad la que debe alegar las razones de hecho y de Derecho que puedan justificarla. Por lo demás, conviene recordar que el régimen procesal establecido en la presente sección se inscribe en el marco de las medidas adoptadas mediante un auto de instrucción, y que este régimen no afecta al

derecho de las partes principales a solicitar el tratamiento confidencial con respecto a los coadyuvantes de los documentos que obren en autos, tal como dispone el artículo 144 del presente proyecto.

La explicación del destino de la información o de los documentos presentados a raíz de una diligencia de prueba supone una mejora con respecto al Reglamento de Procedimiento vigente, que no contiene disposición alguna sobre el modo en que los tratará el Tribunal General una vez presentados. La nueva disposición recogida en el apartado 2 pretende colmar esta laguna. Una vez que se ha presentado la información o el documento, el Tribunal General examina su pertinencia para la solución del litigio y verifica su carácter confidencial. Si estima que la información o el documento son, al mismo tiempo, pertinentes para la solución del litigio y confidenciales, procede a ponderar su carácter confidencial y las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y, en particular, del respeto del principio de contradicción.

Tras esa ponderación, corresponde al Tribunal General decidir qué camino seguir. Éste es el objeto del apartado 3. Con arreglo a las disposiciones de este apartado, el Tribunal General puede optar entre dos posibilidades.

Si opta por la primera posibilidad, el Tribunal General puede decidir poner en conocimiento de la otra parte principal esa información o ese documento, como lo exige el principio de contradicción formulado en el artículo 64 del presente proyecto, y ello a pesar de su carácter confidencial. En su caso, la información o los documentos confidenciales podrán comunicarse a cambio de que los representantes de las partes principales respeten ciertos compromisos, como el compromiso de no comunicar a su mandante los datos confidenciales de los que hayan tenido conocimiento en el marco del proceso. El Tribunal General ha recurrido ya a estos compromisos, instando a los representantes de las partes a firmar un acuerdo «de confidencialidad» por el que se comprometían a no comunicar a sus clientes los datos confidenciales contenidos en los documentos que obraban en autos. Así lo hizo en el asunto T-464/04, Impala/Comisión, y posteriormente en otros litigios (por ejemplo, en el asunto T-282/06, Sun Chemical Group y otros/Comisión, o en los asuntos T-279/04 y T-452/04, Éditions Odile Jacob/Comisión).

Si opta por la segunda posibilidad, el Tribunal General puede decidir no comunicar los datos confidenciales, aunque permitiendo que la otra parte principal disponga de datos no confidenciales para que pueda exponer sus observaciones del mejor modo posible, dentro del respeto del principio de contradicción. A este respecto se imponen ciertos requisitos formales. En efecto, el Tribunal debe pronunciarse mediante auto, que ha de estar motivado. Además, para conciliar la preservación de la confidencialidad de los datos y el derecho del justiciable a un procedimiento contradictorio, el Tribunal debe poder decidir, en atención a las circunstancias específicas de cada caso, el método de transmisión de determinadas informaciones, que podrían transmitirse, por ejemplo, en forma resumida. En tal caso, con arreglo al artículo 64 del presente proyecto, el Tribunal sólo tendrá en cuenta para resolver el litigio la información sobre la que los representantes de las partes hayan podido pronunciarse.

Por último, el apartado 4 dispone que este régimen procesal no se aplica a la información o los documentos relacionados con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales, para los que se establece expresamente un

régimen muy especial, a causa de la extrema sensibilidad de la información de que se trata, en el artículo 105 del presente proyecto.

Artículo 104

Documentos a los que una institución ha denegado el acceso

Cuando una institución haya denegado el acceso a un documento y, en el marco de un recurso sobre la legalidad de dicha denegación, el documento haya sido presentado ante el Tribunal General a raíz de una diligencia de prueba, contemplada en el artículo 91, letra c), ese documento no se comunicará a las demás partes.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del artículo 67, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento vigente, pero añadiéndole una referencia al fundamento jurídico utilizado por el Tribunal General para ordenar la presentación del documento.

Capítulo Séptimo
DE LA INFORMACIÓN O LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD DE LA UNIÓN O DE SUS ESTADOS MIEMBROS O CON LA GESTIÓN
DE SUS RELACIONES INTERNACIONALES

Este capítulo séptimo constituye una novedad. En él se pone de manifiesto la voluntad del Tribunal General de aplicar un tratamiento muy especial a ciertos tipos de información o de documentos extremadamente delicados, estableciendo un régimen procesal especial para los casos en que puedan resultar afectadas la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o la gestión de sus relaciones internacionales.

El Tribunal General ha podido comprobar que, en 2011 y en 2012, el número de recursos en los que se impugnaba la legalidad de actos adoptados por las instituciones en el ámbito de las «medidas restrictivas» basadas en los artículos 29 TUE y 215 TFUE fue bastante elevado, pues en esos años se presentaron ante él 93 y 60 asuntos de este tipo, respectivamente. La instrucción de estos asuntos ha ofrecido al Tribunal General ciertas enseñanzas a nivel de procedimiento, principalmente en lo que respecta a la adaptación de las pretensiones en el curso del proceso (véase el artículo 86 del presente proyecto), y le ha permitido detectar una laguna en cuanto al tratamiento de la información o de los documentos cuyo carácter confidencial se basa en consideraciones imperiosas relacionadas con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales. En efecto, en la actualidad a las instituciones les resulta imposible presentar al Tribunal General los datos que justifican las medidas restrictivas adoptadas, incluso en el caso de que el Tribunal haya ordenado presentarlos mediante una diligencia de prueba, al no existir un conjunto de normas procesales lo bastante estricto como para garantizar su confidencialidad.

Este conjunto de medidas procesales es el que se establece en el artículo 105, que se ha querido resaltar atribuyéndole un capítulo propio.

El ámbito de aplicación del artículo 105 no queda circunscrito, sin embargo, a los recursos en los que se impugna la legalidad de los actos adoptados en virtud del artículo 215 TFUE, ya que los intereses superiores dignos de protección que en él se mencionan (la seguridad de la Unión, la seguridad de sus Estados miembros, la gestión de las relaciones internacionales de la Unión o de sus Estados miembros) pueden también resultar afectados en otros tipos de litigios de los sometidos al Tribunal General.

Artículo 105

Tratamiento de la información o de los documentos relacionados con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales

1. Cuando, en contra del principio de contradicción formulado en el artículo 64, del que se desprende que las partes deben comunicarse entre sí íntegramente la totalidad de la información y de los documentos, una parte principal tenga la intención de basar sus pretensiones en determinada información o en determinados documentos al tiempo que alega que la comunicación de los mismos perjudicaría a la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o a la gestión de sus relaciones internacionales, dicha parte presentará esa información o esos documentos mediante escrito separado, en el que expondrá las razones imperiosas que, exclusivamente en la medida en que la situación lo requiera,

justifican que se preserve el carácter confidencial de los mismos e impiden comunicarlos a la otra parte principal.

2. El Tribunal General podrá ordenar, mediante la adopción de una diligencia de prueba, la presentación de la información o de los documentos cuyo carácter confidencial se base en las consideraciones mencionadas en el apartado 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 103, el régimen procesal aplicable a tal información o a tales documentos tras ser presentados a raíz de una diligencia de prueba será el que se establece en el presente artículo.
3. Mientras se examine la pertinencia para resolver el litigio de la información o de los documentos presentados por una parte principal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 o 2 y su carácter confidencial respecto de la otra parte principal, esa información o esos documentos no se comunicarán a la otra parte principal.
4. Cuando el Tribunal General llegue a la conclusión, tras el examen mencionado en el apartado 3, de que determinada información o determinados documentos presentados ante él son pertinentes para resolver el litigio y no presentan carácter confidencial, advertirá a la parte de que se trate de su intención de comunicar esa información o esos documentos a la otra parte principal. Si la parte de que se trate se opone a dicha comunicación, tal información o tales documentos le serán devueltos y no se tomarán en consideración para la resolución del litigio.
5. Cuando el Tribunal General llegue a la conclusión, tras el examen mencionado en el apartado 3, de que determinada información o determinados documentos presentados ante él son pertinentes para resolver el litigio y presentan carácter confidencial respecto de la otra parte principal, no los comunicará a dicha parte y procederá a ponderar las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, y en particular del respeto del principio de contradicción, y las exigencias que se desprenden de la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o de la gestión de sus relaciones internacionales.
6. Tras la ponderación mencionada en el apartado 5, el Tribunal General adoptará un auto motivado que establezca un método que permita conciliar las exigencias mencionadas en dicho apartado, por ejemplo, instando a la parte de que se trate a que presente, para su comunicación posterior a la otra parte principal, una versión no confidencial o un resumen no confidencial de la información o de los documentos, donde se recoja lo esencial de su contenido y que permita que la otra parte principal exponga sus observaciones del mejor modo posible.
7. Cuando el Tribunal General considere indispensables para la resolución del litigio una información o unos documentos que, por su carácter confidencial, no se comunicaron a la otra parte principal con arreglo al método contemplado en el apartado 6, podrá, no obstante lo dispuesto en el artículo 64 y limitándose a lo que sea estrictamente necesario, basar su fallo en esa información o en esos documentos. Al valorar tal información o tales documentos, el Tribunal tendrá en cuenta el hecho de que una parte principal no ha podido exponer sus observaciones sobre ellos.
8. La información o los documentos contemplados en el apartado 5 se devolverán a la parte de que se trate tan pronto como se adopte la resolución que ponga fin al proceso ante el Tribunal General.

9. El Tribunal General determinará, mediante decisión, las normas de seguridad destinadas a proteger la información o los documentos presentados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 o en el apartado 2, según los casos. Esta decisión se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El artículo 105, que consta de nueve apartados, pretende colmar una laguna legal, estableciendo un tratamiento específico para la información o los documentos relacionados con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales que presente durante el procedimiento una parte principal, bien espontáneamente, bien a raíz de una diligencia de prueba adoptada por el Tribunal General.

A este respecto se imponen dos observaciones preliminares.

En primer lugar, el Tribunal General desea hacer hincapié en el carácter contradictorio del procedimiento, ya mencionado en el artículo 64 del presente proyecto, recordando, en el apartado 1 del artículo 105, que constituye el principio general y fijando unos límites muy estrictos para las excepciones a dicho principio.

En segundo lugar, el ámbito de aplicación de este artículo no se determina por referencia a tipos de documentos que presenten determinadas características formales, como por ejemplo los documentos clasificados. El régimen especial establecido en el artículo afecta a toda información o documento cuyo carácter confidencial se base en consideraciones imperiosas relacionadas con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales. Por consiguiente, cabe aplicar el tratamiento establecido en el presente artículo a un documento no clasificado. Conviene precisar igualmente que el mero hecho de que un documento esté clasificado no predetermina el tratamiento procesal que le aplicará el Tribunal General, tal como muestran los supuestos contemplados en los apartados 4 y 5 del presente artículo.

*El régimen especial establecido en este artículo se inspira en buena medida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2008, *Kadi* y *Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión*, C-402/05 P y C-415/05 P, Rec. p. I-6351, de 4 de junio de 2013, ZZ, C-300/11, y de 18 de julio de 2013, *Comisión y otros/Kadi*, C-584/10 P, C-593/10 P y C-595/10 P).*

Los apartados 1 y 2 determinan la forma de presentar la información o los documentos confidenciales. El apartado 1 se refiere al caso en que la parte principal los presenta espontáneamente. La parte principal que alega, en apoyo de sus pretensiones, que la comunicación a la otra parte de datos presentados espontáneamente por ella perjudicaría a la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o a la gestión de sus relaciones internacionales, debe exponer las razones imperiosas que justifican que se preserve el carácter confidencial de los mismos y que no se transmitan a la otra parte principal. Para permitir un tratamiento procesal eficaz y evitar un error en su tratamiento por parte del Tribunal, tales datos deben presentarse mediante escrito separado. El apartado 2 regula el supuesto en que los datos confidenciales se presentan en respuesta a una diligencia de prueba acordada mediante auto. En tal caso, para distinguir el tratamiento de la información o del documento cuya confidencialidad se basa en consideraciones relativas a la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o a la gestión de sus relaciones internacionales del

tratamiento que se aplicará a la información cuya confidencialidad se basa en consideraciones de distinta naturaleza, se establece expresamente que el régimen aplicable no será el del artículo 103 del presente proyecto, sino el régimen, especial, del presente artículo.

Una vez que la información o el documento han sido comunicados al Tribunal General, este último debe aplicarles un tratamiento procesal que consta de varias fases. Los apartados 3 a 7 contienen las disposiciones relativas a cada una de estas fases.

La primera fase, descrita en el apartado 3, consiste en examinar si la información o los documentos presentados por una parte principal con arreglo al apartado 1 o 2 son pertinentes para resolver el litigio y presentan carácter confidencial respecto de la otra parte principal. Mientras se desarrolla este examen, la información o los documentos no se comunicarán a la otra parte principal.

La segunda fase depende del resultado del examen anterior. Los apartados 4 y 5 contemplan, respectivamente, el supuesto en el que el Tribunal General considera que la información o los documentos son pertinentes para resolver el litigio y no presentan carácter confidencial y el supuesto en el que el Tribunal General considera que la información o los documentos son pertinentes para resolver el litigio y presentan carácter confidencial.

En el primer supuesto, contemplado en el apartado 4, el Tribunal General advierte a la parte de que se trate de su intención de comunicar esa información o esos documentos a la otra parte principal. Si la parte de que se trate se opone a dicha comunicación, tal información o tales documentos le serán devueltos y no se tomarán en consideración para la resolución del litigio.

En el segundo supuesto, contemplado en el apartado 5, se propone establecer, siguiendo la misma línea que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un fundamento jurídico que permita que, en las situaciones en que resulte necesario proteger la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o la gestión de sus relaciones internacionales, el Tribunal General no comunique la información o los documentos confidenciales a la otra parte principal y proceda a ponderar las exigencias derivadas de la protección de dichos intereses y las que se desprenden del derecho a la tutela judicial efectiva, y en particular del respeto del principio de contradicción.

El apartado 6 describe el procedimiento posterior a la ponderación de las exigencias tomadas en consideración por el Tribunal General, cuyo objetivo es poder comunicar a la otra parte principal datos que le permitan exponer sus observaciones del mejor modo posible, dentro del respeto del principio de contradicción. A este respecto se establecen ciertos requisitos formales, puesto que el Tribunal debe pronunciarse mediante auto, que ha de estar motivado. Además, a fin de conciliar la preservación de la confidencialidad de los datos y el derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva, el Tribunal debe poder decidir, en atención a las circunstancias específicas de cada caso, un método de transmisión de datos que permita comunicarlos a la otra parte, como por ejemplo una transmisión en forma resumida.

En el supuesto de que el mecanismo descrito en el apartado 6 no hubiera permitido comunicar a la otra parte principal todos los datos que le permitirían ejercer íntegramente su derecho de defensa, y únicamente en ese supuesto, se propone que, a título excepcional, el

Tribunal General pueda tomar en consideración la información o los documentos confidenciales sin comunicarlos a la otra parte principal. Esta excepción al principio de contradicción es una innovación importante, pues el actual Reglamento de Procedimiento no contiene ninguna disposición con el mismo alcance, con excepción, no obstante, de la disposición relativa a los litigios en los que se impugna la legalidad de la denegación de acceso a un documento, recogida en el artículo 67, apartado 3, último párrafo (y retomada en el artículo 104 del presente proyecto). Es necesario, pues, establecer normas procesales que permitan que el Tribunal General examine datos confidenciales de un modo que preserve su confidencialidad, sin perjudicar indebidamente los derechos de la otra parte principal. Éste es el objeto del apartado 7 del artículo 105 del proyecto.

Es preciso que la lesión causada al carácter contradictorio del procedimiento sea proporcionada, de conformidad con el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y así lo subrayan los términos del apartado 7, según los cuales: a) la información o los documentos de que se trata son los que no hayan podido ponerse en conocimiento de la otra parte con arreglo al procedimiento iniciado al término de la ponderación contemplada en el apartado 5; b) el Tribunal General debe considerar que es indispensable tomarlos en consideración para resolver el litigio; c) la excepción al principio de contradicción debe limitarse a lo que sea estrictamente necesario; d) al valorar los datos confidenciales, el Tribunal General tendrá en cuenta el hecho de que la otra parte principal no ha podido ejercer íntegramente su derecho de defensa.

En este contexto cabe señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha juzgado que el derecho a un proceso plenamente contradictorio puede sufrir restricciones, en la medida en que resulte estrictamente necesario para proteger un interés público importante, como la seguridad nacional, la necesidad de mantener secretos ciertos métodos policiales de investigación de infracciones o la protección de derechos fundamentales de terceros (véase, en este sentido, TEDH, sentencia A. y otros c. Reino Unido, de 19 de febrero de 2009, nº 3455/05, y jurisprudencia que allí se cita). Esta última jurisprudencia, aunque corresponde al ámbito penal, ofrece indicaciones en las que el juez de la Unión puede inspirarse a la hora de dirigir el proceso que se desarrolla ante él.

El apartado 8 contiene igualmente una norma que establece una excepción al principio general según el cual todo escrito procesal incorporado a los autos del asunto queda unido al expediente archivado en la Secretaría del Tribunal. El carácter delicado de la información o de los documentos de que se trata en el presente artículo justifica devolverlos a la parte principal que los presentó, tan pronto como se adopte la resolución que ponga fin al proceso ante el Tribunal General.

Por último, este régimen procesal quedaría incompleto si no estuviera acompañado de un dispositivo de seguridad apropiado que garantice la protección de la información o de los documentos en las diferentes etapas de la instrucción ante el Tribunal General. El apartado 9 contiene pues una disposición que habilita al Tribunal General para adoptar normas que permitan instaurar un sistema de seguridad global destinado a proteger la información relacionada con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales. Al igual que la normativa en vigor adoptada por las instituciones de la Unión Europea [en particular, la Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 274, p. 1)], la decisión de que se trata debería determinar los principios básicos y las normas de seguridad mínimas para proteger tal información y aplicarse al Tribunal General,

a la Secretaría del Tribunal y a los servicios comunes de la institución que asisten al Tribunal General. Para hacer público el dispositivo que adopte el Tribunal, se prevé publicar tal decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Capítulo Octavo DE LA FASE ORAL DEL PROCEDIMIENTO

Este capítulo corresponde al capítulo segundo del título segundo del Reglamento de Procedimiento vigente, pero difiere de él en dos puntos.

En primer lugar, el presente capítulo contiene una disposición relativa a la fecha de la vista oral, que actualmente forma parte de los artículos relativos a la fase escrita del procedimiento. Simultáneamente, el artículo 55 del Reglamento de Procedimiento vigente se ha desplazado a la sección 5 del capítulo primero del presente título, denominada «Del desarrollo del procedimiento y de la tramitación de los asuntos».

En segundo lugar, se han añadido al capítulo tres nuevas disposiciones que se refieren, respectivamente, a los requisitos para la celebración de vista oral, a la ausencia de las partes en la vista y a la grabación de la vista.

Artículo 106 **Fase oral del procedimiento**

1. El procedimiento ante el Tribunal General comprenderá, en su fase oral, una vista oral organizada, bien de oficio, bien a instancia de una parte principal.
2. La solicitud de celebración de una vista oral presentada por una parte principal deberá indicar las razones por las que ésta desea ser oída, y deberá presentarse en un plazo de tres semanas a partir de la notificación a las partes de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento. El Presidente podrá prorrogar este plazo.
3. De no presentarse la solicitud mencionada en el apartado 2, el Tribunal podrá decidir resolver el recurso sin fase oral, si estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente. En tal caso, podrá sin embargo decidir en un momento posterior la apertura de la fase oral del procedimiento.

Con ánimo de adaptar su organización y sus métodos de trabajo para responder al desafío permanente que representan la evolución de los litigios y el incremento del número de nuevos asuntos, el Tribunal General desea poder resolver los recursos directos sin vista oral, tal como el Reglamento de Procedimiento le permite ya hacer en los recursos de propiedad intelectual o industrial y en los recursos de casación.

A este respecto resulta útil un breve recordatorio histórico. En efecto, tras constatar el crecimiento del número de asuntos de propiedad intelectual o industrial y el alargamiento de la duración media del proceso, el Tribunal General propuso una adaptación de su Reglamento de Procedimiento destinada a resolver con más rapidez los asuntos de este tipo. Solicitó así que se simplificara el régimen procesal aplicable, añadiendo una disposición que le permitiría no organizar sistemáticamente una vista en todos los asuntos de propiedad intelectual o industrial, sino sólo cuando el Tribunal lo estimara necesario o a petición motivada de una de las partes del procedimiento. El artículo 135 bis fue aprobado por el

Consejo sin modificar la propuesta del Tribunal General y entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.

Este artículo se inspiraba en el texto del artículo 146 del Reglamento de Procedimiento, disposición que permite que el Tribunal General resuelva sin fase oral los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública.

La disposición que se propone añadir pretende, pues, aplicar esta norma también a los recursos directos, en beneficio de las partes y del Tribunal.

En primer lugar, ya no es raro que las partes indiquen al Tribunal General que no consideran necesario que se oigan sus explicaciones orales. Aunque las partes hayan expresado este deseo, o incluso hayan anunciado que no asistirán a la vista, las disposiciones del Reglamento de Procedimiento obligan al Tribunal a convocar a las partes y a organizar una vista. Esta situación no responde a las exigencias de una buena administración de la justicia ni a las de economía procesal. Por consiguiente, es preciso cambiar la norma a fin de que el Tribunal General pueda resolver sin fase oral, con arreglo a la voluntad de las partes. A título de información puede señalarse que, en 2012, un 44 % de los asuntos de propiedad intelectual o industrial fueron resueltos mediante sentencia no precedida de una vista (en 2009 el porcentaje fue sólo de un 17 %).

En segundo lugar, la falta de celebración de la vista no puede sino contribuir a abreviar la duración del procedimiento, como muestran claramente las estadísticas. En los asuntos de propiedad intelectual o industrial, en 2012, cuando el Tribunal General ha dictado sentencia tras la celebración de una vista, la duración media del proceso ha sido de 26,4 meses, pero sólo de 18,4 meses si no hubo vista.

En tercer lugar, la falta de celebración de la vista ofrece al Tribunal y a su Secretaría la posibilidad de dar un uso óptimo a los recursos de que disponen, aprovechando el ahorro conseguido para realizar otras tareas. Teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias actuales y la obligación de la institución de reducir puestos de trabajo, esta circunstancia resulta especialmente importante, sobre todo habida cuenta del aumento constante de la carga global de trabajo. A este respecto cabe señalar que en 2012 se celebraron vistas ante las diferentes formaciones jurisdiccionales del Tribunal en 322 asuntos, lo que supone un incremento aproximado de un 12,6 % con respecto a 2011, y ello a pesar de que, en la actualidad, el Tribunal resuelve regularmente sin fase oral del procedimiento en los asuntos de propiedad intelectual o industrial.

Habida cuenta de los factores que se han mencionado, el Tribunal General desea poder renunciar a organizar una vista si no lo estima necesario, a menos que alguna de las partes principales presente una solicitud indicando las razones por las que desea ser oída.

La redacción del texto que se propone es sustancialmente idéntica a los artículos 135 bis y 146 del Reglamento de Procedimiento vigente. Sin embargo, se ha aprovechado la oportunidad que ofrece esta reforma para hacer más legible la disposición, dar más importancia a la norma de principio, según la cual la fase oral del procedimiento comprende una vista oral organizada de oficio o a instancia de una parte principal (apartado 1), y distinguir dicha norma de las disposiciones relativas a la aplicación de la misma por una parte principal o por el Tribunal.

Se invita así a las partes principales a dar a conocer al Tribunal General, en un plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento, las razones por las que les parece necesario celebrar una vista en un asunto dado. Si se le presenta una solicitud motivada, el Tribunal General está obligado a organizar la vista.

Si no se ha presentado solicitud alguna de celebración de una vista, es el Tribunal General quien debe decidir si procede resolver sin fase oral del procedimiento. La segunda frase del apartado 3 ofrece, no obstante, al Tribunal la posibilidad de abrir posteriormente la fase oral del procedimiento si lo considera necesario, incluso en el caso de que ya se hubiera adoptado la decisión de resolver sin fase oral.

Por último, conviene señalar que, debido a las remisiones a las disposiciones del presente título, el plazo de tres semanas fijado para la presentación de la solicitud motivada de celebración de la vista resulta igualmente aplicable a los recursos regulados en el título cuarto del presente proyecto, es decir, a los recursos presentados contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI y de la OCVV.

Artículo 107

Fecha de la vista oral

1. Si el Tribunal General decide abrir la fase oral del procedimiento, el Presidente fijará la fecha de la vista oral.
2. En caso de que concurran circunstancias excepcionales, el Presidente podrá aplazar la vista oral, de oficio o a instancia motivada de una parte principal.

Ésta es una nueva disposición, que retoma en parte el texto del actual artículo 53 del Reglamento de Procedimiento pero modifica su alcance, al poner el acento en las competencias respectivas del Tribunal y del Presidente, pues el primero decide la apertura de la fase oral y el segundo fija la fecha de la vista.

En cuanto al apartado 2, tiene por objeto recordar que la fijación de la fecha de la vista es una decisión jurisdiccional y que, por consiguiente, el aplazamiento de una vista sólo puede ser decidido por el Presidente en caso de que concurran circunstancias excepcionales.

Artículo 108

Ausencia de las partes en la vista oral

1. Cuando una parte informe al Tribunal General de que no asistirá a la vista oral o cuando el Tribunal constate en la vista la ausencia injustificada de una parte, la vista se desarrollará sin la presencia de la parte de que se trate.
2. Cuando las partes principales indiquen al Tribunal General que no asistirán a la vista oral, el Presidente decidirá si puede cerrarse la fase oral del procedimiento.

Esta nueva disposición ofrece al Tribunal General un fundamento jurídico que le permite extraer las consecuencias oportunas de la ausencia de una parte principal o de todas ellas en la vista oral.

El apartado 1 regula las consecuencias de la ausencia de una parte en la vista oral.

El apartado 2 permite que el Tribunal declare terminada la fase oral del procedimiento sin celebrar una vista oral, desde el momento en que las partes principales hayan renunciado a asistir a ella.

Artículo 109 **Puerta cerrada**

1. Tras oír a las partes, el Tribunal General podrá, con arreglo al artículo 31 del Estatuto, decidir que la vista se celebre a puerta cerrada.
2. La solicitud de celebrar la vista a puerta cerrada presentada por una parte deberá estar motivada e indicar si se refiere a la totalidad de los debates o sólo a una parte.
3. La decisión de celebrar la vista a puerta cerrada llevará aparejada la prohibición de publicar los debates.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53 del mismo, la vista será pública, salvo que, por motivos graves, el Tribunal decida lo contrario, de oficio o a instancia de parte.

El Reglamento de Procedimiento vigente contiene ya un artículo 57 relativo a la vista a puerta cerrada, que se reproduce en lo esencial en el apartado 3 del artículo 109 del presente proyecto.

No obstante, el Tribunal General considera necesario disponer que se oirá a las partes antes de tomar una decisión al respecto, tanto si es el Tribunal quien proyecta decidir de oficio que se celebre la vista a puerta cerrada como si es una de las partes quien lo solicita. En este último supuesto, se espera de dicha parte que motive su solicitud y que especifique el alcance de la misma, tal como establece, por lo demás, el artículo 63, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Éstos son los objetivos de los apartados 1 y 2.

Artículo 110 **Desarrollo de la vista oral**

1. El Presidente, que ejercerá la policía de estrados, abrirá y dirigirá los debates.
2. Las partes sólo podrán actuar en juicio asistidas de su representante.
3. En el transcurso de la vista oral, los miembros de la formación jurisdiccional y el Abogado General podrán formular preguntas a los representantes de las partes.

Este artículo reproduce en sus apartados 1, 2 y 3 los contenidos respectivos de los artículos 56, 59 y 58 del Reglamento de Procedimiento vigente, y la simplificación del texto del apartado 3 se inspira en el artículo 80 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 111

Declaración de terminación de la fase oral del procedimiento

Cuando en un asunto no se haya designado Abogado General, el Presidente declarará terminada la fase oral una vez celebrada la vista.

Este artículo retoma el texto del artículo 60 del Reglamento de Procedimiento vigente, con un pequeño ajuste en su redacción.

Artículo 112

Presentación de las conclusiones del Abogado General

1. Cuando en un asunto se haya designado Abogado General y éste presente sus conclusiones por escrito, las entregará a la Secretaría, la cual dará traslado de las mismas a las partes.
2. El Presidente pronunciará la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento después de que el Abogado General haya presentado, oralmente o por escrito, sus conclusiones.

Este artículo retoma el texto del artículo 61 del Reglamento de Procedimiento en vigor, con ciertos ajustes en su redacción. El ajuste llevado a cabo en el apartado 2 se inspira en el artículo 82, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 113

Reapertura de la fase oral del procedimiento

1. El Tribunal General ordenará la reapertura de la fase oral del procedimiento cuando concurren las circunstancias expuestas en el artículo 23, apartado 3, o en el artículo 24, apartado 3.
2. El Tribunal General podrá ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento:
 - a) si estima que la información de que dispone es insuficiente;
 - b) cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes;

- c) cuando una parte principal así lo solicite basándose en hechos que pueden influir decisivamente en la resolución del Tribunal y que ella no había podido alegar antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento.

Este artículo pretende determinar los supuestos en los que el Tribunal General puede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento, siendo esta situación claramente distinta de la que se plantea cuando el Tribunal, tras haber decidido inicialmente resolver sin fase oral, cambia de opinión y decide en un momento posterior abrir la fase oral para oír a las partes en una vista. Este último supuesto se contempla en el artículo 106, apartado 3, del presente proyecto.

El artículo 62 del Reglamento de Procedimiento vigente se limita a establecer la posibilidad de reabrir la fase oral. El presente artículo del proyecto es más preciso, pues regula los supuestos en los que es obligatorio (apartado 1) o posible (apartado 2) reabrir la fase oral del procedimiento. Forman parte de la primera categoría los supuestos en los que se ha producido una falta de quórum en alguna de las formaciones jurisdiccionales del Tribunal (Gran Sala o Salas que actúan en formaciones de tres o de cinco Jueces) tras la celebración de la vista oral, mientras que la segunda categoría comprende los casos en que el Tribunal estima no disponer de información suficiente y los casos en que no se ha debatido un argumento esencial para la resolución del litigio o una parte principal invoca un hecho nuevo que puede influir decisivamente en la resolución del Tribunal.

Artículo 114 **Actas de la vista**

1. El Secretario extenderá acta de cada vista, que será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.
2. El acta será notificada a las partes.

Este artículo concuerda con el actual artículo 63 del Reglamento de Procedimiento, cuyo texto retoma sin modificaciones en su apartado 1, pero enmienda en favor de las partes en su apartado 2, al disponer que las actas de las vistas se notificarán sistemáticamente a las partes.

En la práctica judicial que actualmente sigue el Tribunal General, las actas de las vistas se notifican a las partes únicamente cuando se ha tomado la decisión de hacer constar en acta ciertas declaraciones de las partes o ciertas decisiones del Tribunal.

Artículo 115 **Grabación de la vista**

Previa petición debidamente justificada, el Presidente del Tribunal General podrá autorizar a una de las partes que haya participado en la fase escrita u oral del procedimiento a escuchar, en los locales del Tribunal, la grabación sonora de la vista oral en la lengua utilizada por los oradores en dicha vista.

Por razones de coherencia entre los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, este último retoma aquí el texto del artículo 85 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, pero adaptando su redacción en tres aspectos. En primer lugar, la referencia a «uno de los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto» no es pertinente en relación con el Tribunal General. A continuación, obviamente, el nombre del Tribunal ha sido modificado. Por último, el artículo 115 del presente proyecto precisa que la autoridad competente para autorizar a escuchar la grabación de la vista es el Presidente del Tribunal General, con independencia de que el asunto en relación con el cual se presenta la solicitud esté pendiente o haya sido cerrado. Esta competencia exclusiva del Presidente del Tribunal tiene por objeto favorecer la coherencia de las decisiones en esta materia.

Capítulo Noveno
DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS

Artículo 116

Fecha de pronunciamiento de la sentencia

Se informará a las partes de la fecha de pronunciamiento de la sentencia.

Este artículo reproduce, en lo esencial, la idea expresada en el artículo 82, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento actual, aunque la fórmula en términos más matizados. Como no existe obligación alguna de estar presente en la audiencia en la que se pronuncie la sentencia, parece más ajustado a la realidad hablar de información a las partes que de citación.

Esta disposición se inspira en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 117

Contenido de la sentencia

La sentencia contendrá:

- a) la indicación de que ha sido dictada por el Tribunal General;
- b) la designación de la formación que ha conocido del asunto;
- c) la fecha de su pronunciamiento;
- d) el nombre del Presidente y, en su caso, de los Jueces que hayan participado en las deliberaciones, indicando el Juez Ponente;
- e) el nombre del Abogado General eventualmente designado;
- f) el nombre del Secretario;
- g) la designación de las partes;
- h) el nombre de sus representantes;
- i) las pretensiones de las partes;
- j) en su caso, la fecha de la vista oral;
- k) si procede, la indicación de que el Abogado General ha sido oído y, en su caso, la fecha de sus conclusiones;
- l) una exposición concisa de los hechos;

- m) los fundamentos de Derecho;
- n) el fallo, que comprenderá la decisión sobre las costas.

Este artículo coincide en lo esencial con el actual artículo 81 del Reglamento de Procedimiento. Las modificaciones, inspiradas en el artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, están destinadas a añadir a la sentencia la referencia a la formación que ha conocido del asunto [letra b)] y a tener en cuenta el carácter facultativo de la fase oral del procedimiento [letra j)].

Artículo 118

Pronunciamiento y notificación de la sentencia

1. La sentencia será pronunciada en audiencia pública.
2. El original de la sentencia, firmado por el Presidente, los Jueces que hayan participado en la deliberación y el Secretario, será sellado y depositado en la Secretaría; a cada una de las partes se le entregará una copia.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 82, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento.

Las modificaciones se inspiran en el artículo 88 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 119

Contenido del auto

Todo auto susceptible de recurso en casación en virtud del artículo 56 o del artículo 57 del Estatuto contendrá:

- a) la indicación de que ha sido dictado, según los casos, por el Tribunal General, por el Presidente o por el Juez de medidas provisionales;
- b) en su caso, la designación de la formación que ha conocido del asunto;
- c) la fecha de su adopción;
- d) la indicación del fundamento jurídico en el que se basa;
- e) el nombre del Presidente y, en su caso, de los Jueces que hayan participado en las deliberaciones, indicando el Juez Ponente;
- f) el nombre del Abogado General eventualmente designado;

- g) el nombre del Secretario;
- h) la designación de las partes;
- i) el nombre de sus representantes;
- j) les pretensiones de las partes;
- k) si procede, la indicación de que el Abogado General ha sido oído;
- l) una exposición concisa de los hechos;
- m) los fundamentos de Derecho;
- n) el fallo, que comprenderá, en su caso, la decisión sobre las costas.

Habida cuenta del número de autos y de su creciente importancia en la práctica del Tribunal General, este proyecto añade al Reglamento de Procedimiento actual un artículo consagrado específicamente a este tipo de resolución. El presente artículo 119, calcado del artículo 117 del proyecto, recoge las indicaciones que debe contener obligatoriamente todo auto susceptible de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.

Este artículo se inspira en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, pero se distingue de él en que sólo se refiere a los autos recurribles en casación. Esta precisión es importante, pues los autos no recurribles en casación dictados por el Tribunal General o por los Presidentes de Sala adoptan la forma de autos simplificados, y no contienen, pues, todas las indicaciones mencionadas en el artículo.

Artículo 120 **Firma y notificación del auto**

El original de cada auto, firmado por el Presidente y el Secretario, será sellado y depositado en la Secretaría. Se entregará una copia del mismo a cada una de las partes y, en su caso, al Tribunal de Justicia o al Tribunal de la Función Pública.

Del mismo modo que el artículo 118, apartado 2, del presente proyecto, relativo a las sentencias, el artículo 120 contiene las precisiones necesarias sobre la firma y la notificación de los autos.

Las modificaciones se inspiran en el artículo 90 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 121

Obligatoriedad de las sentencias y autos

1. La sentencia será obligatoria desde el día de su pronunciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto.
2. El auto será obligatorio desde el día de su notificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto.

Al igual que el artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el artículo 121 determina, en un mismo artículo, el momento a partir del cual una sentencia o un auto son obligatorios. El apartado 1 reproduce el texto del actual artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, con una pequeña modificación terminológica, pero el apartado 2, en cambio, constituye una novedad. Es consecuencia de la inclusión de disposiciones específicas relativas a los autos del Tribunal General y precisa que éstos son obligatorios desde el día de su notificación, que puede variar según el destinatario de que se trate. Al indicar el momento en que el auto es obligatorio se añade «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto», pues no cabe excluir la posibilidad de que el Tribunal General anule un reglamento mediante un auto basado en el artículo 132 del presente proyecto.

Artículo 122

Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea

En el *Diario Oficial de la Unión Europea* se publicará un anuncio que contendrá la fecha y el fallo de las sentencias y de los autos del Tribunal General que pongan fin al proceso, salvo cuando se trate de resoluciones adoptadas antes de la notificación de la demanda al demandado.

Siguiendo el ejemplo del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal General desea incluir en su Reglamento de Procedimiento la disposición que establece que el cierre de cada asunto será objeto de una comunicación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, que indicará tanto la fecha de la sentencia o del auto de que se trate como su fallo.

De este modo, la disposición del artículo 18 de las Instrucciones al Secretario del Tribunal General se eleva al rango de artículo del Reglamento de Procedimiento, al tiempo que se precisa en lo que respecta al contenido del anuncio publicado.

Capítulo Décimo
DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA

Artículo 123
Sentencias en rebeldía

1. Cuando el Tribunal General compruebe que el demandado, debidamente emplazado, no contesta a la demanda en la forma o en el plazo prescritos en el artículo 81, el demandante podrá pedir al Tribunal General que dicte sentencia estimatoria en rebeldía, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto.
2. El demandado rebelde no intervendrá en el procedimiento en rebeldía y no se le notificará ningún escrito procesal, salvo la resolución que ponga fin al proceso.
3. En la sentencia que dicte en rebeldía, el Tribunal General estimará las pretensiones del demandante, a menos que sea manifiestamente incompetente para conocer del recurso o que el recurso sea manifiestamente inadmisibile o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
4. La sentencia en rebeldía será ejecutiva. No obstante, el Tribunal General podrá suspender la ejecución de la misma hasta que se haya pronunciado sobre la oposición presentada conforme al artículo 166, o bien subordinar la ejecución a la constitución de una caución, cuyo importe y forma se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes; la caución se cancelará si no se formula oposición o si ésta es desestimada.

El presente artículo sólo se refiere a las sentencias dictadas al término de un procedimiento en rebeldía. Es diferente, pues, del actual artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, que se refiere a las sentencias dictadas en rebeldía y a la oposición. El procedimiento de oposición se regula, no obstante, en otros artículos del presente proyecto, ya que los apartados 4 a 6 del actual artículo 122 se han desplazado al artículo 166 (dentro del capítulo decimoséptimo, consagrado a las demandas relativas a las sentencias y autos), que retoma su contenido.

El apartado 1 retoma en lo esencial el texto del artículo 122, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento vigente, pero precisándolo en dos aspectos. Por una parte, se resalta el papel activo del Tribunal General en la dirección del proceso, pues es éste quien comprueba que no se ha contestado a la demanda en la forma o en el plazo prescritos. Por otra parte, la redacción del artículo deja claro que, en cualquier caso, el procedimiento en rebeldía no se iniciará si el demandado demuestra que la presentación de su escrito de contestación tras la expiración del plazo legal se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor.

Los apartados 2 y 3 permiten extraer todas las consecuencias del procedimiento en rebeldía.

El apartado 2 precisa que la parte rebelde no desempeña ningún papel en el procedimiento en rebeldía, ya que la inexistencia absoluta de contradicción es precisamente una de las características de un procedimiento en el que una de las partes no participa.

El apartado 3 precisa cuál es la amplitud del control del Tribunal General, que queda obligado a estimar las pretensiones del demandante a menos que el recurso sea manifiestamente inadmisibile o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

El apartado 4 retoma en lo esencial el texto del artículo 122, apartado 3, del Reglamento en vigor, con un cambio justificado por la nueva numeración.

Dado el interés del Tribunal General en llevar a su término los procedimientos en rebeldía con la mayor brevedad posible, el nuevo artículo 123 no contempla ya la posibilidad de que se abra la fase oral del procedimiento sobre la petición presentada por el demandante, y tampoco contempla la posibilidad de adoptar diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba.

Desde el punto de vista estadístico, cabe señalar que el Tribunal General ha dictado 21 sentencias en rebeldía desde 1990, 13 de ellas a partir de 2007. De estas 13 sentencias en rebeldía, 11 se dictaron a raíz de recursos interpuestos por la Comisión contra personas jurídicas al amparo de una cláusula compromisoria, a fin de obtener la devolución de ciertos importes. Por lo tanto, en los litigios que han dado lugar al pronunciamiento de sentencias en rebeldía entre 2007 y 2012, un 85 % de ellos tenían origen contractual. Ésta es una situación específica del Tribunal General.

Capítulo Undécimo
DEL ACUERDO AMISTOSO Y DE LOS DESISTIMIENTOS,

Artículo 124
Acuerdo amistoso

1. Si, antes de que el Tribunal General resuelva, las partes principales llegaran a un acuerdo sobre la solución que debe darse al litigio e informaran al Tribunal de que renuncian a toda pretensión, el Presidente ordenará el archivo del asunto, haciéndolo constar en el Registro, y decidirá sobre las costas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 136 y 138, atendiendo, en su caso, a las propuestas formuladas al efecto por las partes.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los recursos contemplados en los artículos 263 TFUE y 265 TFUE.

Este artículo reproduce en lo esencial el texto del artículo 98 del Reglamento de Procedimiento vigente, pero cambiando la numeración de los artículos citados, y precisa que son sólo las partes principales las que pueden llegar a un acuerdo sobre la solución del litigio en el que se enfrentan.

Artículo 125
Desistimiento

Si el demandante informara al Tribunal General, por escrito o en la vista, de que desiste del procedimiento, el Presidente ordenará el archivo del asunto, haciéndolo constar en el Registro, y decidirá sobre las costas con arreglo a los artículos 136 y 138.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del actual artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, con un cambio en la numeración de los artículos citados, pero amplía su alcance al disponer que el demandante podrá desistir de su recurso, no sólo por escrito, sino también oralmente en la vista. En este último supuesto, es evidente que quedará constancia de este hecho en el acta de la vista mencionada en el artículo 114, apartado 1, del presente proyecto.

Capítulo Duodécimo
DE LOS RECURSOS E INCIDENTES RESUELTOS MEDIANTE AUTO

Artículo 126

Recurso que manifiestamente no puede prosperar

Cuando el Tribunal General sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente inadmisibile o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del actual artículo 111 del Reglamento de Procedimiento. Recuerda además que, por razones de economía procesal, el Tribunal General dispone de la posibilidad de resolver directamente un asunto, cuando resulte evidente que el Tribunal no es competente para conocer de él o que el recurso presentado ante él es manifiestamente inadmisibile o carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno. Las modificaciones en la redacción aplicadas al texto vigente se inspiran en el texto del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Conviene señalar que, por afán de coherencia, los términos «a propuesta del Juez Ponente» se utilizan igualmente en los artículos 127, 128, 129, 131 y 132 del presente capítulo, que se refieren, respectivamente, a la remisión de un asunto a otro Tribunal, a la declinación de competencia, a las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, al sobreseimiento y a los recursos manifiestamente fundados.

Artículo 127

**Remisión de un asunto al Tribunal de Justicia
o al Tribunal de la Función Pública**

El Tribunal General adoptará mediante auto motivado, a propuesta del Juez Ponente, las resoluciones de remisión de asuntos mencionadas en el artículo 54, párrafo segundo, del Estatuto y en el artículo 8, apartado 2, del anexo I del Estatuto.

El Estatuto regula los casos en que se presenta un asunto ante un Tribunal que no es competente para resolver el litigio. A estos efectos distingue el caso en el que la presentación se debe a un error material (artículo 54, párrafo primero, del Estatuto y artículo 8, apartado 1, del anexo I del Estatuto) y el caso en el que el recurso se interpone efectivamente ante uno de los Tribunales cuando la competencia para conocer de él corresponde a otro de ellos. Es a este último supuesto al que se refiere el artículo 127 del presente proyecto al disponer, remitiéndose a los artículos 54, párrafo segundo, del Estatuto y 8, apartado 2, del anexo I del Estatuto, que el Tribunal General podrá, mediante auto motivado, declararse incompetente y remitir el recurso, según los casos, al Tribunal de Justicia o al Tribunal de la Función Pública.

Este artículo 127 completa el artículo 112 del Reglamento de Procedimiento actual haciendo referencia a la remisión de asuntos al Tribunal de la Función Pública.

Por afán de coherencia con los artículos 126, 128, 129, 131 y 132 del presente capítulo se han añadido los términos «a propuesta del Juez Ponente».

Artículo 128

Declinación de competencia

El Tribunal General adoptará mediante auto motivado, a propuesta del Juez Ponente, las resoluciones declinatorias de competencia mencionadas en el artículo 54, párrafo tercero, del Estatuto.

La declinación de competencia es una medida de buena administración de la justicia adoptada por el Tribunal General, en un asunto que es de su competencia, con objeto de remitir dicho asunto al Tribunal de Justicia si considera que éste se encuentra en mejor situación para juzgarlo, a causa de una muy estrecha conexidad entre dicho asunto y otro pendiente ante el Tribunal de Justicia.

Por afán de coherencia con otras disposiciones del presente capítulo (artículos 126, 127, 129, 131 y 132) se especifica que esta resolución se adoptará «a propuesta del Juez Ponente». Se propone igualmente disponer que el auto por el que el Tribunal General decline su competencia deberá estar motivado.

Esta disposición concuerda, en lo esencial, con el artículo 80 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 129

Causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público

A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, de oficio y tras oír a las partes principales, resolver mediante auto motivado sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.

A diferencia del actual artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, este artículo se aplica exclusivamente a las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, pues los casos en que procede sobreseer de oficio el recurso son objeto de un artículo específico en el presente proyecto (el artículo 131).

Al tiempo que se inspira en los términos del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento actual y en la formulación del artículo 150 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el presente artículo completa el texto en vigor añadiendo, por afán de coherencia con otras disposiciones del presente capítulo, la indicación de que la resolución se adoptará a propuesta del Juez Ponente y mediante auto motivado. Precisa igualmente el texto actual al disponer que el Tribunal General oirá las observaciones de las partes principales antes de pronunciarse.

Artículo 130

Excepciones e incidentes procesales

1. La demanda en que el demandado solicite que el Tribunal General decida sobre la inadmisión o la incompetencia sin entrar en el fondo del asunto se presentará mediante escrito separado, dentro del plazo fijado en el artículo 81.
2. La demanda en que una parte solicite que el Tribunal General constate que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento, o que el Tribunal General resuelva sobre un incidente, se presentará mediante escrito separado.
3. Las demandas mencionadas en los apartados 1 y 2 contendrán los motivos y alegaciones en que se basan, las pretensiones y, en anexo, los documentos justificativos invocados.
4. En cuanto se presente la demanda mencionada en el apartado 1, el Presidente fijará un plazo al demandante para que presente por escrito sus motivos y pretensiones.
5. En cuanto se presente la demanda mencionada en el apartado 2, el Presidente fijará un plazo a las demás partes para que presenten por escrito sus observaciones sobre dicha demanda.
6. El Tribunal General podrá decidir abrir la fase oral del procedimiento sobre las demandas mencionadas en los apartados 1 y 2. El artículo 106 no será aplicable.
7. El Tribunal General decidirá con la mayor rapidez posible sobre la demanda o, si existen circunstancias especiales que lo justifiquen, unirá su examen al examen del fondo. Si el asunto fuera de la competencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal de la Función Pública, se lo remitirá.
8. Si el Tribunal General desestimara la demanda o la uniera al examen del fondo, el Presidente fijará nuevos plazos para que continúe el procedimiento.

Este artículo modifica el artículo 114 del Reglamento de Procedimiento vigente, aclarando su alcance y precisando sus términos.

En primer lugar, el texto aclara que la excepción de inadmisibilidad o de incompetencia propuesta por el demandado debe presentarse dentro del plazo fijado para la presentación del escrito de contestación. En efecto, una vez iniciado el debate sobre el fondo del asunto, no cabe aceptar la presentación de una excepción de este tipo. Esta limitación temporal, que por lo demás no impide que una parte proponga una causa de inadmisión de la demanda por motivos de orden público en cualquier etapa del procedimiento, viene exigida por la buena administración de justicia, dado que la presentación de una excepción determina el desarrollo posterior del procedimiento.

En segundo lugar, este artículo establece una distinción entre, por una parte, la excepción de inadmisibilidad o de incompetencia y, por otra, la demanda en que se solicita que el Tribunal sobresea el asunto o que resuelva sobre cualquier otro incidente. En ambos casos, la demanda debe presentarse mediante escrito separado. Sin embargo, únicamente la

presentación de las primeras queda supeditada al respeto de un plazo, mientras que la presentación de las segundas puede efectuarse en cualquier etapa del procedimiento.

En tercer lugar, este artículo colma una laguna del Reglamento en vigor, en la medida en que este último no regula expresamente las peticiones de sobreseimiento, sino que se limita a mencionar los «incidentes». Ahora bien, en la práctica judicial, las peticiones de sobreseimiento se tratan como incidentes. Sin embargo, como los incidentes no se limitan a las peticiones de sobreseimiento (así, son incidentes las peticiones de que se retiren de los autos documentos anexos a un escrito de alegaciones o pasajes de un escrito de alegaciones que se consideren ofensivos o difamatorios), el Tribunal General propone aclarar la situación estableciendo una distinción entre la petición de sobreseimiento y todos los demás incidentes.

En cuarto lugar, la identidad de las partes que deben ser oídas difiere según que la demanda presentada mediante escrito separado contenga, bien una excepción, bien una petición de sobreseimiento o una solicitud al Tribunal General para que resuelva sobre un incidente.

En quinto lugar, la modificación propuesta en el apartado 6 pretende dotar al Tribunal de una norma apropiada para la organización de vistas sobre una excepción, sobre una petición de sobreseimiento o sobre cualquier otro incidente.

En sexto lugar, inspirándose en el texto del artículo 151, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el presente artículo precisa que el Tribunal General decidirá «con la mayor rapidez posible» sobre la demanda o, «si existen circunstancias especiales que lo justifiquen», unirá su examen al examen del fondo. Con estas precisiones se pretende subrayar que el bloqueo que un incidente supone para la continuación del procedimiento exige que el Juez responda con la mayor rapidez posible, y que la decisión de unir el examen de una demanda al examen del fondo es necesariamente el fruto de un estudio adecuado del asunto. Aunque nunca puede excluirse que se declare la inadmisibilidad de un recurso después de que se haya adoptado la decisión de unir la excepción de inadmisibilidad o de incompetencia al examen del fondo, conviene indicar que esos casos son raros. Así, de entre los asuntos cerrados en el período 2008-2012, se presentaron 321 excepciones de inadmisibilidad o de incompetencia (en 302 asuntos), de las cuales 185 excepciones fueron acogidas mediante auto (en 179 asuntos); 53 excepciones (en 49 asuntos) se cerraron tras un sobreseimiento o un desistimiento y 83 excepciones se unieron al examen del fondo del asunto (en 74 asuntos). Tras haber unido la excepción al examen del fondo, el Tribunal General únicamente declaró en la sentencia la inadmisibilidad del recurso en diez ocasiones.

Artículo 131

Sobreseimiento de oficio

1. Si el Tribunal General constatará que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento, podrá decidir en cualquier momento, de oficio, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes, resolver mediante auto motivado.
2. Si el demandante cesara de responder a las peticiones insistentes del Tribunal General, este último podrá, a propuesta del Juez Ponente, constatar de oficio mediante auto motivado que procede sobreseer el asunto.

Este artículo se aplica a los casos de sobreseimiento constatados de oficio por el Tribunal General. Constituye así un complemento útil del artículo 130, apartado 2, del presente proyecto, relativo a las peticiones de sobreseimiento.

El apartado 1 del presente artículo retoma parcialmente el texto del actual artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.

En cambio, el apartado 2 constituye una novedad, destinada a consagrar la jurisprudencia del Tribunal General según la cual, a falta de una representación en debida forma del demandante o cuando este último no responde a las peticiones insistentes del Tribunal General, el recurso queda sin objeto [véanse los autos del Tribunal General de 23 de marzo de 2004, Ter Huurne's Handelsmaatschappij/Comisión, T-216/99, no publicado en la Recopilación, de 20 de junio de 2008, Leclercq/Comisión, T-299/06, no publicado en la Recopilación, de 2 de septiembre de 2010, Spitzer/OAMI – Homeland Housewares (Magic Butler), T-123/08, no publicado en la Recopilación, de 3 de octubre de 2011, Meridiana y Meridiana fly/Comisión, T-128/09, no publicado en la Recopilación, de 12 de diciembre de 2011, Traxdata France/OAMI – Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA), T-365/07, no publicado en la Recopilación, de 16 de mayo de 2012, La City/OAMI – Bücheler y Ewert (citydogs), T-444/09, no publicado en la Recopilación, y de 12 de septiembre de 2013, Yaqub/OAMI – Turkey (ATATURK), T-580/12, no publicado en la Recopilación].

Artículo 132

Recurso manifiestamente fundado

Cuando el Tribunal de Justicia o el Tribunal General se hayan pronunciado ya sobre una o varias cuestiones jurídicas idénticas a las planteadas en los motivos del recurso y el Tribunal General constate que los hechos están probados, el Tribunal General podrá decidir declarar el recurso manifiestamente fundado mediante un auto motivado que se remita a la jurisprudencia pertinente, una vez terminada la fase escrita del procedimiento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes.

Este nuevo artículo pretende permitir que el Tribunal General resuelva rápidamente un litigio cuando las cuestiones jurídicas sean idénticas a otras ya resueltas por el Tribunal de Justicia o por el Tribunal General y los hechos estén probados. Por razones de economía procesal, si el Tribunal General considera manifiestamente fundado el recurso, podrá decidir resolver mediante un auto motivado que se remita a la jurisprudencia pertinente.

Además de la identidad de los cuestiones jurídicas con las decididas anteriormente y el carácter probado de los hechos, este artículo exige que, en tal supuesto, el Tribunal General resuelva mediante auto motivado. Esta resolución sólo podrá adoptarse una vez terminada la fase escrita del procedimiento y tras oír a las partes.

Capítulo Decimotercero
DE LAS COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO

Este capítulo, que consta de nueve artículos, corresponde al actual capítulo sexto del título segundo, «Del procedimiento». Para reflejar mejor el contenido del presente capítulo, en su título se hace referencia, junto a las costas, a los gastos del proceso.

Dado que el Tribunal General ya no es competente para conocer en primera instancia de los recursos de función pública, la disposición contenida en el artículo 88 del Reglamento de Procedimiento vigente se ha eliminado, por carecer de objeto.

Las modificaciones introducidas en las normas actuales se explican, casi exclusivamente, por la búsqueda de coherencia con los artículos correspondientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, recogidos en el capítulo sexto del título cuarto, relativo a los recursos directos.

Artículo 133

Pronunciamiento sobre las costas

El Tribunal General decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

Este artículo reproduce los términos del artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 134

Reglas generales de imposición de costas

1. La parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
2. Si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal General decidirá sobre el reparto de las costas.
3. Cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal General podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte.

Este artículo, que corresponde al actual artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento y se refiere al supuesto regulado en el artículo 87, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento, reproduce los términos del artículo 138 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, salvo en la denominación del Tribunal.

Artículo 135

Equidad y gastos abusivos o temerarios

1. Si así lo exige la equidad, el Tribunal General podrá decidir que una parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargue únicamente, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte, o incluso que no debe ser condenada por este concepto.
2. El Tribunal General podrá imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso, y en particular si hubiera causado a la otra parte gastos que el Tribunal considere abusivos o temerarios.

El contenido de este artículo procede tanto del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, en lo que respecta a su apartado 1, como del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General vigente, del artículo 88 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública y del artículo 139 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en lo que respecta a su apartado 2.

La referencia a la equidad formulada en el apartado 1 pretende compensar la supresión de la referencia a las «circunstancias excepcionales» que, en el texto actual (artículo 87, apartado 3, párrafo primero), permiten establecer una excepción a la norma general según la cual la parte que ve desestimadas sus pretensiones carga con las costas, si así lo ha solicitado la otra parte.

Artículo 136

Costas en caso de desistimiento

1. La parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento.
2. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte cargará con las costas, si se estimase que la actitud de esta última lo justifica.
3. En caso de acuerdo de las partes sobre las costas, se decidirá con arreglo al mismo.
4. Si ninguna de las partes hubiera solicitado la condena en costas, cada parte cargará con sus propias costas.

Este artículo reproduce en lo esencial el texto del actual artículo 87, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, y es idéntico al artículo 141 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 137

Costas en caso de sobreseimiento

En caso de sobreseimiento, el Tribunal General resolverá discrecionalmente sobre las costas.

Este artículo reproduce el texto del actual artículo 87, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento. Una disposición equivalente figura en el artículo 142 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 138

Costas de las partes coadyuvantes

1. Los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
2. Los Estados partes en el Acuerdo EEE que no sean Estados miembros y el Órgano de Vigilancia de la AELC cargarán igualmente con sus propias costas cuando hayan intervenido como coadyuvantes en el litigio.
3. El Tribunal General podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en los apartados anteriores cargue con sus propias costas.

Este artículo reproduce, en lo esencial, el texto del actual artículo 87, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Las modificaciones terminológicas se inspiran en el artículo 140 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 139

Gastos del proceso

El procedimiento ante el Tribunal General será gratuito, sin perjuicio de lo que a continuación se dispone:

- a) si el Tribunal incurrió en gastos que hubieran podido evitarse, en particular, si el recurso tiene un carácter manifiestamente abusivo, podrá exigir el reembolso de tales gastos a la parte que los provocó;
- b) los gastos de los trabajos de copia y traducción efectuados a petición de una de las partes que el Secretario considere extraordinarios serán reembolsados por dicha parte, con arreglo a la tarifa de la Secretaría contemplada en el artículo 37;
- c) en caso de incumplimientos repetidos de las disposiciones del presente Reglamento o de las normas prácticas contempladas en el artículo 224 que obliguen a solicitar la subsanación de las irregularidades, los gastos de la tramitación requerida por parte del Tribunal serán reembolsados por la parte de que se trate, a petición del Secretario, con arreglo a la tarifa de la Secretaría contemplada en el artículo 37.

A diferencia de todos los demás artículos del presente capítulo, salvo el 141, el artículo 139 es el único que no se refiere a las costas. En efecto, como indica su título, este artículo se refiere a los gastos del proceso. El objeto de esta disposición consiste, pues, en determinar los supuestos en que, por excepción al principio de gratuidad de la justicia ante el Tribunal General, estará justificado solicitar a las partes que abonen ciertos gastos.

Los supuestos contemplados en las letras a) y b) se conocen ya, pues figuran en el artículo 90 del Reglamento de Procedimiento vigente. En la disposición de la letra a) se ha añadido, no obstante, una nueva frase relativa a las situaciones en las que el Tribunal General incurre en gastos que hubieran podido evitarse, y concretamente al caso de los recursos manifiestamente abusivos. Esta referencia se inspira directamente en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública.

El texto recogido en la letra c) constituye una novedad. Por una parte, el tiempo empleado por el Tribunal y su Secretaría para lograr que los asuntos queden listos para ser juzgados es un tiempo que no dedican a tramitar o a instruir los demás asuntos. Tomando como ejemplo únicamente los escritos de interposición de recurso, la Secretaría se ha visto obligada a proceder a una subsanación en 237 de las 617 demandas presentadas en 2012. Por otra parte, es un error creer que el incumplimiento de las disposiciones de carácter formal no afecta al Tribunal, a su Secretaría o a los servicios de la institución. Así, por ejemplo, la presentación de escritos excesivamente largos sin que la parte subsane la irregularidad pese a la adopción de varias decisiones destinadas a obtener una versión resumida constituye una carga, en primer lugar para la Secretaría durante la tramitación de los documentos, para el órgano jurisdiccional que debe pronunciarse y, según la lengua de procedimiento, para el servicio de traducción de la institución. Habida cuenta de estos factores, el Tribunal General estima conveniente disponer, en el Reglamento de Procedimiento, de un fundamento jurídico que le permita obligar a una parte a cargar con los gastos causados al Tribunal por su falta de cooperación, puesta de manifiesto por la repetición de los incumplimientos.

Artículo 140 **Costas recuperables**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 139, se considerarán costas recuperables:

- a) las cantidades que deban pagarse a los testigos y peritos conforme al artículo 100;
- b) los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado.

El artículo 140 coincide en lo esencial con el artículo correspondiente del Reglamento de Procedimiento vigente, a saber, el artículo 91, pero adaptando a la nueva numeración las referencias a otros artículos. El texto equivalente en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia es el artículo 144.

Artículo 141
Formas de pago

1. La caja del Tribunal General y sus deudores efectuarán sus pagos en euros.
2. Si los gastos reembolsables se hubieran realizado en una moneda que no sea el euro o los actos que den lugar a indemnización se hubieran realizado en un país cuya moneda no sea el euro, la conversión de la moneda se efectuará según el tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo del día del pago.

El presente artículo reproduce los términos del actual artículo 93 del Reglamento de Procedimiento, con una modificación terminológica inspirada en el artículo 146 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Capítulo Decimocuarto DE LA INTERVENCIÓN

Este decimocuarto capítulo del título relativo a los recursos directos regula la intervención, al igual que el actual capítulo tercero del título relativo a los procedimientos especiales.

Históricamente, las normas relativas a la intervención han sido modificadas en varias ocasiones, pero la evolución normativa más significativa en la regulación de la intervención es la que se produjo en el año 2000, cuando el Consejo aprobó la modificación normativa propuesta por el Tribunal General para evitar que las intervenciones retrasaran indebidamente el procedimiento. A partir del 1 de febrero de 2001, fecha de entrada en vigor de esta modificación de las normas sobre la intervención, la amplitud de los derechos de los coadyuvantes varía en función del momento en que hayan presentado su demanda de intervención: dentro del plazo de seis semanas –incrementado en diez días por razón de la distancia– que sigue a la publicación en el Diario Oficial de la comunicación relativa a la presentación de un nuevo recurso, o bien una vez expirado ese plazo pero antes de que el Tribunal General haya adoptado la decisión de abrir la fase oral del procedimiento. Mientras que el coadyuvante que presenta su demanda de intervención dentro del plazo de seis semanas tiene derecho a que se le comuniquen todos los documentos que obren en autos, salvo los datos confidenciales, y a presentar un escrito de formalización de la intervención, quien presenta la demanda de intervención tras la expiración de ese plazo sólo tiene derecho a exponer sus observaciones en la vista oral, basándose en el informe para la vista que se le haya comunicado. Por consiguiente, este último coadyuvante, calificado de coadyuvante de segundo rango, sólo puede ejercer sus derechos en la vista oral, basándose en la información que contenga el informe para la vista.

El número de demandas de intervención es variable, pero elevado, y alcanzó un nivel excepcional en 2011 (190 demandas en 2012, 378 en 2011, 220 en 2010, 159 en 2009). Ahora bien, un alto número de demandas de intervención repercute de manera evidente en el desarrollo de la fase escrita del procedimiento.

Por una parte, las demandas de intervención se resuelven mediante auto, después de que las partes principales hayan presentado sus observaciones y eventualmente solicitado el tratamiento confidencial de ciertos datos de los autos. Las repercusiones de las solicitudes de tratamiento confidencial son considerables para el Tribunal General, y una mera referencia a las mismas no basta para dar cuenta de la variedad de situaciones que se producen ni de las importantes dificultades que su tramitación supone para el Tribunal y para su Secretaría, en particular, al dar traslado de los documentos a las partes. En efecto, la solicitud de tratamiento confidencial presentada por una parte principal con respecto a un coadyuvante es un caso sencillo, comparado con situaciones tales como las que se dan, por ejemplo, con las solicitudes de tratamiento confidencial presentadas por cada una de las partes principales con respecto a uno o varios coadyuvantes. En otros casos, a la confidencialidad solicitada por una de las partes principales, o por todas ellas, se suman las solicitudes de tratamiento confidencial de los documentos presentadas por uno o varios coadyuvantes con respecto a otro u otros coadyuvantes. En efecto, el artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento vigente dispone que el Presidente puede excluir «a instancia de parte» los documentos secretos o confidenciales del traslado a los coadyuvantes de los escritos procesales notificados a las partes, y la expresión entrecomillada se interpreta en el sentido

de que se refiere tanto a las partes principales como a las partes cuya demanda de intervención se ha admitido.

El número de solicitudes de tratamiento confidencial relacionadas con las demandas de intervención es también elevado (107 solicitudes en 2012, 131 en 2011, 76 en 2010, 91 en 2009). Esta estadística no revela nada sobre el número y la naturaleza de los datos mencionados en cada una de las solicitudes de tratamiento confidencial, datos que pueden ser muy numerosos en una sola solicitud, y evidentemente no da cuenta de la dificultad que supone el tratamiento de las versiones confidenciales y no confidenciales de los escritos procesales.

Por otra parte, el coadyuvante cuya intervención se ha admitido con arreglo al actual artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento puede presentar un escrito de formalización de la intervención y puede impugnar el tratamiento confidencial de ciertos datos decidido con carácter provisional, obligando en este último caso al Presidente de Sala a valorar la confidencialidad de cada uno de los datos y a resolver mediante auto. Es preciso añadir que las partes principales pueden también presentar sus observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención y que, en caso de intervención como coadyuvante de un Estado miembro, la demanda de intervención y el escrito de formalización presentados por él están redactados en la lengua de dicho Estado, lo que obliga a los servicios del Tribunal de Justicia a traducir el escrito de formalización a la lengua de procedimiento, a fin de notificarlo a las demás partes.

Las demandas de intervención presentadas en los últimos cuatro años se distribuyen así:

- presentadas por los particulares: 74 en 2012, 199 en 2011, 92 en 2010 y 73 en 2009;*
- presentadas por los Estados miembros: 72 en 2012, 46 en 2011, 89 en 2010, 65 en 2009;*
- presentadas por las instituciones: 44 en 2012, 133 en 2011, 39 en 2010, 21 en 2009.*

En 2012, un 94 % de las intervenciones fueron admitidas con arreglo al artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, mientras que el otro 6 % fueron intervenciones de segundo rango.

Tomando en consideración todos estos factores y la propuesta del Tribunal General de atribuir carácter facultativo a la vista oral, parece oportuno modificar el régimen actual de la intervención.

La primera modificación importante que se propone consiste en suprimir la categoría de los coadyuvantes de segundo rango.

En efecto, esta proposición resulta coherente con la estructura general de la reforma de las normas procesales.

Así, por una parte, la propuesta de que el Tribunal General pueda resolver sin fase oral del procedimiento y la que reserva a las partes principales el derecho a presentar la solicitud motivada de celebración de una vista pueden dar lugar a una situación en la que el coadyuvante de segundo rango quede privado de toda participación efectiva en el procedimiento.

Por otra parte, entre las reformas internas que ha ido adoptando el Tribunal General se encuentra la generalización de un informe para la vista resumido. Esto hace que, como ocurre ya actualmente, el coadyuvante de segundo rango sólo pueda ejercer sus derechos basándose en una documentación limitada.

El régimen único que se propone en el presente proyecto es, pues, el del actual artículo 116, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. De ello se deduce que, con arreglo al presente proyecto, el tercero que desee intervenir como coadyuvante en un litigio pendiente ante el Tribunal General estará obligado a presentar su demanda de intervención en el plazo de un mes que se inicia con la publicación, en el Diario Oficial de la Unión Europea, de la comunicación relativa a este nuevo asunto, incrementado en diez días por razón de la distancia. Cuando reciba la demanda de intervención, el Tribunal General la notificará a las partes principales, invitándolas a comunicarle sus eventuales observaciones sobre dicha demanda y, en particular, sobre la necesidad de excluir de los autos determinados documentos secretos o confidenciales. Tras la expiración del plazo fijado para presentar estas observaciones y después de que se haya decidido admitir la demanda de intervención, y sólo entonces, se dará traslado de los escritos procesales al coadyuvante y éste podrá redactar su escrito de formalización de la intervención.

La segunda modificación importante que se propone es consecuencia de la necesidad de intentar reducir la duración total del proceso mediante una reducción de la duración de la fase escrita del procedimiento. Con esta perspectiva, el Tribunal General propone modificar el plazo legal de presentación de las demandas de intervención, actualmente de seis semanas, y fijarlo en un mes, siempre a partir de la publicación en el Diario Oficial de la comunicación relativa a la presentación del recurso y siempre incrementado en diez días por razón de la distancia. En efecto, a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría y por el servicio de traducción de la institución, la comunicación sólo puede publicarse, por término medio, unos 65 días después de la presentación formal del recurso. Sumando este plazo de 65 días y el plazo de seis semanas incrementado en 10 días por razón de la distancia, las demandas de intervención se presentan por lo general en el período comprendido entre la presentación del escrito de contestación y la presentación de la réplica (sin tener en cuenta eventuales prórrogas de los plazos y a condición de que se haya organizado un segundo turno de escritos de alegaciones). Ahora bien, la presentación de la demanda de intervención obliga a recoger las observaciones de las partes principales, a pronunciarse sobre dicha demanda y a fijar un plazo para la presentación del escrito de formalización de la intervención, y posteriormente para la presentación de las observaciones de las partes principales sobre dicho escrito de formalización. La consecuencia es que, en caso de admisión de un coadyuvante, la fase escrita del procedimiento no puede cerrarse antes de que hayan transcurrido varias semanas desde la presentación de la réplica. Y a veces debe cerrarse aún más tarde, si el coadyuvante impugna la confidencialidad de ciertos datos de los autos y obliga al Juez a pronunciarse sobre las cuestiones de confidencialidad.

Con este mismo objetivo, el presente proyecto simplifica la forma de la decisión por la que se admite la intervención de los Estados e instituciones cuando no existe solicitud de tratamiento confidencial y dispone que, en los demás casos y en los supuestos en que se impugne la confidencialidad, el Presidente resolverá mediante auto «con la mayor rapidez posible».

La tercera modificación que merece la pena mencionar en esta introducción es la destinada a precisar que el tratamiento confidencial de los datos sólo puede ser solicitado por una parte principal con respecto a un coadyuvante.

Artículo 142

Objeto y efectos de la intervención

1. La intervención no podrá tener otro fin que apoyar, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes principales. La intervención no otorgará derechos procesales idénticos a los de las partes principales, en particular, el de solicitar la celebración de una vista.
2. La intervención será accesoria con respecto al litigio principal. Quedará sin objeto cuando el asunto sea archivado y eliminado del registro del Tribunal General, a causa de un desistimiento o de un acuerdo entre las partes principales, o cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda.
3. El coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

Este nuevo artículo reproduce el contenido de los apartados 1 a 3 del artículo 129 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cambiando el nombre del Tribunal de que se trata.

En él se añaden dos precisiones importantes.

El artículo 142 recuerda, en primer lugar, que el coadyuvante no puede equipararse a la parte principal. Como la demanda de intervención se superpone necesariamente a un litigio preexistente, no puede tener otro fin que apoyar a una de las partes de dicho litigio, es decir, las pretensiones de esta última y los motivos que invoca. Los derechos procesales de los coadyuvantes son menores que los de las partes principales. A fin de aclarar la amplitud de los derechos conferidos a los coadyuvantes, el Tribunal General se ha esforzado por precisar, en el presente proyecto, si las disposiciones se refieren únicamente a las partes principales o a las partes principales y a los coadyuvantes. Este esfuerzo de clarificación justifica la inclusión de las definiciones que figuran en el artículo 1, apartado 2, letras c) y d), del presente proyecto.

En segundo lugar, el artículo 142 extrae las consecuencias oportunas del carácter accesorio de la intervención, al precisar que esta última quedará sin objeto si el litigio principal se extingue, por ejemplo, a causa de un desistimiento o de un acuerdo entre la parte demandante y la demandada.

El apartado 3 del artículo 142 formula, por su parte, una regla ya recogida en el apartado 3 del actual artículo 116 del Reglamento de Procedimiento, la de que el coadyuvante debe aceptar el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

Artículo 143
Demanda de intervención

1. La demanda de intervención sólo podrá presentarse dentro de un plazo de un mes a partir de la publicación del anuncio contemplado en el artículo 79.
2. La demanda de intervención contendrá:
 - a) la indicación del asunto;
 - b) la designación de las partes principales;
 - c) el nombre y domicilio de la persona que solicita intervenir;
 - d) la indicación de la condición y de la dirección del representante de la persona que solicita intervenir;
 - e) las pretensiones en cuyo apoyo solicita intervenir tal persona;
 - f) la exposición de las circunstancias que fundamenten el derecho de intervención cuando la demanda de intervención se presente en virtud de los párrafos segundo o tercero del artículo 40 del Estatuto.
3. La persona que solicita intervenir deberá estar representada conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.
4. Será aplicable a la demanda de intervención lo dispuesto en el artículo 77, en el artículo 78, apartados 3 a 5, y en el artículo 139.

El artículo 143 retoma, en lo esencial, los términos del artículo 115 del Reglamento de Procedimiento vigente, adaptando a la nueva numeración las referencias a otros artículos.

El texto del apartado 1 se ha modificado, no obstante, en aras de la coherencia con el artículo 130 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, si se exceptúa la referencia al plazo, que se ha reducido, pasando de seis semanas a un mes, por las razones expuestas en la introducción al presente capítulo.

En cuanto a las adaptaciones realizadas en los apartados 2 y 3, tienen por objeto precisar que esta disposición se refiere a la persona que solicita intervenir, que tiene un estatuto distinto del de coadyuvante.

Por último, el apartado 4 recuerda los requisitos de forma que la demanda de intervención debe cumplir y alude, mediante una remisión al artículo 139 del presente proyecto, a los gastos a los que se expone la parte que presenta esta demanda en caso de incumplimientos repetidos de las disposiciones del presente proyecto o de las normas prácticas que el Tribunal General adoptará basándose en el artículo 224.

Artículo 144

Decisión sobre la demanda de intervención

1. La demanda de intervención se notificará a las partes principales.
2. El Presidente ofrecerá a las partes principales la posibilidad de presentar sus observaciones escritas y orales sobre la demanda de intervención y de solicitar, si procede, que se excluyan del traslado al coadyuvante ciertos datos de los autos de carácter secreto o confidencial.
3. Cuando el demandado presente una excepción de inadmisibilidad o de incompetencia, contemplada en el artículo 130, apartado 1, no se decidirá sobre la demanda de intervención hasta que la excepción haya sido rechazada o unida al examen del fondo.
4. Cuando la demanda de intervención se presente al amparo del párrafo primero del artículo 40 del Estatuto y las partes principales no hayan mencionado datos de los autos de carácter secreto o confidencial de los que estimen que su traslado al coadyuvante puede perjudicarles, se admitirá la intervención mediante decisión del Presidente.
5. En los demás casos, el Presidente decidirá con la mayor rapidez posible mediante auto sobre la demanda de intervención y, en su caso, sobre el traslado al coadyuvante de los datos de los que se haya alegado que tienen carácter secreto o confidencial.
6. En el caso de que se rechace la demanda de intervención, el auto mencionado en el apartado 5 deberá estar motivado y decidir sobre las costas relativas a la demanda de intervención, incluidas las costas de la persona que solicitaba intervenir, con arreglo a los artículos 134 y 135.
7. Si se admite la demanda de intervención, se dará traslado al coadyuvante de todos los escritos procesales notificados a las partes principales, exceptuando, en su caso, los datos secretos o confidenciales excluidos de este traslado en virtud del apartado 5.
8. En el caso de que se retire la demanda de intervención, el Presidente ordenará el archivo de la misma y decidirá sobre las costas, incluidas las costas de la persona que solicitaba intervenir, con arreglo al artículo 136.
9. En el caso de que se retire la intervención, el Presidente ordenará el archivo de la misma y decidirá sobre las costas con arreglo a los artículos 136 y 138.
10. Si se pone fin al proceso en el asunto principal antes de que se haya decidido sobre una demanda de intervención, la persona que solicitaba intervenir y las partes principales cargarán con las costas relativas a dicha demanda, soportando cada una sus propias costas. La persona que solicitaba intervenir recibirá una copia del auto que ponga fin al proceso.

A fin de permitir resolver los litigios con la mayor rapidez posible, el presente artículo, relativo a la decisión sobre la demanda de intervención, completa, aclara y precisa las disposiciones actuales en varios aspectos. El Tribunal General ha procedido, pues, a una auténtica reescritura del actual artículo 116 del Reglamento de Procedimiento.

En primer lugar, el texto que se propone precisa ciertos aspectos del procedimiento seguido por el Tribunal General cuando se presenta una demanda de intervención. En efecto, en sus apartados 1 y 2, este artículo dispone que la demanda de intervención se notificará a las partes principales y que éstas tendrán la posibilidad de presentar sus observaciones y de solicitar un tratamiento confidencial de ciertos datos de los autos con respecto al coadyuvante.

En segundo lugar, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (autos de 5 de julio de 2001, Conseil national des professions de l'automobile y otros/Comisión, C-341/00 P, Rec. p. I-5263, apartado 37, y de 17 de mayo de 2002, Alemania/Parlamento y Consejo, C-406/01, Rec. p. I-4561, apartado 24), el Tribunal General considera apropiado no pronunciarse sobre una demanda de intervención antes de haberse pronunciado sobre una excepción de inadmisibilidad o de incompetencia formulada en virtud del artículo 130 del presente proyecto. Esta evolución debe interpretarse poniéndola en relación con el artículo 130, apartado 7, que dispone que el Tribunal General decidirá con la mayor rapidez posible sobre las excepciones de inadmisibilidad o de incompetencia.

En tercer lugar, este artículo confirma que los documentos secretos o confidenciales pueden ser excluidos del traslado al coadyuvante, pero precisa que el tratamiento confidencial sólo puede solicitarlo una parte principal con respecto a un coadyuvante. Dado que hacen referencia a las partes principales, los apartados 2 y 4 dejan claro, pues, que un coadyuvante no puede solicitar un tratamiento confidencial con respecto a otro coadyuvante de documentos presentados por él.

En cuarto lugar, el apartado 4 simplifica la forma de la resolución por la que se admite la intervención como coadyuvante de un Estado miembro o de una institución, siempre que no se haya solicitado el tratamiento confidencial de ciertos datos. En tal caso se renuncia al auto, prefiriendo una simple decisión que se une a los autos del asunto. Si no se da este caso, y al igual que en todos los demás supuestos, la forma de auto se mantiene, pero precisando que debe resolverse con la mayor rapidez posible, pues el Tribunal desea poder cerrar la fase escrita del procedimiento tan rápidamente como sea posible.

En quinto lugar, este artículo establece normas sobre las costas para los casos de rechazo de la demanda de intervención (apartado 6), de retirada de dicha demanda (apartado 8) y de retirada de la intervención (apartado 9), así como para los casos en que el asunto quede resuelto antes de que se haya decidido sobre la demanda de intervención (apartado 10). Estas disposiciones colman las lagunas del Reglamento de Procedimiento actual, cuyos artículos sobre las costas se refieren a las partes principales y a los coadyuvantes, pero no a las personas que solicitan intervenir.

Artículo 145

Presentación del escrito de formalización de la intervención

1. El coadyuvante podrá presentar el escrito de formalización de la intervención en el plazo que fije el Presidente.
2. El escrito de formalización de la intervención contendrá:

- a) las pretensiones del coadyuvante, que apoyarán, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes principales;
 - b) los motivos y alegaciones del coadyuvante;
 - c) las pruebas y la proposición de prueba, si ha lugar.
3. Una vez presentado el escrito de formalización de la intervención, el Presidente fijará un plazo a las partes principales para que respondan a dicho escrito.

Este artículo reproduce en lo esencial los términos del artículo 116, apartados 4 y 5, del Reglamento de Procedimiento actual. En especial, mantiene el principio de que el plazo de presentación del escrito de formalización de la intervención lo fija el Presidente, con objeto de permitir que éste disponga de un cierto margen de flexibilidad en la dirección del proceso.

El texto del apartado 2 se inspira en el artículo 132, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, al indicar que las pretensiones del coadyuvante se limitarán exclusivamente a apoyar las pretensiones de una de las partes principales y al contemplar la posibilidad de que, si ha lugar, se presenten pruebas, y no sólo una proposición de prueba.

En lo que respecta al apartado 3, se sugiere recoger sistemáticamente las observaciones de las partes principales, a fin de respetar el principio de contradicción y de evitar que las partes principales se vean impulsadas a solicitar la celebración de una vista oral para poder pronunciarse sobre uno o varios escritos de formalización de la intervención.

Capítulo Decimoquinto DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Siguiendo el ejemplo del Tribunal de Justicia y teniendo en cuenta la terminología utilizada en el artículo 47, párrafo tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la expresión «asistencia jurídica gratuita» sustituye a la expresión «justicia gratuita».

Este capítulo, que consta de cinco artículos, se ajusta en buena medida a la estructura del capítulo séptimo del título segundo del Reglamento en vigor. Las modificaciones de fondo introducidas en las disposiciones son de escasa importancia, exceptuando la destinada a ampliar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas.

En aras de la coherencia entre los diferentes reglamentos de procedimiento, el orden de los artículos se inspira en el del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Por último, cabe señalar, desde un punto de vista estadístico, que en 2012 se presentaron 50 solicitudes de justicia gratuita ante el Tribunal General (60 en 2011) y, desde un punto de vista presupuestario, que los créditos atribuidos al Tribunal General para 2013 por este concepto ascienden a 15.000 euros.

Artículo 146

Disposiciones generales

1. Tendrán derecho a recibir asistencia jurídica gratuita las personas que, debido a su situación económica, no puedan hacer frente, en todo o en parte, a los gastos del proceso.
2. Se denegará la asistencia jurídica gratuita cuando el Tribunal General sea manifiestamente incompetente para conocer de la acción para la que se solicite tal asistencia o cuando esa acción sea manifiestamente inadmisibles o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento vigente, sin perjuicio de dos modificaciones inspiradas en el texto del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La primera modificación consiste en ajustarse a la terminología de la Carta, que menciona la prestación de asistencia jurídica gratuita a las personas que no dispongan de recursos suficientes. Por esta razón, la expresión «asistencia jurídica gratuita» sustituye a la expresión «justicia gratuita», usada actualmente en el apartado 1. La segunda modificación consiste en eliminar la palabra «físicas» de la expresión «personas físicas», que figura en el actual artículo 94, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, con el solo propósito de ampliar a las personas jurídicas el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, pues el artículo 47 de la Carta se refiere a «toda persona». Esta modificación, exigida por la evolución del marco de referencia legal, lleva, pues, al Tribunal General a volver a una norma cuya supresión había conseguido, no obstante, en 2005, mediante una modificación de su Reglamento de Procedimiento.

Cabe señalar, por último, que el texto del apartado 2 se ajusta al del artículo 126 del presente proyecto al disponer que el Tribunal General denegará la asistencia jurídica gratuita, entre otros supuestos, cuando la acción para la que se solicite «carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno».

Artículo 147

Solicitud de asistencia jurídica gratuita

1. La asistencia jurídica gratuita podrá solicitarse antes de la interposición del recurso o mientras el recurso esté pendiente.
2. La solicitud de asistencia jurídica gratuita deberá redactarse utilizando un formulario que se publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* y estará disponible en el sitio Internet del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74, el formulario deberá ir firmado por el solicitante o, si este último ya está representado, por su abogado. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas sin utilizar el formulario no se tomarán en consideración.
3. La solicitud de asistencia jurídica gratuita deberá ir acompañada de la información y de los documentos acreditativos que permitan evaluar la situación económica del solicitante, tales como un certificado de una autoridad nacional competente que acredite esa situación económica.
4. Si la solicitud de asistencia jurídica gratuita se presenta antes de la interposición del recurso, el solicitante deberá exponer concisamente el objeto del recurso planeado, los hechos del caso y los motivos alegados para fundamentar dicho recurso. La solicitud deberá ir acompañada de los correspondientes documentos probatorios.
5. Si ha lugar, la solicitud de asistencia jurídica gratuita irá acompañada de los documentos mencionados en el artículo 51, apartados 2 y 3, y en el artículo 78, apartado 3. En tal caso, será aplicable lo dispuesto en el artículo 51, apartado 4, y en el artículo 78, apartado 5.
6. Si el solicitante de asistencia jurídica gratuita ya está representado por un abogado al presentar su solicitud, será aplicable lo dispuesto en el artículo 77.
7. La presentación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita suspenderá el plazo fijado para la presentación del recurso, en lo que respecta al solicitante, hasta la fecha en que se notifique el auto que decida sobre la misma o, en los casos contemplados en el artículo 148, apartado 6, hasta la fecha del auto que designe al abogado encargado de representar al solicitante.

Este artículo concuerda con el artículo 95 del Reglamento de Procedimiento vigente, pero modifica su contenido en tres aspectos.

En primer lugar, su apartado 1 precisa que la asistencia jurídica gratuita puede solicitarse mientras el recurso esté pendiente, mientras que el texto actual indica, en términos más generales, que puede solicitarse «después de la interposición del recurso».

En segundo lugar, el apartado 2 dispone que es obligatorio utilizar el formulario oficial de solicitud de asistencia jurídica gratuita y que, de no utilizarlo, la solicitud no se tomará en consideración. Conviene recordar que el Tribunal General dispone ya de un formulario de utilización obligatoria, pero que, en el estado actual del Derecho, la Secretaría toma no obstante en consideración las solicitudes presentadas sin utilizar el formulario, pues insta al solicitante a rellenar el formulario y a remitírselo en un determinado plazo.

En tercer lugar, la ampliación del beneficio de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas y la posibilidad de que la solicitud sea presentada por un abogado con vistas a ejercer una acción judicial obligan a respetar ciertos requisitos formales. Éste es el objetivo de los apartados 5 y 6.

En cuanto al apartado 7, concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 96, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 148

Decisión sobre la asistencia jurídica gratuita

1. Antes de pronunciarse sobre una solicitud de asistencia jurídica gratuita, el Presidente fijará un plazo a la otra parte principal para que presente observaciones escritas, salvo cuando del contenido de la solicitud presentada ya se deduzca que ésta no cumple los requisitos establecidos en el artículo 146, apartado 1, o que le es aplicable lo dispuesto en el artículo 146, apartado 2.
2. La decisión sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita será adoptada por el Presidente mediante auto.
3. El auto denegatorio de la asistencia jurídica gratuita estará motivado.
4. El auto por el que se conceda la asistencia jurídica gratuita podrá designar a un abogado para representar al interesado, si éste lo propuso en la solicitud de asistencia jurídica gratuita y el abogado ha dado su consentimiento para representar al solicitante ante el Tribunal General.
5. Si el interesado no hubiera propuesto por sí mismo un abogado en la solicitud de asistencia jurídica gratuita o a raíz del auto por el que se conceda la asistencia jurídica gratuita o si se estimara inaceptable su elección, el Secretario enviará el auto por el que se conceda la asistencia jurídica gratuita y una copia de la solicitud a la autoridad competente del Estado afectado, mencionada en el reglamento adicional al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Si el interesado no estuviera domiciliado en la Unión, el Secretario enviará el auto por el que se conceda la asistencia jurídica gratuita y una copia de la solicitud a la autoridad competente del Estado en el que tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, se designará mediante auto al abogado encargado de representar al solicitante, habida cuenta, según los casos, de las propuestas del interesado o de las propuestas transmitidas por la autoridad mencionada en el apartado 5.

7. El auto por el que se conceda la asistencia jurídica gratuita podrá determinar la cantidad que se abonará al abogado encargado de representar al interesado o fijar un límite que no podrán sobrepasar, en principio, los desembolsos y honorarios del abogado. Dicho auto podrá disponer, teniendo en cuenta la situación económica del interesado, que éste contribuya a sufragar los gastos contemplados en el artículo 149, apartado 1.
8. No se dará recurso alguno contra los autos dictados en virtud del presente artículo.
9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147, apartado 6, las notificaciones al solicitante de asistencia jurídica gratuita y a las demás partes se efectuarán del modo establecido en el artículo 80, apartado 1.

Este artículo se inspira en el artículo 96, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento actual en lo que respecta a la necesidad de recoger por escrito las observaciones de la otra parte principal (apartado 1), a la forma que debe adoptar la decisión del Presidente sobre esta solicitud –Presidente que continúa pudiendo someter la cuestión al Tribunal General, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del presente proyecto– (apartado 2) y a la obligación de motivación impuesta (apartado 3). En cambio, se diferencia del texto actual en que la competencia para fijar el plazo contemplado en el apartado 1 recae en el Presidente.

Los apartados 4 a 7 del artículo 148 del presente proyecto desarrollan las disposiciones del actual apartado 3 del artículo 96 del Reglamento de Procedimiento, confiriendo valor normativo a la práctica seguida por el Tribunal General para designar a un abogado.

El apartado 8 reproduce sin modificación alguna el actual apartado 6 del artículo 96 del Reglamento de Procedimiento.

Por último, el apartado 9 regula el modo de efectuar las notificaciones, que podrá variar según que el solicitante de asistencia jurídica gratuita estuviera representado ya por un abogado al presentar su solicitud o no lo estuviera.

Artículo 149

Anticipos y carga de las costas

1. En caso de concesión de asistencia jurídica gratuita, la caja del Tribunal General se hará cargo, en su caso dentro de los límites que se hayan fijado, de los gastos vinculados a la asistencia jurídica y a la representación del demandante ante el Tribunal. A instancia del abogado designado con arreglo al artículo 148, el Presidente podrá decidir que se le abone un anticipo.
2. Cuando, en virtud de la resolución que ponga fin al proceso, el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita deba soportar sus propias costas, el Presidente determinará los desembolsos y honorarios del abogado que serán sufragados por la caja del Tribunal General, mediante auto motivado contra el que no se dará recurso alguno.
3. Cuando, en la resolución que ponga fin al proceso, el Tribunal General condene a otra de las partes a soportar las costas del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, dicha

parte estará obligada a reembolsar a la caja del Tribunal General las cantidades anticipadas en concepto de asistencia jurídica gratuita.

4. El Secretario reclamará las cantidades mencionadas en el apartado 3 a la parte que haya sido condenada a pagarlas.
5. Cuando se desestimen totalmente las pretensiones del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal General, al pronunciarse sobre las costas en la resolución que ponga fin al proceso, podrá decidir, si así lo exige la equidad, que una o varias de las demás partes soporten sus propias costas o que éstas sean sufragadas, total o parcialmente, por la caja del Tribunal General en concepto de asistencia jurídica gratuita.

En sus apartados 1 a 3 y 5, el presente artículo reproduce en lo esencial los términos del actual artículo 97, apartados 1 a 4, del Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de una modificación en la redacción de la primera frase del apartado 1. Esta modificación hace que dicha frase coincida en parte con el actual párrafo segundo del apartado 1 del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento y aproxima el texto de la disposición al del artículo 188, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

El apartado 4 concuerda, en lo esencial, con el apartado 3 del artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 150

Retirada de la asistencia jurídica gratuita

1. Si en el curso del proceso cambian las circunstancias que llevaron a conceder la asistencia jurídica gratuita, el Presidente podrá retirarla, de oficio o a instancia de parte, tras oír al interesado.
2. El auto por el que se retire la asistencia jurídica gratuita estará motivado y contra él no se dará recurso alguno.

Este artículo concuerda en lo esencial con el artículo 96, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento actual, que se refiere a la posibilidad de retirar el beneficio de justicia gratuita ya concedido si cambian las condiciones que justificaron su concesión. Conviene precisar que la posibilidad de someter la cuestión al Tribunal General figura en el artículo 19 del presente proyecto.

Capítulo Decimosexto DE LOS PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA

El presente capítulo trata de los procedimientos de urgencia. Entre estos procedimientos figura el procedimiento acelerado, cuyo objeto es obtener una decisión rápida del Juez sobre el fondo del litigio. También figura el procedimiento de medidas provisionales, cuyo objeto es proteger, con carácter provisional, los intereses de una de las partes antes de que se resuelva sobre el fondo del litigio. Estos procedimientos tienen en común, pues, la búsqueda de una solución rápida, pero tal solución es definitiva en el primer caso y provisional en el segundo.

Para mejorar la legibilidad del texto, se han agrupado aquí normas actualmente recogidas en títulos distintos del Reglamento de Procedimiento vigente (el artículo 76 bis en el título segundo y los artículos 104 a 110 en el título tercero).

En 2012 se presentaron 26 solicitudes de procedimiento acelerado (43 en 2011, 24 en 2010 y 22 en 2009) y 21 demandas de medidas provisionales (44 en 2011, 41 en 2010 y 29 en 2009).

Sección 1. Del procedimiento acelerado

Artículo 151

Decisión relativa al procedimiento acelerado

1. En atención a la urgencia particular y a las circunstancias del asunto, el Tribunal General podrá, a instancia del demandante o del demandado y tras oír a la otra parte principal, decidir sustanciarlo por un procedimiento acelerado.
2. A propuesta del Juez Ponente, en circunstancias excepcionales, el Tribunal General podrá decidir de oficio, tras oír a las partes principales, sustanciar el asunto por un procedimiento acelerado.
3. La resolución del Tribunal General por la que se decida sustanciar el asunto por un procedimiento acelerado podrá establecer requisitos relativos a la extensión y forma de los escritos de las partes principales, al desarrollo posterior del procedimiento o a los motivos y alegaciones sobre los cuales se solicitará un pronunciamiento de dicho Tribunal.
4. Si una de las partes principales no cumpliera cualquiera de los requisitos mencionados en el apartado 3, la decisión de sustanciar el asunto por un procedimiento acelerado podrá ser revocada. En tal caso, el procedimiento continuará instruyéndose como un procedimiento ordinario.

El artículo 151 concuerda, en lo esencial, con el artículo 76 bis del Reglamento de Procedimiento actual.

Más concretamente, el apartado 1 concuerda con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 76 bis vigente, pero con una precisión sobre la parte que debe ser oída con respecto a la solicitud de procedimiento acelerado.

Los apartados 3 y 4 concuerdan, respectivamente, con los párrafos primero y segundo del apartado 4 de ese mismo artículo 76 bis, pero también contienen precisiones sobre la identidad de las partes afectadas.

En cambio, a diferencia del actual artículo 76 bis, el artículo 151, apartado 2, contempla igualmente la posibilidad de que, en circunstancias excepcionales, el Tribunal General someta de oficio la tramitación de un asunto a un procedimiento acelerado. Esta norma se inspira en el apartado 3 del artículo 133 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 152

Solicitud de procedimiento acelerado

1. La solicitud de procedimiento acelerado deberá formularse, mediante escrito separado, en el momento de presentación de la demanda o del escrito de contestación y contendrá una motivación que explique la especial urgencia del asunto y las demás circunstancias pertinentes.
2. La solicitud de procedimiento acelerado podrá indicar que determinados motivos, alegaciones o pasajes de la demanda o del escrito de contestación se presentan únicamente para el caso de que no se sustancie el asunto por un procedimiento acelerado, en particular, adjuntando a la solicitud una versión abreviada de la demanda, así como una lista de anexos y unos anexos que serán los únicos que deberán tenerse en cuenta si el asunto se sustancia en un procedimiento acelerado.

Este artículo retoma, en lo esencial, el artículo 76 bis, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento vigente. La precisión de que la solicitud debe contener una motivación ha sido añadida al Reglamento de Procedimiento para mayor claridad. Esta precisión figura actualmente en el punto 70 de las Instrucciones prácticas a las partes.

En cuanto al apartado 2, en él se dispone que la versión abreviada debe ir acompañada de una lista de anexos y, como se ha añadido para mayor claridad, de tales anexos.

Artículo 153

Tramitación prioritaria

No obstante lo dispuesto en el artículo 67, apartado 1, se dará prioridad a los asuntos que el Tribunal General haya decidido sustanciar por un procedimiento acelerado.

Esta disposición reproduce el texto del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 76 bis, pero cambiando el número del artículo al que se hace referencia en él.

Artículo 154

Fase escrita del procedimiento

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, cuando el demandante haya solicitado que se sustancie el asunto por un procedimiento acelerado, el plazo de presentación del escrito de contestación será de un mes. Ese plazo podrá ser prorrogado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81, apartado 3.
2. Si el Tribunal General decidiera no acceder a la solicitud de procedimiento acelerado, se otorgará al demandado un plazo adicional de un mes para presentar o, en su caso, completar el escrito de contestación.
3. En un procedimiento acelerado, los escritos mencionados en el apartado 1 del artículo 83 y en los apartados 1 y 3 del artículo 145 sólo podrán presentarse si el Tribunal General así lo autorizara en el marco de unas diligencias de ordenación del procedimiento acordadas conforme a los artículos 88 a 90.
4. En un procedimiento acelerado, el Presidente tendrá en cuenta, al fijar los plazos establecidos en el presente Reglamento, la especial urgencia que existe en resolver el recurso.

El presente artículo retoma, en lo esencial, el apartado 2 del artículo 76 bis, con ciertas modificaciones terminológicas y en los números de los artículos a los que remite. Al igual que ocurre actualmente, la presentación de una réplica y de una dúplica, o de escritos de formalización de la intervención, sólo puede autorizarse en concepto de diligencia de ordenación del procedimiento.

El apartado 4 es nuevo. Se añade para subrayar la necesidad de una resolución rápida del litigio y poner de manifiesto la voluntad del Tribunal de fijar plazos procesales variables según el grado de urgencia, pero siempre más breves que los fijados en el procedimiento ordinario, en los casos en que se haya decidido aplicar la tramitación acelerada.

Artículo 155

Fase oral del procedimiento

1. Cuando se haya autorizado el procedimiento acelerado, el Tribunal General decidirá abrir la fase oral del procedimiento con la mayor rapidez posible tras la presentación del informe preliminar por el Juez Ponente. El Tribunal podrá sin embargo decidir resolver sin fase oral, si las partes principales renuncian a participar en la vista y el Tribunal estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 84 y 85, las partes principales podrán completar su argumentación y proponer pruebas durante la fase oral del procedimiento, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.

Como excepción a la norma general recogida en el artículo 106 del presente proyecto, según la cual sólo se organiza una vista si una parte principal presenta una solicitud motivada al

efecto o si el Tribunal lo estima necesario, el presente artículo dispone que el Tribunal General decidirá siempre abrir la fase oral del procedimiento, a menos que las partes principales renuncien a la vista y el Tribunal no considere indispensable oír a las partes.

Esta norma se debe a la necesidad de resolver rápidamente. En efecto, el plazo de tres semanas que comienza a correr a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento no es compatible con el objetivo de celeridad perseguido. Además, en el procedimiento acelerado, el acento recae claramente en la fase oral del procedimiento, ya que la fase escrita se limita en principio a un solo turno de escritos de alegaciones y los coadyuvantes no pueden presentar escritos de formalización de la intervención, a menos que el Tribunal decida lo contrario a través de una diligencia de ordenación del procedimiento. Por tanto, es conveniente poder organizar una vista con rapidez tras la declaración de terminación de esa fase escrita sujeta a limitaciones, o incluso con gran rapidez, cuando las circunstancias del asunto lo justifiquen. No obstante, como no cabe excluir la posibilidad de que las partes informen de que renuncian a participar en la vista, corresponderá entonces al Tribunal General pronunciarse sobre la necesidad de que se desarrolle un debate oral ante él.

Sección 2. De la suspensión y demás medidas provisionales

Artículo 156

Demanda de suspensión o de otras medidas provisionales

1. La demanda de que se suspenda la ejecución de un acto de una institución conforme a lo dispuesto en los artículos 278 TFUE y 157 TCEEA sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal General.
2. Las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en el artículo 279 TFUE sólo serán admisibles si las formula una de las partes principales de un asunto sometido al Tribunal General y guardan relación con el mismo.
3. Las demandas mencionadas en los apartados 1 y 2 especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. Contendrán igualmente todas las pruebas y proposiciones de prueba disponibles que puedan justificar la concesión de las medidas provisionales.
4. La demanda se presentará mediante escrito separado y conforme a lo dispuesto en los artículos 76 a 78.

Este artículo retoma, en lo esencial, el texto del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento vigente, completándolo en dos aspectos.

En primer lugar, indica que las demandas de medidas provisionales distintas de la suspensión de la ejecución del acto impugnado sólo puede presentarlas una de las partes principales (véase el apartado 2).

En segundo lugar, recoge la jurisprudencia del Presidente del Tribunal General (auto de 23 de enero de 2009, Pannon Hőerőmű/Comisión, T-352/08 R, no publicado en la Recopilación) según la cual la demanda de medidas provisionales debe contener todas las pruebas y proposiciones de prueba disponibles que puedan justificar la concesión de la medida provisional solicitada.

Por lo demás, este artículo se limita a recordar que las demandas de medidas provisionales, por una parte, deben especificar el objeto del litigio y las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada y, por otra, deben presentarse mediante escrito separado y respetando los requisitos formales establecidos en los artículos 76 a 78 del presente proyecto.

Artículo 157 **Procedimiento**

1. La demanda se notificará a la otra parte, a la que el Presidente del Tribunal General fijará un plazo breve para la presentación de sus observaciones escritas u orales.
2. El Presidente del Tribunal General podrá acceder a la demanda incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones. Esta decisión podrá ser modificada posteriormente o revocada, incluso de oficio.
3. El Presidente del Tribunal General decidirá, en su caso, las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba.
4. En caso de impedimento del Presidente del Tribunal General, se aplicará lo dispuesto en los artículos 11 y 12.

El procedimiento utilizado para instruir un asunto de medidas provisionales no sufre modificaciones con respecto al establecido en el actual artículo 105 del Reglamento de Procedimiento. Simplemente, se deja claro, en el apartado 3, que el Presidente del Tribunal General podrá adoptar diligencias de ordenación del procedimiento y diligencias de prueba y, en el apartado 4, que el Presidente del Tribunal que sufra un impedimento será reemplazado por el Vicepresidente del Tribunal y, en caso de impedimento simultáneo del Presidente y del Vicepresidente del Tribunal, por uno de los Presidentes de Sala o, en su defecto, por uno de los otros Jueces, siguiendo el orden establecido en el artículo 8.

Artículo 158 **Decisión sobre la demanda**

1. La decisión sobre la demanda se adoptará mediante auto motivado. Dicho auto se notificará inmediatamente a las partes.
2. La ejecución del auto podrá subordinarse a que el demandante constituya una caución cuyo importe y modalidades se determinarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes.

3. El auto podrá establecer una fecha a partir de la cual la medida dejará de ser aplicable. En caso contrario, la medida quedará sin efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso.
4. El auto tendrá un carácter meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal General sobre el asunto principal.
5. En el auto que ponga fin al procedimiento de medidas provisionales se reservará la decisión sobre las costas hasta la decisión del Tribunal General sobre el asunto principal. No obstante, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, se decidirá en ese auto sobre las costas correspondientes al procedimiento de medidas provisionales, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134 a 138.

Los apartados 1 a 4 del artículo 158 reproducen, en lo esencial, los cuatro apartados del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento vigente.

El apartado 5 contiene, en cambio, una nueva norma sobre las costas. En efecto, en primer lugar, se mantiene el principio de que el auto que pone fin al procedimiento de medidas provisionales reserva la decisión sobre las costas hasta la resolución que ponga fin al proceso en el asunto principal, de conformidad, por lo demás, con lo dispuesto en el artículo 133 del presente proyecto. La consecuencia es, por una parte, que en el auto de medidas provisionales se reserva la decisión sobre las costas y, por otra, que corresponde al juez del fondo del asunto pronunciarse sobre la totalidad de las costas correspondientes a la totalidad del proceso.

Sin embargo, existen circunstancias especiales que pueden justificar una decisión sobre las costas en el auto que se pronuncie sobre la demanda de medidas provisionales. Así ocurre, necesariamente, si no se ha interpuesto ningún recurso principal. Pero también ocurre así cuando el asunto de medidas provisionales ha sido archivado antes incluso de que la demanda de medidas provisionales y el desistimiento de quien la presentó fueran notificados a la parte demandada (auto del Presidente del Tribunal General de 14 de julio de 2008, Hotel Cipriani/Comisión, T-254/00 R, no publicado en la Recopilación); cuando la parte que solicitó las medidas provisionales desiste de su demanda antes incluso de que el recurso principal se haya notificado a la parte demandada (auto del Presidente del Tribunal General de 17 de noviembre de 2006, Dairo Air Services/Comisión, T-283/06 R, no publicado en la Recopilación) o cuando el juez que conoce del litigio principal no puede pronunciarse sobre las costas correspondientes al procedimiento accesorio, bien porque el procedimiento de medidas provisionales no se ha cerrado aún en el momento en que aquél se pronuncia (en tal caso, es el juez de medidas provisionales quien debe pronunciarse sobre las costas en el auto en el que declare el sobreseimiento de la demanda de medidas provisionales: autos del Presidente del Tribunal General de 15 de enero de 2004, Valenergol/Consejo, T-393/03 R, no publicado en la Recopilación, y de 30 de marzo de 2007, Scott/Comisión, T-366/00 R, no publicado en la Recopilación), bien porque la demanda de medidas provisionales se presentó en un momento en el que el asunto principal estaba ya en fase de deliberación (auto del Presidente del Tribunal General de 24 de marzo de 2004, GrafTech International/Comisión T-246/01 R, no publicado en la Recopilación).

Artículo 159
Variación de las circunstancias

A instancia de parte, el auto podrá ser modificado o revocado en cualquier momento si varían las circunstancias.

El artículo 108 del Reglamento de Procedimiento vigente se reproduce sin cambio alguno.

Artículo 160
Nueva demanda de medidas provisionales

La desestimación de una demanda de medidas provisionales no impedirá que la parte principal que la hubiera formulado presente otra demanda de medidas provisionales fundada en hechos nuevos.

Este artículo reproduce en lo esencial el artículo 109 del Reglamento de Procedimiento vigente, con una modificación destinada a precisar que sólo la parte principal cuya demanda de medidas provisionales haya sido desestimada puede presentar otra demanda de medidas provisionales fundada en hechos nuevos.

Artículo 161
Demanda presentada al amparo de los artículos 280 TFUE, 299 TFUE y 164 TCEEA

1. La demanda de que se suspenda la ejecución forzosa de una decisión del Tribunal General o de un acto del Consejo, de la Comisión Europea o del Banco Central Europeo, presentada al amparo de los artículos 280 TFUE, 299 TFUE y 164 TCEEA, se regirá por las disposiciones de la presente sección.
2. El auto que estime la demanda fijará, en su caso, la fecha en que dicha medida provisional quedará sin efecto.

El presente artículo reproduce en lo esencial los términos del actual artículo 110 del Reglamento de Procedimiento, pero lo aclara al mencionar explícitamente a las tres instituciones designadas en el artículo 299 TFUE.

Estas modificaciones se inspiran en el artículo 165 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Capítulo Decimoséptimo
DE LAS DEMANDAS RELATIVAS A LAS SENTENCIAS Y AUTOS

El presente capítulo reagrupa un conjunto de demandas (o peticiones) que pueden presentarse tras el cierre del asunto por parte del Tribunal General. Estas demandas están destinadas a rectificar, interpretar o revisar una resolución del Tribunal General, subsanar una omisión de pronunciamiento por parte de éste, formular oposición u oposición de tercero contra la resolución del Tribunal General, o también conseguir que el Tribunal General resuelva una discrepancia sobre las costas recuperables.

Los artículos del presente capítulo se han organizado del modo más parecido posible, a fin de favorecer la legibilidad del conjunto del texto.

Artículo 162

Atribución de las demandas

1. Las demandas contempladas en el presente capítulo serán atribuidas a la formación jurisdiccional que haya dictado la resolución a la que se refiera la demanda.
2. Si ya no fuera posible reunir el quórum contemplado en los artículos 23 y 24, se atribuirá la demanda a otra formación jurisdiccional que actúe con el mismo número de Jueces. Si la resolución fue dictada por un Juez que actuaba como Juez único y éste padece un impedimento, la demanda será atribuida a otro Juez.

Como las demandas de que se trata presentan generalmente una relación directa con una resolución existente, se ha considerado oportuno, por razones de economía procesal, disponer en un único artículo que serán atribuidas a la misma formación jurisdiccional que adoptó la resolución de que se trate (véanse a este respecto los artículos 124, 127 y 129, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento vigente). Conviene señalar además que, a diferencia de los artículos en vigor, el presente artículo se refiere a la formación que dictó la resolución y no a la Sala, a fin de dejar claro que es a esa composición de la Sala a la que se hace referencia.

Habida cuenta de los plazos de interposición de las demandas mencionadas en el presente capítulo, se ha estimado conveniente determinar el procedimiento que debe seguirse en el supuesto de que ya no sea posible reunir el quórum de esa formación jurisdiccional. El texto del apartado 2 coincide parcialmente con el del artículo 153 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, con las adaptaciones que exige el modo de funcionar del Tribunal General.

Artículo 163

Suspensión del procedimiento

Cuando un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia y una de las demandas mencionadas en el presente capítulo, exceptuando las contempladas en los artículos 164 y 165, se refieran a una misma resolución del Tribunal General, el Presidente podrá decidir,

previa audiencia de las partes, suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el recurso de casación.

Se ha estimado oportuno transformar esta disposición, que figura en el texto de varios artículos del Reglamento de Procedimiento vigente relativos a algunos de estos procedimientos [oposición de tercero (artículo 123, apartado 4), revisión (artículo 128), interpretación (artículo 129, apartado 4)], en una disposición general aplicable a todos los procedimientos mencionados en el presente capítulo, exceptuando los relativos a la rectificación y a la omisión de pronunciamiento. En efecto, este planteamiento permite evitar las repeticiones.

Este artículo se encuadra en la propuesta general de traspasar ciertas competencias del Tribunal General a los Presidentes de Sala.

Artículo 164

Rectificación de las sentencias y autos

1. Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la interpretación de las sentencias y autos, los errores de transcripción o de cálculo y las inexactitudes evidentes podrán ser rectificadas por el Tribunal General, de oficio o a instancia de parte.
2. La petición de rectificación se presentará en un plazo de dos semanas a partir del pronunciamiento de la sentencia o de la notificación del auto.
3. Cuando la petición de rectificación afecte al fallo o a uno de los fundamentos de Derecho que constituya la base necesaria del fallo, las partes podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.
4. El Tribunal General decidirá mediante auto.
5. El original del auto que ordene la rectificación se unirá al original de la resolución rectificadora, a cuyo margen se hará mención de dicho auto.

El presente artículo reproduce, en lo esencial, el contenido del actual artículo 84 del Reglamento de Procedimiento, pero precisando que pueden ser objeto de rectificación, no sólo las sentencias del Tribunal, sino también sus autos, y aclarando la forma que adopta la decisión del Tribunal. Además, se simplifica el procedimiento previo a la rectificación propiamente dicha. Como las peticiones de rectificación afectan con frecuencia a cuestiones de detalle de una resolución, tales como la omisión del nombre del representante de una parte o una cifra o un dato erróneos, parece excesivo interrogar sistemáticamente a las partes antes de proceder a una rectificación. Por esta razón, el proyecto de Reglamento dispone que las partes sólo podrán presentar observaciones sobre el error o la inexactitud de que se trate cuando la petición de rectificación afecte al fallo o a uno de los fundamentos de Derecho que constituya la base necesaria del fallo.

Esta proposición se inspira en el texto del artículo 154 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

En 2012 se presentó una sola petición de rectificación (dos en 2011 y dos en 2010).

Artículo 165

Omisión de pronunciamiento

1. Si el Tribunal General no hubiera decidido sobre algún extremo aislado de las pretensiones o sobre las costas, la parte que se considere afectada podrá acudir al Tribunal General por medio de demanda en el mes siguiente a la notificación de la resolución.
2. La demanda se presentará en un plazo de un mes a partir del pronunciamiento de la sentencia o de la notificación del auto.
3. La demanda será notificada a las demás partes, que podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.
4. Tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones, el Tribunal General decidirá mediante auto simultáneamente sobre la admisibilidad y sobre el fundamento de la demanda.

Este artículo concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 85 del Reglamento de Procedimiento, pero con ciertas precisiones. En particular, en el apartado 1, [Explicación de carácter terminológico no pertinente para la versión ES]; el texto del apartado 2 incluye los casos en los que la resolución a la que se hace referencia es un auto, el apartado 3 dispone que se ofrecerá a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones sobre esta demanda y el apartado 4 precisa la forma que adoptará la decisión del Tribunal General.

En el período 2002-2012 no se ha presentado ante el Tribunal General ninguna demanda relativa a una omisión de pronunciamiento.

Artículo 166

Oposición a una sentencia dictada en rebeldía

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto, contra la sentencia dictada en rebeldía se podrá formular oposición.
2. El demandado rebelde deberá presentar oposición, en la forma prescrita en los artículos 76 a 78, dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia en rebeldía.
3. Tras notificarse la oposición, el Presidente fijará a la otra parte un plazo para la presentación de sus observaciones escritas.
4. El procedimiento proseguirá con arreglo a las disposiciones del título tercero o, en su caso, del título cuarto.
5. El Tribunal General decidirá mediante sentencia, contra la que no se podrá formular oposición.

6. El original de esta sentencia se unirá al de la sentencia dictada en rebeldía, a cuyo margen se hará mención de la sentencia dictada sobre la oposición.

Sin perjuicio de una referencia al artículo pertinente del Estatuto y de las adaptaciones exigidas por la nueva numeración de los artículos del presente proyecto, este artículo reproduce en lo esencial los términos del artículo 122, apartados 4 a 6, del Reglamento de Procedimiento actual. No obstante, merece la pena mencionar tres puntos.

En primer lugar, el artículo contiene una remisión al artículo 41 del Estatuto, que establece el plazo de un mes para formular oposición contra la sentencia dictada en rebeldía.

En segundo lugar, el apartado 2 precisa que sólo puede formular oposición el demandado rebelde.

En tercer lugar, el texto del apartado 4 completa el texto en vigor remitiendo a las disposiciones aplicables, respectivamente, a los recursos directos y a los recursos en materia de propiedad intelectual o industrial.

En el período 2002-2012, ante el Tribunal General se formuló oposición a sentencias dictadas en rebeldía en cinco ocasiones.

Artículo 167

Oposición de tercero

1. Los artículos 76 a 78 serán aplicables a la oposición de tercero formulada al amparo del artículo 42 del Estatuto, que deberá indicar además:
 - a) la sentencia o auto impugnado;
 - b) los extremos en que la sentencia o auto impugnado perjudica los derechos del tercero oponente;
 - c) las razones por las que el tercero oponente no pudo participar en el litigio ante el Tribunal General.
2. La oposición de tercero deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la publicación mencionada en el artículo 122.
3. A petición del tercero oponente podrá ordenarse que se suspenda la ejecución de la sentencia o auto impugnado. En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en los artículos 156 a 161.
4. La oposición de tercero será notificada a las partes, que podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.
5. Tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones, el Tribunal General decidirá.

6. La sentencia o auto impugnado será modificado en la medida en que se estime la oposición del tercero.
7. El original de la resolución dictada en el procedimiento de oposición de tercero se unirá al original de la sentencia o auto impugnado, a cuyo margen se hará mención de aquélla.

Al igual que el artículo anterior, el artículo 167 del presente proyecto, relativo a la oposición de tercero, reproduce en lo esencial el artículo correspondiente del Reglamento de Procedimiento actual (en este caso, el artículo 123), sin perjuicio de una referencia al artículo pertinente del Estatuto y de ciertas adaptaciones de carácter terminológico o exigidas por la nueva numeración de los artículos del presente proyecto.

El nuevo texto tiene también en cuenta la posibilidad de que se formule oposición de tercero contra un auto, como dispone el artículo 157 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Por último, este artículo establece el plazo en el que debe formularse la oposición de tercero, que sigue siendo de dos meses, y obliga a consultar a las partes. No se pronuncia, sin embargo, sobre la forma que adoptará la decisión del Tribunal, pues el término utilizado en el apartado 7, «resolución», permite que el Tribunal opte por la sentencia o por el auto, según que la oposición de tercero se haya formulado contra una sentencia o contra un auto.

Desde un punto de vista estadístico, en el último decenio se han formulado dos oposiciones de tercero ante el Tribunal General.

Artículo 168

Interpretación de las sentencias y autos

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto, en caso de duda sobre el sentido y el alcance de una sentencia o auto, corresponderá al Tribunal General interpretar dicha resolución, a instancia de una parte o de una institución de la Unión que demuestre un interés en ello.
2. La demanda de interpretación deberá presentarse en un plazo de dos años a partir del pronunciamiento de la sentencia o de la notificación del auto.
3. La demanda de interpretación de una sentencia se presentará en la forma prescrita en los artículos 76 a 78. En ella deberán especificarse además:
 - a) la sentencia o auto que deba interpretarse;
 - b) los pasajes cuya interpretación se solicita.
4. La demanda de interpretación será notificada a las demás partes, que podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.

5. Tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones, el Tribunal General decidirá.
6. El original de la resolución interpretativa se unirá al original de la resolución interpretada, a cuyo margen se hará mención de aquélla.

El artículo 168 reproduce, en lo esencial, los términos del artículo 129 del Reglamento de Procedimiento actual, pero lo completa con una referencia al artículo pertinente del Estatuto. Al igual que el artículo 158 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el presente artículo dispone que la demanda de interpretación puede referirse a una sentencia o a un auto.

Con objeto de evitar que sus resoluciones puedan ponerse en cuestión indefinidamente, el Tribunal General considera deseable, en aras de la seguridad jurídica, fijar un límite temporal a la posibilidad de que una parte o una institución de la Unión presente una demanda de interpretación, límite idéntico al que se establece en el apartado 2 del artículo 158 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En consecuencia, el apartado 2 del presente artículo dispone que la demanda de interpretación deberá presentarse en un plazo de dos años a partir del pronunciamiento de la sentencia o de la notificación del auto.

Por último, este artículo obliga a consultar a las partes, pero no se pronuncia sobre la forma que adoptará la decisión del Tribunal, pues el término utilizado en el apartado 6, «resolución», permite que el Tribunal opte por la sentencia o por el auto, según que la demanda de interpretación se refiera a una sentencia o a un auto.

En el período 2002-2012 se han presentado tres demandas de interpretación ante el Tribunal General.

Artículo 169

Revisión

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto, sólo podrá pedirse la revisión de una resolución del Tribunal General con motivo del descubrimiento de un hecho que pueda tener una influencia decisiva y que, antes de que se pronunciara la sentencia o se notificara el auto, era desconocido por el Tribunal y por la parte que solicita la revisión.
2. Sin perjuicio del plazo de diez años establecido en el artículo 44, párrafo tercero, del Estatuto, la revisión sólo podrá solicitarse en un plazo de tres meses a partir del día en que el demandante tuvo conocimiento del hecho en que se funda su demanda de revisión.
3. Los artículos 76 a 78 se aplicarán a la demanda de revisión, que deberá indicar además:
 - a) la sentencia o auto impugnado;
 - b) los extremos de la sentencia o del auto que se impugnan;
 - c) los hechos en que se funda la demanda;

- d) los medios de prueba propuestos para demostrar que existen hechos que justifican la revisión y que se han respetado los plazos establecidos en el apartado 2.
4. La demanda de revisión será notificada a las demás partes, que podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.
 5. Tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones, el Tribunal General decidirá sobre la admisibilidad de la demanda, sin prejuzgar el fondo.
 6. Si el Tribunal General declarara la admisibilidad de la demanda, decidirá sobre el fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
 7. El original de la resolución que acuerde la revisión se unirá al original de la resolución revisada, a cuyo margen se hará mención de aquélla.

El artículo 169 reproduce, en lo esencial, los términos de los artículos 125 a 127 del Reglamento de Procedimiento actual, pero los completa con una referencia a las disposiciones pertinentes del artículo 44 del Estatuto y recordando las circunstancias que pueden dar lugar a una demanda de revisión, así como el plazo, que no se modifica, en el que debe presentarse tal demanda.

Las modificaciones introducidas en el texto en vigor se inspiran en el artículo 159 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Por último, este artículo obliga a consultar a las partes, pero no se pronuncia sobre la forma que adoptará la decisión del Tribunal, pues el término utilizado en el apartado 7, «resolución», permite que el Tribunal opte por la sentencia o por el auto, según que la demanda de revisión se refiera a una sentencia o a un auto.

En el período 2002-2012 se han presentado ocho demandas de revisión ante el Tribunal General.

Artículo 170

Discrepancia sobre las costas recuperables

1. Si hubiera discrepancia sobre las costas recuperables, la parte interesada someterá el asunto al Tribunal General mediante una demanda, que se presentará en la forma prescrita en los artículos 76 a 78.
2. La demanda será notificada a la parte afectada por ella, que podrá presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.
3. Tras haber ofrecido a la parte afectada por la demanda la posibilidad de presentar sus observaciones, el Tribunal General decidirá mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno.
4. Las partes podrán pedir, a efectos de ejecución, un testimonio del auto.

Este artículo retoma, en lo esencial, el texto del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento vigente. Obliga a consultar a las partes y establece la forma que adoptará la decisión del Tribunal.

Las solicitudes de tasación de costas son más numerosas que las demás demandas o peticiones mencionadas en el presente capítulo. Así, en el período 2002-2012 se presentaron ante el Tribunal General 191 solicitudes de tasación de costas.

TÍTULO CUARTO DEL CONTENCIOSO RELATIVO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

El contencioso relativo a los derechos de propiedad intelectual o industrial (marcas, dibujos y modelos, y obtenciones vegetales) presenta unas características que justifican distinguirlo de la categoría de los recursos directos interpuestos en todas las demás materias. En efecto, los asuntos de propiedad intelectual o industrial sometidos al Tribunal General constituyen, a la escala de este Tribunal, un grupo muy numeroso de litigios en una materia específica.

El número de asuntos de propiedad intelectual o industrial presentados ante el Tribunal General, así como el número de asuntos resueltos, han aumentado claramente en el último decenio. El número de nuevos asuntos ha pasado de 83 en 2002 a 238 en 2012. El número de asuntos resueltos, por su parte, ha aumentado también, pasando de 29 en 2002 a 210 en 2012. En términos relativos, los asuntos de propiedad intelectual o industrial representaron, en 2002, un 20,2 % de los asuntos presentados, un 8,7 % de los asuntos resueltos y un 12 % de los asuntos pendientes. Según los datos de 2012, en ese año representaron un 38,6 % de los asuntos presentados y un 30,5 % de los asuntos resueltos, mientras que el porcentaje de asuntos pendientes perteneciente a esta categoría ascendía, a 31 de diciembre de 2012, a un 31,4 %. El muy alto número de nuevos asuntos de propiedad intelectual o industrial está directamente relacionado con el número de solicitudes de registro y de resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la OAMI, que no disminuye (el número de solicitudes de registro de marcas comunitarias ha pasado de 47.158 en 2002 a 107.925 en 2012, y la OAMI no prevé una disminución de las mismas, como se desprende de su plan estratégico 2011/2015). Como el número de litigios sometidos a las Salas de Recurso guarda relación con el número de solicitudes de registro, todo lleva a creer que este tipo de contencioso seguirá siendo muy importante en los próximos años. A partir de 2009, el número de nuevos asuntos de propiedad intelectual o industrial presentados cada año ha sido siempre superior a 200.

El contencioso relativo a la propiedad intelectual o industrial del que conoce el Tribunal General está circunscrito y es específico y homogéneo.

Este contencioso está perfectamente circunscrito, puesto que se trata de los recursos destinados a obtener la anulación de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI y de la OCVV [ajustándose a la convención de escritura que figura en el artículo 1 del presente proyecto, se utilizará el término «Oficina» para referirse a la OAMI o a la OCVV, a menos que se mencione expresamente una de estas dos Oficinas].

Este contencioso es también específico, dado que está constituido exclusivamente por dos tipos de asuntos. En lo que respecta a los asuntos en que está implicada la OAMI, el primer tipo lo constituyen los asuntos denominados «ex parte», es decir, los recursos en que se solicita la anulación de resoluciones de la OAMI en las que se deniega el registro como marca comunitaria de un signo por considerar que dicho signo no cumple los requisitos exigidos en el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). El segundo tipo de asuntos son los que se denominan «inter partes», es decir, los recursos en que se solicita la anulación de resoluciones de la OAMI adoptadas en el marco de una controversia entre dos personas, físicas o jurídicas: la que solicita el registro de una marca y la que se opone a ello por ser titular de una marca anterior idéntica o similar, o bien la que es titular de una marca comunitaria y la que solicita

la nulidad de dicha marca, invocando alguna de las causas de nulidad establecidas en el Reglamento, o su caducidad. En este último tipo de asuntos, el Tribunal General, al conocer del recurso de anulación contra la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, se halla en presencia de dos partes privadas (la parte recurrente y la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso) y de la parte recurrida (la OAMI). Como ya se ha expuesto en el título segundo, relativo al régimen lingüístico, los asuntos «inter partes» están sometidos a unas normas procesales especiales, que obligan a determinar en cada asunto la lengua de procedimiento aplicable antes de seguir tramitando la fase escrita del procedimiento, debido a la implicación de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

Por último, este contencioso es homogéneo. De manera relativamente constante, los asuntos «inter partes» representan más de tres cuartas partes de los asuntos presentados (un 82 % en 2012), y lo esencial de tales asuntos se refiere a resoluciones adoptadas en base al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 (procedimiento de oposición). Además, está claro que los terceros (personas físicas o jurídicas, Estados miembros e instituciones) no tienen interés en intervenir en este tipo de litigios, pues, desde un punto de vista estadístico, sólo en dos ocasiones se ha presentado una demanda de intervención basada en las disposiciones generales del Reglamento de Procedimiento.

Teniendo en cuenta estos datos, resulta lógico tratar el procedimiento aplicable a estos asuntos en un título específico del presente proyecto, inmediatamente después del consagrado a los recursos directos. El presente título retoma las disposiciones del actual Reglamento de Procedimiento, ya relativamente detalladas, al tiempo que las afina, pero contiene igualmente varias innovaciones importantes con respecto al texto actual, además de las relativas al régimen lingüístico, recogidas en el título segundo del presente proyecto.

Las características del contencioso relativo a la propiedad intelectual o industrial y el continuo incremento del número de nuevos asuntos han impulsado al Tribunal General a proponer la modificación de ciertas normas, a fin de tramitar el proceso con mayor eficacia y tratar de resolver estos litigios en plazos más ajustados a las realidades del mundo de los negocios. En efecto, es evidente que en estos litigios a veces están en juego intereses económicos muy importantes, y que la resolución rápida de los litigios permite a las empresas un ahorro de recursos y evita que queden congeladas estrategias comerciales que a veces se aplican a nivel mundial.

Es la búsqueda de estos objetivos lo que ha guiado al presente proyecto a la hora de simplificar, aclarar y abreviar el procedimiento.

En primer lugar, el Tribunal General modifica, para precisarlas mejor, las condiciones en las que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina adquiere el estatuto procesal de coadyuvante ante el Tribunal. La modificación de las normas llevada a cabo con ocasión de la reforma del Reglamento de Procedimiento que entró en vigor el 1 de septiembre de 2009 ha sido beneficiosa. Este beneficio puede incrementarse todavía atribuyendo en una fase aún más temprana del procedimiento el estatuto de coadyuvante a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. Desde el momento en que el Tribunal se dirige a esa parte en la fase de determinación de la lengua de procedimiento, la presentación de sus observaciones puede influir decisivamente en la continuación del procedimiento, principalmente si la lengua de procedimiento cambia como resultado de su oposición. Conviene, pues, atribuirle el estatuto de coadyuvante por la presentación de cualquier escrito procesal y tratarla como un coadyuvante en el resto del procedimiento, a

condición, sin embargo, de que conteste a la demanda presentando su escrito de contestación; si no lo hace, pierde su estatuto de parte del litigio.

En segundo lugar, el proyecto dispone que la adhesión al recurso debe presentarse mediante escrito separado. Esta obligación pretende aclarar la situación actual mediante una distinción formal entre el escrito de contestación y la adhesión al recurso, y también hacer más comprensible el desarrollo posterior del procedimiento, en interés tanto de las partes como del Tribunal, evitando la confusión entre el segundo turno de escritos de alegaciones y los escritos de alegaciones presentados en respuesta a la adhesión al recurso.

En tercer lugar, siempre con objeto de favorecer una tramitación rápida, el presente proyecto obliga a presentar las eventuales solicitudes de sucesión procesal mediante escrito separado.

En cuarto lugar, se abrevia la fase escrita del procedimiento al eliminar el segundo turno facultativo de escritos de alegaciones, contemplado en las normas en vigor. Como se mantiene la posibilidad de solicitar la celebración de una vista, por remisión a las disposiciones del título segundo, el derecho de las partes a ser oídas es escrupulosamente respetado.

En último lugar, como se ha indicado en el párrafo anterior, el presente proyecto mantiene el dispositivo que entró en vigor el 1 de septiembre de 2008 para determinar las circunstancias en las que puede resolverse sin fase oral del procedimiento. Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, las propias partes no solicitan ser oídas en una vista oral. Por ejemplo, en 2012, un 44 % de los asuntos de propiedad intelectual o industrial se resolvieron mediante sentencia no precedida de una vista (54 % en 2011, 48 % en 2010 y 17 % en 2009). El hecho de celebrar o no una vista oral influye en la duración media del proceso en los asuntos de propiedad intelectual o industrial resueltos mediante sentencia, puesto que esta duración gira en torno a los 26 meses cuando el Tribunal juzga tras haber oído los informes orales de las partes, pero es de unos 18 meses cuando no se ha organizado una vista. El dispositivo vigente respeta los derechos de las partes y ofrece al Tribunal la flexibilidad que precisa en la dirección del proceso, por lo que debe mantenerse.

Artículo 171

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente título se aplicarán a los recursos interpuestos contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina mencionada en el artículo 1 y que se refieran a la aplicación de las normas relativas a un régimen de propiedad intelectual o industrial.

Este artículo retoma en lo esencial el actual artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, pero aligera su contenido al remitirse a la definición de la Oficina que figura en el artículo 1 y al suprimir la frase en la que se indica que las disposiciones del Reglamento se aplicarán «sin perjuicio de las disposiciones especiales del presente Título». En efecto, siguiendo la sistemática aplicada en el nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia en lo que respecta al procedimiento de casación, al final del presente título figura una disposición de remisión a las demás disposiciones del Reglamento aplicables.

Además, se incluye una precisión destinada a indicar desde el primer momento que el agotamiento del procedimiento administrativo constituye un requisito previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal General. Esta precisión retoma el contenido del apartado 2 del artículo 130 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Capítulo Primero DE LAS PARTES DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 172 **Parte recurrida**

El recurso se interpondrá contra la Oficina a la que pertenezca la Sala de Recurso que adoptó la resolución impugnada, en calidad de parte recurrida.

Este artículo constituye una novedad, aunque su contenido figura ya en el artículo 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento vigente. Por afán de claridad, el artículo precisa desde el comienzo del capítulo la calidad de parte recurrida de la Oficina.

Artículo 173 **Estatuto procesal ante el Tribunal General de las demás partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso**

1. Las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso distintas de la parte recurrente podrán participar en el procedimiento ante el Tribunal General como coadyuvantes contestando en tiempo y forma al recurso.
2. Antes de la expiración del plazo fijado para presentar el escrito de contestación, una parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso distinta de la parte recurrente se convertirá en parte en el procedimiento ante el Tribunal General, en calidad de coadyuvante, mediante la presentación de un escrito procesal. Dicha parte perderá su condición de coadyuvante ante el Tribunal General si no contesta en tiempo y forma al recurso. En tal caso, el coadyuvante cargará con sus propias costas en lo relativo a los escritos procesales presentados por él.
3. El coadyuvante a que se refieren los apartados 1 y 2 tendrá los mismos derechos procesales que las partes principales. El coadyuvante podrá intervenir en apoyo de las pretensiones de una parte principal y formular pretensiones y motivos autónomos respecto de los de las partes principales.
4. La parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso distinta de la parte recurrente que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, se convierta en parte ante el Tribunal General deberá estar representada conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.
5. Será aplicable al escrito procesal mencionado en el apartado 2 lo dispuesto en el artículo 77 y en el artículo 78, apartados 3 a 5.

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 123, no se sustanciará el procedimiento en rebeldía cuando uno de los coadyuvantes a que se refieren los apartados 1 y 2 haya presentado en tiempo y forma su escrito de contestación.

En el régimen actual, la otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina adquiere el estatuto procesal de coadyuvante mediante la presentación de su escrito de contestación. Esta norma es consecuencia de la reforma del Reglamento de Procedimiento que entró en vigor en 2009 (DO L 184, p. 10).

Originariamente, el legislador había considerado que a esta otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso debía atribuírsele el estatuto de parte del litigio ante el Tribunal. Como no podía asimilarse a la parte recurrida, el legislador le reconoció derechos y posibilidades procesales sustancialmente idénticos a los reconocidos a la parte recurrida: derecho a presentar un escrito de contestación, a invocar motivos propios e incluso a solicitar la anulación o la revisión de la resolución impugnada en puntos diferentes de los mencionados por el recurrente. El legislador dispuso igualmente que, cuando la parte recurrida no hubiera presentado en tiempo y forma su escrito de contestación al recurso, el procedimiento en rebeldía no sería aplicable en el caso de que el coadyuvante sí hubiera presentado su escrito de contestación.

En 2009, el Tribunal General decidió revisar el estatuto procesal de coadyuvante concedido ex lege a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, con objeto de que el artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento (disposición que permite resolver sin fase oral del procedimiento) pudiera desplegar todos sus efectos. Según el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento vigente, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso sólo adquiere el estatuto de coadyuvante cuando presenta en tiempo y forma un escrito de contestación al recurso. La presentación de dicho escrito, o de una excepción de inadmisibilidad, se ha convertido, pues, en condición necesaria para adquirir el estatuto de coadyuvante.

El régimen en vigor no regula, sin embargo, el estatuto procesal de esta «otra parte» antes de que haya expirado el plazo para la presentación del escrito de contestación, laguna jurídica que debe colmarse para resolver los problemas que suelen plantearse cuando esta otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que aún no tiene el estatuto de parte del litigio, presenta observaciones sobre la lengua de procedimiento o sobre un desistimiento, o bien una petición de sobreseimiento. Además, las disposiciones actuales no regulan de manera totalmente satisfactoria la cuestión del papel en el procedimiento judicial de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso mientras no haya expirado el plazo de presentación del escrito de contestación, principalmente en lo que respecta a la posibilidad de solicitar que el recurrente que desiste sea condenado a reembolsarle los gastos provocados por la contratación de un abogado y la presentación de observaciones sobre la lengua de procedimiento [véase a este respecto el auto del Tribunal General de 11 de agosto de 2010, Footwear/OAMI – Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR), T-49/10, en el que el Tribunal General condenó al recurrente al pago de las costas de la otra parte ante la Sala de Recurso, pero haciendo constar que esta última... «[...] no tiene formalmente el estatuto de coadyuvante [...]» (apartado 7)]. Otro ejemplo, tomado de la práctica, es la petición de suspensión del procedimiento presentada por el recurrente antes de que haya expirado el plazo de presentación del escrito de contestación. En efecto, si la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso había visto reconocidas sus pretensiones ante la

Oficina y era quien había presentado la solicitud de registro de la marca, la duda sobre la validez de su marca subsiste mientras no se haya resuelto el asunto sometido al Tribunal General. Parece difícil de justificar, pues, no oírla a propósito de la suspensión del procedimiento ante el Tribunal cuando las consecuencias para su actividad comercial pueden ser muy importantes.

Habida cuenta de la realidad de estas situaciones que carecen de respuesta reglamentaria, se propone modificar el régimen adoptado en 2009 y atribuir a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso el estatuto de coadyuvante en una fase precoz del procedimiento judicial. Se propone así que esa otra parte ante la Sala de Recurso adquiera dicho estatuto con la presentación de cualquier escrito procesal, a condición, no obstante, de que esté debidamente representada al efecto. De este modo, podrá presentar como parte coadyuvante ante el Tribunal General sus observaciones sobre la suspensión del procedimiento o sobre el desistimiento o la petición de sobreseimiento. Como corolario de esta evolución queda aclarada igualmente la cuestión de las costas en que haya incurrido dicho coadyuvante, que se plantea en los casos en que se decide archivar o sobreseer el asunto antes de que se haya presentado el escrito de contestación.

El artículo 173 que aquí se propone establece, no obstante, un requisito para que la parte de que se trata conserve el estatuto de coadyuvante ante el Tribunal General. En efecto, dicha parte debe presentar un escrito de contestación, y ello con objeto de evitar los inconvenientes que supondría para la buena marcha del procedimiento la presencia de una parte que disfrutara de derechos procesales idénticos a los de la parte recurrida pero, sin embargo, no tomase parte en el debate contradictorio. Lo que se propone, en definitiva, es que el estatuto provisional de coadyuvante adquirido con la presentación de cualquier escrito procesal al inicio del procedimiento se convierta en definitivo con la presentación del escrito de contestación.

Como esta otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina no está obligada a presentar sus observaciones antes de que expire el plazo de presentación del escrito de contestación, dispone siempre de la posibilidad de convertirse en coadyuvante ante el Tribunal General con la mera presentación de un escrito de contestación.

Artículo 174

Sucesión procesal de una parte

Cuando una parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina ceda el derecho de propiedad intelectual o industrial afectado por el litigio, el causahabiente podrá solicitar suceder a la parte inicial en el procedimiento ante el Tribunal General.

La sucesión procesal de una parte por un causahabiente en el transcurso del procedimiento es una posibilidad consagrada exclusivamente por vía jurisprudencial. Como se trata de una jurisprudencia consolidada [por ejemplo, se ha aceptado la sucesión procesal mediante auto en los asuntos T-310/04, Ferrero Deutschland/OAMI – Cornu (FERRO), y T-369/10, You-Q/OAMI – Apple Corps (BEATLE)], se propone consagrar esta posibilidad en el Reglamento de Procedimiento mediante la inclusión de un nuevo artículo, cuyo texto se inspira en el primer auto de sucesión procesal dictado por el Tribunal General [auto de 5 de marzo de

2004, en el asunto T-94/02, Boss/OAMI – Delta Biomichania Pagatou (BOSS) (Rec. p. II-813)].

Artículo 175

Solicitud de sucesión procesal

1. La solicitud de sucesión procesal se presentará mediante escrito separado.
2. Esta solicitud contendrá:
 - a) la indicación del asunto;
 - b) la designación de las partes del asunto y de la parte a la que solicitante desea suceder;
 - c) el nombre y domicilio del solicitante;
 - d) la indicación de la condición y de la dirección del representante del solicitante;
 - e) la exposición de las circunstancias que justifiquen la sucesión procesal.
3. El solicitante de la sucesión procesal deberá estar representado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto.
4. Será aplicable a la solicitud de sucesión procesal lo dispuesto en el artículo 77, en el artículo 78, apartados 3 a 5, y en el artículo 139.

Por afán de claridad, el presente artículo indica los requisitos formales de la presentación de la solicitud de sucesión procesal, que debe hacerse mediante escrito separado (apartado 1) por un solicitante representado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto (apartado 3) y ha de respetar algunos de los requisitos formales exigidos en el título tercero del presente proyecto; también indica el contenido de dicha solicitud.

Conviene señalar que no se establece plazo alguno para la presentación de la solicitud de sucesión procesal. En efecto, la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial afectado por el litigio puede producirse en cualquier etapa del procedimiento y el nuevo titular conserva su interés en la sucesión hasta la resolución que ponga fin al proceso, aunque sólo fuera a fin de estar legitimado para recurrirla en casación ante el Tribunal de Justicia. Además, la sucesión procesal no retrasa el desarrollo del procedimiento, en la medida en que la nueva parte queda vinculada por los actos procesales llevados a cabo por su predecesor, como dispone el artículo 176, apartado 5, del presente proyecto.

Artículo 176

Decisión sobre la solicitud de sucesión procesal

1. La solicitud de sucesión procesal se notificará a las partes.

2. El Presidente ofrecerá a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones escritas y orales sobre la solicitud de sucesión procesal.
3. El Presidente decidirá sobre la solicitud de sucesión procesal mediante auto motivado.
4. En el caso de que se rechace la solicitud de sucesión procesal, el auto decidirá sobre las costas relativas a dicha solicitud, incluidas las costas de la persona que solicitaba la sucesión, con arreglo a los artículos 134 y 135.
5. Si se admite la solicitud de sucesión procesal, el causahabiente aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de la sucesión y quedará vinculado por los escritos procesales presentados por la parte a la que sucede.

El artículo 176 consagra la práctica judicial seguida hasta ahora, retomando los puntos que el juez considera esenciales, relativos al procedimiento aplicable, a la competencia para resolver del Presidente, a la forma que adoptará la resolución (auto motivado) y a las consecuencias de la sucesión procesal para el causahabiente.

Capítulo Segundo
DEL RECURSO Y DE LOS ESCRITOS DE CONTESTACIÓN

Artículo 177
Recurso

1. El recurso contendrá:
 - a) el nombre y domicilio del recurrente;
 - b) la indicación de la condición y de la dirección del representante del recurrente;
 - c) el nombre de la Oficina contra la que se interpone el recurso;
 - d) la cuestión objeto del litigio, los motivos y alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos;
 - e) las pretensiones del recurrente.
2. Si el recurrente no era la única parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina, el recurso deberá contener también los nombres de todas las partes en dicho procedimiento y los domicilios que éstas habían designado a efectos de notificaciones.
3. La resolución impugnada de la Sala de Recurso deberá adjuntarse al recurso. Deberá mencionarse la fecha en que dicha resolución se haya notificado al recurrente.
4. Si el recurrente fuera una persona jurídica de Derecho privado, adjuntará a su recurso un medio de prueba reciente de su existencia jurídica (extracto del Registro Mercantil, extracto del Registro de Asociaciones o cualquier otro documento oficial).
5. El recurso irá acompañado de los documentos contemplados en el artículo 51, apartados 2 y 3.
6. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 77.
7. Si el recurso no se ajustara a lo dispuesto en los apartados 2 a 5, el Secretario fijará al recurrente un plazo razonable para subsanar el defecto del recurso. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de estos requisitos formales comporta la inadmisibilidad formal del recurso.

A fin de mejorar la legibilidad y la coherencia interna del presente proyecto, se ha incluido en él una disposición que describe el contenido de la demanda o recurso en el título relativo a los recursos directos, en el relativo a los asuntos de propiedad intelectual o industrial y en el relativo a los recursos de casación. Esta técnica, usada para facilitar la comprensión de las normas, permite en buena medida evitar recurrir a una remisión general a las disposiciones pertinentes del título tercero.

El artículo 177 retoma en lo esencial el texto del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento vigente y lo completa en lo que es necesario, en particular, añadiendo, en el apartado 6, una remisión al artículo 77 del presente proyecto y, en el apartado 7, un texto inspirado en el actual artículo 44, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento.

Artículo 178

Notificación del recurso

1. El Secretario informará a la parte recurrida y a todas las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la presentación del recurso, del modo establecido en el artículo 80, apartado 1. Procederá a la notificación del recurso tras la determinación de la lengua de procedimiento de conformidad con las disposiciones del apartado 4 del artículo 45 y, en su caso, a la notificación de la traducción del recurso a la lengua de procedimiento.
2. El recurso será notificado a la parte recurrida por envío postal certificado, con acuse de recibo, de una copia certificada del recurso o por entrega de esta copia contra recibo. Cuando la parte recurrida haya aceptado, previamente, que las demandas le sean notificadas del modo que se contempla en el artículo 57, apartado 4, o por fax, la notificación del recurso podrá efectuarse de ese modo.
3. La notificación del recurso a una parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso se efectuará del modo aceptado por ella al presentar el escrito procesal mencionado en el artículo 173, apartado 2, y, de no existir tal escrito, por envío postal certificado, con acuse de recibo, al domicilio elegido por la parte interesada a efectos de las notificaciones que hubieran de efectuarse durante el procedimiento ante la Sala de Recurso.
4. En los casos previstos en el artículo 177, apartado 7, la notificación se hará una vez subsanado el recurso o en cuanto el Tribunal General haya declarado su admisibilidad, teniendo en cuenta los requisitos enumerados en ese artículo.
5. Una vez notificado el recurso, la parte recurrida transmitirá al Tribunal General los autos del procedimiento ante la Sala de Recurso.

Este artículo coincide en lo esencial con el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento actual. Sin embargo, se ha adaptado su texto para tener en cuenta las nuevas disposiciones relativas a los modos de notificación y, por afán de coherencia, el nuevo texto se ha alineado en buena medida con el del artículo correspondiente del título tercero (artículo 80).

Así, los apartados 1 y 2 se han completado con una referencia al modo de notificar el recurso. En lo que respecta al apartado 2, cuando la parte recurrida ha aceptado previamente recibir los escritos procesales por fax o a través de e-Curia, como es el caso en lo que respecta a la OAMI, el Tribunal utiliza el modo de transmisión elegido por ella.

El apartado 3 retoma el texto del actual artículo 133, apartado 2, párrafo segundo, pero añade una referencia al modo de notificación aceptado por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso al presentar cualquier escrito procesal en la fase inicial del procedimiento judicial, en particular, sus observaciones sobre la lengua de procedimiento.

En cuanto al apartado 4, se trata de una disposición nueva, añadida por razones de coherencia con el texto del artículo 80, apartado 2, del presente proyecto.

Artículo 179

Partes autorizadas a presentar un escrito de contestación

La parte recurrida y las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso distintas del recurrente presentarán sus escritos de contestación en un plazo de dos meses a partir de la notificación del recurso. En caso de que concurran circunstancias excepcionales, este plazo podrá ser prorrogado por el Presidente a instancia motivada de la parte interesada.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del actual artículo 135, apartado 1.

Por paralelismo de formas, la última frase reproduce el texto del artículo 81, apartado 3, del presente proyecto.

En cambio, este artículo no retoma el apartado 2 del actual artículo 135, relativo al segundo turno de escritos de alegaciones. En efecto, el Tribunal General considera que no se impone un segundo turno de escritos de alegaciones para asuntos que ya han sido examinados por varios órganos administrativos y que, por tanto, un solo turno de escritos de alegaciones basta para asegurar una defensa adecuada. En cualquier caso, la posibilidad de que una parte exponga una argumentación que justifique recoger las observaciones de las demás partes sobre la misma, por respeto del principio de contradicción, no plantea ningún problema, puesto que el Tribunal puede siempre, por una parte, adoptar diligencias de ordenación del procedimiento y, por otra, organizar una vista para recoger las observaciones de las partes, ya sea de oficio o a instancia de parte.

La eliminación de la posibilidad de presentar una réplica y una dúplica, que actualmente está supeditada a la presentación de una solicitud motivada sobre la que debe pronunciarse el Presidente de Sala, es una medida destinada a simplificar el desarrollo de la fase escrita del procedimiento y a acortar la duración de éste.

Artículo 180

Escrito de contestación

1. El escrito de contestación contendrá:
 - a) el nombre y domicilio de la parte que lo presenta;
 - b) la indicación de la condición y de la dirección del representante de esa parte;
 - c) los motivos y alegaciones invocados;
 - d) las pretensiones de la parte que lo presenta.
2. Será aplicable al escrito de contestación lo dispuesto en el artículo 177, apartados 4 a 7.

A fin de mejorar la legibilidad y la coherencia interna del presente proyecto de Reglamento, en este artículo se indica el contenido del escrito de contestación.

Artículo 181

Declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento

Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo tercero, la fase escrita del procedimiento se declarará terminada tras la presentación del escrito de contestación de la parte recurrida y, en su caso, del coadyuvante al que se refiere el artículo 173.

Se propone este nuevo artículo para aclarar el momento en que se cierra la fase escrita del procedimiento. En efecto, esta etapa es importante, puesto que la notificación a las partes de la terminación de la fase escrita marca el inicio del plazo de tres semanas para presentar una solicitud motivada de celebración de la vista, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 106, apartado 2, aplicable al contencioso relativo a la propiedad intelectual o industrial en virtud del artículo 191.

Capítulo Tercero DE LA ADHESIÓN AL RECURSO

Este nuevo capítulo contiene normas destinadas a facilitar la identificación y la tramitación de una eventual adhesión al recurso interpuesta por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina. Este enfoque se inspira en las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia relativas al recurso de casación, que por lo demás se transcriben en el título sexto del presente proyecto. La distinción formal entre los escritos de contestación y las adhesiones al recurso resulta indispensable, ya que los regímenes procesales aplicables son diferentes.

Artículo 182 **Adhesión al recurso**

1. Las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso que sean distintas del recurrente podrán adherirse al recurso dentro del plazo establecido para la presentación del escrito de contestación.
2. La adhesión al recurso deberá presentarse en un escrito separado, distinto del escrito de contestación.

En su apartado 1, este artículo retoma en lo esencial el texto del artículo 134, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento vigente.

Sin embargo, como muestra el apartado 2, el presente artículo contiene una innovación consistente en establecer una distinción entre el escrito de contestación y la adhesión al recurso. Para facilitar la tramitación de la adhesión al recurso, ésta debe presentarse mediante escrito separado.

Artículo 183 **Contenido de la adhesión al recurso**

El escrito de adhesión al recurso contendrá:

- a) el nombre y domicilio de la parte que lo presenta;
- b) la indicación de la condición y de la dirección del representante de esa parte;
- c) los motivos y alegaciones invocados;
- d) las pretensiones.

Al igual que ocurre con el recurso de casación en el artículo 203 del presente proyecto, aquí se indica el contenido de este escrito de alegaciones.

Artículo 184

Pretensiones, motivos y alegaciones de la adhesión al recurso

1. Las pretensiones de la adhesión al recurso deberán tener por objeto la anulación o la revisión de la resolución impugnada en un punto no planteado en el recurso.
2. En los motivos y alegaciones invocados se identificarán con precisión los extremos de la resolución recurrida que se impugnan.

El presente artículo desarrolla el texto del actual artículo 134, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, recordando, por una parte, que la adhesión al recurso debe necesariamente tener por objeto la anulación o la revisión de la resolución de la Sala de Recurso y subrayando, por otra parte, la necesidad de identificar con precisión los extremos que se impugnan en la resolución de la Sala de Recurso.

Artículo 185

Contestación a la adhesión al recurso

Cuando se presente un escrito de adhesión al recurso, las demás partes podrán presentar un escrito de alegaciones referido únicamente a las pretensiones, motivos y alegaciones invocados en la adhesión al recurso, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de ésta. En caso de que concurran circunstancias excepcionales, este plazo podrá ser prorrogado por el Presidente a instancia motivada de la parte interesada.

El texto de esta disposición, que se inspira en el artículo 205 del presente proyecto, desarrolla el contenido del artículo 135, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento actual.

La modificación propuesta en la última frase pretende alinear este texto con el del artículo 179 del presente proyecto.

Artículo 186

Declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento

Cuando se haya presentado un escrito de adhesión al recurso, la fase escrita del procedimiento se declarará terminada tras la presentación del último escrito de contestación a esa adhesión al recurso.

Este nuevo artículo pretende aclarar el momento en que termina la fase escrita del procedimiento. Como se corresponde con el artículo 181, relativo a la declaración de terminación de la fase escrita en un procedimiento sin adhesión al recurso, cabe remitirse a la motivación adicional que figura al pie de este último artículo.

Artículo 187

Relación entre el recurso principal y la adhesión al recurso

La adhesión al recurso se considerará carente de objeto:

- a) cuando el recurrente en el recurso principal desista de éste;
- b) cuando el recurso principal se declare manifiestamente inadmisibile.

El principio en el que se basa esta disposición figura en el artículo 134, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento vigente. Su texto se inspira en el artículo 210 del presente proyecto.

Capítulo Cuarto
OTROS ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 188

Objeto del litigio ante el Tribunal General

Los escritos de alegaciones presentados por las partes en el procedimiento ante el Tribunal General no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

Esta disposición concuerda, en lo esencial, con el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 189

Longitud de los escritos de alegaciones

1. El Tribunal General determinará, con arreglo al artículo 224, la longitud máxima para los escritos de alegaciones que se presenten en el marco del presente título.
2. Únicamente en los asuntos particularmente complejos desde un punto de vista jurídico o fáctico podrá autorizar el Presidente que se sobrepase ese número máximo de páginas.

Como esta disposición reproduce el texto del artículo 75 del presente proyecto, que sólo se refiere a los recursos directos, cabe remitirse a la motivación que figura al pie de ese artículo.

Artículo 190

Decisión sobre las costas

1. Cuando se estime el recurso interpuesto contra una resolución de una Sala de Recurso, el Tribunal General podrá ordenar que la parte recurrida cargue únicamente con sus propias costas.
2. Los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.

Esta disposición concuerda, en lo esencial, con el artículo 136 del Reglamento de Procedimiento vigente, pero ya no dispone, en su apartado 2, que se considerarán costas recuperables los gastos incurridos a efectos de presentación de las traducciones de los escritos procesales a la lengua de procedimiento. Esta modificación pretende ser un complemento útil de la propuesta de modificar el régimen lingüístico de los asuntos de propiedad intelectual o industrial. A este respecto, cabe remitirse al artículo 45, apartado 4, del presente proyecto y a la motivación que figura al pie de esa disposición.

Artículo 191

Otras disposiciones aplicables

Sin perjuicio de las disposiciones específicas del presente título, serán aplicables a los procedimientos contemplados en este título las disposiciones del título tercero.

Se ha optado aquí por remitirse a las disposiciones generales del Reglamento de Procedimiento cuando no se apliquen las disposiciones específicas de la tramitación de los asuntos de propiedad intelectual o industrial. Este enfoque se ha estimado preferible al consistente en crear un cuerpo autónomo y completo de normas, porque ello habría obligado a reproducir la mayoría de las disposiciones del título tercero.

TÍTULO QUINTO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En lo que respecta al tercer –y último– grupo importante de asuntos de entre los que se someten al Tribunal General, a saber, los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública, el presente proyecto reproduce, en lo esencial, las disposiciones del actual título quinto del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (artículos 136 bis a 149), pero aumentando su extensión, tanto por ánimo de alinearlas con las disposiciones del Estatuto relativas a los requisitos de fondo y de forma del recurso de casación como por interés en aclarar la auténtica naturaleza de este tipo de recursos, y en particular la articulación entre el recurso de casación y la adhesión a la casación. Las modificaciones que se proponen son en gran medida idénticas a las que figuran en el título quinto del actual Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2012.

Entre las modificaciones del régimen actual que el presente proyecto propone, conviene mencionar en primer lugar el endurecimiento de los requisitos exigidos para la presentación de un recurso de casación o de una adhesión a la casación. Tanto en un caso como en otro, el proyecto de Reglamento precisa, en efecto, que las pretensiones deben tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal de la Función Pública tal y como figura en el fallo de dicha resolución. Con esta precisión, se pretende sobre todo prevenir la presentación de recursos de casación o de adhesiones a la casación que tengan por único objeto impugnar un aspecto concreto del razonamiento seguido por el Tribunal de la Función Pública. Así, si una parte ha ganado el proceso ante el Tribunal de la Función Pública, no estará facultada para interponer recurso de casación contra su resolución, sin que esto afecte, no obstante, a la posibilidad de que las partes impugnen, en su adhesión a la casación, la decisión expresa o tácita de este último Tribunal sobre la admisibilidad del recurso interpuesto ante él.

Al igual que el Tribunal de Justicia, el Tribunal General precisa en el artículo 198 del presente proyecto que están autorizadas a presentar escrito de contestación, en un plazo improrrogable de dos meses a partir de la notificación del recurso de casación, todas las partes en el asunto ante el Tribunal de la Función Pública que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación.

Por último, guiado por el afán de no prolongar inútilmente la tramitación de los recursos de casación y teniendo en cuenta la especial naturaleza de este tipo de asuntos, el Tribunal General endurece en el presente proyecto los requisitos exigidos para que el recurso de casación y el escrito de contestación puedan completarse con una réplica y una dúplica. Para presentar estos últimos escritos será preciso, por un lado, que la parte recurrente haya presentado una petición motivada de réplica en un plazo de siete días a partir de la notificación del escrito de contestación y, por otro lado, que el Presidente de la Sala estime necesaria dicha réplica, tras haberlo consultado con el Juez Ponente. En particular, podría autorizarse la presentación de escritos de réplica y de dúplica a fin de permitir que la parte recurrente se pronuncie sobre una excepción de inadmisibilidad o sobre nuevas circunstancias invocadas en el escrito de contestación. Tal como se dispone en el artículo 175, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el presente proyecto precisa sin embargo que, en el caso de que estime esta petición, el Presidente podrá

instar a las partes a limitar el número de páginas y el objeto de los escritos de réplica y de dúplica.

Además de añadir estas precisiones, el presente proyecto confirma la posibilidad de que las demás partes en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública presenten una adhesión a la casación, impugnando igualmente la resolución contra la que se dirige el recurso de casación. Tanto por afán de claridad como para facilitar la tramitación de la adhesión a la casación, el Tribunal General precisa sin embargo que la adhesión a la casación debe formalizarse en un escrito separado, distinto del escrito de contestación. Por lo demás, el presente proyecto extrae las consecuencias oportunas del carácter accesorio de la adhesión a la casación, al disponer que esta última quedará sin objeto si el recurrente desiste de su recurso de casación o cuando dicho recurso se declare manifiestamente inadmisibile.

El régimen de la fase oral del procedimiento también ha sufrido modificaciones. En efecto, el plazo para solicitar la celebración de una vista a partir de la notificación de la terminación de la fase escrita se ha reducido de un mes (artículo 146 del Reglamento de Procedimiento en vigor) a tres semanas. Además, el Tribunal General no estará obligado a organizar una vista oral si estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, incluso en el caso de que se haya presentado una solicitud de celebración de una vista.

En este título se recoge igualmente la posibilidad de que el Tribunal General declare el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados, mediante un auto que haga referencia a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia o del Tribunal General. Esta posibilidad es idéntica a la establecida en el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Por último, con la inclusión de un nuevo artículo, el presente título resuelve finalmente la cuestión, actualmente sin respuesta, que el artículo 10, apartado 3, del anexo I del Estatuto, deja en manos del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Desde un punto de vista formal, este título quinto consta de diez capítulos.

Artículo 192 **Ámbito de aplicación**

Las disposiciones del presente título se aplicarán a los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública mencionados en los artículos 9 y 10 del anexo I del Estatuto.

Capítulo Primero
DEL RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 193

Interposición del recurso de casación

1. El recurso de casación se interpondrá mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General o del Tribunal de la Función Pública.
2. La Secretaría del Tribunal de la Función Pública transmitirá inmediatamente los autos de primera instancia y, en su caso, el recurso de casación a la Secretaría del Tribunal General.

El artículo 193 reproduce los términos del actual artículo 137 del Reglamento de Procedimiento y concuerda con el artículo 167 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 194

Contenido del recurso de casación

1. El recurso de casación contendrá:
 - a) el nombre y domicilio de la parte que interpone el recurso, llamada recurrente;
 - b) la indicación de la condición y de la dirección del representante del recurrente;
 - c) la indicación de la resolución del Tribunal de la Función Pública impugnada;
 - d) el nombre de las demás partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal de la Función Pública;
 - e) los motivos y fundamentos jurídicos invocados y una exposición sumaria de dichos motivos;
 - f) las pretensiones del recurrente.
2. Deberá indicarse la fecha en la que la resolución impugnada fue notificada a la parte recurrente.
3. Si el recurrente fuera una persona jurídica de Derecho privado, adjuntará a su recurso un medio de prueba reciente de su existencia jurídica (extracto del Registro Mercantil, extracto del Registro de Asociaciones o cualquier otro documento oficial).
4. El recurso de casación irá acompañado de los documentos contemplados en el artículo 51, apartados 2 y 3.

5. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 77.
6. Si el recurso de casación no se ajustara a lo dispuesto en los apartados 2 a 4, el Secretario fijará al recurrente un plazo razonable para subsanar el defecto del recurso. En caso de que no se efectuara la subsanación en el plazo fijado, el Tribunal General decidirá si la inobservancia de estos requisitos formales comporta la inadmisibilidad formal del recurso de casación.

El presente artículo reproduce, en lo esencial, los términos del actual artículo 138 del Reglamento de Procedimiento, pero con las adaptaciones exigidas por la nueva numeración de los artículos del presente proyecto y añadiendo, en su apartado 1, prescripciones de carácter formal sobre la necesidad de indicar la resolución recurrida, la condición y dirección del representante de la parte que interpone el recurso de casación, así como la precisión según la cual el recurso de casación debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Este último requisito está destinado, en particular, a permitir que se elabore con rapidez el texto de la comunicación relativa al nuevo asunto que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. En comparación con el texto actual, las prescripciones del apartado 2 se han simplificado, puesto que ya no se exige adjuntar al recurso de casación la resolución recurrida.

Por último, para mejorar la legibilidad del texto, el apartado 6 reproduce el contenido del artículo 44, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en vigor inspirándose en el artículo 168, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 195

Pretensiones, motivos y alegaciones del recurso de casación

1. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal de la Función Pública tal y como figura en el fallo de dicha resolución.
2. En los motivos y fundamentos jurídicos invocados se identificarán con precisión los extremos de los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal de la Función Pública que se impugnan.

El presente artículo reproduce el contenido del actual artículo 139, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento, pero completándolo en dos puntos.

En primer lugar, el presente proyecto recuerda que el objetivo del recurrente en su recurso de casación ha de ser necesariamente la anulación de la resolución del Tribunal de la Función Pública tal y como figura en el fallo de dicha resolución. Con ello se excluye que pueda interponer recurso una parte que ganó el proceso en primera instancia pero no quedó satisfecha con un aspecto específico del razonamiento del Tribunal de la Función Pública.

En segundo lugar, se tiene en cuenta el requisito, ampliamente desarrollado en la jurisprudencia, con arreglo al cual el recurrente debe identificar con precisión, en su

recurso, los extremos que impugna en la sentencia o en el auto recurridos. Así pues, el recurrente no puede limitarse a impugnar dicha resolución en términos genéricos, sin indicar el error o errores de Derecho cometidos a su juicio por el Tribunal de la Función Pública.

El texto de este artículo concuerda con el del artículo 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 196

Pretensiones en caso de estimación del recurso de casación

1. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto que, en el caso de que se declare fundado, se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia, sin incluir ninguna pretensión nueva. El recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal de la Función Pública.
2. Cuando el recurrente solicite que el asunto sea devuelto al Tribunal de la Función Pública en caso de anulación de la resolución recurrida, expondrá las razones por las que considera que el estado del litigio no permite que sea juzgado por el Tribunal General.

El artículo 196 reproduce los términos del actual artículo 139, apartados 1, letra b), y 2 del Reglamento de Procedimiento. En él se delimita con precisión el objeto y la finalidad última del recurso de casación, que constituye necesariamente la continuación de un asunto preexistente y en ningún caso puede desembocar en una ampliación del objeto del litigio planteado ante el Tribunal de la Función Pública.

Por consideraciones de economía procesal, el presente artículo insta igualmente al recurrente en casación a que precise, para el supuesto de que se estimara su recurso, las razones por las que considera que el estado del litigio no permite que sea juzgado por el Tribunal General y que debe por tanto ser devuelto al Tribunal de la Función Pública, con arreglo al artículo 13, apartado 1, del anexo I del Estatuto.

El texto de este artículo concuerda con el del artículo 170 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Capítulo Segundo
DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN, DE LA RÉPLICA Y DE LA DÚPLICA

Artículo 197

Notificación del recurso de casación

1. El recurso de casación será notificado a las demás partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal de la Función Pública. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 80, apartado 1.
2. En el supuesto contemplado en el artículo 194, apartado 6, la notificación se hará una vez subsanado el recurso o en cuanto el Tribunal General lo haya declarado admisible, habida cuenta de los requisitos de forma establecidos en dicho artículo.

Este artículo reproduce, en lo esencial, los términos del actual artículo 140 del Reglamento de Procedimiento, pero con las adaptaciones exigidas por la nueva numeración de los artículos del presente proyecto. La segunda frase del apartado 1 remite al artículo 80, apartado 1, el cual, como disposición general del Reglamento de Procedimiento relativa a la notificación de la demanda, toma en consideración las nuevas normas sobre las notificaciones.

Artículo 198

Partes autorizadas a presentar un escrito de contestación

Todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal de la Función Pública que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación podrán presentar un escrito de contestación dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación del recurso. No se concederá ninguna prórroga del plazo de contestación.

El presente artículo concuerda, en lo esencial, con el actual artículo 141, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. Su texto es idéntico al del artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 199

Contenido del escrito de contestación

1. El escrito de contestación contendrá:
 - a) el nombre y domicilio de la parte que lo presenta;
 - b) la indicación de la condición y de la dirección del representante de esa parte;
 - c) la fecha en la que se le notificó el recurso de casación;
 - d) los motivos y fundamentos jurídicos invocados;

- e) las pretensiones.
2. Será aplicable al escrito de contestación lo dispuesto en el artículo 194, apartados 3 a 6.

El artículo 199 reproduce los términos del actual artículo 141, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, pero añadiendo, por una parte, en el apartado 1, letra b), la indicación de la condición y de la dirección del representante de la parte, requisito necesario para las notificaciones y que coincide con el establecido para los recursos directos, y, por otra parte, las adaptaciones exigidas por la nueva numeración de los artículos del presente proyecto.

Artículo 200

Pretensiones del escrito de contestación

Las pretensiones del escrito de contestación deberán tener por objeto la estimación o la desestimación, total o parcial, del recurso de casación.

El artículo 200 concuerda, en lo esencial, con el artículo 142, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento actual, aunque sólo lo reproduce parcialmente, a causa de la distinción que el presente proyecto establece entre el escrito de contestación y la adhesión a la casación, cuyo objeto es distinto del que persigue el escrito de contestación y que debe presentarse en escrito separado. Esta disposición es idéntica a la que figura en el artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 201

Réplica y dúplica

1. El recurso de casación y el escrito de contestación sólo podrán completarse con una réplica y una dúplica si el Presidente lo estimara necesario, previa petición motivada del recurrente, presentada en un plazo de siete días a partir de la notificación del escrito de contestación, en particular, con objeto de permitir que el recurrente se pronuncie sobre una excepción de inadmisibilidad o sobre nuevos elementos invocados en el escrito de contestación.
2. El Presidente fijará la fecha en la que deberá presentarse la réplica y, al notificarse ésta, la fecha en la que deberá presentarse la dúplica. El Presidente podrá establecer limitaciones en cuanto al número de páginas y al objeto de dichos escritos.

El artículo 201 reproduce, en lo esencial, los términos del actual artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. Como se indicó anteriormente, el presente proyecto endurece, sin embargo, los requisitos exigidos para que el recurso de casación y el escrito de contestación puedan completarse con una réplica y una dúplica. Para presentar estos últimos escritos se exige, en particular, que la parte recurrente haya presentado una petición motivada de réplica y, si el Presidente estima la petición podrá instar a esa parte a limitar el número de páginas y el objeto de su escrito. Esta disposición se inspira en el artículo 175 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del que sólo se distingue, en su

apartado 1, en una cuestión de procedimiento, a causa de la existencia de una disposición expresa en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General según la cual el Presidente debe oír siempre al Juez Ponente antes de adoptar una decisión de esta índole (véase el artículo 19 del presente proyecto).

La segunda frase del apartado 2 completa las disposiciones establecidas en el artículo 212 del presente proyecto sobre la longitud de los escritos de alegaciones, en el sentido de que, a diferencia de las limitaciones establecidas con carácter general para los escritos de alegaciones, en el presente caso la limitación del número de páginas es consecuencia de la limitación del objeto.

Capítulo Tercero
DE LA ADHESIÓN A LA CASACIÓN

Este capítulo contiene tres artículos, esencialmente idénticos a los artículos 176 a 178 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 202
Adhesión a la casación

1. Las partes mencionadas en el artículo 198 podrán adherirse a la casación dentro del plazo establecido para la presentación del escrito de contestación.
2. La adhesión a la casación deberá formalizarse en un escrito separado, distinto del escrito de contestación.

Como se expuso más arriba, una de las innovaciones del presente título del proyecto de Reglamento consiste en el establecimiento de una distinción entre el escrito de contestación y la adhesión a la casación. Las partes en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública a las que se notifique el recurso de casación conservan así el derecho de impugnar a su vez la resolución del Tribunal de la Función Pública recurrida en casación, como dispone el artículo 142, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento actual. Sin embargo, para facilitar su tramitación posterior, dicha impugnación debe materializarse en un escrito diferente del escrito en que la parte responda a los motivos invocados en el recurso de casación. La adhesión a la casación, formalizada en un escrito separado, debe formularse en un plazo improrrogable de dos meses, al igual que el escrito de contestación.

Artículo 203
Contenido de la adhesión a la casación

El escrito de adhesión a la casación contendrá:

- a) el nombre y domicilio de la parte que presenta la adhesión a la casación;
- b) la indicación de la condición y de la dirección del representante de esa parte;
- c) la fecha en que se le notificó el recurso de casación;
- d) los motivos y fundamentos jurídicos invocados;
- e) las pretensiones.

El artículo 203 es un nuevo artículo, que especifica el contenido del escrito de adhesión a la casación inspirándose directamente, a este respecto, en el texto de los artículos 194 y 199, relativos al contenido del recurso de casación y del escrito de contestación. Como requisito necesario para las notificaciones, añade en su letra b) una referencia a la necesidad de

indicar la condición y la dirección del representante de la parte, al igual que se ha establecido, por lo demás, para los recursos directos.

Artículo 204

Pretensiones, motivos y alegaciones de la adhesión a la casación

1. Las pretensiones de la adhesión a la casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal de la Función Pública.
2. También podrán tener por objeto la anulación de una decisión, expresa o tácita, relativa a la admisibilidad del recurso ante el Tribunal de la Función Pública.
3. En los motivos y fundamentos jurídicos invocados se identificarán con precisión los extremos de los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal de la Función Pública que se impugnan. Estos motivos y fundamentos jurídicos deberán ser diferentes de los invocados en el escrito de contestación.

Al igual que el artículo 195 del presente proyecto, relativo a las pretensiones, motivos y alegaciones del recurso de casación, el presente artículo recuerda que la adhesión a la casación debe necesariamente tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal de la Función Pública. El artículo ofrece sin embargo a las partes la posibilidad de impugnar, mediante su adhesión a la casación, la decisión expresa o tácita de dicho Tribunal sobre la admisibilidad del recurso que se había interpuesto ante él.

Por lo demás, este artículo confirma, en su apartado 3, la necesidad de identificar con precisión los puntos que se impugnan en la sentencia o en el auto recurrido. Según reiterada jurisprudencia, el cumplimiento de este requisito resulta, en efecto, esencial para la propia admisibilidad del recurso.

Capítulo Cuarto
DE LOS ESCRITOS PROCESALES QUE SIGUEN A LA ADHESIÓN A LA CASACIÓN

Este nuevo capítulo contiene dos artículos, esencialmente idénticos a los artículos 179 y 180 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 205

Contestación a la adhesión a la casación

Cuando se presente un escrito de adhesión a la casación, el recurrente y todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal de la Función Pública que tengan interés en la estimación o en la desestimación de la adhesión a la casación podrán presentar un escrito de contestación, referido únicamente a los motivos invocados en la adhesión a la casación, dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación del escrito de adhesión a la casación. No se concederá ninguna prórroga de este plazo.

El artículo 205 coincide, mutatis mutandis, con el artículo 198 del presente proyecto, relativo a las partes autorizadas a presentar un escrito de contestación. Este artículo confirma que tanto el recurrente en casación como cualquier otra parte en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública interesada en la estimación o la desestimación de la adhesión a la casación disponen de la posibilidad de presentar un escrito de contestación al escrito de adhesión a la casación, en el plazo ordinario de dos meses a partir de la notificación de este último escrito.

Artículo 206

Réplica y dúplica en caso de adhesión a la casación

1. La adhesión a la casación y el escrito de contestación a la adhesión a la casación sólo podrán completarse con una réplica y una dúplica si el Presidente lo estimara necesario, previa petición motivada de la parte que se ha adherido a la casación, presentada en un plazo de siete días a partir de la notificación del escrito de contestación a la adhesión a la casación, en particular, con objeto de permitir que dicha parte se pronuncie sobre una excepción de inadmisibilidad o sobre nuevos elementos invocados en el escrito de contestación a la adhesión a la casación.
2. El Presidente fijará la fecha en la que deberá presentarse esa réplica y, al notificarse ésta, la fecha en la que deberá presentarse la dúplica. El Presidente podrá establecer limitaciones en cuanto al número de páginas y al objeto de dichos escritos.

Este artículo coincide, mutatis mutandis, con el artículo 201 del presente proyecto, precisando en idénticos términos en qué supuestos un escrito de adhesión a la casación y una respuesta a dicho escrito pueden eventualmente completarse con una réplica y una dúplica. Esta disposición se inspira en el artículo 180 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, del que sólo se distingue, en su apartado 1, en una cuestión de procedimiento, a causa de la existencia de una disposición expresa en el Reglamento de Procedimiento del

Tribunal General según la cual el Presidente debe oír siempre al Juez Ponente antes de adoptar una decisión de esta índole (véase el artículo 19 del presente proyecto).

La segunda frase del apartado 2 completa las disposiciones establecidas en el artículo 212 del presente proyecto sobre la longitud de los escritos de alegaciones, en el sentido de que, a diferencia de las limitaciones establecidas con carácter general para los escritos de alegaciones, en el presente caso la limitación del número de páginas es consecuencia de la limitación del objeto.

Capítulo Quinto
DE LA FASE ORAL DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 207

Fase oral del procedimiento

1. Las partes del procedimiento en casación pueden solicitar ser oídas en una vista oral. Tal solicitud deberá estar motivada y presentarse en un plazo de tres semanas a partir de la notificación a las partes de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento. El Presidente podrá prorrogar este plazo.
2. A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal General podrá decidir resolver el recurso sin fase oral, si estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente. En tal caso, podrá sin embargo decidir en un momento posterior la apertura de la fase oral del procedimiento.

La regulación de la fase oral del procedimiento sufre una doble modificación con respecto al texto del actual artículo 146 del Reglamento de Procedimiento.

Por una parte, el plazo para solicitar la celebración de una vista, a partir de la notificación de la terminación de la fase escrita, se reduce de un mes a tres semanas por razones de coherencia procesal, ya que este plazo es el que se fija en el artículo 106 para los recursos directos.

Por otra parte, habida cuenta de la naturaleza específica del control que lleva a cabo el juez de casación, el Tribunal General no está obligado a organizar una vista oral si estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, incluso en el caso de que se haya presentado una solicitud de celebración de una vista. Esta regulación de la fase oral del procedimiento es diferente, pues, del régimen general establecido en el artículo 106 para los recursos directos y aplicable, en virtud del artículo 191, a los procedimientos regulados en el título cuarto, pues así lo permite el texto de la segunda frase del artículo 12, apartado 2, del anexo I del Estatuto, según la cual el Tribunal General, después de haber oído a las partes, podrá pronunciarse sin fase oral, «en las condiciones determinadas por su Reglamento de Procedimiento».

Capítulo Sexto
DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN RESUELTOS MEDIANTE AUTO

Este nuevo capítulo contiene dos artículos, esencialmente idénticos a los artículos 181 y 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 208

Recurso de casación o adhesión a la casación manifiestamente inadmisibles o manifiestamente infundados

Cuando el recurso de casación o la adhesión a la casación sean, en todo o en parte, manifiestamente inadmisibles o manifiestamente infundados, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, desestimar total o parcialmente el recurso de casación o la adhesión a la casación mediante auto motivado.

Salvo por lo que respecta a la distinción, en lo sucesivo explícita, entre el recurso de casación y la adhesión a la casación, este artículo reproduce los términos del actual artículo 145 del Reglamento de Procedimiento. La supresión de la referencia al Abogado General se explica por la remisión al artículo 208 que figura en el artículo 31, apartado 3, del presente proyecto.

Artículo 209

Recurso de casación o adhesión a la casación manifiestamente fundados

Cuando el Tribunal de Justicia o el Tribunal General se hayan pronunciado ya sobre una o varias cuestiones jurídicas idénticas a las planteadas en los motivos del recurso de casación o de la adhesión a la casación y el Tribunal General considere el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados, podrá decidir, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes, declarar el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados mediante un auto motivado que haga referencia a la jurisprudencia pertinente.

Como se ha indicado al comienzo del presente título, la norma que figura en este artículo constituye una novedad. Inspirándose en la norma recogida en el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuyo título lleva, la presente norma pretende permitir que el Tribunal General ofrezca una solución rápida al problema jurídico planteado por las partes. Cuando el Tribunal de Justicia o el Tribunal General se hayan pronunciado ya sobre una o varias cuestiones idénticas a las planteadas en los motivos del recurso de casación o de la adhesión a la casación y el Tribunal General considere el recurso de casación o la adhesión a la casación manifiestamente fundados, podrá así, por razones de economía procesal, decidir resolver mediante un auto motivado, en el que hará referencia a la jurisprudencia pertinente.

Capítulo Séptimo
DE LAS CONSECUENCIAS DEL ARCHIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN PARA LA
ADHESIÓN A LA CASACIÓN

Artículo 210

**Consecuencias para la adhesión a la casación del desistimiento en el recurso de casación
o de la inadmisibilidad manifiesta del mismo**

La adhesión a la casación se considerará carente de objeto:

- a) cuando el recurrente en el recurso de casación desista de éste;
- b) cuando el recurso de casación se declare manifiestamente inadmisibile por incumplimiento del plazo para recurrir en casación;
- c) cuando el recurso de casación se declare manifiestamente inadmisibile por el único motivo de no estar dirigido contra una resolución del Tribunal de la Función Pública que ponga fin al proceso o que resuelva parcialmente la cuestión de fondo o ponga fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero, del anexo I del Estatuto.

El presente artículo, que constituye una novedad, extrae las consecuencias oportunas del carácter «derivado» de las adhesiones a la casación. Como la adhesión a la casación únicamente se formula con ocasión de un recurso de casación interpuesto por una parte distinta, tanto el archivo del recurso de casación por desistimiento del recurrente como la inadmisibilidad del recurso de casación hacen que la adhesión a la casación pierda su objeto. Salvo en la identificación del tribunal de primera instancia y en la referencia al artículo pertinente del Estatuto, esta disposición es idéntica a la recogida en el artículo 183 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Capítulo Octavo
DE LAS COSTAS Y DE LOS GASTOS DEL PROCESO EN CASACIÓN

Artículo 211

Decisión sobre las costas en casación

1. Sin perjuicio de las disposiciones que se establecen a continuación, los artículos 133 a 141 del presente Reglamento serán aplicables, *mutatis mutandis*, al procedimiento en casación ante el Tribunal General contra una resolución del Tribunal de la Función Pública.
2. El Tribunal General decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo éste fundado, dicho Tribunal resuelva el litigio.
3. En los recursos de casación interpuestos por las instituciones, éstas cargarán con los gastos en que hayan incurrido, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 135, apartado 2.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 134, apartados 1 y 2, en los recursos de casación interpuestos por funcionarios u otros agentes de una institución el Tribunal General podrá decidir que se repartan las costas entre las partes, en la medida en que lo exija la equidad.
5. Cuando no sea él mismo el recurrente en casación, un coadyuvante en primera instancia sólo podrá ser condenado en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal General. Cuando dicha parte participe en el procedimiento, el Tribunal General podrá decidir que cargue con sus propias costas.

El presente artículo completa el contenido del actual artículo 148 del Reglamento de Procedimiento efectuando, en su apartado 1, una remisión global a las disposiciones del presente proyecto relativas a la imposición de costas y a su importe en los recursos directos.

En su apartado 3, este artículo mantiene y hace más legible la norma de principio según la cual las instituciones cargarán con los gastos en los que incurran cuando recurran en casación una resolución del Tribunal de la Función Pública, sin perjuicio del supuesto contemplado en el artículo 135, apartado 2, del presente proyecto, según el cual puede condenarse en costas, parcial o totalmente, a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, y en particular si hubiera causado a la otra parte gastos que el Tribunal General considere abusivos o temerarios.

El apartado 5 del presente artículo se ha añadido con objeto de aclarar las reglas aplicables a las costas que soportan las partes coadyuvantes en primera instancia. En efecto, con arreglo a esta apartado, tales partes sólo pueden ser condenadas en costas si han participado activamente en el procedimiento de casación, bien interponiendo ellas mismas dicho recurso, bien participando en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal General.

Capítulo Noveno
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES EN CASACIÓN

Artículo 212

Longitud de los escritos de alegaciones

1. El Tribunal General determinará, con arreglo al artículo 224, la longitud máxima para los escritos de alegaciones que se presenten en el marco del presente título.
2. Únicamente en los asuntos particularmente complejos podrá autorizar el Presidente que se sobrepase ese número máximo de páginas.

Como esta disposición reproduce el texto del artículo 75 del presente proyecto, que sólo se refiere a los recursos directos, cabe remitirse a la motivación que figura al pie de este último artículo. No obstante, a fin de tener en cuenta la especificidad del control que lleva a cabo el juez de casación, por naturaleza distinto del control efectuado por el juez de fondo, en el apartado 2 se han eliminado los términos «desde un punto de vista jurídico o fáctico».

Artículo 213

Otras disposiciones aplicables en casación

1. Serán aplicables al procedimiento en casación ante el Tribunal General contra una resolución del Tribunal de la Función Pública los artículos 51 a 58, 60 a 74, 79, 84, 87, 89, 90, 107 a 122, 124, 125, 129, 131, 142 a 162, 164, 165 y 167 a 170.
2. Las resoluciones adoptadas en virtud del artículo 256 TFUE, apartado 2, serán comunicadas al Tribunal de Justicia y al Tribunal de la Función Pública.

El presente artículo reproduce los términos del actual artículo 144 del Reglamento de Procedimiento, pero completándolo sustancialmente y realizando en él las adaptaciones exigidas por la nueva numeración de los artículos del presente proyecto.

Aunque este artículo se inspira en el artículo 190 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se distingue de él en que efectúa una remisión expresa a los artículos pertinentes del título tercero, relativo a los recursos directos, dado que el presente proyecto no contiene un título que recoja las disposiciones de procedimiento comunes. En esta norma de remisión se hace también referencia a la asistencia jurídica gratuita, pues, a diferencia de lo que ocurre en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este tema se desarrolla en un capítulo específico del título tercero (véanse los artículos 146 a 150 del presente proyecto).

Capítulo Décimo
DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LAS DECISIONES DESESTIMATORIAS DE
DEMANDAS DE INTERVENCIÓN Y CONTRA LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS
EN UN PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 214

**Recurso de casación contra las decisiones desestimatorias de demandas de intervención
y contra las resoluciones adoptadas en un procedimiento de medidas provisionales**

No obstante lo dispuesto en el presente título, el Presidente del Tribunal General se pronunciará sobre los recursos de casación mencionados en el artículo 10, apartados 1 y 2, del anexo I del Estatuto de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 157, apartados 1 y 3, y en el artículo 158, apartado 1.

Este nuevo artículo se ha incluido para resolver la cuestión que el artículo 10, apartado 3, del anexo I del Estatuto deja en manos del Reglamento de Procedimiento, a diferencia de lo que hace el artículo 57 del Estatuto, que establece la aplicabilidad de las normas del procedimiento de medidas provisionales remitiéndose al artículo 39 del mismo Estatuto. Como actualmente no existe disposición alguna que regule el procedimiento aplicable a estos recursos de casación «urgentes», se pretende colmar aquí esta laguna jurídica.

TÍTULO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO

A fin de mejorar la legibilidad del Reglamento de Procedimiento, el presente título contiene las normas actualmente repartidas en dos capítulos del título tercero, consagrado a los procedimientos especiales, que regulan los procedimientos posteriores a la devolución de un asunto al Tribunal General por parte del Tribunal de Justicia, en los casos en que este último decide devolverle un asunto para que resuelva, bien tras haber anulado en casación una sentencia o un auto del Tribunal General, bien tras haber procedido a un reexamen de la resolución dictada en casación por el Tribunal General.

Capítulo Primero

DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL GENERAL DICTADAS TRAS LA CASACIÓN Y LA DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO

Como no cabe excluir la posibilidad de que, tras la casación de la resolución anterior y la devolución del asunto decididas por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General resuelva el asunto mediante auto, el título de este capítulo utiliza el término genérico «resoluciones».

Artículo 215

Casación y devolución de un asunto por parte del Tribunal de Justicia

Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto del Tribunal General y decida devolver el asunto a este último para que resuelva, dicho asunto quedará sometido a la competencia del Tribunal General en virtud de la resolución que acuerde la devolución.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del actual artículo 117 del Reglamento de Procedimiento. Sin embargo, como el artículo 182 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que este último puede declarar manifiestamente fundado un recurso de casación mediante un auto, procede cambiar la expresión «sentencia que acuerde la devolución» por «resolución que acuerde la devolución». Esta redacción se ajusta, por lo demás, a la utilizada en el artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto.

Artículo 216

Atribución del asunto

1. Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto de una Sala, el Presidente del Tribunal General podrá atribuir el asunto a otra Sala que actúe en formaciones compuestas por el mismo número de Jueces.
2. Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto de la Gran Sala del Tribunal General, se atribuirá el asunto a esta formación.

3. Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto de un Juez único, el Presidente del Tribunal General atribuirá el asunto a una Sala que actúe en formaciones de tres Jueces a la que no pertenezca dicho Juez.

Este artículo retoma, en lo esencial, el texto del artículo 118 del Reglamento de Procedimiento vigente, sin perjuicio de ciertas adaptaciones terminológicas y de una supresión de la referencia al Pleno del Tribunal, pues en el presente proyecto esta formación jurisdiccional ha desaparecido.

Artículo 217

Desarrollo del procedimiento

1. Si la resolución anulada por el Tribunal de Justicia se adoptó después de que el Tribunal General declarase terminada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de esta última resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado.
2. Si la resolución anulada por el Tribunal de Justicia se adoptó antes de que el Tribunal General declarase terminada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, el procedimiento se reanudará en la situación en que se encontraba.
3. Si las circunstancias lo justifican, el Presidente podrá autorizar la presentación de escritos de observaciones complementarios.

En lo que respecta al procedimiento que debe seguirse tras la casación y la devolución del asunto decididas por el Tribunal de Justicia, el presente artículo, al igual que el artículo 119 del Reglamento de Procedimiento vigente, establece una diferencia según que el procedimiento ante el Tribunal General estuviera terminado o no en el momento en que se adoptó el acto posteriormente anulado en casación. Sin embargo, este artículo modifica el régimen en vigor a fin de reducir la duración del procedimiento. A estos efectos se propone inspirarse en la norma para la presentación de escritos de alegaciones que se aplica en los casos de reexamen y devolución del asunto, más sencilla y más rápida, ya que dispone la presentación simultánea de los escritos. La duración del procedimiento puede reducirse así de un plazo teórico de cuatro meses (cuando un coadyuvante es parte en el procedimiento) a uno de dos meses.

Se aprovecha igualmente esta ocasión para aclarar el texto en vigor, recalcando que la fase escrita del procedimiento mencionada en los apartados 1 y 2 es la relativa al fondo del asunto. Con esta precisión se pretende evitar toda confusión entre la fase escrita del procedimiento relativa al fondo del asunto y la relativa a un incidente. En efecto, si en el momento en que se interpone el recurso de casación contra la resolución del Tribunal General sólo se ha declarado terminada la fase escrita del procedimiento relativa a un incidente, como por ejemplo cuando se recurre en casación el auto por el que se acoge una excepción de inadmisibilidad, la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto aún no está terminada.

Por último, esta disposición otorga competencia al Presidente para autorizar, en su caso, la presentación de escritos de observaciones complementarios. La sustitución de los términos «Tribunal General» por «Presidente» forma parte de la propuesta general de traspasar ciertas competencias del Tribunal General a los Presidentes de Sala.

Artículo 218

Normas aplicables al procedimiento

El procedimiento se desarrollará con arreglo a las disposiciones del título segundo o, en su caso, del título cuarto.

Este artículo concuerda con el artículo 120 del Reglamento de Procedimiento vigente, salvo en la modificación efectuada en las normas de remisión aplicables, respectivamente, a los recursos directos y a los recursos presentados en materia de propiedad intelectual o industrial.

Artículo 219

Costas

El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas, por una parte, a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal General y, por otra, al procedimiento de casación seguido ante el Tribunal de Justicia.

Este artículo reproduce, en lo esencial, el texto del artículo 121 del Reglamento de Procedimiento vigente.

Capítulo Segundo
DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL GENERAL DICTADAS TRAS EL
REEXAMEN Y LA DEVOLUCIÓN DE UN ASUNTO

Como no cabe excluir la posibilidad de que, tras el reexamen de la resolución anterior y la devolución del asunto decididas por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General resuelva el asunto mediante auto, el título de este capítulo utiliza el término genérico «resoluciones».

Artículo 220

Reexamen y devolución de un asunto por parte del Tribunal de Justicia

Cuando el Tribunal de Justicia reexamine una sentencia o un auto del Tribunal General y decida devolver el asunto a este último para que resuelva, dicho asunto quedará sometido a la competencia del Tribunal General en virtud de la sentencia que acuerde la devolución.

Este artículo reproduce en lo esencial el texto del artículo 121 bis del Reglamento de Procedimiento vigente.

Artículo 221

Atribución del asunto

1. Cuando el Tribunal de Justicia devuelva un asunto que fue juzgado inicialmente por una Sala, el Presidente del Tribunal General podrá atribuir el asunto a otra Sala que actúe en formaciones compuestas por el mismo número de Jueces.
2. Cuando el Tribunal de Justicia devuelva un asunto que fue juzgado inicialmente por la Gran Sala del Tribunal General, se atribuirá el asunto a esta formación.

Este artículo retoma, en lo esencial, el texto del artículo 121 ter del Reglamento de Procedimiento vigente, sin perjuicio de ciertas adaptaciones terminológicas y de una supresión de la referencia al Pleno del Tribunal, pues en el presente proyecto esta formación jurisdiccional ha desaparecido.

Artículo 222

Desarrollo del procedimiento

1. Las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia, en un plazo de un mes a partir de la notificación de esta sentencia. Este plazo no podrá ser prorrogado.
2. El Tribunal General podrá instar a las partes en el procedimiento seguido ante él a presentar escritos de alegaciones, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, y podrá decidir oírlas en una vista oral.

Este artículo retoma en lo esencial el texto del artículo 121 quater del Reglamento de Procedimiento vigente, pero introduciendo en él una modificación de escasa importancia con objeto de precisar que las observaciones de las partes en el procedimiento ante el Tribunal General deben ser escritas.

Artículo 223

Costas

El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas al procedimiento entablado ante él tras el reexamen.

Este artículo reproduce el artículo 121 quinto del Reglamento de Procedimiento vigente.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 224

Normas de desarrollo

El Tribunal General adoptará, en acto separado, normas prácticas de desarrollo del presente Reglamento.

En aras de la coherencia de los dispositivos procesales, este artículo retoma el texto del artículo 208 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Artículo 225

Videoconferencia

El Tribunal General podrá establecer, mediante decisión, las condiciones en las que podrá recurrir a la videoconferencia.

La videoconferencia es un conjunto de tecnologías interactivas de telecomunicación que permiten una interacción simultánea entre dos o más lugares gracias a transmisiones de vídeo y de audio bidireccionales (esta definición figura en el folleto elaborado por la Secretaría General del Consejo denominado «La videoconferencia como parte integrante de la justicia en red europea»). Se considera una herramienta eficaz para facilitar y acelerar los procedimientos judiciales y reducir sus costes.

Aunque la técnica de la videoconferencia sea quizá un concepto nuevo en el ámbito de la justicia europea, ya existe y es muy utilizada a nivel nacional, y podría utilizarse en el procedimiento ante el Tribunal General.

Es sabido que los Estados miembros y la Comisión Europea estudian actualmente hasta qué punto es factible recurrir a la videoconferencia en asuntos transfronterizos. En particular, los Estados miembros han decidido colaborar en el marco del plan de acción relativo a la justicia en red europea, aprobado por el Consejo en noviembre de 2008 (DO 2009, C 75, p. 1) con objeto de fomentar el uso de la videoconferencia e intercambiar sus experiencias y resultados. Estos trabajos se inscriben en el marco jurídico existente y respetan las garantías procesales establecidas a nivel de los Estados miembros y de la Unión Europea.

A día de hoy, la legislación de la Unión Europea ofrece numerosas posibilidades de organizar videoconferencias transfronterizas, principalmente para interrogar a testigos, peritos o víctimas, con arreglo a instrumentos jurídicos tales como el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO 2000, C 197, p. 1), el Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L 174, p. 1), la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO L 261, p. 15), el Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199, p. 1), la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (DO L 82, p. 1) y la Directiva

2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO L 136, p. 3).

Al ser la videoconferencia uno de los medios de simplificar y facilitar la comunicación entre quienes participan en el proceso, el Tribunal General estima necesario incluir en su Reglamento de Procedimiento un fundamento jurídico que le permita adoptar una decisión que determine los requisitos jurídicos y técnicos del uso de la videoconferencia, así como sus modalidades prácticas. Conviene precisar que la utilización de la videoconferencia no debería perjudicar en ningún caso al ejercicio de los derechos otorgados a las partes ni afectar a la calidad de la interpretación simultánea y que, en cualquier caso, debería permitir que los miembros de la formación jurisdiccional dirijan los debates del mismo modo que cuando éstos se desarrollan en una sala de vistas.

Artículo 226

Ejecución forzosa

La ejecución forzosa de las sanciones o de las medidas impuestas en virtud del presente Reglamento se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 TFUE, 299 TFUE y 164 TCEEA.

Este artículo retoma el texto del actual artículo 69, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, pero ampliando su ámbito de aplicación, a fin de incluir todos los supuestos en que proceda exigir el abono a la caja del Tribunal General de las cantidades que se le adeuden.

Artículo 227

Derogación

El presente Reglamento sustituye al Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, en su versión modificada por última vez el 19 de junio de 2013.

El presente proyecto de Reglamento modifica totalmente el texto del actual Reglamento de Procedimiento, por lo que es lógico que lo reemplace una vez que haya sido adoptado con carácter definitivo.

Artículo 228

Publicación y entrada en vigor del presente Reglamento

1. El presente Reglamento, auténtico en las versiones redactadas en las lenguas mencionadas en el artículo 44, será publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
2. El presente Reglamento entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación.

3. Las disposiciones del artículo 45, apartado 4, del artículo 86, del artículo 139, letra c), del artículo 143, apartado 1, y del artículo 181 se aplicarán únicamente a los recursos interpuestos ante el Tribunal General después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
4. Las disposiciones de los artículos 106 y 207 se aplicarán únicamente a los asuntos en los que la fase escrita del procedimiento aún no se hubiera declarado terminada en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
5. Las disposiciones del artículo 115, apartado 1, del artículo 116, apartado 6, del artículo 131 y del artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, en su versión modificada por última vez el 19 de junio de 2013, seguirán siendo aplicables a los recursos interpuestos ante el Tribunal General antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
6. Las disposiciones de los artículos 135 *bis* y 146 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, en su versión modificada por última vez el 19 de junio de 2013, seguirán siendo aplicables a los recursos pendientes ante el Tribunal General en los que la fase escrita del procedimiento se hubiera declarado terminada antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Como el presente proyecto contiene numerosas modificaciones y varias innovaciones importantes con respecto al Reglamento de Procedimiento actual, el Tribunal General propone fijar como fecha de entrada en vigor el primer día del tercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, a fin de favorecer una preparación adecuada. Se propone además que determinadas disposiciones se apliquen sólo a los asuntos presentados tras la entrada en vigor del presente proyecto [artículo 45, apartado 4, artículo 86, artículo 139, letra c), artículo 143, apartado 1, y artículo 181] o a los asuntos en los que la fase escrita del procedimiento aún no se hubiera declarado terminada en la fecha de entrada en vigor del presente proyecto (artículos 106 y 207). Por último, en aras de la seguridad jurídica, se dispone expresamente que las disposiciones relativas a las solicitudes de celebración de una vista en los asuntos de propiedad intelectual o industrial (artículo 135 bis) y en los procedimientos de casación (artículo 146) seguirán siendo aplicables en los casos en que se hubiera declarado terminada la fase escrita del procedimiento antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Procedimiento.

Hecho en Luxemburgo, a...

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Jaeger